

MÁS ALLÁ DEL VERDE ESMERALDA:

JÓVENES CONSTRUYENDO ESCENARIOS
DE PAZ EN EL OCCIDENTE DE BOYACÁ

Edwin Diomedes Jaime Ruiz

Editor académico



**Más allá del verde
esmeralda: jóvenes
construyendo
escenarios de paz en el
Occidente de Boyacá**

Más allá del verde esmeralda: jóvenes construyendo escenarios de paz en el Occidente de Boyacá

EDWIN DIOMEDES JAIME RUIZ

EDITOR ACADÉMICO



Jaime Ruiz, Edwin Diomedes, ed.

Más allá del verde esmeralda : jóvenes construyendo escenarios de paz en el Occidente de Boyacá
/ editor académico Edwin Diomedes Jaime Ruiz. -- 1a ed. -- Bogotá : Universidad Santo Tomás,
Ediciones USTA, 2026.

252 páginas

Incluye referencias bibliográficas e índice.

ISBN: 978-958-782-721-7

E-ISBN: 978-958-782-720-0

1. Juventud -- Boyacá (Occidente, Colombia) -- Aspectos sociales. 2. Construcción de paz -- Boyacá (Occidente, Colombia). 3. Minería de esmeraldas -- Aspectos sociales -- Boyacá (Occidente, Colombia). 4. Desarrollo territorial -- Boyacá (Occidente, Colombia). 5. Mujeres en la minería -- Boyacá (Occidente, Colombia). 6. Turismo rural -- Boyacá (Occidente, Colombia). I. Universidad Santo Tomás (Colombia).

CDD: 305.235

CO-BoUST



© Edwin Diomedes Jaime Ruiz (editor académico), 2026

© Universidad Santo Tomás, 2026

Ediciones USTA

Bogotá, D. C., Colombia

Carrera 9 n.º 51-11

Teléfono: (+571) 587 8797, ext. 2991

editorial@usta.edu.co

http://ediciones.usta.edu.co

Corrección de estilo: José Aparicio

Diagramación y montaje de cubierta: Patricia Montaña Domínguez

Imagen de cubierta: Midjourney, <https://www.midjourney.com/jobs/ebec7e36-44f6-4327-a7a6-2de089108f00?index=0>

Impresión: Imageprinting

Hecho el depósito que establece la ley

ISBN: 978-958-782-721-7

E-ISBN: 978-958-782-720-0

Primera edición, 2026

Esta obra tiene una versión de acceso abierto disponible en el Repositorio Institucional de la Universidad Santo Tomás

Universidad Santo Tomás

Vigilada MinEducación

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 3645 del 6 de agosto de 1965, MinJusticia

Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus. Resolución 014525 del 28 de julio de 2022, 8 años, MinEducación

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin la autorización expresa del titular de los derechos.

Impreso en Colombia • Printed in Colombia

Contenido

PRÓLOGO	13
INTRODUCCIÓN	19
JUVENTUDES, VIOLENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL EN EL OCCIDENTE DE BOYACÁ	25
Presentación del capítulo	25
Introducción	26
Antecedentes	27
Metodología	29
Claves conceptuales en torno a las juventudes, las violencias y la construcción de paz	30
Jóvenes, juventud y juventudes en el occidente de Boyacá	30
Violencias interseccionales en el Occidente de Boyacá: mujeres jóvenes y juventudes LGBTQ+	32
La paz, una apuesta de los jóvenes para transformar las violencias	34
Arte Zurdo, una iniciativa juvenil para la construcción de paz territorial	38
Reflexión final	39
Referencias	40
Webgrafía	43
AGRICULTURA, MINERÍA Y VOCACIONES PRODUCTIVAS EN EL OCCIDENTE DE BOYACÁ	45
Presentación del capítulo	45
Introducción	46
Antecedentes	47
Metodología	48
Claves conceptuales en torno a la agricultura y la minería	50
Diversificación productiva	51
Territorialización, arraigo y gobernanza	52
Minería y coca: claves en el uso de la tierra	53

La producción de cacao de cara a la transición de cultivos ilícitos	55
La asociatividad, una necesidad para la producción agrícola	56
Planes de desarrollo y desarrollo territorial	60
Potencialidades productivas del territorio	62
Reflexiones finales	73
Referencias	74
Webgrafía	78

JUVENTUDES: CULTIVOS ILÍCITOS, ECONOMÍA ILEGAL Y NUEVAS VOCACIONES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ	79
Presentación del capítulo	79
Introducción	80
Antecedentes	82
Metodología	83
Claves conceptuales en torno al narcotráfico, cultivos ilícitos y economía ilegal	84
Contexto histórico del narcotráfico y los cultivos ilícitos en Boyacá	84
Prácticas productivas ilegales asociadas con el narcotráfico	88
Los jóvenes como sujetos de la economía ilegal	91
Los jóvenes como transformadores de la economía ilegal	94
Reflexiones finales	97
Referencias	99
Webgrafía	101

MUJERES JÓVENES Y MINERÍA: VIOLENCIAS Y NUEVAS INICIATIVAS POR LA EQUIDAD DE GÉNERO EN MUZO Y SAN PABLO DE BORBUR, BOYACÁ	103
Presentación del capítulo	103
Introducción	104
Antecedentes	105
Metodología	107
Claves conceptuales en torno a la minería, violencia y equidad de género	108
Minería y transformación territorial	108
Violencias estructurales, simbólicas y de género	108
Equidad de género y participación de mujeres en minería	109
Juventud y participación de mujeres jóvenes	110

Las mujeres en la guaquería. Una historia común	111
Ruptura de los roles de género	114
El cuerpo de las mujeres como territorio de apropiación y desposesión en la guerra verde	118
Nuevas iniciativas por la equidad de género	121
Reflexiones finales	124
Referencias	125
Webgrafía	128

JÓVENES, TURISMO RURAL COMUNITARIO Y DESARROLLO TERRITORIAL EN EL OCCIDENTE DE BOYACÁ	131
Presentación del capítulo	131
Introducción	132
Antecedentes	134
Turismo rural comunitario	134
Metodología	136
Claves conceptuales sobre turismo comunitario	137
Comunidad(es)	137
Actores sociales	138
Organizaciones de Base Comunitaria (OBC)	139
Desarrollo territorial	140
Gobernanza local	141
Turismo comunitario en el Occidente de Boyacá	142
Turismo comunitario y desarrollo regional	144
Los retos del turismo comunitario en el Occidente de Boyacá	145
Turismo comunitario como alternativa de construcción de paz	147
Reflexiones finales	148
Referencias	149

LOS COLECTIVOS JUVENILES Y ORGANIZACIONES SOCIALES: GENERADORES DE PRÁCTICAS ALTERNATIVAS PARA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL OCCIDENTE DE BOYACÁ	155
Presentación del capítulo	155
Introducción	156
Antecedentes	157
Metodología	159
Claves conceptuales en torno a organizaciones juveniles,	

prácticas alternativas y construcción de paz	160
Organizaciones juveniles	160
Prácticas alternativas juveniles	161
Construcción de paz territorial	161
Los colectivos juveniles en el Occidente de Boyacá	162
Corporación Boyapaz. Más que un programa institucional	164
Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia de Pauna	167
Plataforma de Juventud de Quípama	168
Plataforma Jóvenes Emprendedores Muzo	169
Colectivo Juvenil El Parche. Motivando Sueños	171
Kakaoteros una alternativa para construcción de paz	172
Asociación Campesina de Cultivadores Agropecuarios de San Pablo de Borbur (Asocacabo)	174
Paunarte una alternativa a través del arte	176
Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de la Paz	178
Reflexiones finales	179
Referencias	180
Webgrafía	182

LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO DESDE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN QUÍPAMA Y MUZO	183
Presentación del capítulo	183
Introducción	184
Antecedentes	186
Metodología	187
Claves conceptuales en torno a la cultura, la educación y el territorio para la paz	188
Cultura de paz	188
Educación para la paz	189
Territorio para la paz	191
Contexto de violencia y paz en Quípama y Muzo	192
Una educación y una cultura de paz para la emancipación	195
Educación para la paz: transición cultural hacia una visión de un futuro de paz	198
El papel de las instituciones educativas en la construcción de paz	199
Promoción de la educación para construir una paz territorial	200

Reflexiones finales	202
Referencias	203
Webgrafía	205
JUVENTUDES, GESTIÓN PÚBLICA Y DINÁMICAS INSTITUCIONALES EN EL OCCIDENTE DE BOYACÁ	207
Presentación del capítulo	207
Introducción	208
Antecedentes	209
Metodología	210
Claves conceptuales para la participación juvenil, la gestión pública y la gobernabilidad	212
Participación política juvenil	212
Gestión pública territorial	214
Herramientas de gobernabilidad para los gobiernos locales	217
De los patrones a las fundaciones. De la caridad a la responsabilidad social	219
Procesos de transformación en los lineamientos de las políticas de juventud	221
Gestión de los gobiernos locales en torno a la transición económica	222
Muzo: formación técnica y diversificación productiva	223
Pauna: turismo y sostenibilidad ambiental	223
Quípama: diversificación productiva y economía circular	224
San Pablo de Borbur: integración sectorial y sostenibilidad	225
Retos en la inclusión juvenil	225
La diversificación de la juventud en Occidente Boyacá	226
Los Consejos de Juventud	227
Reflexiones finales	229
Referencias	230
Webgrafía	232
SOBRE LOS AUTORES	235
Edwin Diomedes Jaime Ruiz (editor académico)	235
Laura Sofía Antonio Martínez	236
Johana Cárdenas Jerez	236
Sandy Lorena Contreras Pulido	237

Sara Ximena Cruz Pacheco	237
Nally Fajardo Herrera	237
Laura Marcela Gómez Arias	238
Kevin Sebastián Medina Corredor	238
Indilay Monje Sandoval	239
María Paula Muñoz Otálora	239
Helen Viviana Ovalle Flórez	240
María Alejandra Pascagasa Usaquén	240
Mónica Alexandra Peña Pérez	241
Valentina Puerto Villamizar	241
Daniela Reyes Alfonso	241
Ingrid Mariana Ríos Pardo	242
Angie Daniela Robayo Duarte	242
Andrés Felipe Ruiz Gómez	243
Stefanny Alejandra Sosa Schleimer	243
ÍNDICE TEMÁTICO	245

Prólogo

El semillero de investigación de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás Eirene Latinoamérica JAIV ha llevado a cabo un importante trabajo de investigación acercándose al estudio de la provincia del Occidente de Boyacá, una región poco estudiada y con problemas locales de gran complejidad. El libro *Más allá del verde esmeralda. Jóvenes construyendo escenarios de paz en el Occidente de Boyacá* hace parte de los resultados del proyecto de investigación en ciencia tecnología e innovación [CTEI], titulado “Reconfiguración del tejido social y las prácticas productivas desde la perspectiva de los jóvenes¹ del Occidente de Boyacá”, coordinado por el profesor Edwin Jaime, editor académico de este libro. Quisiera resaltar la labor del profesor Jaime como formador para la investigación. Es en el trabajo de los semilleros de investigación donde los estudiantes en formación y los jóvenes profesionales logran descubrir el quehacer de la sociología y de las ciencias sociales. Además, estos estudios se han desarrollado en contextos que presentan las dificultades propias de los llamamos “terrenos difíciles”, dados los contextos sociales de los lugares, así como las dificultades de acceso tanto al terreno como a la información.

Este esfuerzo de investigación y de formación para la investigación, como es el objetivo de los semilleros, da como resultado este libro, que presenta la región del Occidente de Boyacá, su territorio e historia de los conflictos, centrando la mirada y el análisis a partir de la agencia de los jóvenes. El conjunto de los capítulos retrata a los jóvenes del Occidente como una generación que es el puente entre la

1 Se hace uso del sustantivo los jóvenes para hablar de ellos y ellas.

herida territorial que han dejado las décadas de conflictos sociales y un futuro por construir, un futuro de cambio de las dinámicas económicas y de las relaciones con el territorio.

Los jóvenes aparecen como actores de un territorio donde no se hablaba de jóvenes. Los estudios de la región se han centrado en el estudio de las *guerras verdes* y de los conflictos sociales que han tenido lugar en su territorio desde inicios del siglo xx y desde las perspectivas analíticas de la ciencia política, de la sociología política y de conflicto, y no necesariamente a partir de categorías sociales. Los estudios sobre la minería y sus conflictos se han enfocado en la comprensión de la transformación del mundo campesino a la economía minera y posteriormente la economía minera y su relación con las economías ilegales. En los últimos años, de la mano con la evolución de las ciencias sociales en Colombia y su correspondencia con la realidad histórica, se han realizado estudios sobre mujeres; para el caso concreto del Occidente de Boyacá, se han estudiado las mujeres gUAQUERAS y las víctimas de los conflictos. Incluso los estudios sobre mujeres no han hecho la distinción con las mujeres jóvenes, que probablemente han sido protagonistas en estas difíciles décadas tanto del conflicto social como del trabajo en las minas y en sus roles familiares como hijas y madres jóvenes. Entonces, este libro plantea un enfoque que no se ha hecho sobre la región y su historia.

Es así como el libro aborda un nuevo grupo social, los jóvenes, y digo “nuevo” en el sentido de que las investigaciones no lo identificaban, hasta el día de hoy. Son pocos los estudios sobre jóvenes en la región, jóvenes rurales y sobre “juventud minera”. A lo mejor, entrando en diálogo con lo que encontrarán a lo largo de los siguientes capítulos, porque no existía ni la categoría ni tampoco un grupo social que pudiera clasificarse como “joven”, sobre todo cuando aquellos hombres y mujeres ya trabajaban desde su infancia y establecían familias antes de tener una mayoría de edad. Pero la aparición de la categoría y de estos jóvenes que nos describen los capítulos presentados en este libro, y que tienen agencia hoy en el territorio, aparecieron en algún momento del siglo xx, y su agencia se ve impregnada de ideas de paz, de conocimientos y de expectativas. No se trata de una invención ni de una aparición de la nada, sino de un grupo social que empieza a

identificarse con “ser joven”, con “la juventud” y esto es más que una sola categoría social o etaria: es una esencia que recarga una etapa de la vida con formas de vivir y sobre todo con expectativas, que, en el contexto de la región y siguiendo las líneas que plantea este conjunto de capítulos, son motor del desarrollo en la región.

Al leer los capítulos de este libro, he tenido las imágenes de los jóvenes investigadores en el campo, observando, entrevistando a otros individuos de sus mismas edades, un encuentro de jóvenes universitarios con jóvenes rurales, con jóvenes trabajadores de las minas y de la guaquería, con jóvenes emprendedores, con los jóvenes de los colectivos que sueñan con un occidente en paz y desarrollo. Este encuentro de jóvenes, el esfuerzo de los autores por comprender un mundo social que es lejano y distinto, imprime un componente interesante a este libro que se nota en una descripción fresca de los escenarios del Occidente de Boyacá y sobre todo en una lectura positiva y alentadora de su futuro. El encuentro entre jóvenes urbanos universitarios y jóvenes rurales que ha tenido lugar para la realización de las investigaciones que presenta este libro da por sí mismo aliento a una región que reclama y necesita la atención del resto de la sociedad colombiana, de miradas que deseen descubrir una región y comprenderla.

Las ideas de futuro, de paz, de desarrollo que aparecen a lo largo de los capítulos han captado fuertemente mi atención, a lo mejor porque cuando estudiamos las zonas mineras nos preparamos para duras realidades, más aún en el contexto de la minería de esmeraldas que tiene lugar en municipios con altos índices de pobreza y el contexto de las guerras verdes y la ilegalidad que han hecho perdurar violencias e injusticias en este territorio.

La búsqueda de las esmeraldas tiene una historia de guerras, de estigmas y de pobreza. A pesar de la historia de violencia de la región que es una realidad, como bien los presenta el libro, los y las autoras hacen una lectura interesante que contribuye a la desestigmatización de la región, de la mano a los jóvenes del Occidente mostrando sus fortalezas, sus ideas y contribuciones en términos de paz territorial, proyectos productivos y expectativas de vida. En este sentido, esta compilación de capítulos contribuye no solo a la documentación de las organizaciones juveniles y sus proyectos, sino que favorece la reconstrucción de

una región que urge de lecturas y miradas positivas, de construcción de tejido, casi diría, de un trabajo sobre la autoestima de las generaciones y de las familias, mujeres, hombres que, si bien se nos presentan orgullosos de su región, han sido golpeados por una historia de fatalidad. Es así que la voz de los jóvenes que capta este libro es una contribución a ese trabajo sobre región que necesita sanar esas heridas del pasado, del estigma de las guerras y del narcotráfico, y renacer de la mano de jóvenes que aman una región no por las armas, ni por la riqueza de las esmeraldas o de las economías ilegales que han tenido lugar en sus territorios, sino con una paz duradera, con un verde que nace en la naturaleza exuberante y en sus ideas de negocios, de proyectos y de ganas de construir un lugar que recupere a su población joven y que sea un escenario para proyectarse, para quedarse, para vivir y para ser joven y adulto en su territorio.

Hacer investigación en el Occidente de Boyacá, iniciarse como investigador en este campo es un reto para los investigadores en formación. Los marcos metodológicos que han usado para la elaboración de sus investigaciones les han permitido llevar a cabo un trabajo de campo seguro y objetivo, el establecimiento de relaciones respetuosas con los actores otorgándoles un protagonismo pertinente y un marco de comprensión de la región que retoma los contextos históricos y los actores sociales que están presentes actualmente en la región. La relación con los actores sociales y la relevancia que les dan al mostrar de manera objetiva y pertinente el trabajo del Programa de Desarrollo y Paz Boyapaz y de los proyectos de responsabilidad social de las empresas presentes en los municipios estudiados dan un contexto interesante sobre el cual construir sociedad y territorio.

Los marcos teóricos del libro involucran temáticas muy pertinentes para la actualidad colombiana y, en particular, para la búsqueda de la paz territorial; en este contexto, los jóvenes del Occidente de Boyacá son puestos como un prisma analítico desde el cual comprender las dinámicas de una sociedad que procura consolidar procesos de construcción de paz y redefinir sus vínculos con el territorio a través de una historia compartida marcada por el conflicto que hoy se busca reconstruir sobre nuevos cimientos de paz y de desarrollo.

La atención que los autores conceden al uso de conceptos como “construcción de paz” y “víctimas” subraya, además, la necesidad de pensar la paz en un territorio donde la persistencia de los conflictos ha configurado experiencias diferenciadas frente a la implementación de las normatividades nacionales, las cuales no han logrado atender a las víctimas con la misma eficacia que en otras regiones del país. De ahí la importancia de pensar el Occidente de Boyacá tanto en sus particularidades históricas, sociales y territoriales como en sus convergencias con otros territorios del país.

El libro enfatiza en el desarrollo territorial a través de las vocaciones productivas, las dificultades —y necesidades— de establecer puentes entre las actividades agrícolas y mineras, y el lugar importante que toman los nuevos proyectos productivos agropecuarios y turísticos.

Los actores y las dinámicas sociales que examina este libro se inscriben en un contexto de desarrollo institucional caracterizado por una presencia estatal precaria, aunque indispensable, lo que configura un escenario en el que emergen generaciones comprometidas con la consolidación del trabajo comunitario. Los capítulos dan cuenta de ello al enfatizar la gestión de organizaciones juveniles y fundaciones, así como el apoyo que brindan las asociaciones de agricultores, mineros y gUAQUEROS —hombres y mujeres que se han constituido y fortalecido en los últimos años— en la articulación de iniciativas colectivas. En este marco, el acompañamiento de las universidades y de la comunidad académica es indispensable para la construcción social y territorial del Occidente y este libro es, sin duda, una contribución significativa a ese propósito.

Johana Parra Bautista
Profesora del programa de Sociología.
Doctorado en Sociología, EHESS,
París.

Introducción

Este libro es resultado del proyecto de investigación en ciencia, tecnología e innovación [CTEI] titulado “Reconfiguración del tejido social y las prácticas productivas desde la perspectiva de los jóvenes del Occidente de Boyacá”, desarrollado por el semillero de investigación Eirene Latinoamérica JAIV de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Su propósito es comprender cómo las juventudes rurales, desde sus propias experiencias, saberes y formas de organización, construyen escenarios de paz territorial en una región históricamente marcada por el conflicto armado, la minería extractiva y las economías ilegales. El objetivo del proyecto se enfocó en “analizar las formas de agencia juvenil en la reconfiguración del territorio del Occidente de Boyacá, a partir de prácticas productivas, culturales, educativas y políticas que contribuyen a la construcción de paz territorial”.

El enfoque del libro se sitúa en las ciencias sociales contemporáneas, con énfasis en la sociología, articulando como núcleos problemáticos la violencia, conflicto, memoria, desarrollo, paz y territorio. También dialoga con la antropología, la educación, los estudios de género y la gestión pública. Buscar responder a algunos vacíos teóricos, epistemológicos y prácticos como la invisibilización de las juventudes rurales en los estudios sobre conflicto y paz, la escasa documentación sobre la participación juvenil en territorios mineros, la falta de análisis interseccional sobre género, generación y territorio, y la necesidad de comprender la paz territorial desde abajo, desde las prácticas cotidianas de los actores locales. En este sentido, responde a la pregunta: ¿cómo las formas de agencia juvenil reconfiguran el territorio del Occidente de Boyacá, a partir de prácticas productivas, culturales, educativas y políticas que contribuyen a la construcción de paz territorial?

El libro se fundamenta en un enfoque crítico social situado, que reconoce la agencia de los jóvenes como constructores de paz. Se articulan perspectivas de paz transformadora, paz territorial, justicia restaurativa, interseccionalidad y acción colectiva. Se emplea una metodología cualitativa con enfoque participativo, que incluye entrevistas, grupos focales, etnografía digital, análisis documental y cartografías sociales. El procesamiento y análisis se realizó mediante codificación temática y triangulación de fuentes, que ayudan a un análisis más situado de los contextos locales.

El libro contribuye al campo disciplinar de la sociología y otras disciplinas, aporta a la sociología rural y política desde una mirada generacional, enriquece los estudios de paz con narrativas juveniles y territoriales, formula categorías analíticas desde la experiencia situada y visibiliza prácticas de resistencia y transformación desde lo local. En este sentido, el resultado del presente proyecto de investigación se estructura en ocho capítulos.

En el capítulo 1, “Jóvenes, violencia y construcción de paz en el Occidente de Boyacá” se propone como problema determinar cómo han sido afectadas las juventudes por las múltiples violencias en la región y qué formas de agencia han desarrollado para construir paz, llevando a plantear la pregunta: ¿cómo afectan las distintas formas de violencia, las prácticas juveniles que contribuyen a la reconfiguración del tejido social y la construcción de paz en el occidente de Boyacá?

La metodología utilizada para este capítulo se realizó a través de entrevistas, grupos focales, análisis documental y etnografía digital. Entre otros hallazgos, se encontró que los jóvenes han transitado de ser víctimas y victimarios a ser agentes de paz mediante el arte, la memoria y la organización comunitaria. De igual manera, el estudio demuestra que la paz territorial se construye desde la agencia juvenil, el reconocimiento de las violencias y la resignificación del territorio.

En el capítulo 2, “Agricultura y minería: vocaciones productivas en el Occidente de Boyacá”, se sugiere como problema definir cómo se han transformado las vocaciones productivas en el Occidente de Boyacá tras el conflicto minero, planteando la pregunta: ¿qué papel juegan la agricultura y la minería en la reconstrucción del tejido social juvenil?

La metodología de este capítulo se centró en el análisis de los planes de desarrollo territoriales, entrevistas a líderes campesinos y la revisión de datos censales. Uno de los hallazgos más significativos fue evidenciar la transición del cultivo de coca al cacao como clave en la construcción de paz económica, convirtiendo la diversificación productiva en una estrategia de paz territorial que involucra a jóvenes y comunidades rurales.

En el capítulo 3, “Juventudes, cultivos ilícitos y nuevas vocaciones productivas en el municipio de Pauna, Boyacá”, se plantea como problema el impacto que tuvo la economía ilegal en los proyectos de vida de los jóvenes en el municipio de Pauna, Boyacá, configurando la pregunta: ¿cómo han transformado los jóvenes sus prácticas productivas tras el auge de los cultivos ilícitos?

La metodología se realiza a través de historia oral, análisis documental de políticas de sustitución de cultivos y entrevistas a líderes juveniles. Entre los hallazgos más destacados se encuentra la sustitución voluntaria de cultivos y los emprendimientos juveniles, los cuales han generado nuevas territorialidades. De este modo, la paz se construye desde la economía legal, el liderazgo juvenil y la memoria del conflicto.

En el capítulo 4, “Mujeres jóvenes y minería: violencias y nuevas iniciativas por la equidad de género en Muzo y San Pablo de Borbur, Boyacá”, se aborda la forma como las mujeres jóvenes han incursionado en un sector históricamente masculinizado como la minería. Este problema se formula a través de la siguiente pregunta: ¿qué formas de resistencia y agencia han desarrollado las mujeres guaqueiras frente a la violencia de género?

La metodología de este capítulo se centró en entrevistas, análisis documental (marcos normativos) y revisión de estudios de caso. Como principal hallazgo se encontró que las mujeres han resignificado su rol en la minería, enfrentando estigmas y construyendo equidad. Así mismo, se evidenció que la equidad de género constituye un elemento clave en la construcción de paz territorial en contextos extractivos.

En el capítulo 5, “Jóvenes, turismo rural comunitario y desarrollo territorial en el Occidente de Boyacá”, se especifica el problema del potencial que tiene el turismo comunitario como estrategia de paz y desarrollo en la región, el cual se articula en la pregunta: ¿cómo

articulan los jóvenes el turismo con la memoria, el medio ambiente y la economía local?

La metodología que se utilizó fue la cartografía social para el mapeo de iniciativas, entrevistas semiestructuradas a emprendedores y análisis de documentos (políticas turísticas). Como un hallazgo importante, se encontró que el turismo comunitario ha permitido visibilizar el territorio como espacio de paz y biodiversidad, convirtiendo el turismo rural en una alternativa sostenible que fortalece la identidad y la economía juvenil.

En el capítulo 6, “Los colectivos juveniles y organizaciones sociales: generadores de prácticas alternativas para la construcción de paz en el Occidente de Boyacá”, se aborda el problema de cómo las juventudes rurales han creado formas de organización que transforman un territorio históricamente marcado por la violencia esmeraldera y el extractivismo. Esto conduce a la pregunta orientadora del capítulo: ¿de qué manera los colectivos juveniles y las organizaciones sociales generan prácticas alternativas para la construcción de paz en la región?

La metodología empleada fue mixta, combinando entrevistas semiestructuradas, grupos focales, etnografía digital y análisis de datos sociodemográficos, lo que permitió triangular narrativas, prácticas culturales, productivas y políticas. Entre los hallazgos más relevantes se destaca que estas organizaciones juveniles han resignificado el territorio, fortaleciendo liderazgos comunitarios, impulsando iniciativas de emprendimiento rural, arte comunitario y participación ciudadana, y consolidando espacios de diálogo intergeneracional. Así, los colectivos juveniles se han constituido en actores clave para la paz territorial, demostrando que las nuevas generaciones no solo resisten las huellas del conflicto, sino que proponen alternativas sostenibles que integran memoria, identidad y transformación social.

En el Capítulo 7, “La transformación del territorio desde la educación para la paz en Quípama y Muzo”, se analiza cómo los procesos educativos han incidido en la reconstrucción del tejido social en dos municipios históricamente marcados por la violencia esmeraldera. Este apartado identifica el problema orientado al papel que cumplen las instituciones educativas para resignificar los imaginarios heredados de la “guerra verde” y avanzar hacia nuevas formas de convivencia, lo

cual conduce a la pregunta: ¿cómo se promueve la cultura de paz desde las instituciones educativas en los municipios de Muzo y Quípama?

La metodología empleada fue mixta, combinando entrevistas semiestructuradas, grupos focales, estudios de caso y análisis de datos socioeducativos, permitiendo contrastar narrativas comunitarias con indicadores de participación juvenil y cobertura escolar. Entre los hallazgos más relevantes se evidenció que la educación ha sido un eje de transformación cultural al fomentar valores de diálogo, memoria, empatía y participación ciudadana, consolidando en ambos municipios una apuesta educativa que rompe con los imaginarios de violencia y proyecta a las nuevas generaciones hacia modelos de vida más dignos, sostenibles y alejados del extractivismo.

En el capítulo 8, “Juventudes, gestión pública y dinámicas institucionales en el Occidente de Boyacá”, se plantea el problema de cómo participan los jóvenes en la gestión pública y qué obstáculos enfrentan, lo cual sugiere la pregunta: ¿qué estrategias han desarrollado los jóvenes para incidir en las políticas locales?

Como metodología, se realizó un análisis documental sobre los Consejos de Juventud, así como entrevistas a funcionarios y líderes juveniles. Uno de los hallazgos que enriqueció la investigación fue determinar que la participación juvenil ha sido limitada por la precariedad institucional, pero también la emergencia de nuevas formas de incidencia juvenil en lo local. En este sentido, la paz territorial requiere fortalecer la gobernanza juvenil y la articulación institucional.

En suma, este libro invita a recorrer un territorio que ha sido históricamente narrado desde la violencia, pero que hoy se resignifica desde las voces, prácticas y apuestas de sus juventudes. A través de una mirada situada, crítica y comprometida con la transformación social, los capítulos aquí reunidos revelan cómo la paz se construye desde abajo, desde los márgenes, desde lo cotidiano. Más allá del verde esmeralda, lo que emerge es un horizonte de posibilidades donde la memoria, la participación, la equidad y la creatividad se entrelazan para imaginar y habitar un Occidente de Boyacá más justo, más digno y más nuestro.

CAPÍTULO 1

Juventudes, violencia y construcción de paz territorial en el Occidente de Boyacá

EDWIN DIOMEDES JAIME RUIZ

JOHANA CÁRDENAS JEREZ

Presentación del capítulo

Este capítulo analiza las formas de violencia estructural, simbólica y directa que han afectado históricamente a las juventudes del Occidente de Boyacá, así como sus respuestas organizativas, culturales y políticas orientadas a la construcción de paz territorial. El propósito es comprender desde un enfoque crítico social situado cómo las prácticas juveniles contribuyen a la reconfiguración del tejido social en territorios marcados por la guerra verde. Se emplea una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa), basada en entrevistas, grupos focales, análisis documental y etnografía digital. Los hallazgos permiten comprender la agencia juvenil como motor de transformación territorial y se concluye que las juventudes rurales son actores clave en la resignificación del territorio y la construcción de paz.

Introducción

El presente capítulo propone realizar una contextualización sobre los diferentes tipos de violencia a los cuales históricamente se han visto expuestos los jóvenes en la región del Occidente de Boyacá. Los jóvenes han sido afectados por diferentes formas de violencia que se reconocen principalmente en situaciones de violencia estructural (La Parra y Tortosa, 2003) que causan hambre, miseria, enfermedad o incluso muerte, demostrando la ausencia del Estado. De acuerdo con lo expuesto por Cabrera (2018), este tipo de violencia también hace alusión a la ausencia de satisfacción de necesidades básicas de supervivencia, libertad, bienestar e identidad, que determinan la condición de un grupo vulnerado y otro privilegiado por condiciones de raza, género o clase.

De este modo, la violencia estructural permite comprender la violencia directa que han ejercido los patrones, como grupo privilegiado, que reforzaron su poder y posición en la región. Como menciona Uribe (1993), la presencia de las minas de esmeraldas contribuyó a que este poder local se organizara militarmente con el objeto de proteger el recurso y reglamentar su usufructo. Son estos privilegios los que terminan legitimando las diferentes formas de violencia (Fajardo, 2002).

Del mismo modo, la violencia ejercida sobre las mujeres y la población LGBTIQ+ ha sido determinante para comprender las dinámicas sociales del territorio, pues permite identificar elementos de interseccionalidad que atraviesan a estos grupos particularmente por condiciones de clase, raza, género y procedencia. En en varios capítulos de este libro, la cultura patriarcal y machista propia del Occidente de Boyacá se constituye en un eje analítico central, en la medida en que ha configurado formas diferenciadas de relación, poder y subordinación entre las generaciones que han habitado este territorio. En este sentido resulta pertinente la pregunta: ¿cómo afectan las distintas formas de violencia las prácticas juveniles que contribuyen a la reconfiguración del tejido social y la construcción de paz en el occidente de Boyacá?

La presencia de diferentes formas de violencia trae consigo la búsqueda de escenarios de paz en este territorio, una apuesta de transformación histórica que le otorga protagonismo a los jóvenes, nuevas generaciones que piensan de una manera distinta los municipios donde

viven, lugares pensados desde otra óptica frente a las variables históricas de la guerra, es decir, más allá de la guerra verde o el poder a través del mercado de las esmeraldas o la economía ilícita.

La comprensión histórica y afectiva de la guerra ha configurado diversos modos de agencia social que han permitido a los actores contribuir a la reconciliación y reestructuración del tejido social —fundamento de la paz—, reconfigurando las formas de gestión del poder, las riquezas y la tierra, en el marco de disputas y resignificaciones territoriales. El contexto actual evidencia tensiones entre una clase tradicional asociada a nuevos patrones de control y la emergencia de liderazgos juveniles que sienten un fuerte arraigo territorial, cuyas perspectivas diversas redefinen lo que significa ser joven en el marco del posconflicto en el Occidente de Boyacá. En este sentido, estas formas de agencia juvenil constituyen un aporte central a la pregunta del proyecto sobre ¿cómo las formas de agencia juvenil reconfiguran el territorio del Occidente de Boyacá a partir de prácticas productivas, culturales, educativas y políticas que contribuyen a la construcción de paz territorial?

De este modo, el presente capítulo estará dividido en cuatro apartados: en la primera parte, se hará un balance conceptual sobre los jóvenes y las juventudes en el Occidente de Boyacá; en la segunda parte, se presentarán algunas formas de violencia a las cuales se han visto expuestos los jóvenes; en la tercera parte se hace un análisis de los posibles escenarios de paz territorial que se vienen proponiendo para la región, y finalmente se presenta la experiencia del colectivo Arte Zurdo como experiencia significativa de paz territorial.

Antecedentes

Las juventudes en el Occidente de Boyacá han sido históricamente afectadas por múltiples formas de violencia, entre ellas el conflicto armado, la violencia estructural y la exclusión social. Estas condiciones han configurado escenarios de vulnerabilidad, pero también de resistencia y transformación. Según Pérez et al. (2020), los jóvenes víctimas del conflicto armado resignifican la paz como un proceso de justicia social, convivencia y bienestar, más allá de la simple ausencia de violencia. En

este sentido, las prácticas juveniles emergen como respuestas creativas y colectivas que permiten reconstruir el tejido social desde la memoria, el arte y la participación comunitaria. La violencia, aunque limitante, ha sido también un catalizador para la acción juvenil, como lo demuestra el proyecto “Niños, Niñas y Jóvenes Constructores-as de Paz”, que promueve subjetividades políticas activas en contextos de exclusión (Cinde y Universidad de Manizales, 2017).

Diversos estudios han evidenciado que la participación juvenil en procesos de paz no solo es necesaria, sino transformadora. Núñez y Gómez Etayo (2020) destacan cómo los jóvenes en barrios populares de Cali y Medellín enfrentan violencias múltiples, pero también desarrollan prácticas de convivencia que resignifican sus entornos. En el caso del Occidente de Boyacá, investigaciones como la de Jaime et al. (2023) muestran que los jóvenes de municipios como Quípama, Muzo, Pauna y San Pablo de Borbur han creado espacios de acción colectiva que inciden en la paz territorial. Estas prácticas incluyen el uso de redes sociales, el arte comunitario y la participación política, lo que evidencia una reconfiguración del territorio desde abajo. La etnografía digital, como herramienta metodológica, ha permitido visibilizar estas narrativas juveniles en plataformas como Instagram y Facebook, donde colectivos como Arte Zurdo expresan memorias de resistencia y esperanza.

La reconstrucción del tejido social en contextos de violencia requiere reconocer las capacidades de las juventudes como agentes de cambio. Estudios como los de Llinás y Guerra (2022) proponen una pedagogía restaurativa que vincula la educación con la recuperación de vínculos comunitarios. Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2023) enfatiza que la participación juvenil significativa es clave para lograr una paz duradera, especialmente en territorios marcados por el conflicto. En el Occidente de Boyacá, estas apuestas se articulan con procesos de memoria histórica, reconciliación y desarrollo territorial, donde los jóvenes no solo denuncian las violencias, sino que también construyen alternativas desde sus propias realidades.

Metodología

La investigación se desarrolló desde un enfoque crítico social situado, orientado al análisis territorial de las dinámicas juveniles en el Occidente de Boyacá. Este enfoque permitió comprender las prácticas de paz desde las experiencias concretas de los actores sociales, reconociendo sus contextos históricos, culturales y políticos. Se empleó una estrategia metodológica mixta que combinó fuentes primarias y secundarias. Entre las fuentes primarias se realizaron doce entrevistas semiestructuradas y cuatro grupos focales con jóvenes de los municipios de Quípama, Muzo, Pauna y San Pablo de Borbur, aproximación que permitió captar narrativas diversas sobre la construcción de paz y la transformación de las violencias. Las fuentes secundarias incluyeron documentos institucionales, tesis académicas, artículos científicos y publicaciones en redes sociales que aportaron al análisis contextual y al contraste de información.

Asimismo, se incorporó la etnografía digital como herramienta clave para el análisis de las narrativas visuales de resistencia y memoria, centrando la atención en las publicaciones del colectivo juvenil Arte Zurdo en Instagram y Facebook. Esta dimensión permitió explorar cómo los jóvenes resignifican el territorio y la paz a través de expresiones artísticas y comunicativas en entornos virtuales. El procesamiento de los datos cualitativos se realizó mediante codificación temática, lo que facilitó la identificación de patrones discursivos y prácticas significativas. Por su parte, los datos cuantitativos fueron analizados con base en estadísticas oficiales sobre violencia de género e intrafamiliar, lo que permitió contextualizar las problemáticas estructurales que enfrentan las juventudes en la región. Esta metodología integral posibilitó una lectura compleja y situada de los procesos de construcción de paz desde abajo.

Claves conceptuales en torno a las juventudes, las violencias y la construcción de paz

Jóvenes, juventud y juventudes en el occidente de Boyacá

La construcción social de la juventud ha sido un elemento de análisis permanente en el campo de la sociología, siendo muy importante su comprensión desde contextos locales y situados como los municipios de Occidente de Boyacá. Por tal motivo, es necesario hacer un primer abordaje conceptual sobre los jóvenes, la juventud y las juventudes desde diversas perspectivas académicas.

De acuerdo con lo propuesto por Duarte (2010), no puede definirse una única forma de ser joven, por el contrario, debe hablarse de jóvenes y juventudes como un constructo cultural plural en el que interactúan permanentemente las subjetividades. De esta manera, coincide con Ballén (2021), cuando afirma que existen dos retos para comprender la realidad de las juventudes rurales latinoamericanas: por un lado, entender su pluralidad y, por el otro, fortalecer su visibilidad. Por su parte, Dávila (2005, citado por Baquero, 2022) menciona que la juventud se define como un proceso de construcción de identidad con realidades diversas entre limitaciones y oportunidades.

De esta manera, las juventudes rurales en plural se configuran como actores estratégicos para comprender las múltiples identidades que se han visto envueltas en diferentes formas de violencia, en el marco del conflicto armado y la construcción de paz territorial, ya que han sido ellos y ellas quienes han aportado a la comprensión de estas realidades. Los jóvenes de occidente de Boyacá estuvieron determinados por la guerra verde en sus diferentes matices, desde la segregación por condiciones de pobreza hasta la inclusión para ser parte de los actores de la guerra. Como lo refiere Flórez (2019), los jóvenes terminaron convirtiéndose en victimarios, pero también en víctimas de la guerra verde, que los llevó a convertirse en lugartenientes de uno u otro bando, proceso que los llevó a convertirse en soldados o sicarios de la guerra verde.

Este contexto reconfigura las identidades juveniles de la región. En efecto, ya no solo se piensa en ser un patrón con sus diferentes implicaciones (armas, dinero o mujeres) o, en el caso de las mujeres, en dedicarse a las labores del hogar o la mina. Estas representaciones se trasladan hacia la formación técnica y profesional, siendo la educación una herramienta de transformación social, que permite redefinir actitudes, valores y prácticas desde las nuevas realidades del territorio. Como lo proponen García y Candela (2010), se generan espacios de reflexión, debate y acción, que favorecen “la comunicación, el intercambio de opiniones, la expresión de sentimientos, la aceptación de la diferencia, el respeto mutuo y la construcción de acuerdos” (p. 43). Dichas prácticas recrean nuevos escenarios de convivencia desde el reconocimiento del otro.

Esta reconfiguración del territorio facilita la recuperación del tejido social que fue roto por el conflicto armado, permitiendo que los jóvenes construyan nuevas identidades desde formas de organización juvenil. Tal como lo define Baquero (2022), existen variadas formas de organización y acción colectiva en los distintos municipios de la provincia, como el colectivo JOB, las plataformas de juventud municipales y algunas iniciativas apoyadas por la Corporación Boyapaz. La organización juvenil se convierte en un elemento de análisis para comprender las juventudes del Occidente de Boyacá, así como el papel de la Corporación Boyapaz (Corporación para el Desarrollo y la Paz del Occidente de Boyacá), pues van a ser fundamentales en la comprensión de las nuevas dinámicas del territorio y del protagonismo de los jóvenes en este propósito.

Las diversas organizaciones juveniles proponen nuevos repertorios de acción colectiva que ya no se relacionan con factores de violencia, sino a partir de procesos gremiales, como las asociaciones de cacao-teros, las organizaciones ambientales, los emprendimientos turísticos comunitarios y las asociaciones de artesanos que favorecen el diálogo intergeneracional. Como afirma Villa (2011), la comprensión de las juventudes responde a las relaciones de poder social que se establecen generacionalmente, pues cada sociedad configura la condición juvenil. El reconocimiento de las juventudes en plural será una disputa permanente entre la institucionalidad y formas particulares de organización

de las juventudes en el occidente de Boyacá, confrontando las dinámicas de poder y de violencia estructural.

La participación de los jóvenes y sus formas de movilización definen los alcances de la participación política mediante procesos de formación e incidencia, conformación de escuelas de liderazgo, juntas de acción comunal, plataformas de juventudes y asociaciones gremiales (Baquero, 2022). Desde su diversidad, los jóvenes favorecen la comprensión de una cultura de paz. También es importante mencionar la importancia de los jóvenes rurales para la comprensión de los mundos juveniles y sus múltiples identidades. Como lo afirma Ballén (2021a):

Las representaciones alrededor de las y los jóvenes rurales los sitúan en medio de la invisibilidad y la estereotipación. La conceptualización de la juventud rural es reciente en los estudios de la juventud. También la juventud rural es un aspecto reciente en las políticas públicas juveniles y en el sistema educativo, puesto que estos campos han estado ajustados a una visión urbanocéntrica que desconoce sus pluralidades, necesidades y agencia. (p. 1)

Retomando lo anterior, se evidencia la deuda histórica que ha tenido el Estado colombiano, pero también la academia con esta región del país, invisibilizando las afectaciones de la guerra y el extractivismo en los proyectos de vida de los jóvenes. Ante este contexto, como lo proponen Bermúdez y Zamudio (2012), se debe promover el acceso efectivo de los derechos y facilitar herramientas para que los jóvenes solucionen sus conflictos, basados en la equidad e igualdad de oportunidades sin ninguna condición social, política o económica. Un escenario que posibilite la promoción y disfrute de los derechos humanos.

Violencias interseccionales en el Occidente de Boyacá: mujeres jóvenes y juventudes LGBTQ+

En el Occidente de Boyacá, las múltiples violencias que han marcado la historia de la región adquieren una dimensión interseccional cuando se analizan desde las experiencias de mujeres jóvenes y juventudes LGBTQ+. Estas poblaciones han sido históricamente invisibilizadas en los estudios sobre el conflicto armado y la minería, a pesar de ser

víctimas recurrentes de violencias estructurales, simbólicas, físicas, sexuales y políticas.

La violencia estructural, como lo plantea Cabrera (2018), se manifiesta en la privación de derechos fundamentales, especialmente en contextos de pobreza, desigualdad y exclusión social. En esta región, las mujeres jóvenes son obligadas a trabajar en condiciones precarias en las minas, enfrentando riesgos físicos y sociales sin garantías laborales ni protección institucional. Posso (2018) y Cañón (2020) evidencian cómo las mujeres guaqueras construyen identidades marcadas por el trabajo informal, el cuidado del hogar y la aspiración económica, en un entorno profundamente patriarcal.

La violencia física y simbólica se expresa en el control territorial ejercido por actores armados y patrones locales, quienes imponen fronteras invisibles y prácticas de vigilancia que afectan en especial a mujeres y personas LGBTQ+. Como lo señala Condiza (2021), esta población ha sido víctima de desplazamiento forzado, desaparición, asesinato selectivo y delitos contra la integridad sexual. La cultura machista y heteronormativa de la región legitima estas violencias, relegando a las juventudes disidentes a la marginalidad y el silencio.

Las mujeres jóvenes enfrentan violencia sexual, doméstica e institucional, como lo documenta el informe de la Secretaría de Salud de Boyacá (Alvarado, 2019). Aunque los municipios de Quípama, Muzo, Pauna y San Pablo de Borbur presentan bajos índices reportados, esto refleja más una falta de denuncia y registro que una ausencia de violencia. García y García (2019) afirman que muchas mujeres optan por guardar silencio o abandonar sus trabajos para evitar ser maltratadas, lo que evidencia la normalización de la violencia en estos contextos.

Por su parte, las juventudes LGBTQ+ son blanco de agresiones físicas, verbales y simbólicas, siendo excluidas de espacios comunitarios y educativos. La interseccionalidad, como enfoque analítico, permite comprender cómo se entrecruzan las condiciones de género, clase, orientación sexual y procedencia para configurar escenarios de vulnerabilidad. Estas violencias no solo afectan los cuerpos, sino también los proyectos de vida, la participación política y el acceso a derechos.

La violencia política también ha tenido un impacto diferencial en estas poblaciones. La persecución a líderes de la Unión Patriótica y el

control ejercido por patrones como Víctor Carranza (CNMH, 2018) generaron un ambiente de miedo y represión, donde las mujeres y personas LGBTQ+ fueron utilizadas como símbolos de poder o castigadas por transgredir las normas sociales. Herrera (2022) plantea que la violencia se instituyó como mecanismo legítimo para administrar el territorio, afectando especialmente a quienes no encajaban en los modelos tradicionales de ciudadanía.

Ante este panorama, es urgente visibilizar las voces de mujeres jóvenes y juventudes LGBTQ+ como actores de paz territorial. Sus experiencias, resistencias y formas de organización deben ser reconocidas como aportes fundamentales a la reconstrucción del tejido social. La inclusión de sus narrativas en los procesos de memoria y reconciliación es clave para avanzar hacia una paz transformadora, que reconozca la diversidad y combata las violencias estructurales desde una perspectiva de derechos humanos.

En conclusión, las violencias en el Occidente de Boyacá no pueden entenderse sin considerar las afectaciones específicas sobre mujeres jóvenes y juventudes LGBTQ+. La interseccionalidad permite ampliar el análisis y proponer estrategias de transformación que partan del reconocimiento de estas subjetividades. La construcción de paz territorial requiere una mirada crítica, situada y plural, que incorpore las voces históricamente silenciadas y promueva escenarios de justicia, equidad y dignidad.

La paz, una apuesta de los jóvenes para transformar las violencias

Después de décadas marcadas por la violencia y la disputa territorial, los jóvenes emergen como actores clave en la construcción de escenarios de paz, son ellos quienes están transformando las violencias a través de apuestas territoriales, ecológicas y decoloniales, redefiniendo el concepto de paz desde perspectivas críticas y participativas.

Después de ser parte de la guerra verde y disputar el poder por el territorio, son los jóvenes quienes empiezan a pensar la generación de escenarios de paz que permitan consolidar prácticas distintas a la guerra. La paz pone de relieve diferentes perspectivas teóricas sobre la

paz territorial, inicialmente desde una perspectiva (liberal), hacia una perspectiva de paz crítica-ecológica y también vista desde una perspectiva de paz decolonial-histórica.

Esto quiere decir, en palabras de Padilla (2020), que la paz liberal se concibe como una serie de modelos que, para la transición efectiva en contextos posbélicos hacia una democracia electoral representativa, privilegian el fortalecimiento del Estado liberal y el establecimiento del libre mercado.

La perspectiva crítica-ecológica de la paz, o paz ambiental, de acuerdo con Rodríguez et al. (2017), plantea la existencia de vínculos directos y múltiples entre los conflictos armados y las disputas por los recursos naturales y el medio ambiente. En este sentido, el control y la explotación de dichos recursos constituyen factores centrales de los conflictos ambientales. En el contexto extractivista de la minería en el Occidente de Boyacá, esta perspectiva resulta clave para comprender las diversas formas de construcción del territorio. Así mismo, la cultura de paz se enmarca en la sostenibilidad de relaciones que permitan a las personas sentir, pensar y actuar bajo principios de justicia social, dentro de un entramado participativo orientado por la planificación estratégica.

Por su parte, Cruz (2020) propone que la paz decolonial o histórica supone la superación de la subalternización de los conocimientos y las culturas de los grupos humanos oprimidos y excluidos, logrando así una construcción de conocimiento que venga desde abajo, que ubique la praxis comunitaria como el fundamento de los conocimientos. Este tipo de iniciativas locales permite repensar la paz desde arriba o paz liberal hacia escenarios más plurales, diversos y autogestionados (paz desde abajo). La necesidad de mecanismos locales que faciliten la operacionalización de la paz. Estas reflexiones plantean otras formas de concebir la paz desde perspectivas críticas, participativas y relevantes. Como lo menciona Flórez (2019):

la población de Occidente se auto reconocen como constructores de paz regional y hacen un llamado de atención a pensarse procesos de largo aliento, que requieren de la participación de la sociedad civil en su conjunto, pues con todo y sus dificultades, el

Acuerdo desarrollado en 1990 trajo a la Provincia una sensación de tranquilidad y de esperanza, que paulatinamente se tradujo en la desnaturalización de la violencia acaecida por el conflicto minero y el restablecimiento de relaciones de confianza entre sus habitantes. (p. 11)

La construcción de paz requiere un relacionamiento multiactor que vincule a las instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias y Academia, de modo que posibilite el surgimiento o aparición de nuevas ciudadanías fomentando escenarios colaborativos y de encuentro dialógico. Se reconoce la implicación de redes y grupos sociales a partir de las necesidades de unos y otros. Como lo sugiere Ortiz (2015), se requiere que opere como catalizador frente al desinterés estatal o imposibilidad material de atender los múltiples impactos en el orden político, económico y social.

De este modo, la investigación participativa toma un papel protagónico para comprender la paz transformadora, siendo la educación y la investigación situadas fuente de su comprensión, junto a la imaginación geográfica, pues permiten reconfigurar los territorios. Como lo proponen Montañés y Ramos (2012), la paz transformadora tiene como premisa o necesidad que la población se vincule a la construcción de propuestas que contribuyan a la construcción de paz y la gestión de conflictos. Por lo tanto, se requiere de acciones directas no violentas para la paz transformadora, comprendiendo las dimensiones contextuales del conflicto a través de los procesos de acción colectiva, pero también desde las individualidades de los sujetos.

A pesar de los puntos mencionados en los acuerdos de 1990, aún continúan muchas problemáticas relacionadas con conflictos estructurales de la región, pobreza, desigualdad, marginalidad y discriminación, pues los puntos que allí aparecen solo responden a los intereses de los patrones de la época. Siendo un acuerdo que transita de la esfera privada a la esfera pública, siempre garantista de los derechos de propiedad del sector minero. El acuerdo de paz, como lo afirma Londoño (2015):

sentó el precedente de lo que se denominaría posteriormente como acuerdos de paz del Occidente, dejando una serie de lecciones

aprendidas en cuanto a la funcionalidad de los procesos de negociación y de diálogo, que posibilitan la Paz, pero que se desarrollan sin cuestionar el poder de los patrones esmeralderos en la región. (Londoño, 2015, citado por Flórez, 2019, p. 22)

La construcción de paz implica la articulación de diversos actores —antagonistas, diferentes y afines— como condición necesaria para que esta se configure como un proceso social transformador. Exige, además, una gestión pacífica de los conflictos que haga una distinción entre conflicto y violencia, así como entre amigo y enemigo, generando nuevas conversaciones dotadas de sentido. Como lo sugieren Ruiz et al. (2019):

Los conflictos sociales requieren de procesos de memoria que amplíen las perspectivas de análisis, que dejen ver las diferentes aristas de acción, los actores involucrados y la reconfiguración del territorio en la definición de escenarios de construcción de paz en el marco de la guerra verde. (p. 3)

Pensar la paz conlleva un tránsito de la paz positiva a la paz transformadora desde un enfoque constructivista socio-práxico. Para ello se puede definir la paz transformadora desde algunos elementos como la participación deliberativa, el sentipensar vinculante y el desarrollo personal-social-estructural-holístico. Requiere fomentar la escucha en el proceso de transformación del conflicto. Por lo tanto, es necesario cambiar las normativas del conflicto y la disputa desde la reconciliación, una apuesta de las emociones por la reconciliación.

Tal como lo propone Ballén (2021), las acciones juveniles deben estar enfocadas en el desarrollo territorial a partir de los siguientes aspectos: 1) la presentación de colectivos que resignifican el rol de los jóvenes en el Occidente de Boyacá; 2) la promoción de la participación juvenil para el desarrollo de los territorios; 3) la visibilidad de las potencialidades del territorio, más allá de la vocación minera; y 4) la reconstrucción del imaginario social existente respecto al territorio mediante el discurso de paz.

De este modo, la presencia juvenil en la región evidencia la transición de escenarios marcados por la violencia y el conflicto hacia horizontes

de construcción de paz transformadora, sustentados en procesos de empoderamiento y ejercicio de agencia territorial. Este enfoque demanda la participación activa de las juventudes, quienes, desde sus contextos locales, resignifican las experiencias del conflicto y promueven nuevas formas de convivencia. A través de la educación, la investigación participativa y el reconocimiento de las memorias colectivas, los jóvenes construyen alternativas sostenibles y justas. Su papel es fundamental para consolidar una paz que supere las dinámicas de la violencia y que además impulse el desarrollo integral de sus comunidades.

Arte Zurdo, una iniciativa juvenil para la construcción de paz territorial

Los procesos juveniles adelantados en el Occidente de Boyacá definen la articulación de la Corporación Arte Zurdo con distintos procesos organizativos de la región a través del arte, la memoria y la acción colectiva. Iniciativas como Senderos del Relato o la exposición Occidente de Boyacá, y Memorias de Paz, a través de las artes plásticas, recogen y proyectan las narrativas del territorio. Tal como lo proponen Bonilla y Cañón (2023), esta última instalación “explora la diversidad única de la zona, la vibrante cultura que la caracteriza, la influencia de la esmeralda en su identidad, el oscuro conflicto que la marco y el valiente camino hacia la paz” (p. 2).

Memorias de Paz se constituye como una respuesta artística que visibiliza el contexto de la producción de esmeraldas y las reivindicaciones de las mujeres en estos territorios; es la posibilidad de evidenciar diferentes propuestas que buscan mitigar y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres. De este modo, se recoge una parte de la historia de la región, se intercambian relatos y experiencias, y generan diálogos intergeneracionales, lo cual brinda una oportunidad para reconocer y recrear el territorio.

Otra estrategia o iniciativa importante son los cineforos que se realizan en las instituciones educativas de la región, los cuales buscan que los jóvenes reconozcan diferentes situaciones asociadas a la memoria colectiva regional, al tiempo que facilitan el intercambio de ideas para proponer escenarios de paz.

Mediante las diversas prácticas e iniciativas propuestas por la Corporación Arte Zurdo se demuestra el poder transformador que tiene el arte con perspectiva social en una zona que se define por una disputa histórica por el poder en medio del conflicto. Cada expresión es un testimonio de resiliencia y esperanza que aviva en las comunidades, pues el arte asume una función sanadora, que reconstruye puentes hacia la paz, la reconciliación y tal vez hacia la no repetición.

Otra de las iniciativas que resulta importante en la labor de esta organización es el Festival Biohote que rinde un homenaje a la cultura campesina boyacense a través del teatro, danza, música, gastronomía, narración oral y cinematografía. “*Biohote* en lengua muisca significa ‘borrachera’ (importante ceremonia de integración comunitaria para los muisca), por tal razón, el festival toma esta palabra ancestral” (Gobernación de Boyacá, 2022). Su objetivo es generar procesos que permitan fortalecer la conciencia de la tradición campesina y el origen del territorio cundiboyacense. De este modo, se busca una resignificación cultural del territorio ancestral promoviendo el sentido de pertenencia y la apropiación de la cultura campesina de la región.

El propósito de la corporación se centra en la transformación del territorio mediante el arte y la educación, entendidos como pilares fundamentales para atender las necesidades e intereses de los jóvenes y las comunidades del Occidente de Boyacá. En este sentido, se configura como un referente en los procesos de transformación territorial.

Reflexión final

Las condiciones estructurales de pobreza y desigualdad han repercutido en la falta de oportunidades para población juvenil del Occidente de Boyacá, determinando las condiciones materiales de su propia existencia. La violencia ha sido un elemento recurrente en la vida de los habitantes de esta región; sin embargo, también se ha constituido en un referente de memoria colectiva que permite comprender el papel de los jóvenes en la construcción de paz territorial. Esto lleva a considerar la perspectiva generacional como un elemento clave para analizar las identidades juveniles.

La participación de actores en relación con los lugares que habitan como elemento de transformación social hace que surjan nuevas perspectivas o metodologías a través de diferentes expresiones culturales, sociales y ambientales, que se expresan en pedagogías y metodologías de la no violencia, siendo una oportunidad de abordar la violencia como fenómeno estructural. De igual manera, como estrategia para romper barreras culturales, lingüísticas o religiosas, referentes de los acuerdos de paz del Occidente de Boyacá, pues persisten múltiples variables que configuran las violencias y el conflicto, que aún vulneran los derechos humanos de las mujeres y las jóvenes de la región.

La paz territorial es un reto para los jóvenes del Occidente de Boyacá con estrategias económicas, sociales y culturales que se materializan en la formación de organizaciones juveniles que se analizarán en los siguientes capítulos. Las reflexiones actuales sobre la construcción de paz ponen como parte de la agenda la construcción de una paz híbrida, ya que los escenarios de construcción de paz se han destacado en esta investigación por un conocimiento situado, descentralizado y dialógico, tratando de transformar el discurso hegemónico y centralizado institucional sobre el conflicto y la paz.

Referencias

- Alvarado Cuervo, W. Y. (2019). *Informe violencia de género e intrafamiliar. A tercer periodo epidemiológico Boyacá*. Secretaría de Salud. Gobernación de Boyacá.
- Ballén Robles, D. C. (2021). Visibilidad de la agencia de jóvenes rurales mediante el uso de redes sociales: el caso del Colectivo JOB en Boyacá, Colombia. *Eutopía. Revista de Desarrollo Territorial*, (19). <https://doi.org/10.17141/eutopia.19.2021.4978>
- Ballén Robles, D. C. (2021a). *Trazos verdes: autorrepresentaciones de jóvenes rurales del Occidente de Boyacá, Colombia. Etnografía visual sobre la agencia juvenil en la cotidianidad y en el territorio* [Tesis de maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales].
- Baquero Nieto, V. (2022). *Acción colectiva: jóvenes del Occidente de Boyacá construyendo territorialidades a partir de memorias colectivas de un conflicto* [Tesis de grado, Universidad Externado de Colombia].

- Bermúdez Rojas, M. J. y Zamudio Garnica, L. Y. (2012). *El proyecto de vida de tres adolescentes, afectados por el conflicto armado en Colombia* [Tesis de maestría, Universidad de La Sabana].
- Bonilla Cortés, A. y Cañón Rozo, C. (2023). *Occidente de Boyacá. Memorias de Paz*. Programa Departamental de Estímulos y Fomento Cultural. Secretaria de Cultura y Patrimonio. Gobernación de Boyacá. Ministerio de Cultura.
- Cabrera León, J. D. (2018). Violencia estructural: la cara oculta de la violencia. De justicia. <https://www.dejusticia.org/column/violencia-estructural/>
- Cañón Cifuentes, A. J. (2020). *Género y clase social, un análisis de las mujeres guaqueras de Muzo, Boyacá, en el periodo del año 2020* [Tesis de grado, Universidad Santo Tomás].
- Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano [Cinde] y Universidad de Manizales. (2017). Niños, niñas y jóvenes constructores-as de paz. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 15(2), 1390-1396. <https://www.redalyc.org/journal/773/77352074050/html>
- Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH]. (2018). *Todo pasó frente a nuestros ojos: el genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002*. <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/Todo-paso-frente-a-nuestros-2021.pdf>
- Condiza Plazas, W. E. (2021). Pedagogía de la memoria: voces de mujeres víctimas del conflicto armado en Boyacá-Colombia. *Revista Praxis*, 17(1), 69-84. <https://doi.org/10.21676/23897856.4041>
- Cruz, J. D. (2020). Un abordaje a la teoría crítica y decolonial de paz del norte y su proceso emergente en América Latina. En J. Jaramillo Marín, J. R. Jaime-Salas, D. Gómez Correal, S. Liliana Londoño, K. Pérez de Armiño y F. S. Castro Herrera (Eds.), *Paz decolonial, paces insubordinadas: conceptos, temporalidades y epistemologías* (pp. 75-110). Sello Editorial Javeriano. ISBN: 978 958-517757-4. <https://doi.org/10.2307/j.ctv25j12b1>
- Duarte Quapper, K. (2000). ¿Juventud o juventudes? Acerca de cómo mirar y remirar a las juventudes de nuestro continente. *Última Década*, (13), 59-77. CIDPA. <https://doi.org/10.4067/S0718-22362000000200004>
- Fajardo Montaña, D. (2002). *Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra: comunidades, tierras y territorios en la construcción de un país*. Instituto de Estudios Ambientales [IDEA], Universidad Nacional de Colombia.
- Flórez Varela, Á. M. (2019). *La paz verde escenarios de transformación de conflictos en el Occidente de Boyacá* [Tesis de grado, Universidad Nacional de Colombia].

- García López, R. y Candela Pérez, M. I. (2010). La educación para la vida: el reto de aprender a ser y a vivir juntos en el Educación Secundaria. *Revista Eedetania*, (38), 41-56. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3619800>
- García-Norato, J. F. y García-Norato, M. E. (2019). Acumulación de capitales, el marco detrás del conflicto en el occidente de Boyacá. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 9(2), 289-301. <https://doi.org/10.19053/20278306.v9.n2.2019.9173>
- Herrera Tinjacá, I. A. (2022). *Negociar la palabra. Las disputas de los sobrevivientes de los conflictos violentos en el Occidente de Boyacá con la Ley de Víctimas* [Tesis de grado, Universidad del Rosario].
- Jaime Ruiz, E., Idrobo, J., Varón, D. y Lizarazo, S. (2019). *Los procesos de paz en el Occidente de Boyacá* [Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás]. <https://repository.usta.edu.co/items/8515aa72-e125-4a85-b591-ecbe43ce1c35>
- Jaime Ruiz, E. D., Reyes Alfonso, D., Puerto Villamizar, V., Vásquez Díaz, W. A., Pascagasa Usaquén, M. A., Cruz Pacheco, S. X. y Monje Sandoval, I. (2023). *La participación política de los jóvenes en el occidente de Boyacá. Una apuesta para incidir en la paz territorial*. Universidad Santo Tomás. <https://repository.usta.edu.co/items/08c99349-412f-4f59-92dd-a0af38607bcb/full>
- La Parra, D. y Tortosa Blasco, J. M. (2003). Violencia estructural: una ilustración del concepto. *Documentación Social*, (131), 57-72. <http://hdl.handle.net/10045/23375>
- Llinás Torres, C. y Guerra, D. J. A. (2022). Pedagogía restaurativa: una propuesta de resignificación educativa para la reconstrucción del tejido social en Colombia. *Estudios Pedagógicos*, 48(2). https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052022000200159
- Londoño, J. (2015). *Narrativas en torno a la relación minera y la violencia en la región de Occidente de Boyacá* [Tesis de pregrado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas]. <https://repository.udistrital.edu.co/items/23fde615-7cb4-4749-8e4a-a57a8dd4af0a>
- Montañés Serrano, M. y Ramos Muslera, E. A. (2012). La paz transformadora: una propuesta para la construcción participada de paz y la gestión de conflictos desde la perspectiva sociopráctica. *OBETS. Revista de Ciencias Sociales*, 7(2), 241-269. <https://doi.org/10.14198/OBETS2012.7.2.04>
- Núñez, C. y Gómez Etayo, E. (2020). *Juventud, violencia y paz: experiencias investigativas en barriadas populares de Cali y Medellín*. Universidad de

- Medellín. https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/6188/Juventud%20violencia%20y%20paz_c.pdf
- Ortiz Rozo, D.F. (2015). *Los acuerdos de paz en el occidente de Boyacá (1986-1991): un análisis de la “convivencia pacífica” a la luz de los autoritarismos subnacionales* [Trabajo de grado, Universidad del Rosario]. https://doi.org/10.48713/10336_13956
- Padilla Quintero, S. A. (2020). *Una aproximación a las visiones de construcción de paz en el municipio de Planadas (Tolima): un análisis desde la paz liberal, popular e híbrida* [Trabajo de grado, Universidad Nacional de Colombia]. <https://www.bivipas.unal.edu.co/handle/123456789/805>
- Pérez Prada, M. P., Vianchá Pinzón, M. A. y Jerez Galeano, H. T. (2020). Significados de paz en adolescentes y jóvenes víctimas del conflicto armado en Colombia. *Tesis Psicológica*, 15(1), 168-178. <https://redalyc.org/journal/1390/139067933010/>
- Posso Navas, A. (2018). *Tesoro, mujeres y esmeraldas en el occidente de Boyacá* [Tesis de grado, Universidad del Valle]. <https://hdl.handle.net/10893/12235>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2023). La importancia de la participación juvenil en la construcción de la paz. <https://www.undp.org/es/colombia/blog/participacion-juvenil-construccion-de-paz>
- Rodríguez Garavito, C., Rodríguez Franco, D. y Durán Crane, H. (2017). *La paz ambiental: retos y propuestas para el posacuerdo*. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.
- Uribe, M. V. (1993). Pormenores acerca de la guerra en el occidente de Boyacá. En *Conflicto social y violencia. Notas para una discusión* (pp. 73-78). Institut français d'études andines. <http://books.openedition.org/ifea/7017>
- Villa Sepúlveda, M. E. (2011). Del concepto de juventud al de juventudes y al de lo juvenil. *Revista Educación y Pedagogía*, 23(60), 147-157.

Webgrafía

- Gobernación de Boyacá. (2022). “Homenaje al campo”. El tema del Festival Biohote que llega a Chiquinquirá. <https://www.boyaca.gov.co/secretariaculturapatrimonio/homenaje-al-campo-el-tema-del-festival-biohote-que-llega-a-chiquinquir/#:~:text=Biohote%2C%20en%20lengua%20Muisca%20significa,de%20la%20provincia%20de%20Occidente>

CAPÍTULO 2

Agricultura, minería y vocaciones productivas en el Occidente de Boyacá

DANIELA REYES ALFONSO

LAURA SOFÍA ANTONIO MARTÍNEZ

MARÍA ALEJANDRA PASCAGASA USAQUÉN

Presentación del capítulo

Este capítulo aborda las tensiones y articulaciones entre las vocaciones productivas de la agricultura y la minería en los municipios de Quípama, Muzo, Pauna y San Pablo de Borbur en el Occidente de Boyacá. El propósito es analizar el papel de estas actividades en la reconstrucción del tejido social juvenil y su contribución a la paz territorial. Se emplea una metodología mixta con enfoque crítico social situado, que combina técnicas cualitativas (entrevistas, grupos focales, etnografía digital) y cuantitativas (análisis de datos demográficos y productivos). Los aportes del capítulo se centran en la sistematización de experiencias juveniles organizativas, la articulación entre vocaciones productivas y paz territorial y el desarrollo de categorías analíticas desde la sociología crítica.

Introducción

Este capítulo analiza las nuevas vocaciones productivas en cuatro municipios del Occidente de Boyacá (Quípama, Muzo, Pauna y San Pablo de Borbur), en el marco de un proceso de diversificación económica. Así mismo, se presentan algunas experiencias de territorialización y reconstrucción del tejido social en respuesta al denominado Acuerdo de Paz del Occidente de Boyacá de 1990, que marcó la finalización de la guerra verde. A continuación, se aborda un territorio que ha sido escenario de conflictos, transiciones y aperturas económicas, con el propósito de dar respuesta a la pregunta general del proyecto: ¿cómo las formas de agencia juvenil reconfiguran el territorio del Occidente de Boyacá, a partir de prácticas productivas, culturales, educativas y políticas que contribuyen a la construcción de paz territorial?

La vocación agrícola de la región ha sido un elemento de discusión permanente debido a la riqueza mineral e hídrica del suelo —ríos, quebradas y nacimientos de agua—, presente en casi todos los municipios de la zona. Estas condiciones, sumadas a la diversidad de los pisos térmicos, configuran un escenario propicio para la siembra de distintos tipos de alimentos. En este contexto, resulta pertinente la pregunta específica del capítulo: ¿qué papel juegan la agricultura y la minería en la reconstrucción del tejido social juvenil?

Por lo tanto, el presente capítulo pretende aportar un análisis de los procesos de territorialización, diversificación económica y construcción de paz en la región. Para ello, se cuenta con el contexto actual de los municipios. En primer lugar, se presentan las claves conceptuales que ubican narrativamente las categorías de agricultura, diversificación productiva y territorialización, relacionadas con la realidad social del occidente de Boyacá. En segundo lugar, se relaciona la extracción de esmeraldas y el cultivo de coca como prácticas productivas en la región, a modo de contextualización histórica de las dinámicas relacionadas con la tierra. Un tercer momento tiene como protagonista al cacao, como la cara visible del proceso de transición de la economía ilícita y la diversificación productiva. Por último, se exponen los aportes que tienen los procesos productivos a la construcción de paz, transitando de la ilegalidad hacia el desarrollo y la paz territorial.

Antecedentes

Como parte del contexto se retoman tres obras clave a modo de antecedentes: *El hombre y la tierra en Boyacá*, de Fals Borda (2006), que evidencia la vocación agrícola histórica de la región; *La guerra y la paz*, de Gutiérrez y Barón (2008), que analiza la relación entre minería, coca y conflicto armado; y *Estado del arte del conocimiento producido sobre jóvenes en Colombia 1985-2003*, de Quintero et al. (2004), que permiten contextualizar los vacíos académicos sobre juventud, conflicto y paz.

En el contexto del Occidente de Boyacá, la transformación de las vocaciones productivas ha estado marcada por tensiones entre la tradición agrícola y el auge de la minería. El estudio de Fuentes et al. (2021) revela que, aunque la minería ha sido promovida como motor de desarrollo económico, sus efectos en la reducción de la pobreza y la desigualdad han sido limitados, especialmente en regiones con débil institucionalidad. Esta situación se complejiza cuando se observa, como en el informe del Ormet Boyacá (2023), que sectores como la agricultura y la minería presentan dinámicas laborales contrastantes: mientras el primero mantiene una ocupación estable, el segundo muestra fluctuaciones que afectan la sostenibilidad del empleo.

Desde una mirada intergeneracional, investigaciones como la de la Pontificia Universidad Javeriana (2022) sobre Tinjacá evidencian cómo las nuevas generaciones han modificado sus prácticas agrícolas, influenciadas por modelos de desarrollo que privilegian la tecnificación y el acceso a mercados en detrimento de saberes tradicionales. Esta transición no solo implica un cambio en las técnicas productivas, sino también en las identidades rurales, donde los jóvenes enfrentan dilemas entre continuar con la agricultura familiar o migrar hacia actividades extractivas o urbanas. En paralelo, el estudio de Valencia y Silva (2018) sobre el norte del Cauca, aunque fuera de Boyacá, ofrece claves comparativas al mostrar cómo las comunidades afrodescendientes han reconfigurado sus economías locales entre la subsistencia agrícola y el neoextractivismo, en un contexto de conflicto armado y disputas territoriales.

Finalmente, el análisis de Enríquez (2019) sobre equidad intergeneracional en la minería propone una reflexión crítica sobre la

sostenibilidad de los recursos no renovables y la necesidad de mecanismos como los fondos de minería para garantizar beneficios a largo plazo. Esta perspectiva es especialmente relevante para el Occidente de Boyacá, donde la coexistencia de minería y agricultura exige políticas públicas que reconozcan las trayectorias históricas de las comunidades y promuevan un desarrollo territorial equilibrado. En este sentido, Guzmán (2017) analiza las transformaciones socioespaciales en el sector agrícola de Boyacá entre 1995 y 2015, evidenciando cómo el modelo agroindustrial ha desplazado prácticas campesinas tradicionales. El estudio muestra que cultivos como la papa y la cebolla junca han generado impactos ambientales significativos, afectando ecosistemas como el lago de Tota. Esta investigación permite entender cómo las decisiones productivas de una generación afectan las posibilidades de subsistencia de las siguientes, y cómo se configuran nuevas tensiones entre sostenibilidad y rentabilidad.

Por su parte Suárez, Suárez y Zambrano (2017) abordan el emprendimiento juvenil rural en Boyacá como una expresión de las nuevas vocaciones productivas. El estudio revela que la falta de identidad territorial y la debilidad institucional limitan las posibilidades de los jóvenes para desarrollar proyectos sostenibles, lo que los lleva a migrar o a vincularse a actividades extractivas. Esta investigación destaca la importancia de la educación y el acompañamiento estatal para fortalecer las capacidades locales y evitar la ruptura generacional en el campo.

Metodología

El capítulo se desarrolla desde un enfoque crítico social situado en el territorio del Occidente de Boyacá. Se emplean técnicas cualitativas como entrevistas semiestructuradas, grupos focales, observación participante y análisis de redes sociales (etnografía digital), así como técnicas cuantitativas como el análisis de datos del DANE y Planes de Desarrollo Municipal. A partir de la investigación se identifican vacíos teóricos en la articulación entre juventud, minería y paz territorial; vacíos empíricos en la sistematización de experiencias juveniles organizativas; y vacíos metodológicos en el uso de enfoques generacionales para el análisis del conflicto en el Occidente de Boyacá.

Este estudio adopta una metodología mixta con enfoque crítico social situado, lo que permite articular la comprensión profunda de las experiencias juveniles con el análisis estructural de las condiciones socioeconómicas del territorio. El enfoque crítico situado reconoce que el conocimiento se produce desde contextos específicos, atravesados por relaciones de poder, historia y cultura, lo cual es esencial para abordar las tensiones entre agricultura y minería en el Occidente de Boyacá. La combinación de métodos cualitativos y cuantitativos responde a la necesidad de triangular datos, perspectivas y escalas de análisis, favoreciendo una mirada integral del fenómeno. Como señalan Forni y De Grande (2020), la combinación de diferentes metodologías en una misma investigación ha devenido en una práctica habitual en las ciencias sociales contemporáneas, permitiendo una articulación productiva entre paradigmas.

La investigación emplea técnicas cualitativas como entrevistas semiestructuradas, grupos focales y etnografía digital, junto con análisis cuantitativo de datos demográficos y productivos. Estas técnicas permiten captar tanto las narrativas juveniles como los patrones socioeconómicos que configuran el territorio. Los instrumentos incluyen guías de entrevista, matrices de sistematización, y bases de datos oficiales (DANE, IGAC). Cadena-Iñiguez et al. (2017) proponen que la articulación de métodos y técnicas cualitativas como la observación, la entrevista y los grupos focales permite una comprensión más holística del fenómeno investigado, siempre que se apliquen con rigor y pertinencia.

De esta manera, la investigación contribuye a identificar las formas de agencia juvenil que reconfiguran el territorio desde prácticas productivas, culturales y organizativas, así como a visibilizar los procesos de transición económica hacia modelos sostenibles de paz territorial. Los resultados pueden aportar insumos para el diseño de políticas públicas, el fortalecimiento de organizaciones juveniles y la promoción de economías alternativas. Como plantean Mendoza y González (2016), “los procesos creativos ‘desde abajo’ permiten imaginar modelos de reconstrucción del tejido social que aportan a la seguridad local y al buen vivir, especialmente en contextos históricamente afectados por el conflicto”.

Claves conceptuales en torno a la agricultura y la minería

La agricultura ha sido un elemento importante en el desarrollo de los municipios de Muzo, Pauna, Quípama y San Pablo de Borbur, por su tradición agrícola, la cual se ha visto trastocada por la minería. Sin embargo, son territorios que han desarrollado actividades agrícolas y ambientales desde sus orígenes, pues cuentan con condiciones naturales y climáticas favorables. Es decir, que la agricultura ha estado históricamente en los municipios del Occidente de Boyacá.

La agricultura se puede tomar desde varias perspectivas a partir de sus formas de organización social, cultural, económica y política (Fals Borda, 2006). La agricultura se refiere a una actividad económica de comunidades humanas relacionadas con la tierra, para producir alimentos para la subsistencia de las personas y que con los excedentes sea posible comercializarlos para generar ganancias en una sociedad. Para Sepúlveda (2008), la agricultura es una actividad económica y una fuente de alimentos que permite a la población rural y urbana acceder a los productos agrícolas. De esta forma, la agricultura es un sector que brinda estabilidad a la economía y es el medio de trabajo para el desarrollo de las comunidades. Adicionalmente, en la agricultura se promueve la seguridad alimentaria y se construyen relaciones sociales.

Dentro de esta labor se generan relaciones sociales, que logran identificar y reconocer el nivel de importancia que tienen los campesinos en la agricultura, ya que, sin sus conocimientos y saberes sobre la tierra, generación tras generación, no sería posible la producción de alimentos para la subsistencia. A partir de esto, se puede entender la agricultura desde la perspectiva de Perfetti y Cortés (2013), quienes la conciben no solo como una actividad primaria, sino como una red de interrelaciones, a partir de las interacciones que surgen entre lo rural a lo urbano, es decir, surge una relación de interdependencia entre los campesinos y las ciudades.

Como lo indican Ramos y Romero (1993), la agricultura es una fuente de recursos naturales y materias primas para una sociedad, ya que produce una actividad de consumo y relaciones sociales, formada entre agricultores y consumidores. En resumen, las distintas perspectivas

sobre la agricultura permiten definirla como una actividad económica que se genera del excedente y la estabilidad que se produce en una sociedad, además de las interdependencias mutuas que se tejen entre lo urbano y rural que permiten el acceso a la alimentación.

Diversificación productiva

La vocación minera en torno a la producción de esmeraldas evidencia limitaciones frente a las prácticas productivas del Occidente de Boyacá, por ello es pertinente analizar los cambios en torno a los procesos agrícolas, desde la comprensión de la diversificación productiva. Esta puede ser entendida como un fenómeno que surge en respuesta a distintas necesidades sociales. De acuerdo con Ellis (2000), la diversificación surge como adaptación continua a varias actividades para asegurar la sobrevivencia comunitaria. En síntesis, la diversificación de los modos de vida rural es el proceso mediante el cual los hogares construyen un portafolio cada vez más diverso de activos y actividades con el fin de sobrevivir y mejorar su nivel de vida (Ellis, 2000).

Por su parte, Niehof (2004) afirma que es el proceso por el cual los hogares construyen diversos modos de vida, utilizando diferentes recursos y bienes; se reconoce como una estrategia que desarrollan las comunidades rurales para reducir su vulnerabilidad y tener mayor seguridad a largo plazo. Asimismo, Sánchez (2012) menciona que existen dos asuntos a los que puede dar respuesta la diversificación productiva. En primer lugar, como fuente de ingresos: ante las oscilaciones económicas. En segundo lugar, como fuente de preservación ambiental: al no homogeneizar sus actividades y, por tanto, agotar o degradar un solo recurso.

Por otra parte, Barberis et al. (2017) mencionan que la diversificación de la producción es parte importante del proceso de desarrollo económico, dados sus efectos positivos sobre el crecimiento de largo plazo, la creación de empleo y la disminución de la desigualdad, particularmente en países menos desarrollados.

Del mismo modo, Perevochtchikova et al. (2018) plantean que la diversificación se da como una respuesta a la crisis del sector agropecuario, el alza de los precios agrícolas, la disminución del ingreso,

los riesgos por el cambio climático, los altos costos de transacción o como una estrategia de combate a la pobreza extrema. No obstante, la diversificación también se da como una oportunidad para acceder a nuevos mercados, ocupar nichos específicos o como una estrategia económica para complementar el ingreso. En ambos casos, el interés principal de los hogares es elevar el ingreso y su bienestar.

Se demuestra que las prácticas de homogeneización productiva como la extracción de esmeraldas y los cultivos ilícitos exponen situaciones estructurales de exclusión y resistencia política por parte de las comunidades. No obstante, los proyectos productivos permiten comprender los cambios en las trayectorias de vida de las personas y los territorios.

Territorialización, arraigo y gobernanza

Haesbaert (2013) propone que debe existir un sentido de pertenencia que logre que las personas tengan una apropiación y construcción de significados sobre el territorio. De esta manera, se genera una identidad comunitaria asociada a las relaciones de poder, las interacciones y los posibles cambios sociales. De acuerdo con López y Figueroa (2013), la territorialización se asocia con un proceso mediante el cual un sujeto, comunidad o grupo social se apropia de un lugar físico y se vincula a él, entendido como un espacio geográfico marcado por las experiencias, memorias y la producción de sentido en un momento determinado. Asimismo, como lo propone Castaño (2021), esta se soporta en la relación espacio-tiempo, lo cual hace que sea dinámica y se transforme según el contexto social, cultural y político.

También autores como Hernando y Blanco (2016) señalan que la territorialización se encuentra estrechamente relacionada con la gobernanza, en especial con la gobernanza territorial, pues cada vez es más necesario crear políticas convergentes donde se logre la articulación entre distintos actores locales. Tal como la definen Calderón y Jaime (2018), es el proceso mediante el cual los actores locales configuran y resignifican el espacio a través de prácticas sociales, políticas y económicas, dimensión clave de la gobernanza local. Esta implica no solo la apropiación del territorio, sino también la construcción de legitimidad y cohesión social desde las iniciativas ciudadanas y comunitarias, que

transforman el espacio en un escenario de acción colectiva y toma de decisiones. En este sentido, Arronte (2021) sostiene que la territorialización implica dominio, control y apropiación material y simbólica sobre el territorio, esta última denota mayor horizontalidad, sobre todo a partir de la construcción de diversas formas de acción colectiva, que pueden entrar en confrontación o disputa, por su reconocimiento.

Minería y coca: claves en el uso de la tierra

La guerra verde profundizó un agudo conflicto interno que tuvo a la esmeralda como principal protagonista en la disputa territorial, convirtiendo a la explotación minera en una práctica cotidiana de un complejo sistema de poderes familiares (clivajes o patronazgos) que dominaban estos territorios. A este se suman otras actividades ilícitas, como el cultivo de coca, el despojo de tierras o el tráfico de armas.

De acuerdo con Leiteritz y Riaño (2018), en la década de 1960 aumenta exponencialmente la siembra de esta planta, y su posterior transformación, siendo una fuente de enriquecimiento ilícito y convirtiéndose en referente de la economía de la región. No obstante, es en la década de 1980 que el negocio de la hoja de coca se consolida en el departamento al encontrar vínculos con estructuras internacionales de tráfico de drogas.

De este modo, el negocio ilícito de la coca y las esmeraldas se entrelazan, dado su amplio margen de rentabilidad y las posibilidades de continuar con su explotación, a la vez que se incrementa el conflicto por el control territorial de distintos grupos armados. Dicha situación desplaza a varios habitantes de la región ante la intimidación por desarrollar nuevas plantaciones de cultivo de coca y por mantener el control del negocio. A nivel cultural, esta práctica se legitimó a partir de la idea de que esta economía mejoraba las condiciones de vida y movilidad social por vías ilícitas (Gutiérrez y Barón, 2008; López et al., 2018).

La fiebre esmeraldera trajo consigo un aumento en la vulneración de los derechos humanos, pues los grupos que controlaban la región (clivajes) determinaban las condiciones de vida de la población (pobreza, explotación, desigualdad) y asumían el poder político y sus prácticas de coerción como válidas. La duración del conflicto estuvo

relacionada con la explotación de esmeraldas y otras economías ilícitas, a pesar de los acuerdos e intentos de legalización de las prácticas extractivas (Velasco et al., 2018).

De esta manera, algunos de estos elementos se convirtieron en parte de la agenda de los acuerdos de Paz de Occidente de 1990 y despertó el interés de la Diócesis de Chiquinquirá por lograr escenarios de transición voluntaria de los cultivos de coca a otro tipo de cultivos. Posteriormente se adelantó una intervención por parte de instituciones gubernamentales y organismos internacionales para garantizar dicha transición. Así, en 2004 los municipios de Pauna y San Pablo de Borbur fueron reconocidos como los primeros municipios libres de coca del país (López et al., 2018).

De acuerdo con Forero (2005), se habrían erradicado cientos de hectáreas de coca en el Occidente de Boyacá, pero seguían en funcionamiento grandes laboratorios valorados en miles de millones de pesos, que producían toneladas de cocaína para su exportación. A pesar de haber finalizado las negociaciones de paz en 1990, existen registros de violencia en la región varios años después por estas causas, de manera que los enfrentamientos entre familias relacionadas con la minería y el narcotráfico seguían dejando pérdidas humanas (Forero, 2005).

Actualmente, los esfuerzos multisectoriales han dado resultados positivos. Por su parte, los múltiples programas de desarrollo alternativo en la región promovieron la diversificación del uso del suelo de una manera sostenible, dando paso a la siembra de cacao, café, frutales y flores, por las posibilidades productivas que brinda la región. La confianza y determinación de las comunidades también permitió que el tránsito a la legalidad fuera posible. A este respecto, muchas familias campesinas fueron cobijadas por políticas que facilitaron la generación de ingresos de actividades lícitas. Como lo menciona Pineda (2018):

Otro de los pilares para que esta iniciativa tuviera una incidencia real es el proyecto educativo y la generación de capacidades de emprendimiento que ha propiciado un cambio en los imaginarios de la población, y la apropiación de este cultivo generando una nueva territorialidad. Precisamente aquí es donde se fractura la historia de violencia del occidente de Boyacá y se transforma el territorio. (p. 60)

Todo esto también permitió pensar la recuperación de espacios ambientales mediante la rehabilitación y reforestación de suelos que habían sido utilizados para el cultivo extensivo de coca, siendo un antecedente para explorar y potenciar iniciativas del turismo ecológico, que lograron transformar el paisaje y el tejido social mediante iniciativas asociativas a través de organizaciones y cooperativas. Las dinámicas productivas en Occidente dejan de estar asociadas con la explotación ilegal de coca y transitan hacia prácticas de sostenibilidad ambiental por medio del cacao.

La producción de cacao de cara a la transición de cultivos ilícitos

Los cultivos ilícitos marcaron parte de la historia de violencia en la región del Occidente de Boyacá. Como lo mencionan López et al. (2021), los pequeños agricultores de esta provincia fueron azotados por una despiadada violencia, originada en los conflictos asociados con los cultivos ilícitos y la explotación de esmeraldas, que dejaron profundas huellas en su tejido social y económico. Sin embargo, otras actividades económicas han venido reconfigurando las prácticas agrícolas de las familias campesinas, entre ellas, la producción y transformación del cacao, siendo el protagonista del proceso de erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos. Como lo menciona Juan Urbano:

Si nos organizábamos el Estado, nos daba plata, a finales de 2006 hubo fumigaciones y muchos atropellos, hubo protestas y apareció el Estado. En el 2007 Uribe llegó a Otanche y asignó unos recursos para un programa que se llamaba Familias Guardabosques para los municipios de Pauna, San Pablo de Borbur y Otanche que éramos los más afectados por los conflictos cocaleros y en menos de tres años, de 2007 a 2010, logramos erradicar más de 7000 hectáreas de coca. (Comunicación personal, Juan Urbano, 2022)

En este contexto surgió el *Programa de Familias Guardabosques* enfocado en comunidades rurales afectadas por economías ilícitas. Este programa fue liderado por las Naciones Unidas a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en articulación

con el Gobierno Nacional, y tuvo como objetivo la protección de la biodiversidad, involucrando a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en la lucha contra los cultivos ilícitos y la conservación ambiental. En este marco, el programa garantizaba acompañamiento técnico (social, productivo y ambiental) y capital financiero durante un periodo de tres años, con el fin de prevenir el establecimiento de cultivos ilícitos en sus territorios, favoreciendo la reforestación y la conservación de ecosistemas estratégicos, así como el fomento de proyectos productivos orientados al uso legal, alternativo y sostenible de la tierra y los recursos naturales (UNODC, 2007).

A partir del desarrollo de este programa se logra que diferentes iniciativas del Occidente de Boyacá se vinculen, facilitando la creación de asociaciones locales de cacao y su posterior vinculación a la Red Nacional de Cacaoteros. Además la organización Kakaoteros de la Red Puentes para la Reconciliación del departamento de Boyacá se ha consolidado como referente regional. La organización de los campesinos a través del cacao ha sido determinante para el desarrollo de la región; municipios como Pauna se muestran como exponentes de esta vocación cacaotera mediante prácticas de cultivo pero también de transformación. En San Pablo de Borbur, existen dos centros de acopio agroindustriales que también se dedican a la transformación de productos como chocolates, vinagres, vinos y artesanías, diversificando su presentación. En este proceso, las economías familiares representan una fuente activa de esta cadena de producción.

El fortalecimiento de los vínculos solidarios entre los cultivadores de cacao los ha convertido en sujetos del desarrollo local al conformar diferentes iniciativas asociativas que han cimentado las formas de organización campesinas.

La asociatividad, una necesidad para la producción agrícola

A partir de las iniciativas de desmonte de cultivos ilegales, pero en especial de cese del conflicto vinculado a la explotación de esmeraldas, un número importante de personas dedicadas a la minería pasó por un proceso voluntario de reconversión productiva. No obstante,

el arraigo a la profesión y la tradición minera han sido muy fuertes debido al significado cultural que esto conlleva: identitariamente, coexiste el hecho de ser (o haber sido) parte activa en la explotación de esmeraldas, mientras también se reconoce su rol como campesinos trabajadores de la tierra. Como lo señala Gómez (2013), la identidad minera en el Occidente de Boyacá no desaparece con la reconversión productiva, sino que se transforma en diálogo con nuevas prácticas agrícolas, como el cultivo de cacao, que permiten resignificar el territorio desde la memoria y la sostenibilidad. El pasado vinculado a la minería no representa un antecedente negativo, pues esta transición económica es entendida por los habitantes como una adaptación más que como un cambio en la identidad. La gUAQUERÍA no se olvida, pero sí coexiste con otras actividades.

Las asociaciones juegan un papel fundamental, pues albergan toda una cadena de producción, distribución y comercialización, a través de diferentes plataformas como la Compañía Nacional de Chocolates, Ferecracio o Furatena Cacao. Como lo menciona un habitante de San Pablo de Borbur, “la asociación lo que hace es regular los precios de mercado, porque la utilidad es mínima para la organización. Pero ella es quien pone el precio, digamos ideal” (comunicación personal, habitante de San Pablo de Borbur, julio de 2022). Por lo tanto, la asociación juega un papel fundamental en regular el mercado en la zona, ya que los intermediarios tienden a dar precios más bajos. En este sentido, López Sánchez et al. (2021) destacan que las iniciativas asociativas en el sector cacaotero han sido clave para cimentar el capital social campesino, fortalecer los lazos solidarios y posicionar a los cultivadores como sujetos activos del desarrollo local, destacando la formación profesional de los líderes, quienes aportan desde sus conocimientos y habilidades.

Estos procesos asociativos se desarrollan en un contexto demográfico particular. La mayoría de las personas vinculadas a la producción agropecuaria en el Occidente de Boyacá son adultos con una edad promedio de 40 años, situación que evidencia una dificultad en el relevo generacional. Diversos actores locales señalan que la migración de jóvenes hacia las ciudades principales en busca de oportunidades educativas y laborales ha limitado la incorporación de nuevas

generaciones a las actividades rurales. En este contexto, el envejecimiento demográfico es una tendencia estructural que afecta a todo el departamento. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE (2019), el índice de envejecimiento en Boyacá pasó de 36,7 en 2005 a 71,5 en 2018, hecho que refleja un cambio significativo en la composición poblacional. En este escenario, las asociaciones rurales no solo cumplen funciones económicas, sino que también se convierten en espacios de resistencia frente al despoblamiento, fortaleciendo el tejido comunitario y promoviendo la permanencia en el territorio.

Entre los líderes que han impulsado procesos de asociatividad en el Occidente de Boyacá se encuentra Juan Urbano, figura clave en la transformación productiva del municipio de Pauna, históricamente marcado por la siembra de cultivos ilícitos. Según relata, entre 1997 y 1998 se introdujo el cultivo de coca en la región, el cual persistió hasta su erradicación definitiva en 2010, en el marco del Plan Colombia. A partir de entonces, instituciones como el SENA promovieron la creación de asociaciones de productores de cacao, dando origen a iniciativas como Aprocampa. Como lo señalan Hernández y Monroy (2017), el liderazgo local fue determinante para que las comunidades se apropiaran del proceso de sustitución, generando alternativas productivas sostenibles y fortaleciendo el tejido social en torno al cultivo de cacao.

En este proceso, el Estado otorgó incentivos económicos de un millón ochocientos mil pesos (\$1.800.000) a 423 familias para fomentar la transición hacia cultivos legales, mientras que la cooperación internacional, a través de Usaid, Canadá y Suiza, contribuyó a consolidar cerca de 1.000 hectáreas destinadas al cacao. En 2014, la asociación Aprocampa obtuvo el reconocimiento al mejor cacao de Colombia, lo que impulsó la creación de nuevos emprendimientos, entre ellos una tienda de chocolates y el proyecto Distrito Chocolate. Sin embargo, como reconoce el propio Juan, “montamos una tienda de chocolates y una iniciativa llamada Distrito Chocolate, pero nuestros inversionistas querían verla grande muy pronto y cometimos muchos errores porque no teníamos el *marketing* necesario, cometimos muchos errores de alianzas” (comunicación personal, Juan Urbano, 2022). Esta experiencia evidencia tanto el potencial como los desafíos que enfrentan las iniciativas comunitarias en su tránsito hacia mercados más amplios

y sostenibles. Como lo plantea Durán (2022), la cooperación internacional ha sido clave en la sustitución de cultivos ilícitos, al ofrecer alternativas productivas con enfoque de responsabilidad social, permitiendo a las comunidades campesinas reingresar a la economía legal con dignidad y sostenibilidad.

Tras el cierre de las tiendas físicas en centros comerciales de Bogotá, la familia Urbano decidió alquilar una casa en Quinta Camacho para ofrecer una experiencia integral alrededor del cacao producido en Pauna. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, el espacio tuvo que cerrar en abril de 2022. Fue precisamente en ese contexto que nació Kakaoteros, un emprendimiento familiar liderado por el hijo de Juan Urbano. “La pandemia sirvió para impulsar a Kakaoteros, una marca creada por mi hijo; y lo estamos haciendo desde un nivel más familiar por ahora” (comunicación personal, Juan Urbano, 2022).

Juana Urbano, hija de Juan y parte activa del proyecto, destaca la importancia de trabajar directamente con las y los campesinos para garantizar un producto de calidad. En sus palabras: “Yo quiero hablar con el campesino que produjo este chocolate, decirle que su producto estaba delicioso, y eso los motiva a llevar cultivos más organizados [...]; también tratamos de ser muy equitativos” (comunicación personal, Juana Urbano, 2022). Juana enfatiza que pagar precios justos fortalece la cadena de valor y dignifica el trabajo rural. “Nuestra felicidad es ver a nuestros campesinos felices con sus cultivos bonitos y abriéndoles oportunidades, porque sabemos que detrás de ese campesino hay unos niños pequeños que están viviendo de eso” (comunicación personal, Juana Urbano, 2022).

La experiencia de la familia Urbano con el proyecto Kakaoteros refleja cómo los procesos de reconversión productiva pueden fortalecerse cuando se articulan con estrategias de desarrollo territorial. La transición del cultivo de coca al cacao en Pauna no solo implicó un cambio económico, sino también una transformación cultural y comunitaria, impulsada por el liderazgo local, el acompañamiento institucional y el compromiso con la calidad y la equidad. En este sentido, los planes de desarrollo territorial deben reconocer y potenciar estas iniciativas, integrando el enfoque de desarrollo rural con políticas que promuevan la asociatividad, el relevo generacional y la inclusión de los

productores en la cadena de valor. Como lo demuestra Kakaoteros, el desarrollo rural no puede limitarse a la productividad, sino que debe considerar el bienestar de las familias campesinas, su arraigo al territorio y su capacidad de generar alternativas sostenibles desde lo local.

Planes de desarrollo y desarrollo territorial

El desarrollo territorial es un componente esencial en la transformación de los procesos productivos del Occidente de Boyacá, una región cuyas principales fuentes de riqueza han sido históricamente la minería y la agricultura. Sin embargo, como lo señalan habitantes del municipio de San Pablo de Borbur, el Estado colombiano mantiene una deuda histórica con estos territorios, marcada por el abandono institucional, el despojo y la explotación. En palabras de un habitante:

Los alcaldes deberían de unirse todos y hablar con los gobernadores y pedirle al Gobierno nacional que esa deuda que tienen con el Occidente se la resarzan pidiendo un SENA minero agroindustrial. Pero un SENA grande, que las empresas pongan plata, porque tienen plata para poner, y que se oferten las carreras de lo que necesitan las empresas. (Comunicación personal, habitante de San Pablo de Borbur, julio de 2022)

En este contexto, los Planes de Desarrollo Municipales juegan un papel estratégico para mejorar las condiciones de vida de la población, en especial, durante el periodo 2020-2023, en el que se ubica esta investigación. Estos planes deben orientarse no solo a fortalecer las capacidades productivas locales, sino también a cerrar las brechas históricas de desigualdad y exclusión, promoviendo una articulación efectiva entre actores institucionales, comunitarios y empresariales. La planificación territorial, cuando se construye desde las necesidades reales de la población, puede convertirse en una herramienta poderosa para la justicia social y el desarrollo sostenible. De este modo, es importante mostrar cuáles son las apuestas de los municipios analizados en este sentido (tabla 1).

Tabla 1. Propuestas agrícolas en los planes de desarrollo municipales 2020-2023

Planes de desarrollo municipales 2020-2023		
Municipio	Documento	Propuestas
Quípama	“Por la unidad, el respeto y desarrollo de Quípama” (2020-2023).	Es necesario que la agricultura se potencialice, puesto que los suelos con que cuenta Quípama son variados, gracias a los distintos tipos de clima que se dan en el municipio. Además, se fortalezcan las asociaciones de agricultores y la inversión pública del Gobierno en maquinaria para mejorar los procesos.
Muzo	“Muzo Un pueblo de todos y para todos” (2020-2023).	Es importante fortalecer y generar infraestructura en vías que favorezca a los campesinos en el acceso a otros municipios de la región para comercializar sus productos. Construcción de placa-huellas. Asimismo, la articulación con el SENA para mejorar las prácticas de desarrollo rural.
Pauna	“Pauna próspera, turística, incluyente y productiva” (2020-2023).	El sector agrícola y rural busca fortalecer la transformación productiva y generación de valor agregado, la competitividad, la innovación empresarial y el emprendimiento, desde el punto de vista de la competitividad territorial, orientando la construcción de sistemas productivos territoriales que propicien el desarrollo económico local.
San Pablo de Borbur	“Sembrando futuro por San Pablo de Borbur” (2020-2023)	Presenta una estrategia específica para el desarrollo económico y la integración regional del municipio en línea con los ODS. Se pretende incrementar la productividad y la competitividad localmente diversificando la producción y modernizando el proceso productivo. Asimismo, se espera generar innovaciones en los productos para su mayor atractivo y que pequeños productores se vinculen en grandes cadenas de transformación. Busca fortalecer el sector agropecuario, minero, turístico, ambiental, ciencia y tecnología para disminuir la pobreza, la dependencia económica y la marginalidad.

Fuente: elaboración propia a partir de los Planes de Desarrollo Municipales 2020-2023.

Los Planes de Desarrollo Municipales del periodo 2020-2023 en los municipios del Occidente de Boyacá analizados revelan una convergencia estratégica en torno al fortalecimiento del sector agropecuario como eje de desarrollo territorial. Municipios como Quípama, Muzo, Pauna y San Pablo de Borbur coinciden en la necesidad de potenciar la agricultura mediante la inversión en infraestructura, maquinaria, innovación y articulación institucional, especialmente con entidades como el SENA. Se destaca también el impulso a la asociatividad campesina, la transformación productiva y la generación de valor agregado, elementos que buscan mejorar la competitividad local y facilitar el acceso a mercados regionales. Estas apuestas reflejan una visión compartida de desarrollo rural que reconoce las capacidades del territorio y promueve la inclusión de pequeños productores en cadenas de valor más amplias.

Muestra cómo los municipios del Occidente de Boyacá podrían fortalecer líneas estratégicas orientadas a la sostenibilidad ambiental, la ciencia y tecnología aplicada al agro, y la diversificación económica con enfoque territorial. La articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como lo propone San Pablo de Borbur, puede servir de marco para integrar sectores como el turismo, la minería responsable y la educación técnica especializada. Asimismo, es clave pensar en estrategias de relevo generacional, conectividad digital rural y gobernanza participativa, que permitan consolidar un modelo de desarrollo territorial inclusivo.

Potencialidades productivas del territorio

Muzo desde el desarrollo resiliente

Históricamente, Muzo ha sido reconocido como la capital mundial de las esmeraldas, con una economía centrada en la guaquería y la explotación minera por parte de empresas multinacionales. Sin embargo, durante el periodo de alcaldía de Neicer Susa Sotelo (2020-2023), se impulsaron diversas estrategias para diversificar la economía local y fortalecer el desarrollo rural. Una de las principales apuestas fue la mejora de la infraestructura vial mediante el proyecto de placa huella, que buscaba conectar veredas como Egido, Niauza y Chizo con San Pablo de Borbur, facilitando el transporte de productos agrícolas y el

acceso a mercados regionales. Además, se promovió la formación técnica a través del SENA, con énfasis en el fortalecimiento de unidades productivas avícolas, lo que permitió la entrega de 480 gallinas ponedoras a campesinas y campesinos capacitados. En el ámbito urbano, se desarrolló el Parque Municipal, un proyecto que integró elementos simbólicos de la guaquería en la remodelación de calles y espacios públicos, reforzando la identidad cultural del municipio.

Paralelamente, la Fundación Muzo ha desempeñado un papel clave en el desarrollo social y económico del territorio, articulando acciones en seguridad alimentaria, educación, liderazgo y sostenibilidad. Sus iniciativas incluyen comedores comunitarios, granjas familiares y escolares con galpones y lombricultivos, así como programas de formación para la primera infancia y becas educativas para hijos de trabajadores de la mina, incluido el apoyo para estudios superiores y oportunidades internacionales. En el ámbito productivo, la fundación ha promovido el cultivo de cacao mediante procesos de investigación e intercambio de saberes con productores de otras regiones, y ha impulsado la joyería con esmeraldas desde una perspectiva socialmente sostenible. Además, se ha articulado con las Juntas de Acción Comunal y con la Fundación Boyapaz para fortalecer el liderazgo juvenil, reconociendo a la comunidad como protagonista de su propio desarrollo territorial. En conjunto, estas acciones dan cuenta de una transición progresiva hacia formas más integrales, inclusivas y sostenibles de desarrollo en Muzo y su región.

En articulación con lo anterior, las acciones impulsadas desde la administración municipal y la Fundación Muzo evidencian un proceso de transición hacia un modelo de desarrollo más integral, en el que convergen la infraestructura, la formación técnica, la identidad cultural y la sostenibilidad social y ambiental. En este contexto, Muzo no solo conserva su legado como capital mundial de las esmeraldas, sino que también proyecta nuevas potencialidades en sectores como la agroindustria del cacao, la joyería con enfoque social, el turismo cultural y la educación rural. Estas apuestas, en diálogo con el fortalecimiento del liderazgo comunitario y juvenil, posicionan al municipio como un referente regional en la construcción de un desarrollo territorial inclusivo, resiliente y con visión de futuro.

Pauna con oportunidades para todos y todas

Para comprender las iniciativas locales impulsadas por el gobierno municipal de Pauna, se realizaron entrevistas a actores clave del territorio. En primer lugar, el alcalde Henry Iván Matallana Torres explicó que el desarrollo económico del municipio se estructura en dos grandes frentes: el turístico y el agropecuario. Aunque la minería ha sido históricamente una actividad relevante en la región, el mandatario señaló que en Pauna no existe un interés masivo por la búsqueda de esmeraldas, lo cual considera positivo, ya que evita que se imponga una cultura centrada exclusivamente en la acumulación de riqueza. En cambio, se ha promovido una visión más sostenible y diversificada del desarrollo.

Matallana destacó las ventajas agroecológicas del municipio, que cuenta con todos los pisos térmicos, desde los 3200 hasta los 350 msnm. Esta diversidad permite una amplia gama de cultivos: en las zonas altas se produce leche, papa y mora; en las zonas medias y bajas se cultivan lulo, cítricos, guanábana, aguacate, cacao y café. Como lo afirma:

Somos de los municipios más productores del occidente, además tenemos una ventaja y es que contamos con todos los pisos térmicos, porque el municipio está desde los 3.200 msnm hasta los 350 msnm; eso permite que nosotros tengamos producción de clima frío (lechería, papa, mora) y en la parte baja pues ya tenemos lo que tiene que ver con lulo, cítricos, guanábana, aguacate, somos fuertes en cacao, somos fuertes en café. (Comunicación personal, Henry Matallana, 2022)

Esta riqueza agrícola ha sido la base para fortalecer una cultura productiva que impulse el retorno al campo, especialmente tras las dificultades generadas por la pandemia. Según el alcalde, se ha promovido la tecnificación de los procesos productivos, lo que no solo mejora la eficiencia, sino también la calidad de vida de las familias rurales. En este contexto, muchos jóvenes han convertido sus fincas en pequeñas empresas agrícolas. Como lo menciona Henry Matallana: “Algunos jóvenes están inclinados al tema de la ganadería, al tema del aguacate, otros con los cultivos de guanábana, se les entregan insumos para que hagan sus cultivos” (comunicación personal, Henry Matallana, 2022).

La visión del alcalde se articula con los objetivos del Plan de Desarrollo “Pauna próspera, turística, incluyente y productiva”, que propone fortalecer el sector agropecuario, fomentar el emprendimiento juvenil y consolidar el turismo rural como eje estratégico. Esta articulación se evidencia también en la experiencia de Angie Guzmán, joven de 27 años y presidenta del Consejo Municipal de Juventud, quien ha liderado iniciativas que combinan agricultura y turismo. Desde su infancia, ha estado vinculada al trabajo en el trapiche artesanal de su familia, lo que le permitió valorar el potencial productivo del territorio. Su formación en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural de Pauna le brindó herramientas para emprender proyectos como la cría de gallinas ponedoras, pollos campesinos y la creación de un estanque de peces que atrajo visitantes, generando oportunidades de negocio familiar.

Angie menciona cómo su familia transformó su finca en un espacio turístico llamado Las Delicias, donde se realizan eventos sociales y se ofrece atención a visitantes. Esta apuesta por “cultivar arriba del suelo y no buscar abajo del suelo” refleja una decisión consciente de alejarse de la minería y apostar por el desarrollo sostenible. Además, destaca la riqueza agrícola del municipio, que abarca desde cultivos de papa, arveja y mora en las zonas altas, hasta café, plátano, cítricos, caña, cacao, maní y maíz en las zonas medias y bajas. Esta diversidad convierte a Pauna en un territorio con gran potencial para el desarrollo rural integral. Tal como lo relata Angie:

Mi papá y mi hermano hicieron un estanque y metimos pescados, a la gente le gustaba venir a mirar el estanque, mucha gente venía y preguntaba que si podía pescar o que si podíamos cocinarles el pescado y ahí mi mamá vio una oportunidad. Luego a mí me correspondió el proyecto de gallinas ponedoras y decidimos hacerlo acá en la finca, empezamos con cien gallinas ponedoras y vendíamos la cosecha. El colegio también nos impulsó a arreglar las fincas y que tuviéramos esos proyectos allí; mi finca entonces se perfilaba para ser una finca turística. (Comunicación personal, Angie Guzmán, 2022)

Finalmente, Angie subraya la importancia del acompañamiento institucional para consolidar estos procesos. Señala que el gobierno local debe reconocer el potencial económico del campo y organizar los renglones productivos del municipio. Propone la creación de laboratorios de formación agrícola y la asignación de recursos económicos que permitan a los campesinos iniciar sus proyectos. En sus palabras, “si las administraciones se apropian de los proyectos, la comunidad camina hacia esos proyectos”. Tal como ella lo propone: “Sería chévere que las entidades gubernamentales empezaran a ver ese potencial y a organizar también esos renglones económicos en el municipio, ya que la agricultura y la ganadería son esas fuentes de generación de empleo en el campo” (comunicación personal, Angie Guzmán, 2022).

Esto coincide plenamente con los lineamientos del plan de desarrollo municipal, que busca una Pauna más incluyente, productiva y con oportunidades para todos.

San Pablo de Borbur, promoviendo desarrollo rural con enfoque territorial

Para el análisis del desarrollo rural en San Pablo de Borbur, se consideraron diversos documentos técnicos que evidencian la vocación productiva del territorio, así como las potencialidades agrícolas que han sido reconocidas por sus habitantes, especialmente por los jóvenes. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2013), el municipio presenta cinco clases de uso del suelo: agrícola, ganadero, agroforestal, forestal y de conservación. Esta clasificación refleja una diversidad de posibilidades productivas que, bien gestionadas, pueden convertirse en pilares del desarrollo local.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2008) complementa esta visión al señalar que el 87 % del territorio de San Pablo de Borbur tiene vocación para la producción, mientras que un 9 % está destinado a la protección forestal. Además, un 3 % se orienta a cultivos permanentes semi intensivos y un 1 % a sistemas agro-silvícolas con cultivos transitorios. Estos datos evidencian el potencial agrícola del municipio, sustentado en sus características topográficas y de suelos fértiles. En este contexto, los campesinos no solo cosechan productos como maíz, frijol, chile o café, sino también bienes intangibles como

aire limpio, agua pura y diversidad biológica y cultural, que enriquecen la vida comunitaria.

Sin embargo, a pesar de estos aportes, esta riqueza contrasta con la realidad socioeconómica de las zonas rurales. Tal como lo advierte la FAO (2012), siete de cada diez personas en situación de pobreza viven en áreas rurales, lo que pone en evidencia la falta de retribución justa a las comunidades campesinas por los beneficios que generan. En este contexto, en San Pablo de Borbur, la producción agrícola se orienta principalmente al comercio interno, lo que limita su alcance económico, pero también fortalece la soberanía alimentaria y el tejido social local.

El Plan de Desarrollo “Sembrando Futuro por San Pablo de Borbur 2020-2023” reconoce estas potencialidades y propone estrategias para fortalecer el sector agropecuario, fomentar el emprendimiento rural y mejorar las condiciones de vida de la población. En este marco, se destaca la producción de caña, aguacate, café y cacao, tanto por la extensión de hectáreas cultivadas como por el volumen de producción en toneladas. Estas líneas productivas han sido impulsadas por jóvenes del municipio, quienes han identificado en la agricultura una oportunidad para el desarrollo económico y la innovación social.

En el marco de su implementación, los jóvenes de San Pablo de Borbur propusieron iniciativas que combinan el conocimiento técnico con el arraigo territorial. Se han promovido proyectos de cultivo sostenible, transformación de productos agrícolas y turismo rural, que permiten diversificar la economía y generar empleo. Estas propuestas juveniles se alinean con los objetivos del plan de desarrollo, que busca sembrar futuro a través del fortalecimiento de las capacidades locales, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y la inclusión de las nuevas generaciones en la construcción de un modelo de desarrollo territorial justo y sostenible. En este contexto, San Pablo de Borbur presenta una amplia producción agrícola orientada al consumo interno y la comercialización. Estas mismas líneas productivas —caña, aguacate, café y cacao— se destacan por la extensión de hectáreas cultivadas y su correspondiente producción en toneladas. Tal como se muestra en la tabla 2.

**Tabla 2. Principales cultivos en San Pablo de Borbur
por área de extensión y cantidad de producción**

Cultivo	Producción en toneladas	Área por hectáreas	Rendimiento (T/HA)
Plátano	5400	60	90
Caña	990	165	6
Yuca	477	53	9
Guanábana	322	29	8
Cítricos	220	44	5
Heliconia	180	3	6
Lulo	165	15	11
Aguacate	148	104	2
Café	144	288	0,5
Cacao	100	250	0,4

Fuente: elaboración propia a partir del Plan de Desarrollo Municipal San Pablo de Borbur 2020-2023.

La producción agrícola en San Pablo de Borbur refleja una notable diversidad de cultivos, con rendimientos que evidencian tanto el aprovechamiento del suelo como las dinámicas de comercialización interna. El cultivo de plátano destaca como el más eficiente, con un rendimiento de 90 toneladas por hectárea, lo que lo convierte en el principal producto en términos de productividad. En contraste, cultivos como el café y el cacao, aunque ocupan grandes extensiones (288 y 250 hectáreas respectivamente), presentan rendimientos bajos (0,5 y 0,4 T/HA), lo que sugiere una orientación más tradicional o de subsistencia, posiblemente vinculada a prácticas agroecológicas o limitaciones en la tecnificación. Por otro lado, productos como el lulo (11 T/HA) y la guanábana (8 T/HA) muestran un buen desempeño en áreas reducidas, lo que podría representar oportunidades para el emprendimiento rural y la diversificación económica. Estos datos permiten identificar líneas estratégicas para el fortalecimiento de la producción local, en consonancia con las propuestas del Plan de Desarrollo “Sembrando Futuro por San Pablo de Borbur 2020-2023”, que promueve el aprovechamiento

sostenible del territorio y el impulso a cultivos con alto valor agregado y potencial comercial.

Los procesos de asociatividad en San Pablo de Borbur evidencian una estructura organizativa sólida que articula a diversos sectores productivos del municipio. Con un total de 463 personas asociadas, distribuidas en siete asociaciones, se observa una participación significativa de la comunidad en iniciativas colectivas orientadas al fortalecimiento económico local. La Asociación Campesina de Cultivadores Agropecuarios “Asocacabo” y la Asociación de Cafeteros “Ascaroma” agrupan el mayor número de socios (128 y 103 respectivamente), lo que refleja el peso del sector agropecuario y caficultor en la dinámica rural del municipio. También destacan asociaciones como “Agufrusan” (aguacateros y fruticultores) y “Asoganbor” (ganaderos), que consolidan esfuerzos en torno a cultivos estratégicos y actividades ganaderas. Aunque algunas organizaciones como “Asocabor” (cañicultores) y la de productores piscícolas cuentan con menor número de socios, su existencia demuestra la diversificación productiva y el interés por fortalecer cadenas de valor específicas. Estos procesos asociativos son fundamentales para la implementación de las estrategias del Plan de Desarrollo “Sembrando Futuro por San Pablo de Borbur 2020-2023”, ya que permiten canalizar recursos, generar economías de escala y fomentar la participación comunitaria en proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial (tabla 3).

Tabla 3. Cantidad de socios por organizaciones presentes en el municipio de San Pablo de Borbur

Asociación	N.º de socios
Asociación de cafeteros Aroma y Sabor Borbureño “Ascaroma”	103
Asociación Campesina de Cultivadores Agropecuarios de San Pablo de Borbur “Asocacabo”	128
Asociación de Aguacateros y Fruticultores de San Pablo de Borbur “Agufrusan”	70
Asociación de Ganaderos de San Pablo de Borbur “Asoganbor”	86
Asociación de Cañicultores San Pablo de Borbur “Asocabor”	23
Asociación Frutícola de San Pedro “Asofrusan”	32

Asociación	N.º de socios
Asociación de Productores Piscícolas de Paz de San Pablo de Borbur	21
Total socios de organizaciones	463

Fuente: elaboración propia a partir del Plan de Desarrollo Municipal San Pablo de Borbur 2020-2023.

Quípama justa, sostenible y participativa

El municipio de Quípama propone como objetivo en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 el desarrollo rural y el turismo como actividades importantes, reconociendo a su vez la minería como una actividad central para el municipio, aunque cabe señalar que existe un monopolio de este mercado por parte de las multinacionales.

Con la agricultura se reconoce que Quípama tiene una diversidad de suelos que permite cultivar caña, café, maíz, cacao, frutas, entre otros. Un campo importante es la producción de panela a través de trapiches; sin embargo, se considera necesaria una transformación en la producción y procesamiento. Tal como se propone en el plan de gobierno del alcalde Carlos Alberto Ávila Cepeda, “Colombia es el segundo productor mundial con el 1,2 %; el problema de los paneleros es que producen panela en empresas familiares con trapiches artesanales, con costos de producción muy altos” (2020, p. 89). Para la producción y transformación de la panela es necesario que se generen formas de gobernanza que promuevan la creación de asociaciones y mayor inversión pública que potencie un desarrollo rural territorial acorde con las necesidades e intereses de la población.

Después de ello, otro factor importante en el plan de gobierno es brindar ayuda a los pequeños productores con créditos que les permita invertir insumos, maquinaria y tecnología que mejore la producción de sus cultivos (figura 1).

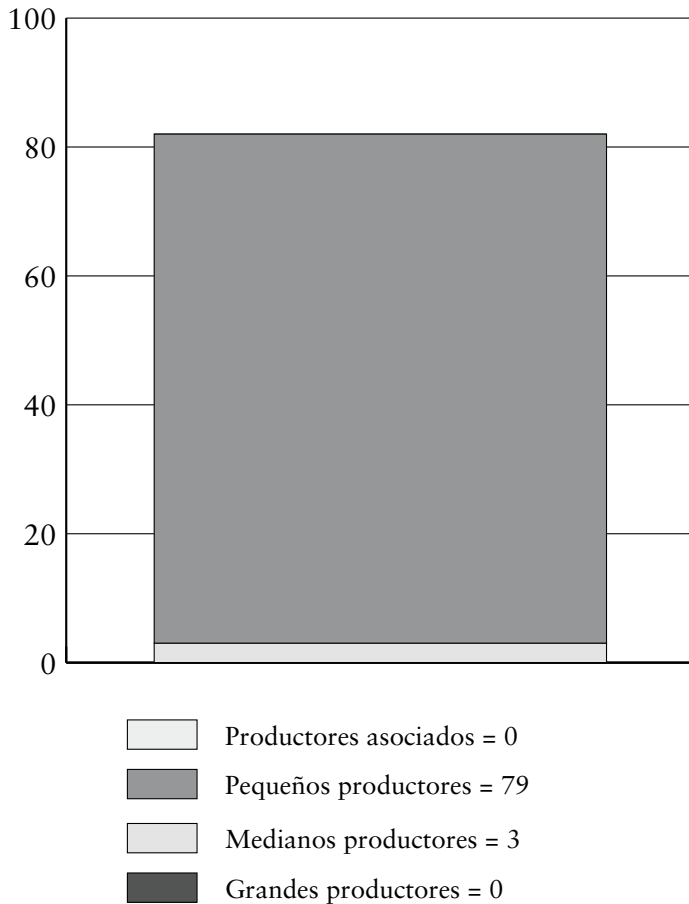


Figura 1. Número de créditos otorgados a productores en la entidad territorial. Finagro 2019.
Unidad de medida productores.

Fuente: Plan de Desarrollo de Quípama 2020-2023.

La figura 1 del Plan de Desarrollo Municipal de Quípama 2020-2023 evidencia que la mayoría de los créditos otorgados han sido destinados a pequeños y medianos productores. Este dato permite deducir que la escala de producción en el municipio se caracteriza por estructuras familiares y comunitarias, con limitada capacidad de inversión y tecnificación. Esta realidad productiva refleja un modelo rural basado

en la economía campesina, donde el acceso al crédito se convierte en un mecanismo fundamental para dinamizar la producción agrícola y fortalecer la soberanía alimentaria.

La existencia del Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) en Quípama representa un avance institucional significativo, al constituirse como una instancia de concertación entre autoridades locales, comunidades rurales y entidades públicas. Este espacio favorece la implementación de planes, programas y proyectos orientados al desarrollo de los territorios rurales, permitiendo que las decisiones sobre inversión y apoyo técnico respondan a las necesidades reales de los productores.

En este contexto, se observa una transformación en la lógica productiva del municipio. La minería, históricamente dominante y marcada por la extracción extensiva, ha entrado en una fase de agotamiento, sin el auge que tuvo durante la llamada “guerra verde”. Esta situación ha impulsado a la población a buscar alternativas económicas, especialmente en la agricultura, con una creciente especialización en la producción de cacao. Tal como lo expresa Camilo, uno de los habitantes del municipio:

Ya que se busca para el consumo, puesto que en un momento atrás en Quípama se importaban alimentos, como que antes no se sembraba acá [...], ahora sí se reconoce la importancia de la agricultura, que sin el suelo no hay nada. (Comunicación personal, Camilo, 2022)

Este cambio de paradigma se articula con la participación de Quípama en la estrategia departamental “Boyacá nos alimenta”, que promueve la entrega de semillas e insumos a pequeños productores campesinos. Esta iniciativa no solo fortalece la producción local, sino que también incorpora un enfoque social, al vincular a mujeres, jóvenes rurales y poblaciones con especial protección constitucional (indígenas, víctimas del conflicto y personas con discapacidad), ampliando así el impacto territorial de la política pública.

Finalmente, el papel de la Fundación Muzo en el municipio ha sido clave en la formación técnica y profesional de jóvenes, mediante programas de becas y vinculación laboral. Esta intervención ha contribuido al empoderamiento juvenil y a la generación de nuevos

conocimientos, transformando proyectos de vida y fortaleciendo el tejido social de Quípama.

En suma, la figura 1 no solo refleja una tendencia en el acceso al crédito, sino que permite interpretar un proceso más amplio de reconfiguración productiva, institucional y social en el municipio. La articulación entre crédito rural, gobernanza territorial, formación técnica y soberanía alimentaria constituye una base sólida para avanzar hacia un modelo de desarrollo rural más justo, sostenible y participativo.

Reflexiones finales

La historia productiva del Occidente de Boyacá revela una profunda relación entre las prácticas ancestrales y las dinámicas contemporáneas del territorio. Lejos de ser actividades en conflicto, la agricultura y la minería han coexistido como expresiones de una territorialización simbólica y cultural donde el trabajo de la tierra y la extracción de minerales han contribuido a la construcción de identidad, arraigo y permanencia de las comunidades.

La recuperación de saberes tradicionales, como la producción y transformación del cacao, ha permitido que municipios como Quípama, Muzo, Pauna y San Pablo de Borbur se posicionen como referentes nacionales e internacionales, demostrando que el desarrollo no necesariamente implica una ruptura con el pasado, sino más bien una resignificación de las prácticas locales en clave de sostenibilidad y autonomía.

En este contexto, el territorio se concibe no solo como un espacio físico, sino como un lugar de espiritualidad, movilidad y disfrute, donde el conflicto ha sido resignificado como oportunidad de transformación. La emergencia de la agricultura y el turismo comunitario como nuevas vocaciones identitarias refuerza esta idea, al abrir caminos para la diversificación económica, la inclusión social y la construcción de paz territorial.

La articulación de estos procesos productivos con los planes de desarrollo municipal y departamental ha sido clave para fortalecer la gobernanza local, mejorar la empleabilidad juvenil y generar ingresos sostenibles. El potencial ambiental del Occidente de Boyacá, con su riqueza climática y variedad de pisos térmicos, no solo lo convierte en

un centro de abastecimiento de alimentos, sino también en un destino turístico con gran proyección.

Así, la complementariedad entre minería y agricultura no debe entenderse como una contradicción, sino como una oportunidad para construir modelos de desarrollo territorial que reconozcan la diversidad, promuevan la equidad y fortalezcan la identidad cultural de los pueblos boyacenses.

Referencias

- Alcaldía Municipal de Muzo. (2020). *Plan de desarrollo municipal. Muzo un pueblo de todos y para todos 2020-2023*.
- Alcaldía Municipal de Pauna. (2020). *Plan de desarrollo municipal. Pauna próspera, turística, incluyente y productiva 2020-2023*.
- Alcaldía Municipal de Quípama. (2020). *Plan agropecuario municipal (PAM) Quípama, Boyacá. Por la unidad, el respeto y el desarrollo de Quípama 2020-2023*.
- Alcaldía Municipal de San Pablo de Borbur. (2020). *Plan de desarrollo municipal. Sembrando futuro por San Pablo de Borbur 2020-2023*.
- Arronte Leyva, N. (2021). Territorialización, reterritorialización y procesos cooperativos agrícolas. Aproximaciones teóricas conceptuales. En P. Wong González, J. E. Isaac Egurrola, E. R. Morales García de Alba y A. Treviño Aldape (Coords.), *La dimensión global de las regiones y sus reconfiguraciones económicas y urbanas*. Universidad Autónoma de México [UNAM].
- Barberis, F., Mauro, L. y Graña, F. (2017). Aspectos relevantes de la diversificación productiva a nivel de la firma. *Faces*, 23(48), 17-24. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6226716>
- Cadena-Iñiguez, P., Rendón-Medel, R., Aguilar-Ávila, J., Salinas-Cruz, E., de la Cruz-Morales, F. R. y Sangerman-Jarquín, D. M. (2017). Métodos cuantitativos, métodos cualitativos o su combinación en la investigación: un acercamiento en las ciencias sociales. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 8(7), 1603-1617. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342017000701603
- Calderón Sánchez, D. y Jaime Ruiz, E. D. (2018). La gobernanza local: una simbiosis desde y hacia el territorio. Universidad Santo Tomás. <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/24200/capitulo2gobernanzalocal2018dulfanycalderon.pdf>

- Castaño, C. (2021). Territorio y territorialización: una mirada al vínculo emocional con el lugar habitado a través de las cartografías sociales. *Revista Guillermo de Ockham*, 19(2), 201-217. <https://doi.org/10.21500/22563202.5296>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2019). Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. <https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#/>
- Durán Rubio, C. A. (2022). *Importancia de la cooperación internacional para la sustitución de cultivos ilícitos con responsabilidad social en zonas fronterizas* [Ensayo académico, Universidad Militar Nueva Granada]. <https://repository.umng.edu.co/bitstreams/4643f250-be54-4d7f-93fc-79794c28e389/download>
- Ellis, F. (2000). *Rural livelihoods and diversity in developing countries*. Oxford University Press.
- Enríquez, M. A. R. da S. (2019). Equidad intergeneracional en el reparto de los beneficios de los recursos minerales: la alternativa de los fondos de minería. *Revibec. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica*, 5(1), 61-73. <https://redibec.org/ojs/index.php/revibec/article/view/313>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO]. (2012). *Memoria del VII Seminario Internacional: Seguridad alimentaria, pobreza rural y protección social en América Latina y el Caribe* (22-23 de noviembre de 2012). Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
- Fals Borda, O. (2006). *El hombre y la tierra en Boyacá: bases sociológicas e históricas para una reforma agraria*. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
- Forero, L. (2005). La coca reina hoy en la tierra de la esmeralda. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1959359>
- Forni, P. y De Grande, P. (2020). Triangulación y métodos mixtos en las ciencias sociales contemporáneas. *Revista Mexicana de Sociología*, 82(1), 159-189. <https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2020.1.58064>
- Fuentes, J. A., Ferrucho, A. y Martínez, J. (2021). La minería y su impacto en el desarrollo económico en Colombia. *Estudios de Economía Aplicada*, 39(1), 1-20. <https://doi.org/10.25115/eea.v39i1.4567>
- Gómez Sierra, F. A. (2013). ¿Quiere cacao...? Un posible renacimiento territorial: protagonismo de la técnica aplicada al cacao en el occidente de Boyacá. *Cultura Científica*, (11), 52-71. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9072909>

- Gutiérrez, F. y Barón, M. (2008). Órdenes subsidiarios. Coca, esmeraldas: la guerra y la paz. *Colombia Internacional*, (67), 102-129. <https://doi.org/10.7440/colombiaint67.2008.05>
- Guzmán Rojas, V. A. (2017). *Transformaciones en el espacio agrícola, durante el periodo 1995-2015, en los departamentos de Boyacá, Cesar y Meta* [Trabajo de maestría, Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia]. <https://biblioteca.igac.gov.co/janium/Documentos/1-01119WEB.pdf>
- Haesbaert, R. (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. *Cultura y Representaciones Sociales*, 8(15), 9-42. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102013000200001&lng=es&tlng=es.
- Hernández Suárez, A. C. y Monroy Olmos, B. (2017). *Análisis de la política de sustitución de cultivos de coca por cacao como estrategia de desarrollo inclusivo local: el caso del municipio de Pauna, Boyacá (2005-2015)* [Tesis de maestría, Universidad de La Salle]. <https://hdl.handle.net/20.500.14625/24734>
- Hernando, M. y Blanco, G. (2016). Territorio y energías renovables no convencionales: aprendizajes para la construcción de política pública a partir del caso de Rukatayo Alto, Región de Los Ríos, Chile. *Gestión y Política Pública*, 25(1), 165-202. <https://doi.org/10.29265/gypv.v25i1.153>
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC]. (2008). *Metodología para la clasificación de las tierras por su vocación de uso. Conflictos de uso del territorio colombiano*. Subdirección de Agrología.
- Leiteritz, R. y Riaño, M. (2018). Tras el corazón verde: los vaivenes del conflicto en la región esmeraldera de Colombia. En A. Rettberg, C. Nasi, R. Leiteritz y J. Prieto (Eds.), *¿Diferentes recursos, conflictos distintos? La economía política regional del conflicto armado y la criminalidad en Colombia* (pp. 293-340). Ediciones Uniandes.
- López, L. y Figueroa, M. (2013). Artes visuales y procesos de territorialización en contextos de narcoviolenia. *Argumentos*, 26(71), 169-192. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-57952013000100008&script=sci_arttext
- López Sánchez, L. M., Fúquene, E. A., Montenegro, K. L., Ramírez, G. L. y Sánchez Pineda, A. M. (2018). Problemática social y efectos de la sustitución de los cultivos de coca por cacao en el municipio de Pauna (Boyacá). *Panorama Económico*, 26(4), 537-560. <https://doi.org/10.32997/pe-2018-3310>

- Mendoza, G. y González, J. A. (2016). Reconstrucción del tejido social: una apuesta por la paz. Centro de Investigación y Acción Social por la Paz del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. https://www.researchgate.net/publication/321721881_Gabriel_Mendoza_y_Jorge_Atilano_Gonzalez_Reconstruccion_del_tejido_social_una_apuesta_por_la_paz
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2013). *Proyecto Oferta Agropecuaria. Sistema de información geográfica municipal 2013*.
- Niehof, A. (2004). The significance of diversification for rural livelihood systems. *Food Policy*, 29(4), 321-338. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2004.07.009>
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC]. (2007). *Sembramos y ahora recogemos: somos familias guardabosques. Estudios de caso*.
- Ormet Boyacá. (2023). *Boletín del mercado laboral de Boyacá 2023. Agricultura, minería y empleo rural*. Observatorio Regional del Mercado de Trabajo de Boyacá. <https://ormet.boyaca.gov.co/>
- Perevochtchikova, M., Hernández, J. A. y Avila-Foucat, V. S. (2018). Recursos naturales y diversificación productiva en cuatro localidades rurales del Estado de Oaxaca, México. *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 15(81), 1-25. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cdr15-81.rndp>
- Perfetti, J. y Cortés, S. (2013). La agricultura y el desarrollo de los territorios rurales En J. Perfetti, Á. Balcázar, A. Hernández y J. Leibovich (Eds.), *Políticas para el desarrollo de la agricultura en Colombia* (pp. 1-64). Fedesarrollo – Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
- Pineda, L. (2018). *El cacao: una apuesta para la transformación del territorio en el Occidente de Boyacá* [Tesis de especialización, Universidad Externado de Colombia]. <https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.681>
- Pontificia Universidad Javeriana. (2022). *Transformaciones productivas y saberes locales en Tinjacá: vocaciones rurales en transición*. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales.
- Quintero T., F., Arango C., A. M., Hoyos G., D. y Escobar, M. R. (2004). *Estado del arte del conocimiento sobre jóvenes en Colombia 1985-2003*. (Informe final de investigación). Programa Presidencial Colombia Joven; Agencia de Cooperación Alemana GTZ; Unicef Colombia.
- Ramos, E. y Romero, J. (1993). La crisis del modelo de crecimiento y las nuevas funciones del mundo rural. En E. Ramos y P. Caldentey (Eds.), *El desarrollo rural andaluz a las puertas del siglo XXI*.

- Sánchez, L. (2012). *De la diversificación productiva rural a la diversificación productiva rural tradicional: análisis del camino a la sustentabilidad* [Tesis de especialización, Universidad Nacional Autónoma de México]. <http://let.ii.ec.unam.mx/node/796>
- Sepúlveda S., S. (2008). *Gestión del desarrollo sostenible en territorios rurales: métodos para la planificación*. IICA.
- Suárez Pineda, M., Suárez Pineda, L. y Zambrano Vargas, S. M. (2017). Emprendimiento de jóvenes rurales en Boyacá-Colombia: un compromiso de la educación y los gobiernos locales. *Revista de Ciencias Sociales*, 23(4), 23-32. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6478382>
- Valencia Peña, I. H. y Silva Chica, L. (2018). Entre subsistencias y neoextractivismos locales. Dinámicas mineras en el norte del Cauca, Colombia. *Estudios Políticos*, (52), 172-193. <https://doi.org/10.17533/udea.espo.n52a08>
- Velasco, J. D., Duncan, G. y Lopera, F. (2018). Oligarquía, poder político y narcotráfico en Colombia: los casos de Medellín, Santa Marta y Muzo. *Colombia Internacional*, 1(95), 167-201. <https://doi.org/10.7440/colombiaint95.2018.07>

Webgrafía

- Gobernación de Boyacá. (2023). A 4.002 familias ha impactado el programa “Boyacá nos Alimenta”.

CAPÍTULO 3

Juventudes: cultivos ilícitos, economía ilegal y nuevas vocaciones productivas en el municipio de Pauna, Boyacá

EDWIN DIOMEDES JAIME RUIZ
SARA XIMENA CRUZ PACHECO
ANGIE DANIELA ROBAYO DUARTE
LAURA MARCELA GÓMEZ ARIAS

Presentación del capítulo

Este capítulo contribuye a analizar las formas de agencia juvenil en la reconfiguración del territorio en el municipio de Pauna Boyacá, a partir de prácticas productivas que emergen como respuesta a contextos de violencia y economía ilegal. El análisis se centra en cómo los jóvenes han transformado sus prácticas productivas tras el auge de los cultivos ilícitos, resignificando su relación con el territorio y generando alternativas que contribuyen a la construcción de paz territorial. El propósito del capítulo es comprender las dinámicas de resistencia y transformación impulsadas por juventudes rurales en un escenario marcado por el narcotráfico, la minería y la ausencia del Estado. Para ello, se emplea una metodología mixta que combina técnicas cualitativas (entrevistas semiestructuradas, grupos focales, análisis de narrativas)

y cuantitativas (revisión de datos estadísticos y documentos oficiales), sustentada en un enfoque crítico social que reconoce el territorio como una construcción histórica, simbólica y política, atravesada por relaciones de poder, conflicto y memoria. Entre los hallazgos más relevantes se destaca que los jóvenes han promovido nuevas vocaciones productivas como el cultivo de cacao, el ecoturismo, la joyería artesanal y la organización comunitaria. Estas iniciativas no solo han permitido reconstruir el tejido social y fortalecer la identidad territorial, sino que también han abierto caminos para la participación política, la educación rural y el desarrollo local.

Introducción

Este capítulo aborda la relación entre juventudes, cultivos ilícitos, economía ilegal y nuevas vocaciones productivas en el municipio de Pauna, Boyacá, como parte del análisis más amplio sobre las formas de agencia juvenil en la reconfiguración del territorio del Occidente de Boyacá. Se parte del reconocimiento de que el narcotráfico y el cultivo ilícito de drogas han tenido un impacto profundo en los proyectos de vida de los jóvenes de la región, configurando dinámicas territoriales marcadas por la violencia, el sicariato, los asesinatos selectivos y la presencia de economías ilegales, especialmente durante las distintas etapas de la llamada “guerra verde”.

En este contexto, el cultivo ilícito de drogas se convirtió en una alternativa económica frente a la explotación de esmeraldas, atrayendo a campesinos y jóvenes que buscaban formas rápidas de subsistencia. Esta dinámica generó procesos asociados al narcotráfico, tales como el procesamiento de cocaína en laboratorios artesanales, el tráfico de armas y la conformación de ejércitos privados y grupos paramilitares. En consecuencia, se profundizaron la fragilidad institucional y la ausencia del Estado en la región. En este escenario, resulta pertinente plantear la pregunta: ¿cómo han transformado los jóvenes sus prácticas productivas tras el auge de los cultivos ilícitos?

Este capítulo también destaca el papel transformador de las juventudes rurales, quienes han impulsado nuevas vocaciones productivas

como el cultivo y transformación del cacao, la siembra de árboles frutales, la joyería artesanal, el ecoturismo y la organización comunitaria. Estas iniciativas han permitido reconstruir el tejido social, fortalecer la identidad territorial y generar alternativas sostenibles frente a la violencia estructural, convirtiendo a los jóvenes en agentes activos de cambio y construcción de paz.

Desde un enfoque crítico social situado en el territorio, el capítulo identifica vacíos teóricos y metodológicos en el abordaje de los cultivos ilícitos desde una perspectiva generacional, y propone categorías de análisis como agencia juvenil, economía ilegal, vocación productiva y construcción de paz, sustentadas en autores clave del campo sociológico (Leiteritz y Riaño, 2018) y antropológico (Herrera, 2022). En suma, este aporte busca visibilizar el protagonismo de las juventudes en la resignificación de sus prácticas productivas y en la reconstrucción de sus comunidades, articulando memoria, resistencia y desarrollo local como vía para superar los legados de la guerra verde y avanzar hacia escenarios de paz estables en el Occidente de Boyacá.

El capítulo se estructura en cuatro apartados: el primero presenta una descripción histórica del narcotráfico y los cultivos ilícitos en el departamento de Boyacá; el segundo analiza la vocación productiva de la región en contraste con las dinámicas de economía ilegal; el tercero expone las formas de vinculación de los jóvenes a estas economías; y el cuarto muestra cómo los jóvenes se han convertido en actores clave en la transformación de la economía local. A través de este recorrido analítico, se busca aportar a la comprensión de cómo las juventudes rurales del Occidente de Boyacá, y particularmente de Pauna, han transitado de escenarios marcados por la violencia y la economía ilegal hacia procesos de reconfiguración territorial basados en prácticas productivas, culturales, educativas y políticas que promueven la paz. Al visibilizar estas formas de agencia juvenil, se pretende no solo evidenciar su capacidad transformadora, sino también contribuir al debate académico sobre los desafíos y posibilidades de construir paces desde abajo, reconociendo a los jóvenes como actores centrales en la resignificación de sus contextos y en la reconstrucción del tejido social.

Antecedentes

La comprensión de las dinámicas de economía ilegal en el departamento de Boyacá, y particularmente en la provincia de occidente, requiere una mirada crítica a las desigualdades territoriales que han favorecido la consolidación de prácticas ilícitas. Rodríguez (2021), en su estudio sobre las disparidades interprovinciales en Boyacá, señala que las brechas socioeconómicas entre las provincias han generado condiciones de vulnerabilidad que pueden facilitar la incursión de economías ilegales. En este sentido, el Occidente de Boyacá aparece como una región históricamente marginada, donde la ausencia de oportunidades y el abandono estatal han sido factores estructurales que explican la presencia de cultivos ilícitos y grupos armados.

Del mismo modo, Gutiérrez y Machuca (2022) cuestionan la idea del “dinero fácil” en las sociedades agrarias cocaleras. A través de un enfoque cultural y moral, los autores muestran cómo las comunidades rurales no adoptan de forma automática las economías ilegales por ambición, sino que lo hacen en contextos de precariedad, exclusión y falta de alternativas. Esta lectura es especialmente pertinente para el caso de Pauna, donde los jóvenes han sido cooptados por estructuras armadas que ofrecen ingresos rápidos, pero a costa de su autonomía y seguridad.

Desde una mirada geográfica, Gómez et al. (2019) proponen una revisión crítica de los estudios sobre cultivos ilícitos en Colombia, destacando la necesidad de entender estos fenómenos como procesos territoriales complejos. Su enfoque permite analizar cómo el espacio rural se transforma por la presencia de economías ilegales y cómo estas prácticas reconfiguran las relaciones entre los actores locales, el Estado y el medio ambiente. Esta perspectiva es útil para interpretar las transformaciones en el paisaje productivo de Pauna, donde el cultivo de coca ha desplazado la vocación agrícola tradicional.

Los impactos sociales y ambientales derivados de las políticas de erradicación de cultivos ilícitos han sido objeto de análisis por parte de Sarmiento et al. (2025), quienes advierten que, sin alternativas sostenibles, estas estrategias pueden profundizar la vulnerabilidad de las comunidades rurales, afectando su identidad local, así como los esfuerzos comunitarios por resignificar el territorio. Finalmente, el

informe técnico de la UNODC-SIMCI (2021) sobre el monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos en Boyacá ofrece datos concretos que permiten dimensionar la magnitud del problema. Este documento confirma la presencia de cultivos ilícitos en municipios como Pauna, Otanche y Puerto Boyacá, y destaca la necesidad de fortalecer las estrategias de sustitución voluntaria, articuladas con procesos de organización comunitaria y liderazgo juvenil.

Metodología

La metodología empleada en este capítulo se fundamenta en un enfoque cualitativo que permite comprender las dinámicas sociales, económicas y culturales que han configurado el papel de los jóvenes en la transformación de la economía ilegal en el municipio de Pauna y en el Occidente de Boyacá. Para ello, se utilizaron tres estrategias principales: la historia oral, el análisis documental y las entrevistas semiestructuradas.

La historia oral fue clave para reconstruir las memorias del conflicto, especialmente aquellas relacionadas con la guerra verde, la incursión de grupos armados, y los procesos de sustitución de cultivos ilícitos. A través de relatos de vida y testimonios de jóvenes, líderes comunitarios y campesinos, se logró identificar cómo las experiencias individuales y colectivas han contribuido a resignificar el territorio y a construir nuevas formas de habitarlo.

El análisis documental se centró en las políticas públicas de sustitución de cultivos, particularmente en el Programa Familias Guardabosques (PFGB), promovido por la UNODC y el Ministerio del Interior. Se revisaron informes institucionales, datos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y documentos de organizaciones comunitarias como Funredagro con el fin de comprender el alcance, impacto y limitaciones de estas estrategias en el territorio.

Las entrevistas a líderes juveniles permitieron identificar las iniciativas que han surgido desde la juventud rural para promover economías lícitas, procesos de organización comunitaria, actividades culturales y proyectos de emprendimiento. Estas voces fueron fundamentales para entender cómo los jóvenes han pasado de ser sujetos vulnerables frente

a la economía ilegal, a convertirse en actores transformadores que impulsan la construcción de paz desde el territorio.

Entre los hallazgos más relevantes se destaca que la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos ha generado nuevas territorialidades, articuladas a través de prácticas productivas como el cultivo de cacao, el turismo rural y la organización comunitaria. Asimismo, se evidenció que la paz se construye desde la economía legal, el liderazgo juvenil y la memoria del conflicto, lo que permite resignificar el territorio como espacio de vida, resistencia y transformación.

Claves conceptuales en torno al narcotráfico, cultivos ilícitos y economía ilegal

Contexto histórico del narcotráfico y los cultivos ilícitos en Boyacá

Antes de abordar el contexto histórico del narcotráfico en Boyacá, es necesario delimitar el concepto de “economía ilícita”. Pineda (s.f.) la define como “toda aquella actividad comercial o económica que está prohibida por la ley”, incluyendo prácticas como el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de personas. Esta definición permite comprender cómo ciertas dinámicas económicas, aunque marginales en términos de legalidad, han tenido un impacto estructural en regiones como el Occidente de Boyacá.

El narcotráfico en Colombia tiene sus raíces en los años cincuenta, con la producción de marihuana en sectores de la Costa Atlántica y el Urabá Antioqueño, facilitada por el intercambio marítimo y los circuitos de contrabando. Cruz y Rivera (2008) señalan que este fenómeno respondió a una demanda internacional creciente de heroína y marihuana, lo que impulsó la creación de redes de tráfico que requerían nuevos proveedores. En los años setenta, esta economía ilícita se expandió con fuerza, atrayendo a buscadores de esmeraldas y contrabandistas que vieron en la marihuana una vía más rentable para el enriquecimiento rápido (Cruz y Rivera, 2008, p. 6).

Durante los años ochenta, los cultivos de coca comenzaron a proliferar en distintas regiones del país, generando una transformación profunda en las dinámicas sociales y económicas. Este proceso estuvo acompañado por fenómenos como el desplazamiento forzado, el auge del paramilitarismo y el incremento de la violencia. En este contexto, la criminalidad organizada se consolidó como un actor político y económico, sobre todo en Antioquia, donde figuras como Pablo Escobar desafiaron abiertamente al Estado. Como explican Velasco et al. (2018), Pablo Escobar logró articular un ejército privado compuesto por jóvenes delincuentes, desde donde lanzó ofensivas violentas que incluyeron magnicidios, atentados y secuestros, con el objetivo de modificar leyes como la extradición.

Aunque estas dinámicas suelen asociarse a regiones como Medellín o el Magdalena Medio, Boyacá también fue escenario de una articulación entre el narcotráfico y otras economías ilícitas, particularmente la esmeraldera. En los años ochenta, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “el Mexicano”, estableció una alianza estratégica con Gilberto Molina, figura central del negocio de las esmeraldas. Esta alianza se consolidó durante la tercera “guerra verde”, una confrontación entre clanes familiares que controlaban municipios del Occidente de Boyacá. Sandoval y Vargas (2020) explican que dicha alianza buscó debilitar al bando de “Los Culebreros”, logrando cooptar municipios como Muzo, Pauna, Otanche, Quípama y San Pablo de Borbur. Según Flores (2019), esta confrontación dejó más de 3.500 muertos en la región.

Las entrevistas realizadas en campo permiten contrastar estas perspectivas académicas con las memorias locales. Habitantes de Pauna y Otanche relatan cómo, tras la muerte de Isauro Murcia en 1969, el conflicto entre patrones de Muzo y los “pájaros” de Coscuez dio paso a una nueva etapa marcada por el narcotráfico. La relación entre Molina y Rodríguez Gacha introdujo técnicas de cultivo de coca que triplicaron la producción, mientras que los mineros locales comenzaron a participar en la agricultura ilícita y en el procesamiento de la droga. Como señala Herrera (2022), esta transformación implicó un cambio en la estructura del conflicto, donde los antiguos plantadores fueron desplazados por nuevas alianzas entre narcotraficantes y líderes locales.

El auge de los cultivos ilícitos en municipios como Pauna, Otanche y Borbur estuvo acompañado por el lavado de activos a través de la economía esmeraldera (Barón, 2011; Leiteritz y Riaño, 2018). Esta convergencia entre minería y narcotráfico consolidó un modelo de economía ilícita territorializada, con impactos duraderos en la estructura social y política de la región.

Finalmente, la tercera “guerra verde” culminó con el Pacto de Paz de 1990, firmado por los líderes de ambos bandos con el obispo de Chiquinquirá como testigo. Uribe (1992) describe este acuerdo como resultado del agotamiento producido por el baño de sangre. Como parte del pacto, la empresa Esmeracol fue reestructurada para incluir nuevos socios y garantizar una distribución equitativa de los empleos entre los municipios de Borbur y Coscuez. Este proceso, aunque no erradicó por completo las economías ilícitas, marcó un punto de inflexión en la historia del conflicto regional.

Como parte del proceso de pacificación en el Occidente de Boyacá, el Pacto de Paz firmado en 1990 incluyó una serie de compromisos que buscaban desactivar las dinámicas violentas y reconstruir el tejido social de la región. Entre los puntos acordados por los líderes de los clanes enfrentados se destacan:

- El cese inmediato del fuego entre los grupos armados.
- La desmovilización de las autodefensas que operaban en la zona.
- La erradicación del narcotráfico, abarcando el cultivo, procesamiento y comercialización de sustancias ilícitas.
- La veeduría del proceso por parte de la Procuraduría General de la Nación como garante institucional.
- La participación de Esmeracol, respetando su autonomía en la generación de empleo.
- La garantía de libertad de tránsito, comercio y laboreo en los territorios afectados.
- La creación de condiciones para el retorno de quienes habían sido desplazados o abandonado sus propiedades.
- El rescate del Estado de derecho en la región.

- La solicitud de monitoría y coordinación al obispo de Chiquinquirá como figura mediadora.
- La creación de condiciones para el desarme de los actores armados.

Un año después, en julio de 1991, los líderes de ambas facciones se reunieron en Coscuez para evaluar el cumplimiento de estos acuerdos. En ese encuentro se constituyó el Comité Permanente de Normalización, Verificación, Pacificación y Desarrollo del Occidente de Boyacá, integrado por representantes de la Iglesia, autoridades municipales y líderes comunitarios. Este comité buscaba institucionalizar el pacto, que hasta entonces había sido un acuerdo informal entre los actores armados, y ejercer vigilancia sobre su cumplimiento, especialmente frente a los rumores y tensiones que amenazaban con reactivar el conflicto.

El obispo de Chiquinquirá, figura clave en el proceso, reconoció que la violencia generalizada había disminuido, aunque persistían casos aislados que requerían control por parte de los líderes locales. Esta afirmación refuerza el carácter privado y comunitario de las negociaciones, en contraste con la limitada participación del Estado. A pesar de los esfuerzos por involucrar a las instituciones oficiales, la impunidad seguía siendo una constante, y las acciones judiciales recaían más en los jefes militares que en las autoridades estatales.

Algunos miembros del comité insistieron en fortalecer la labor de “limpieza social” ejercida por ciertos actores locales, proponiendo la entrega de delincuentes comunes como medida para preservar la paz. Esta postura, aunque polémica, revela la tensión entre la justicia comunitaria y la institucional, y plantea interrogantes sobre las garantías de protección para quienes denuncien o colaboren con el proceso.

Sin embargo, como en todo conflicto armado, las secuelas fueron profundas. Persistieron las violaciones a los derechos humanos, incluyendo masacres, desplazamientos, secuestros y asesinatos. La economía ilícita dejó huellas duraderas en la estructura productiva y en las subjetividades de la población, generando traumas colectivos y conductas violentas que aún afectan a los municipios del Occidente de Boyacá (Herrera, 2022).

A pesar de ello, el pacto también abrió una posibilidad de renovación territorial, especialmente para las juventudes. Se inició un proceso de replanteamiento hacia cultivos lícitos y minería legal, que si bien no ha sido lineal ni exento de dificultades, representa una apuesta por reconstruir el tejido social desde prácticas económicas legítimas y sostenibles.

Prácticas productivas ilegales asociadas con el narcotráfico

La región del Occidente de Boyacá ha estado marcada por dinámicas de violencia que, si bien no han estado protagonizadas por la presencia masiva de grupos armados tradicionales como guerrillas o paramilitares, sí han sido profundamente influenciadas por actores locales con poder económico y político, como los líderes esmeralderos (Baquero, 2017). Estos actores han configurado un sistema de control territorial que trasciende lo económico, afectando también las dimensiones sociales, políticas y ambientales de la región (Flórez, 2019). Esta estructura de poder ha facilitado el desarrollo de economías ilegales vinculadas al narcotráfico, el tráfico de armas y la proliferación de cultivos ilícitos, consolidando un escenario donde lo ilegal se entrelaza con lo cotidiano.

Como lo señala Vargas (2010), en contextos donde operan grupos ilegales con recursos de poder, especialmente económico, existe una tendencia a influir o incluso capturar las instituciones estatales para ponerlas al servicio de sus intereses. Esta afirmación cobra especial relevancia en el caso del municipio de Pauna, que ha sido un punto estratégico de tránsito para diversos actores armados, incluyendo ejércitos privados de líderes regionales, guerrillas y, más recientemente, grupos armados organizados. La disputa por el control territorial ha generado altos niveles de violencia, siendo Pauna uno de los municipios con mayor número de víctimas en el Occidente de Boyacá. Según Espitia (2019), en el periodo comprendido entre 2005 a 2017, en el municipio de Pauna se registraron 649 defunciones, siendo más frecuente en los hombres con un total de 374 muertes las cuales representan un 57,6%.

Este panorama ha llevado a algunos investigadores, como Gutiérrez y Barón (2008), a considerar que los intentos de paz en la región han

fracasado, en gran parte por el escaso reconocimiento a las víctimas y a los muertos del conflicto. Herrera Tinjacá (2022) destaca que las formas de violencia en el Occidente de Boyacá han sido objeto de disputa en los procesos estatales de reparación, y que 126 familias han apelado a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) para ser reconocidas como sobrevivientes de las guerras por las esmeraldas.

La ubicación geográfica de Pauna, cercana a los departamentos de Santander y Cundinamarca, así como a municipios como Puerto Boyacá y Pacho, lo convierte en un corredor estratégico para economías clandestinas. A pesar de no contar con minas de esmeraldas en su territorio, Pauna ha buscado alternativas económicas distintas a la minería, lo que ha abierto espacio para prácticas ilegales como el cultivo de coca. Esta actividad ha generado una cultura económica subterránea, basada en el procesamiento de la hoja de coca, la construcción de laboratorios, el tráfico de armas y el control territorial (Hernández y Monroy, 2017).

En este contexto, muchos jóvenes han sido cooptados por los ejércitos privados de los patrones esmeralderos, desempeñándose como sicarios o “gatilleros” en ajustes de cuentas entre municipios. Otros han trabajado como raspachines en los cultivos de coca o como laboratoristas en el procesamiento de la base de coca. Estas prácticas han configurado una economía ilegal profundamente arraigada en la vida cotidiana de la región, que continúa reproduciendo dinámicas de violencia y exclusión.

La región del Occidente de Boyacá se ha caracterizado por procesos asociados al tema de la violencia, con poca presencia de grupos armados tradicionales como guerrillas y paramilitares (Baquero, 2017). En esta región se ha destacado el conflicto por la presencia de líderes esmeralderos que han definido unas dinámicas propias de control en la región en términos económicos, políticos, sociales y ambientales (Flórez, 2019). Este ha sido un elemento constitutivo para comprender la influencia de una economía ilegal fundamentada en el tráfico de drogas, el tráfico de armas y la presencia de cultivos ilícitos. Como lo afirma Vargas (2010):

En las sociedades en las que existen o han existido grupos ilegales con recursos de poder —especialmente económico, como los

grupos mafiosos o ciertos carteles—, estos tratan de influir —o, aún peor, de capturar— los poderes institucionales, de modo de lograr que se coloquen al servicio de sus intereses. (p. 159)

El contexto de prácticas productivas ilegales en el Occidente de Boyacá ha tenido profundas implicaciones sociales, sobre todo en la configuración de roles de género. La participación de los hombres en economías clandestinas como el narcotráfico ha limitado sus oportunidades de formación educativa, mientras que las mujeres han sido relegadas a labores de cuidado y protección familiar, reproduciendo dinámicas tradicionales en medio de escenarios de violencia. A pesar de estas condiciones, el municipio de Pauna conserva una vocación agrícola significativa, gracias a la riqueza de sus tierras, la abundancia de fuentes hídricas y un clima privilegiado con varios pisos térmicos. Esta diversidad natural influye en la manera en que niños y jóvenes se relacionan con su entorno, lo valoran y lo apropian (Barrera, 2013). Sin embargo, esta vocación ha sido desplazada por el auge de cultivos ilícitos, situación que ha generado una pérdida progresiva de la seguridad y la soberanía alimentaria.

Frente a la consolidación de una economía subterránea, han emergido fenómenos de resistencia impulsados por nuevas generaciones que buscan transformar las condiciones heredadas. No obstante, persiste una fuerte influencia de los líderes sociales tradicionales y sus descendientes, quienes continúan ejerciendo poder territorial en dimensiones culturales, políticas, económicas y sociales. Parra (2006) señala que la organización social y cultural de la zona esmeraldera está profundamente ligada a los insumos de la producción minera, lo que ha generado transformaciones en las estructuras familiares y de parentesco. Heredia (2014) complementa esta visión al identificar que, tras la firma de los acuerdos de paz, familias como los Rincón, Salinas, Triana, González y Lancheros han mantenido el control político en la región.

Este control territorial y político ha dado lugar a formas particulares de agencia institucional, caracterizadas por una débil legitimidad estatal y una escasa articulación entre la administración pública local y la ciudadanía. Durante décadas, el uso legítimo de la fuerza no ha sido ejercido por el Estado, sino por actores privados que han ocupado ese

vacío institucional. Esta situación ha derivado en un abandono sistemático por parte del Estado, lo que ha facilitado la violación constante de los derechos humanos (García-Norato y García-Norato, 2019). En este sentido, Vargas (2010) advierte que el narcotráfico representa hoy la mayor amenaza para la institucionalidad y la gobernabilidad, debido a su capacidad de corrupción y penetración en las estructuras estatales.

El narcotráfico, por tanto, se configura como un elemento constitutivo en la historia reciente del Occidente de Boyacá, especialmente en el municipio de Pauna, donde ha sido clave para comprender las prácticas ilegales que han moldeado la región. La violencia asociada a estas economías ilícitas ha llevado a la población a establecer acuerdos de convivencia y normas informales entre actores diversos, como mecanismo de negociación y supervivencia. Estas dinámicas revelan la complejidad de un territorio donde lo ilegal ha sido normalizado y donde la institucionalidad estatal aún enfrenta grandes desafíos para recuperar su legitimidad y presencia efectiva.

Los jóvenes como sujetos de la economía ilegal

La situación social del municipio de Pauna frente a la economía ilegal ha llevado a que muchos jóvenes se vinculen de forma activa a grupos armados, motivados por la necesidad y la falta de oportunidades. En muchos casos, esta participación no fue una elección libre, sino una consecuencia inevitable de las condiciones estructurales que han afectado históricamente a la región. El narcotráfico, los cultivos ilícitos y otras economías ilegales han sido problemáticas persistentes en Colombia, y el Occidente de Boyacá no ha sido ajeno a la incursión de actores armados que encontraron en este territorio una oportunidad para enriquecerse. La incapacidad de un Estado centralizado, enfocado en las grandes ciudades, ha impedido que las políticas públicas lleguen de manera efectiva a la ruralidad, dejando a las familias campesinas en condiciones de vulnerabilidad que fueron aprovechadas por estos grupos para ejercer su poder de forma autoritaria.

Desde las décadas de 1970 y 1980, municipios como San Pablo de Borbur, Quípama, Muzo y Otanche vivieron el auge de las esmeraldas, fenómeno conocido como la “fiebre verde” o el “enguaque”. Muchas

familias abandonaron sus prácticas agrícolas tradicionales para dedicarse a la minería, atraídas por la promesa de riqueza rápida. Sin embargo, en el caso de Pauna, que no cuenta con minas de esmeraldas, la alternativa ilícita fue el cultivo de coca. Las condiciones geográficas y climáticas del municipio favorecieron esta actividad, lo que llevó a los grupos armados a tomar control del territorio e imponer la siembra de coca como medio para mejorar la calidad de vida de los pobladores. Con la entrada de los cultivos ilícitos, también se intensificó la violencia, generando un escenario de conflicto en dos frentes: por la explotación de esmeraldas y por los narcocultivos.

Este cambio en la vocación agrícola, de la producción de alimentos al cultivo de coca, fue impuesto por los grupos armados, a pesar de la tradición campesina de la región. Desde la perspectiva de Alexander Chayanov (1974), la economía campesina se basa en el trabajo familiar no asalariado, lo que permite entender por qué muchos jóvenes fueron absorbidos por las dinámicas ilegales: la estructura familiar y comunitaria fue desarticulada por la imposición de nuevas formas de producción vinculadas al narcotráfico. Esta transformación afectó profundamente a los jóvenes rurales, quienes enfrentan una brecha significativa en sus condiciones socioeconómicas. La desprotección estatal y la falta de alternativas reales los llevaron a ver en los grupos al margen de la ley una opción de vida.

Esta situación ha sido una constante en las zonas rurales afectadas por el conflicto armado en Colombia, donde variables como la inequidad social, el abandono estatal, la brecha urbano-rural y la falta de oportunidades han facilitado el involucramiento de cientos de jóvenes en economías ilegales. En este sentido, una investigación de la Universidad Externado de Colombia (2004) revela que las motivaciones de los jóvenes para vincularse a actores armados deben ser analizadas más allá de lo voluntario. Aunque a primera vista se percibe una decisión individual, esta está condicionada por el contexto histórico del conflicto armado y por las estructuras sociales que lo reproducen. Cada joven que se conecta con la guerra como actor inexperto lo hace desde una trayectoria marcada por la exclusión, la violencia y la falta de oportunidades, lo que exige una revisión crítica de las causas que los llevan a tomar ese camino.

La vinculación de los jóvenes a grupos armados ilegales en el municipio de Pauna y en el Occidente de Boyacá ha sido una consecuencia directa de las condiciones estructurales de exclusión, pobreza y abandono estatal. Como lo señala Camilo Bácares en *Los pequeños ejércitos* (2014), “la edad es el requisito que menos importa a la hora de ingresar a las filas de un grupo al margen de la ley. Lo más importante es que los jóvenes, en este caso, acaten las órdenes como les sean indicadas” (p. 74). Esta afirmación revela cómo la lógica de reclutamiento se basa más en la obediencia y la funcionalidad dentro de la organización que en criterios de madurez o formación. La entrada a estos grupos implica la creación de un lazo social, donde los jóvenes son sometidos a pruebas que determinan su permanencia y el grado de confianza que les otorga la organización.

Una vez dentro, se produce una transformación profunda en la identidad de los jóvenes: pasan de ser sujetos sociales a convertirse en actores militares. Son entrenados para la guerra, para servir a los intereses de quienes dominan los territorios, y para operar en función de economías ilegales como los cultivos ilícitos. En este proceso, se rompen los vínculos con sus derechos fundamentales, y se redefine su rol en la sociedad (Bácares, 2014, p. 80). Esta transformación no solo afecta su trayectoria individual, sino que también altera las dinámicas familiares y comunitarias, generando rupturas en los tejidos sociales locales.

La economía ilegal, especialmente el narcotráfico, ha sido un factor determinante en la configuración de estas trayectorias juveniles. En Pauna, la ausencia de minas de esmeraldas llevó a que el cultivo de coca se convirtiera en la principal actividad ilícita, facilitada por las condiciones geográficas y climáticas del municipio. Los grupos armados aprovecharon estas características para imponer el cultivo de coca como una alternativa económica, ofreciendo a los jóvenes una aparente mejora en sus condiciones de vida. Sin embargo, esta oferta estaba mediada por la violencia, el control territorial y la instrumentalización de los cuerpos juveniles como fuerza de trabajo para la guerra y la producción ilegal.

Los jóvenes como transformadores de la economía ilegal

Conociendo el contexto histórico y territorial del municipio de Pauna, se puede afirmar que este ha estado marcado por diversas prácticas económicas y comerciales que, en su desarrollo, han estado atravesadas por dinámicas violentas y conflictivas. Desde la explotación minera en busca de esmeraldas en las minas de Muzo y Coscuez, hasta la consolidación de economías ilegales como los cultivos de coca y los laboratorios de procesamiento, el territorio ha sido escenario de disputas por el control de recursos y poder. Estas prácticas han estado mediadas por relaciones de poder entre patrones locales, grupos armados y narcotraficantes, quienes han visto en el Occidente de Boyacá un espacio fértil para sus intereses, gracias a su diversidad de pisos térmicos, fuentes hídricas y paisajes estratégicos.

En este sentido, el territorio no puede entenderse únicamente como un espacio físico, sino como un conjunto de relaciones sociales, políticas y simbólicas. Montañez (2001) lo define como “un concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, poder, pertenencia, apropiación entre una porción o la totalidad, espacio geográfico y un determinado sujeto individual o colectivo” (p. 20). Las prácticas de explotación de recursos, extracción de minerales y siembra de cultivos ilícitos han estado atravesadas por estas relaciones, donde los campesinos han sido los más afectados, al convertirse en intermediarios de un mercado ilegal que pone en riesgo sus vidas, sometiéndolos a amenazas, desplazamientos y asesinatos.

Haesbaert (2004), citado por Pineda (2018), propone tres dimensiones clave para comprender el territorio: primero, como espacio material y tangible, caracterizado por sus recursos naturales; segundo, como espacio dinámico de relaciones de poder, dependencia y control; y tercero, como espacio simbólico vinculado a la memoria, el arraigo y la identidad. Estas dimensiones permiten entender cómo el territorio de Pauna ha sido transformado por las economías ilegales, pero también cómo ha sido resignificado por sus habitantes, especialmente por los jóvenes, quienes han comenzado a disputar y reconfigurar estos espacios.

Durante los años ochenta, el Occidente de Boyacá fue escenario de la llamada “guerra verde”, una confrontación violenta por el control territorial de las minas de esmeraldas. Esta guerra enfrentó a los habitantes de municipios como Pauna, Maripí, Chiquinquirá, Briceño y Zulia contra los de San Pablo de Borbur, Otanche, Muzo, Quípama, Santa Bárbara y Coscuez (Alcaldía Municipal de Pauna, 2022, p. 61). En los años noventa, se iniciaron procesos de paz impulsados por la Iglesia, que actuó como mediadora entre líderes y patrones, culminando en la firma del Pacto el 12 de julio de 1990. Sin embargo, las secuelas del conflicto persistieron y los cultivos ilícitos se consolidaron como forma de sustento económico para muchas familias campesinas, especialmente en Pauna.

A pesar de las ganancias que generaban los cultivos de coca, Hernández y Monroy (2017) advierten que esta situación destruyó el tejido social de la región, generando violencia, desinstitucionalización y problemas de gobernabilidad. No obstante, la transformación de la economía local también dio paso a nuevas dinámicas con la llegada de actores como las multinacionales, que comenzaron a controlar las minas y a implementar iniciativas de responsabilidad social empresarial (RSE). Estas iniciativas favorecieron la creación de asociaciones, organizaciones comunitarias y proyectos productivos alternativos, abriendo posibilidades para una economía lícita.

Una estrategia destacada en este proceso fue el Programa Familias Guardabosques (PFGB), promovido por la UNODC y el Ministerio del Interior desde 2003. Este programa buscaba la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos mediante incentivos económicos y modelos de organización comunitaria. Su objetivo era facilitar la transición de las familias campesinas hacia economías legales, fortaleciendo el arraigo territorial y promoviendo alternativas productivas sostenibles. En este contexto, los jóvenes han comenzado a desempeñar un papel transformador, no solo como víctimas de la economía ilegal, sino como actores que resignifican el territorio, impulsan procesos de cambio y reconstruyen el tejido social desde nuevas formas de organización y participación. La tabla 4 muestra la importancia del programa de familias guardabosques en su implementación en el municipio de Pauna.

Tabla 4. Programa Familias Guardabosques 2005-2009.

Familias Atendidas Departamento de Boyacá

Coddepto	Departamento	CodMpio	Municipio	2005	2006	2007	2008	2009
15	Boyacá	15507	Otanche	755	741	724	595	
15	Boyacá	15531	Pauna					
15	Boyacá	15572	Puerto Boyacá			257	263	214
15	Boyacá	15681	San Pablo de Borbur			803	824	655
Total Boyacá				755	741	2477	2411	1526
Total	Total			755	741	2477	2411	1526

Fuente: DPS – Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (2010).

El análisis de los datos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social revela que la atención del Programa Familias Guardabosques (PFGB) en el departamento de Boyacá inició en 2005 en el municipio de Otanche. A partir de 2007, se extendió a otros municipios como Pauna, Puerto Boyacá y San Pablo de Borbur. Entre 2007 y 2009, el programa atendió a 2079 familias en Pauna interesadas en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Esta intervención marcó un punto de inflexión en la región, al abrir la posibilidad de construir escenarios de paz y reconciliación entre los distintos actores del territorio, mediante nuevas prácticas productivas que reemplazaran las economías ilegales.

La sustitución de cultivos ilícitos dio paso a proyectos productivos centrados en el cultivo de cacao y sus derivados, lo que permitió la creación de organizaciones comunitarias y asociativas que fortalecen estas nuevas dinámicas económicas. Un ejemplo destacado es la Fundación Red Colombia Agropecuaria (Funredagro), que agrupa a 1600 familias pertenecientes a 11 organizaciones productoras de cacao en distintos municipios de Boyacá. Estas iniciativas no solo transforman la economía local, sino que también resignifican el territorio como espacio de paz, reconstruyendo el tejido social afectado por décadas de conflicto.

En paralelo, se ha promovido una transformación cultural que acompaña el cambio económico. Actividades como festivales, reinos, expediciones y carreras de aventura han contribuido a fortalecer la identidad local y el sentido de pertenencia. En este contexto, la festividad más representativa de Pauna es el “Día del Campesino”, según Situr Boyacá, donde se realizan muestras artísticas de danza, música y gastronomía tradicional, como el sancocho de pollo campesino. Estas expresiones culturales permiten reconocer y valorar el territorio desde lo cotidiano, como parte de un proceso de reconfiguración que visibiliza a Pauna como un territorio de paz.

Estas iniciativas comunitarias son fundamentales para la construcción de paz desde el territorio, al generar oportunidades productivas, culturales y sociales que permiten habitarlo de manera digna. Los jóvenes, en particular, se han convertido en protagonistas de este proceso, al impulsar nuevas estrategias que reconstruyen el tejido social afectado por la guerra verde. Estas propuestas han contribuido a modificar las dinámicas de control territorial, promoviendo el encuentro, el diálogo y el intercambio, y revalorizando el papel del campesino como agente de paz, más allá de los poderes tradicionales de los patrones o los bandos armados.

En este contexto, se hace evidente la necesidad de fortalecer la participación juvenil como estrategia de transformación territorial. Según Vargas (2016), la territorialidad implica una red de relaciones complejas entre los seres de la naturaleza y el espacio que habitan, en constante transformación mutua (p. 87). Desde esta perspectiva, los jóvenes son actores clave en los procesos de cambio político, económico, social y cultural. En las últimas décadas, colectivos juveniles han promovido políticas públicas desde iniciativas de emprendimiento, turismo y construcción de paz, resignificando el territorio y proyectando nuevas formas de habitarlo.

Reflexiones finales

Los resultados de este capítulo permiten comprender el contexto histórico en el que se han configurado las prácticas productivas alternativas a la minería en el Occidente de Boyacá, y particularmente en el

municipio de Pauna. Este proceso evidencia el impacto profundo que ha tenido la cultura ilegal en la economía local, en especial, a través de los cultivos ilícitos de hoja de coca y marihuana, y la instalación de laboratorios artesanales para el procesamiento de base de coca. Estas dinámicas han generado transformaciones en el territorio que, si bien estuvieron marcadas por la violencia y la desinstitucionalización, también han dado lugar a procesos de resistencia y reconfiguración liderados por las juventudes.

En este escenario, los jóvenes han desempeñado un papel fundamental como agentes de cambio. Frente a la economía extractiva impuesta por los patrones regionales y, más recientemente, por las multinacionales, las juventudes han impulsado nuevas formas de organización y participación. A través de plataformas juveniles, Consejos de Juventud y organizaciones gremiales, han promovido prácticas productivas sostenibles que buscan recuperar la vocación agrícola, artesanal, pecuaria y turística del territorio. Estas iniciativas no solo responden a una necesidad económica, sino que también representan una apuesta por la construcción de paz territorial.

Como se demuestra en este capítulo, las economías ilegales han generado inestabilidad política, debilitando la gobernabilidad local y fomentando múltiples violencias asociadas a intereses particulares. Sin embargo, la educación de las nuevas generaciones ha sido clave para reconfigurar las vocaciones productivas del territorio. Los jóvenes han comenzado a resignificar el espacio rural, no como zona de conflicto, sino como escenario de vida, producción y cultura. Esta transformación se ha materializado en proyectos productivos alternativos, en la recuperación de saberes ancestrales y en la promoción de prácticas comunitarias que fortalecen el tejido social.

En este contexto, la participación juvenil se convierte en una estrategia esencial para la reconstrucción territorial. Los jóvenes no solo han transformado sus prácticas productivas, sino que también han redefinido el sentido del territorio, articulando procesos de memoria, identidad y sostenibilidad. Desde esta perspectiva, los jóvenes de Pauna han logrado convertir un territorio marcado por el conflicto en un espacio de esperanza, diálogo y construcción colectiva.

Referencias

- Alcaldía Municipal de Pauna. (2022). *Pauna, jardín de voces*.
- Bácares, C. (2014). *Los pequeños ejércitos*. Editorial Magisterio.
- Baquero, P. (2017). *La nueva guerra verde*. Editorial Planeta Colombia.
- Barrera Pineda, L. I. (2013). *Educación y desarrollo en un municipio rural: el caso de Pauna en Boyacá* [Tesis de maestría, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia].
- Barón, M. (2011). *En apogeo y caída de las autodefensas de Puerto Boyacá: del paramilitarismo a los señores de la guerra en el Magdalena Medio* [Tesis doctoral, Universidad Nacional de Colombia]. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/56291>
- Cruz Atehortúa, A. L. y Rivera Rojas, D. M. (2008). El narcotráfico en Colombia. Pioneros y capos. *Revista Historia y Espacio*. Universidad del Valle.
- Espitia Cortes, L. D. (2019). Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud: municipio de Pauna, Boyacá 2019. ESE Centro de Salud Édgar Alonso Pulido Solano de Pauna, Boyacá, Área de Vigilancia en Salud Pública.
- Flórez Varela, A. M. (2019). *La paz verde: escenarios de transformación de conflictos en el Occidente de Boyacá* [Tesis de especialización, Universidad Nacional de Colombia].
- García-Norato, J. F. y García-Norato, M. E. (2019). Acumulación de capitales, el marco detrás del conflicto en el occidente de Boyacá. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 9(2), 289-301.
- Gómez, C. Y., Sastoque, T. G. y Mantilla, S. C. (2019). Los estudios sobre el fenómeno de los cultivos ilícitos de coca en Colombia: una revisión desde los enfoques de la geografía. *Análisis Político*, 32(96), 24-45. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/87190>
- Gutiérrez, F. y Barón, M. (2008). Órdenes subsidiarias Coca, esmeraldas: la guerra y la paz. *Colombia Internacional*, (67), 102-129. ISSN: 0121-5612. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81206706>
- Gutiérrez Sanín, F. y Machuca, D. (2022). ¿Dinero fácil? Moral y cultura en las sociedades agrarias cocaleras. *Análisis Político*, 35(106), 3-27. <https://doi.org/10.15446/anpol.v35n106.101493>
- Heredia Heredia, J. I. (2014). *La evolución del sistema político local en un contexto de privatización de la seguridad: el caso del Occidente de Boyacá*

[Tesis de grado, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana].

Hernández Suárez, A. C. y Monroy Olmos, B. (2017). *Análisis de la política de sustitución de cultivos de coca por cacao como estrategia de desarrollo inclusivo local. El caso del municipio de Pauna Boyacá años 2005 y 2015* [Tesis de maestría, Universidad de La Salle]. https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_gestion_desarrollo/114

Herrera Brand, O. A. (2022). *Esmeraldas, paramilitarismo y narcotráfico, violencias que orbitan alrededor del municipio de Somondoco-Boyacá, 1992 a 2006* [Tesis de maestría, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia]. <http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/8885>

Herrera Tinjacá, I. A. (Enero de 2022). *Negociar la palabra. Las disputas de los sobrevivientes de los conflictos violentos en el Occidente de Boyacá con la Ley de Víctimas* [Trabajo de grado, Universidad del Rosario]. <https://repository.urosario.edu.co/items/8c87f6e5-bc03-415b-83cb-aff8f72a331d>

Leiteritz, R. J. y Riaño, M. E. (2018). Tras el corazón verde: los vaivenes del conflicto en la región esmeraldera de Colombia. En A. Rettberg, C. Nasi, R. Leiteritz y J. Cardona (Comps.), *¿Diferentes recursos, conflictos distintos?: la economía política regional del conflicto armado y la criminalidad en Colombia* (pp. 293-340). Universidad de los Andes. <https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/29954>

Montañez Gómez, G. (2001). *Espacio y territorios: razón, pasión e imaginarios*. Universidad Nacional de Colombia, Vicerrectoría General.

Parra Bautista, J. A. (2006). Familia, poder y esmeraldas. Relaciones de género y estructura económica minera en el Occidente de Boyacá, Colombia. *Revista Colombiana de Antropología*, (42), 145-178. <https://doi.org/10.22380/2539472X.1106>

Pineda Jaimes, A. L. (2018). *El cacao: una apuesta para la transformación del territorio en el occidente de Boyacá* [Trabajo de grado, Universidad Externado de Colombia]. <https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/adc6a565-0fe9-4d11-8d56-acacc367e1cb/content>

Rodríguez Araujo, E. (2021). Las disparidades interprovinciales en Boyacá. *Apuntes del Cenes*, 40(71), 1-24. <https://www.redalyc.org/pdf/4795/479548750010.pdf>

Sandoval Mendieta, C. A. y Vargas Moreno, J. E. (2020). Actividades productivas, asociatividad y gobernanza para el desarrollo económico local: una aproximación al caso de Muzo y Maripi en el Occidente de Boyacá

- (Colombia). En E. D. Jaime Ruiz (Ed.), *Actores sociales, acciones colectivas y transformación social* (pp. 125-152). Ediciones USTA.
- Sarmiento, A., Varón, B., Dávalos, N., Vega Puertas, L. y López, S. (2025). *Memorias de una guerra verde “Comunidad, minería y conflicto: una estrategia de comunicación para la reconstrucción de memoria de los impactos sociales, y culturales de la minería artesanal de esmeraldas en la comunidad de La Victoria y La Mina Boyacá”* [Trabajo de grado, Universidad del Tolima]. <https://repository.ut.edu.co/handle/001/4121>
- UNODC-SIMCI. (2021). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2021-Boyacá. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/INFORME_MONITOREO_COL_2021.pdf
- Uribe, M. V. (1992). “Tapo remacho y no juego más” o el reciente proceso de paz. En M. V. Uribe (Ed.), *Limpiar la guerra* (pp. 125-127). Ediciones Antropos Ltda.
- Vargas Sarmiento, P. (2016). *Historias de territorialidades en Colombia. Bio-centrismo y antropocentrismo*. 1.^a ed. Edición de autor.
- Vargas Velásquez, A. (2010). La influencia de los poderes ilegales en la política colombiana. *Revista Nueva Sociedad*, (225), 156-170. <https://nuso.org/articulo/la-influencia-de-los-poderes-ilegales-en-la-politica-colombiana/>
- Velasco, J. D., Duncan, G. y Lopera, F. (2018). Oligarquía, poder político y narcotráfico en Colombia: los casos de Medellín, Santa Marta y Muzo. *Colombia Internacional*, (95), 167-201. <http://journals.openedition.org/colombiaint/7279>

Webgrafía

- Pineda, J. A. (s.f.). ¿Qué es la economía ilegal? *En Colombia*. <https://encolombia.com/economia/economia-intro/economia-ilegal/>

CAPÍTULO 4

Mujeres jóvenes y minería: violencias y nuevas iniciativas por la equidad de género en Muzo y San Pablo de Borbur, Boyacá

VALENTINA PUERTO VILLAMIZAR
MARÍA PAULA MUÑOZ OTÁLORA
SANDY LORENA CONTRERAS PULIDO

Presentación del capítulo

Este capítulo aborda el problema de la invisibilización de las mujeres jóvenes en los estudios sobre minería, violencia de género y construcción de paz en el Occidente de Boyacá, una región marcada por profundas transformaciones económicas y sociales que han intensificado los roles de género tradicionales. Su propósito es analizar las formas de resistencia y agencia desarrolladas por las mujeres guaque-
ras frente a las violencias estructurales, especialmente en los municipios de Muzo y San Pablo de Borbur. Desde un enfoque crítico social

situado, se empleó una metodología mixta que incluyó entrevistas, grupos focales, revisión documental y estudios de caso, con participación de mujeres entre los 14 y 28 años, además de otras voces femeninas que voluntariamente compartieron sus relatos. El capítulo responde a la pregunta de investigación: ¿qué formas de resistencia y agencia han desarrollado las mujeres guaqueras frente a la violencia de género? Los hallazgos evidencian que estas mujeres han transformado sus roles tradicionales, han generado iniciativas de equidad de género y han promovido nuevas formas de liderazgo comunitario. Las conclusiones destacan su papel como agentes de cambio en la reconfiguración territorial y en la construcción de paz, aportando una mirada generacional e interseccional sobre las juventudes rurales en contextos de conflicto y economías extractivas.

Introducción

En el Occidente de Boyacá, uno de los procesos juveniles aún vigentes y de vital importancia es la guaquería, una práctica minera tradicionalmente asociada a los hombres. La minería en esta región ha sido históricamente representada desde una visión masculinizada, en la que los esmeralderos evocan imágenes de “machos violentos”, “campesinos con plata” o “mafiosos”, como lo señala Parra (2006). Esta construcción cultural ha excluido a las mujeres de los espacios mineros, relegándolas a labores domésticas y privadas.

Sin embargo, con la integración progresiva de las mujeres al mercado laboral y su lucha por ocupar espacios en la guaquería, se ha producido una ruptura significativa en los roles de género impuestos por la sociedad. Las mujeres han comenzado a posicionarse como generadoras de ingresos y proveedoras de sus hogares, desafiando los estereotipos tradicionales y enfrentando múltiples formas de exclusión y violencia.

A partir de la década de 1960, la explotación de esmeraldas generó una oferta de nuevos trabajos en las minas y sus alrededores, lo que provocó el desplazamiento de familias desde zonas rurales hacia barrios cercanos a los socavones. Este fenómeno, como explica Parra (2006), condujo a la reorganización de los roles masculinos y femeninos en el espacio doméstico, intensificando las desigualdades de género.

La ausencia prolongada de los varones en los hogares y la necesidad de sustento económico impulsaron a muchas mujeres a vincularse a la minería informal.

Pese a las restricciones legales, como el decreto de 1987 que prohibía el trabajo de mujeres en labores subterráneas, y a creencias populares como “si las mujeres entran a las minas, las esmeraldas se esconden” (Delgado, 2020), las mujeres lograron ingresar a la g.uaquería a través del sistema de tambreo, lavando tierra para extraer esmeraldas. Este proceso permitió que las familias se asentaran cerca de las minas y que las mujeres comenzaran a desempeñar roles activos en la minería artesanal.

Según Caro et al. (2020), los cuerpos de las mujeres en contextos mineros se convierten en territorios simbólicos donde se ejercen múltiples formas de violencia —física, sexual y simbólica— en el marco de disputas económicas y territoriales. Por su parte, Heuser (2024) subraya que las mujeres, incluidas las más jóvenes, despliegan formas de resistencia y agencia en medio de las violencias generadas por el extractivismo minero. En un contexto marcado por la conflictividad socioterritorial, la represión estatal y las desigualdades persistentes, sus cuerpos-territorios se convierten en espacios de acción política y defensa colectiva, dando lugar a prácticas comunitarias que cuestionan el orden patriarcal y sostienen la búsqueda de justicia socioambiental.

Este capítulo tiene como objetivo analizar la ruptura de los roles de género que han protagonizado las mujeres g.uaqueras en los municipios de Muzo y San Pablo de Borbur, territorios con alta concentración de minería artesanal y donde se registró una significativa participación femenina en el trabajo de campo de esta investigación. Se profundizará en la llegada de las mujeres a la minería, su trabajo como mineras a lo largo del tiempo, las acciones de lucha para ganar espacios, el cuerpo como instrumento de guerra y capitalización, y los retos que enfrentan las nuevas generaciones en la búsqueda de equidad de género.

Antecedentes

Este capítulo se inscribe en una línea de investigación que ha visibilizado el papel de las mujeres en territorios mineros desde una perspectiva crítica, territorial y de género. Diversos estudios han documentado

cómo las mujeres guaqueras y campesinas han resistido las violencias estructurales del extractivismo, transformando sus comunidades a través de la organización, la memoria y la participación política.

Falla y Bustos (2021) destacan cómo las mujeres guaqueras del Occidente de Boyacá reconstruyen sus experiencias mediante la comunicación participativa y la memoria colectiva, generando escenarios de incidencia política desde sus saberes comunitarios. Buitrago (2025), por su parte, desarrolla un archivo digital que documenta las vidas de mujeres mineras y campesinas, visibilizando sus luchas frente a la exclusión y el silenciamiento histórico. Cañón (2021) analiza las condiciones de precarización laboral y exclusión social que enfrentan las mujeres guaqueras en Muzo, y cómo han desarrollado estrategias de resistencia desde sus prácticas cotidianas.

Complementando estos aportes, Cifuentes y Güiza (2021) presentan un análisis jurídico y sociocultural sobre las mujeres mineras en Colombia, evidenciando las brechas de género en el sector y la necesidad de políticas públicas inclusivas. Montes et al. (2023) describen las dinámicas socioculturales y las alternativas económicas que han construido las mujeres en contextos de economía extractivista, fortaleciendo el tejido comunitario y la autonomía económica. Herrera et al. (2017) recogen las voces de mujeres indígenas, campesinas y urbanas que resisten al extractivismo, proponiendo modelos de desarrollo basados en la soberanía alimentaria, la defensa del territorio y la participación política.

Estos autores permiten contextualizar un campo de estudio que reconoce a las mujeres como sujetas políticas, constructoras de paz territorial y protagonistas de procesos de transformación social. En particular, el enfoque generacional y territorial adoptado en este trabajo permite articular las experiencias de mujeres jóvenes con los debates contemporáneos sobre género, minería, conflicto y desarrollo en Colombia. Este capítulo se propone contribuir a ese debate, visibilizando las iniciativas de equidad de género que emergen desde los márgenes y que reconfiguran el territorio desde las voces y prácticas de las mujeres jóvenes.

Metodología

Este capítulo se construyó a partir de una investigación situada en el territorio del Occidente de Boyacá, con enfoque crítico social y perspectiva de género. La metodología empleada combinó técnicas cualitativas y cuantitativas, orientadas a comprender las formas de agencia, resistencia y transformación protagonizadas por mujeres jóvenes en contextos mineros marcados por la violencia estructural y la exclusión.

Desde el enfoque cualitativo, se realizaron entrevistas semiestructuradas a mujeres gUAQUERAS, lideresas comunitarias, jóvenes estudiantes y madres cabeza de familia con edades entre los 14 y 28 años, aunque también se incluyeron relatos de mujeres mayores que voluntariamente compartieron sus experiencias. Se llevaron a cabo grupos focales en los municipios de Muzo y San Pablo de Borbur con el objetivo de identificar narrativas colectivas sobre el trabajo minero, las violencias vividas y las iniciativas de equidad de género emergentes en la región.

La investigación también incorporó revisión documental de fuentes primarias y secundarias, incluyendo planes de desarrollo municipal, decretos, estudios académicos, informes institucionales y prensa local. Se utilizaron estudios de caso para profundizar en las trayectorias de mujeres que han transitado de la gUAQUERÍA informal a procesos de formación técnica y profesional, así como en experiencias organizativas vinculadas a proyectos productivos, educativos y comunitarios.

El análisis de la información se realizó mediante codificación temática y triangulación de fuentes, lo que permitió identificar patrones de exclusión, formas de resistencia y dinámicas de transformación territorial. Se prestó especial atención a las categorías de género, cuerpo, territorio, trabajo, liderazgo y juventud, articuladas con los aportes teóricos de autoras como Rita Segato (2016), Simone de Beauvoir (2015) y Silvia Federici (2014).

Claves conceptuales en torno a la minería, violencia y equidad de género

Minería y transformación territorial

La minería, como actividad económica extractiva ha sido históricamente una fuente de riqueza y conflicto en Colombia, sobre todo en regiones como el Occidente de Boyacá. Esta práctica transforma no solo el paisaje físico, sino también las estructuras sociales, culturales y políticas de los territorios donde se desarrolla. En contextos rurales, la minería ha sido concebida como un espacio predominantemente masculino, asociado a la fuerza, el riesgo y el poder, lo que ha excluido de manera sistemática a las mujeres de sus dinámicas productivas y decisorias (Cifuentes y Güiza, 2021).

Vera y Buendía (2019) profundizan en cómo el modelo extractivista reproduce lógicas coloniales y centralistas, afectando la autonomía territorial y generando tensiones entre comunidades locales y actores externos. Fuentes et al. (2021) complementan esta visión al mostrar que, aunque la minería puede dinamizar economías locales, también genera desigualdades y conflictos socioambientales que impactan especialmente a las poblaciones vulnerables.

Violencias estructurales, simbólicas y de género

La violencia en territorios mineros no se limita al conflicto armado. Se manifiesta también en formas estructurales, simbólicas y de género que afectan de manera diferenciada a las mujeres. La llamada “guerra verde” en Boyacá, marcada por disputas entre actores armados por el control de las minas de esmeraldas, dejó profundas huellas en los cuerpos y las vidas de las mujeres, quienes fueron víctimas de violencia sexual, desplazamiento, exclusión laboral y estigmatización (Herrera et al., 2017). Cabe mencionar que las tres guerras verdes que tuvieron lugar en el Occidente de Boyacá, Colombia fueron conflictos violentos por el control de las esmeraldas: la primera ocurrió entre 1967 y 1973, la segunda entre 1975 y 1978, y la tercera, que fue la más sangrienta,

ocurrió entre 1984 y 1990, finalizando con un pacto de paz firmado el 12 de julio de 1990.

Monsalve (2022) señala que el extractivismo genera conflictos sociopolíticos que se inscriben en dinámicas de despojo y control territorial, donde las mujeres son especialmente vulnerables. Mendoza et al. (2023) aportan una mirada desde el cuerpo-territorio, mostrando cómo las violencias extractivistas se materializan en los cuerpos femeninos, afectando su salud física, emocional y sus posibilidades de agencia.

Desde una perspectiva crítica, el cuerpo de las mujeres en contextos mineros debe entenderse como una categoría de análisis que articula lo material y lo simbólico. Segato (2016) y Ulloa (2021) han señalado que el cuerpo es el lugar donde se inscriben las relaciones de poder, las violencias y las resistencias. En el caso de las mujeres guaqueras, sus cuerpos han sido objeto de estigmas, prohibiciones y mitos —como la creencia de que “las esmeraldas se esconden si las mujeres entran a la mina”— que refuerzan su exclusión y subordinación.

Caro et al. (2020) analizan cómo los cuerpos femeninos son contruidos como “otros” en la gran minería, reforzando límites simbólicos que excluyen a las mujeres de espacios productivos. Heuser (2024) propone entender el cuerpo como sujeto de resistencia frente al extractivismo, destacando las prácticas corporales que desafían el orden patriarcal y minero.

Equidad de género y participación de mujeres en minería

La equidad de género en territorios mineros implica reconocer las desigualdades históricas que han limitado el acceso de las mujeres a los recursos, a la toma de decisiones y a la autonomía económica. También supone visibilizar sus formas de agencia, organización y liderazgo comunitario. En Muzo y San Pablo de Borbur, las mujeres jóvenes han comenzado a transformar estas dinámicas, accediendo a espacios educativos, productivos y políticos que les permiten disputar los sentidos tradicionales de la minería y construir nuevas formas de vida (Montes et al., 2023).

Botello et al. (2021) identifican brechas de género en el sector minero-energético colombiano, señalando que la participación femenina sigue siendo marginal y que se requieren políticas específicas para su inclusión. Vergel (2023) destaca que la equidad de género no puede limitarse a cuotas o inclusión formal, sino que debe transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad.

El enfoque de género permite analizar cómo las relaciones entre hombres y mujeres se configuran en función de estructuras sociales, culturales y económicas que reproducen desigualdades. En el caso de la minería, estas relaciones se expresan en la división sexual del trabajo, en la invisibilización de las labores de cuidado y en la falta de reconocimiento de las mujeres como trabajadoras mineras. La equidad de género, por tanto, no se limita a la inclusión formal, sino que requiere una transformación profunda de las prácticas, los imaginarios y las políticas que rigen el sector (Martínez et al., 2022). Montalvo (2020) refuerza esta idea al mostrar cómo el trabajo femenino es sistemáticamente desvalorizado, lo que perpetúa la desigualdad en sectores como el minero.

Juventud y participación de mujeres jóvenes

La juventud, entendida como una categoría social y política, permite analizar las transformaciones en las formas de participación, resistencia y construcción de ciudadanía en los territorios. Desde una perspectiva crítica, se reconoce que las juventudes no constituyen un grupo homogéneo, sino que expresan una diversidad de trayectorias marcadas por condiciones socioeconómicas, de género, étnicas y territoriales (Jiménez, 2023; Rivera, 2013). En este sentido, las juventudes rurales y urbanas en América Latina han desarrollado formas creativas de acción colectiva, que van desde la organización comunitaria hasta la intervención en espacios digitales, resignificando su papel en los procesos de transformación social y política.

Particularmente, las mujeres jóvenes en contextos mineros enfrentan múltiples formas de violencia estructural, derivadas tanto del conflicto armado como del patriarcado. Sin embargo, lejos de ser solo víctimas, estas mujeres han emergido como lideresas en procesos de

formación, emprendimiento y organización comunitaria, generando nuevas formas de habitar y resignificar el territorio (Escalona, 2021; IISD, 2023). Estas experiencias, que articulan memoria, resistencia y agencia, deben ser reconocidas como parte fundamental de la construcción de paz territorial, en tanto promueven la justicia social desde abajo y con enfoque de género.

La literatura reciente ha subrayado la importancia de visibilizar estas prácticas juveniles y feministas como formas de resistencia frente a las violencias estructurales. Estudios como los de Quesada et al. (2025) y Giraldo y Becerra (2023) destacan cómo las juventudes, especialmente las mujeres jóvenes, construyen alternativas desde sus territorios, articulando luchas por la equidad, la memoria y la sostenibilidad de la vida. En este marco, la participación juvenil no solo debe entenderse como un derecho, sino como una práctica transformadora que interpela las formas tradicionales de hacer política y de construir paz.

Las mujeres en la guaquería. Una historia común

“Si las mujeres entran a las minas, las esmeraldas se esconden”.
Creencia popular del Occidente de Boyacá.

Lejos del reconocimiento de Muzo como la capital mundial de la esmeralda (Delgado, 2019), y de la fascinación por la belleza, el poder y las posibilidades económicas que representa la piedra verde para la región y el país, este apartado propone un acercamiento histórico a la llegada de las mujeres campesinas a la guaquería. Este tránsito desde el hogar hacia las minas constituye una ruptura en la conciencia colectiva y en la identidad cultural de la mujer rural, tradicionalmente asociada a las labores domésticas. La transformación hacia el rol de mujer guaquera implica una reconfiguración de los roles de género, las relaciones de poder y el papel de las mujeres en la llamada *guerra verde*.

Para comprender este fenómeno, es necesario caracterizar el conflicto por la propiedad de la tierra y el control de los yacimientos de esmeraldas durante el siglo xx. Las olas de violencia se volvieron cotidianas, como lo señala Cañón (2021), quien describe cómo el Banco de la República administraba las licencias de explotación, mientras

los patrones controlaban el proceso. Si un minero encontraba una esmeralda sin declarar su origen, podía ser asesinado. Esta dinámica de poder también afectaba a las familias, en particular a mujeres y niños, quienes eran utilizados como figuras de represalia. Se ejercía un control sobre los cuerpos, convirtiéndolos en propiedad de quienes ostentaban el poder económico y social.

La guerra verde no solo debe entenderse como un conflicto armado, sino como un entramado de violencias múltiples. Durante la primera guerra verde (1965-1983), las mujeres mantenían el rol de cuidadoras y campesinas; en cambio, los hombres eran los proveedores y actores principales en la minería. Se consolidó un imaginario en el que el hombre dominaba los espacios públicos y mineros, mientras la mujer permanecía en el ámbito privado.

Con el tiempo, las mujeres comenzaron a asumir nuevos roles en la minería, sobre todo en gUAQUERÍA artesanal; empezaron a desempeñarse como operarias, vigilantes, cocineras, tambreras y cargadoras. Mientras los hombres eran diferenciados entre gUAQUEROS (buscadores) y ESMERALDEROS (comerciantes), el papel de la mujer variaba según su vínculo familiar: las esposas e hijas de patrones permanecían en el ámbito privado, mientras que las mujeres de gUAQUEROS asumían labores agrícolas y domésticas, o se trasladaban a barrios mineros para realizar diferentes labores de cuidado (alimentación, lavado de ropa, entre otras).

Generacionalmente, hijos e hijas de estas mujeres se vincularon desde temprana edad a la gUAQUERÍA, incluso invadiendo socavones cuando se presentaba la oportunidad. Durante la segunda guerra verde (1984-1990), se evidenciaron nuevas formas de violencia sobre los cuerpos femeninos: psicológica, física y sexual. Las mujeres fueron objeto de posesión, intercambio y agresión en un contexto de violencia intrafamiliar y trabajo sexual. Además, el Decreto 1335 de 1987 prohibía su ingreso a labores subterráneas, reforzando la exclusión legal y cultural.

Delgado (2020) y Cañón (2021) coinciden en que las mujeres no solo enfrentaron las secuelas de la guerra verde, sino también violencias estructurales que restringieron sus oportunidades laborales. Estas condiciones dieron paso a nuevas formas de resistencia y organización,

en especial tras el pacto de paz firmado entre los patrones en 1990 y la llegada de las multinacionales.

Con la entrada de empresas como Minería Texas Colombia, los guaqueros perdieron protagonismo en la explotación minera. La práctica de la “voladora” —una jornada mensual en la que se permite a los habitantes lavar tierra residual en busca de esmeraldas— se convirtió en una alternativa informal para subsistir. Como lo relata una habitante de Quípama:

Aquí es todo Dios y suerte, en la voladora es muy difícil saber, por lo que es tierra lavada, en la quebrada es un poco más posible [...]. Se busca en esa tierra lo que a ellos se les escapa, la empresa ya la ha pasado por un cuarto de lavado. Otra forma sería echando pala en la quebrada, o comprando esmeralda. (Comunicación personal, 2022)

Desde 2016, esta tierra residual se ha convertido en el principal medio de sustento para los guaqueros informales, incluyendo a muchas mujeres que, pese a las restricciones, continúan luchando por espacios de trabajo digno y equitativo en la minería. La guaquería, aunque informal, ha sido una fuente de estabilidad económica para muchas familias en el Occidente de Boyacá, sobre todo para mujeres y niños. Esta práctica ha permitido a las mujeres acceder a ingresos propios en un contexto donde la minería formal sigue privilegiando la contratación masculina. Como lo afirma Alcira, trabajadora de la mina de Coscuez:

Las mujeres sí tienen desventajas, la mayoría que contratan en la mina es a los hombres, en la guaquería es más fácil. Las mujeres ya están mirando qué hacer debido a la necesidad, la gente aquí vive es de la guaquería. (Comunicación personal, Alcira, Coscuez, 2022)

A pesar de las desigualdades, la lucha por el reconocimiento y la toma de espacios ha permitido que las mujeres guaqueras logren posicionarse en las labores mineras. En los últimos años, han adquirido mayor visibilidad política y comunitaria, especialmente las mujeres jóvenes, quienes han asumido roles de liderazgo y agencia en el escenario público. Aunque muchas de sus prácticas siguen vinculadas a la minería, se han generado dinámicas de equidad, como lo expresa una guaquera

de la zona: “En la g.uaquería sí se encuentra igualdad, en la voladora se tiene un día para los hombres y un día para las mujeres, y pues en la quebrada todo el que quiera puede estar” (comunicación personal, anónimo, 2022).

Este proceso de transformación ha sido reconocido por diversas investigaciones académicas que, más allá de la violencia y la guerra verde, han explorado los vínculos comunitarios, las relaciones filiales y las formas de organización femenina. Las mujeres g.uaqueras se han convertido en portadoras de memoria, narradoras de la historia del territorio, expresando sus dolores y resistencias tanto en lo privado como en lo público. Falla y Bustos (2021) destacan cómo estas mujeres han construido narrativas territoriales desde la comunicación participativa, resignificando sus experiencias y generando escenarios de incidencia política y comunitaria. Buitrago (2025), por su parte, documenta cómo las mujeres mineras y campesinas del Occidente de Boyacá han sido protagonistas de archivos comunitarios y procesos de memoria que desafían las narrativas patriarcales dominantes. Cañón (2021) aporta una lectura estructural sobre el trabajo minero femenino, evidenciando cómo las mujeres han enfrentado precarización y exclusión, pero también han desarrollado conciencia de clase y formas de organización que sostienen la vida familiar y comunitaria. Como señala Parra (2006), son ellas quienes han sostenido la vida comunitaria en medio de las desdichas que representaban el poder y la riqueza.

Ruptura de los roles de género

Existen diversidad de escritos sobre los mineros y los g.uaqueros, pero poco sobre el papel de las mujeres que han estado inmersas en esta actividad. El enfoque de género ha sido históricamente marginal en los estudios sobre minería, a pesar de que se trata de una de las actividades económicas con mayor desigualdad de género. La participación de las mujeres en la minería ha estado condicionada e invisibilizada por factores sociales y culturales, especialmente en contextos rurales donde predominan prácticas patriarcales que limitan su autonomía económica, el respeto a sus derechos y el acceso a nuevas oportunidades.

Las relaciones que mujeres y hombres establecen con su entorno están mediadas por su posición en la estructura social y por los escenarios en los que transcurre su vida cotidiana. La minería, considerada una actividad exclusivamente masculina, exige fuerza física y valentía para enfrentar riesgos, lo que ha reforzado la idea de que es un espacio reservado para los hombres. Esta percepción se origina en la división sexual del trabajo, que se remonta al Neolítico, cuando las tareas se asignaban según diferencias biológicas asociadas al sexo. Las mujeres eran responsables de la recolección y el cuidado, mientras los hombres cazaban y enfrentaban conflictos. Estas prácticas contribuyeron a la configuración de sociedades modernas que ubicaron a los hombres en el espacio público y a las mujeres en el ámbito privado.

Simone de Beauvoir (2015), en *El segundo sexo*, señala que la reproducción ha sido un obstáculo histórico para la mujer: el embarazo, el parto y la menstruación disminuyeron su capacidad de trabajo, relegándola al cuidado de la especie humana. En las sociedades patriarcales, esto ha significado que la mujer se ubique en el espacio doméstico, del cuidado y del trabajo no remunerado, mientras el hombre ocupa el espacio público, político y productivo.

En el Occidente de Boyacá, la educación de las mujeres ha estado determinada por la posición económica de sus familias dentro del sistema minero. Como explica Parra (2006), las hijas de los “zares” o jefes con licencia minera acceden a educación superior y se les inculca el interés por el crecimiento profesional. En contraste, las hijas de guaqueros o mineros rasos son educadas para casarse con hombres que les brinden seguridad económica, reproduciendo así los roles tradicionales. Los hombres, por su parte, son formados para asumir las labores de la mina y perpetuar la cultura masculina. Esta dinámica evidencia cómo se configuran los estereotipos de género desde la socialización primaria en las comunidades mineras.

Comprender el género como categoría analítica permite observar las relaciones sociales entre mujeres y hombres, identificar las causas de las desigualdades y analizar sus consecuencias en los ámbitos familiar, comunitario y laboral. Joan Scott, citada por Tarrés (2013), afirma que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas

en las diferencias percibidas entre los sexos, y una forma primaria de relaciones significantes de poder.

En los municipios del Occidente de Boyacá, la disputa por el control de las minas de esmeraldas generó una reorganización de los roles masculinos y femeninos. La guerra verde dejó muertos, huérfanos y viudas, siendo las mujeres las más afectadas. Muchas de ellas, al quedar solas, asumieron el papel de proveedoras del hogar, vinculándose a la minería informal como estrategia de subsistencia. Esta decisión implicó trabajar en condiciones precarias, sin garantías laborales, expuestas a la contaminación y a la violencia de género, enfrentando el riesgo de ingresar a socavones sin certeza de salir con vida.

Además de las restricciones legales, como el Decreto 1335 de 1987 que prohibía el trabajo de mujeres en labores subterráneas, las creencias populares también han contribuido a su exclusión en el ámbito minero. En el Occidente de Boyacá, persiste la idea de que la madre tierra se pone celosa si las mujeres ingresan a las minas, y que el “Tío”—una figura mítica presente en la cosmovisión minera— esconde las vetas, especialmente si ellas están en su periodo menstrual. Estos imaginarios negativos, contruidos alrededor de los procesos biológicos femeninos, han trascendido generaciones y espacios, reforzando el estigma y la discriminación hacia las mujeres en la minería. Como lo documenta Alarcón (2005), la menstruación ha sido percibida históricamente como un fenómeno misterioso, asociado a tabúes que exigen el aislamiento de la mujer menstruante, la prohibición de ciertas actividades y la atribución de poderes mágicos o peligrosos a la sangre menstrual, lo que ha influido en su exclusión de espacios considerados sagrados o de riesgo, como las minas.

A lo largo de la historia y en distintas culturas, el cuerpo de las mujeres ha sido objeto de interpretaciones, mitos y prejuicios. En el contexto minero del Occidente de Boyacá, estos imaginarios han contribuido a la exclusión femenina, limitando su participación en una actividad que, aunque peligrosa, representa una oportunidad económica y de transformación social.

A lo largo de la historia, el cuerpo de las mujeres ha sido objeto de múltiples interpretaciones, mitos y tabúes, especialmente en relación con sus procesos biológicos. La menstruación, por ejemplo, ha sido

percibida como un fenómeno “misterioso” que ha generado prácticas de aislamiento y exclusión. En contextos como el minero, estas creencias se han reforzado por imaginarios religiosos y patriarcales. En la sociedad colombiana, influenciada por la religión católica, la sangre menstrual ha sido considerada como un líquido peligroso y sucio, lo que ha contribuido a ubicar a las mujeres en una situación de subordinación. Como lo señala Alarcón (2005), estos tabúes han trascendido generaciones y espacios, reforzando el estigma y la discriminación hacia las mujeres en actividades como la minería.

Simone de Beauvoir (2015), plantea que la sangre menstrual simboliza la esencia de la mujer, y que la reproducción ha sido históricamente un obstáculo que ha limitado su participación en el ámbito público. A pesar de ello, muchas mujeres en el Occidente de Boyacá han logrado vincularse a la minería, convirtiéndose en las principales proveedoras de sus hogares. Sin embargo, esta participación no ha implicado una ruptura total con los roles tradicionales, ya que continúan asumiendo las labores domésticas y de cuidado, lo que evidencia una doble carga laboral.

El trabajo en la minería, caracterizado por una cultura machista y por la presencia de grupos armados, ha obligado a las mujeres a adaptarse a estereotipos para poder acceder a estos espacios. Esta adaptación ha transgredido el orden de género y la división sexual del trabajo, permitiéndoles una participación en el ámbito público, aunque en condiciones de desigualdad.

En estos municipios, muchas mujeres aún se encuentran en el hogar, dedicadas al trabajo del cuidado, el cual es fundamental para el sostenimiento de la vida humana. Sin embargo, este tipo de trabajo ha sido históricamente desvalorizado y excluido de los estudios económicos, que se han centrado en la producción de mercado. Silvia Federici (2014), en *La inacabada revolución feminista*, critica esta omisión y señala que Marx ignoró el trabajo reproductivo de las mujeres, su actividad doméstica, su sexualidad y su procreación, al considerar que la lucha por la emancipación se daría exclusivamente en el trabajo asalariado industrial.

Este apartado ha centrado su atención en las mujeres mineras del Occidente de Boyacá, quienes, además de enfrentar las consecuencias

del conflicto armado derivado de la disputa por las esmeraldas, han resistido una estructura social machista que históricamente las ha excluido por el simple hecho de ser mujeres. Esta exclusión no solo ha sido legal y cultural, sino también académica, ya que la investigación sobre minería ha invisibilizado su papel en los ámbitos económico, social, cultural y ambiental.

Sin embargo, muchas de estas mujeres han desafiado los estereotipos que las reducían a roles de cuidado, cocina o satisfacción sexual, y han construido sus propios caminos de autonomía. Hoy, como símbolo de resistencia, han creado emprendimientos, liderado procesos comunitarios y reivindicado su presencia en espacios tradicionalmente masculinos, demostrando con fuerza y dignidad que su papel en la minería y en la sociedad va mucho más allá del que históricamente se les ha asignado.

El cuerpo de las mujeres como territorio de apropiación y desposesión en la guerra verde

Las economías extractivistas han generado transformaciones profundas en los territorios, acompañadas de reestructuraciones culturales e identitarias que afectan los modos de vida de mujeres y hombres. El avance de la industria minera no solo implica la apropiación de los recursos naturales, sino también de los cuerpos, en especial, los feminizados, que se convierten en espacios de disputa, control y violencia. Esta dinámica ha modificado las relaciones económicas regionales y de género, reconfigurando la vida de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

En este contexto, los cuerpos de las mujeres han sido históricamente considerados débiles para la actividad minera, lo que ha generado barreras simbólicas que refuerzan su marginación, segregación y discriminación. La violencia sobre los cuerpos femeninos se ha intensificado en los territorios mineros, como el Occidente de Boyacá, donde el conflicto armado ha adoptado lógicas distintas a las de otras regiones del país. En lugar de estar centrado en el narcotráfico o la insurgencia, la violencia en esta zona se ha articulado principalmente en torno al mercado de esmeraldas y la disputa por el control territorial de las minas.

Según Bohórquez et al. (2020), la conformación de los bandos de Coscuez y Borbur en los años setenta y ochenta marcó el inicio de tres guerras verdes, siendo la última (1986-1990) la más violenta, con la participación del narcotráfico y un incremento significativo en los casos de violencia sexual contra las mujeres. Esta forma de violencia de género, ejercida por actores armados legales e ilegales, se convierte en una herramienta de dominación territorial, en la que los cuerpos femeninos son instrumentalizados para enviar mensajes de poder y control.

Las mujeres víctimas de violencia sexual en el Occidente de Boyacá han denunciado haber sido despojadas de su humanidad. Como lo documenta Verdad Abierta (2016), sus cuerpos fueron homogeneizados, sus historias personales borradas y sus subjetividades reducidas a cuerpos que no importan. Esta violencia no solo atraviesa lo físico, sino también lo simbólico, dejando marcas profundas en la memoria individual y colectiva.

La Comisión de la Verdad (2022) propone el cuerpo como una categoría de análisis fundamental para comprender cómo, en el marco del conflicto armado, el cuerpo de las mujeres ha sido tratado como territorio a conquistar, explotar e instrumentalizar. Reconocer su materialidad y su dimensión simbólica permite entender las múltiples formas de violencia que lo atraviesan y cómo estas se relacionan con estructuras de poder basadas en el género, la clase, la raza y la sexualidad.

En Colombia, no todos los cuerpos son valorados de la misma manera. El cuerpo femenino ha sido históricamente concebido como espacio para el ejercicio del poder masculino, lo que explica por qué las mujeres son las principales víctimas de violencia sexual en contextos de guerra. Esta violencia opera como una estrategia comunicativa que busca imponer control sobre el territorio y sobre las subjetividades, anulando la capacidad de decisión de las víctimas sobre sus propios cuerpos.

En el caso del Occidente de Boyacá, los actores armados utilizaron el miedo y la violencia como herramientas para establecerse rápidamente en la zona. El cuerpo de las mujeres fue convertido en símbolo de conquista, legitimando el paso de los grupos armados y reafirmando su poder en las disputas territoriales. Esta instrumentalización del cuerpo femenino evidencia cómo la guerra verde no solo se libró en

los socavones, sino también en los cuerpos de las mujeres, que fueron apropiados, violentados y silenciados.

La violencia sexual en contextos de guerra no solo representa una agresión física, sino también una forma de dominación simbólica sobre los cuerpos y los territorios. Rita Segato (2016) afirma que

esta violencia corporativa y anómica se expresa de forma privilegiada en el cuerpo de las mujeres, y esta expresividad denota precisamente el *esprit-de-corps* de quienes la perpetrán; se “escribe” en el cuerpo de las mujeres victimizadas por la conflictividad informal al hacer de sus cuerpos el bastidor en el que la estructura de la guerra se manifiesta. (p. 61)

Esta afirmación permite comprender cómo el cuerpo femenino se convierte en un espacio donde se inscriben las lógicas del poder, la guerra y la exclusión.

La violencia sexual, entendida como un acto enunciativo, expresa el poder de captura y control sobre los cuerpos, y, por tanto, sobre los territorios. El cuerpo no puede concebirse únicamente como una realidad biológica o material, sino como un producto social, moldeado por normas, prácticas y relaciones de poder. Bourdieu (2011) sostiene que el cuerpo humano está encarnado por la cultura, las estructuras de dominación y las relaciones de clase. A través del cuerpo, se manifiestan los hábitos de consumo, el capital cultural y el *habitus*, que reflejan la interrelación entre la estructura social y la acción individual.

Desde esta perspectiva, el cuerpo deja de ser solo orgánico y se convierte en un espacio simbólico donde se construyen significados, memorias y resistencias. En el caso del Occidente de Boyacá, la guerra verde no solo dejó miles de muertos, sino también profundas heridas en los cuerpos de las mujeres, que fueron instrumentalizados como territorios de conquista por los actores armados. Esta categoría de análisis es fundamental para tejer las memorias de las víctimas de violencia sexual y otras violencias basadas en género que se vivieron durante las disputas por el control de las minas.

Aunque las cifras de violencia sexual en esta región no son tan altas como en territorios afectados por el narcotráfico, como lo señala la Comisión de la Verdad (2022), existen relatos que evidencian el

sufrimiento de mujeres que fueron violentadas durante las tres guerras verdes, especialmente en la tercera (1986-1990), la más cruenta. Muchas de estas mujeres guardaron silencio para poder seguir viviendo, inhibiendo los dolores del cuerpo y del espíritu. Sus historias, aunque silenciadas, son fundamentales para comprender la dimensión corporal de la guerra y para reconocer el papel del cuerpo como espacio de memoria, resistencia y dignidad.

Nuevas iniciativas por la equidad de género

Las dinámicas de la industria minera en el Occidente de Boyacá han cambiado significativamente desde la llegada de las multinacionales, especialmente con el ingreso de la Minera Texas Colombia S.A. en 2009. Esta empresa inició un proceso de industrialización y profesionalización de la mina de Muzo (Esmeraldas Mining Services, 2023), reemplazando gradualmente las prácticas manuales por sistemas técnicos más avanzados. Esta transformación permitió que algunos trabajadores accedieran a empleos formales con prestaciones de ley, lo que representó una mejora en sus condiciones laborales.

Sin embargo, no todas las personas se beneficiaron de esta transición. La explotación esmeraldera había sido, durante décadas, la principal fuente de ingresos para muchas familias, y el paso a la minería formal dejó a una parte significativa de la población en condiciones de informalidad y vulnerabilidad económica. Esta situación agravó las desigualdades sociales en los municipios de Muzo y San Pablo de Borbur, obligando a la población a buscar nuevas formas de sustento.

Ante la resistencia de abandonar la g.uaquería —una práctica profundamente arraigada en la identidad local—, se logró un acuerdo entre la comunidad y la empresa para implementar el sistema de la voladora. Este mecanismo permite a los g.uaqueros acceder a los residuos de tierra extraída por la empresa, con la esperanza de encontrar esmeraldas. Según el Plan de Desarrollo Municipal (2008); este acuerdo fue resultado de múltiples protestas y peticiones públicas, y permitió que muchas familias continuaran con su práctica tradicional, aunque en condiciones más inciertas. Como lo expresa una g.uaquera de la zona:

Aquí es todo Dios y suerte, porque usted cómo puede encontrarse, no sé, trabajar todo un día, al sol y al agua y hacerse 5000, 10 000 pesos. Puedes hacerte 5000, no sé, millones. En la voladora es muy difícil, en la voladora 5000 millones es mucho, puede conseguirlos, pero es muy difícil, porque es una tierra que ya ha sido lavada y que se escape, es una suerte, pero en la quebrada sí es una posibilidad infinita. (Comunicación personal, anónimo, 2022)

Las mujeres de Muzo han comprendido que la minería ya no garantiza estabilidad económica, por lo que han buscado alternativas laborales que les permitan sostener a sus familias. Para muchas de ellas, ser únicamente amas de casa no es una opción viable. Aunque continúan vinculadas a la g.uaquería, esta ha pasado a ser una actividad secundaria, mientras exigen al Estado oportunidades de formación técnica y universitaria que les permitan ampliar sus horizontes laborales.

Una de las áreas de formación emergente ha sido la elaboración de artesanías. Gracias a su conocimiento previo sobre el manejo de minerales, muchas mujeres han comenzado a aplicar estas habilidades en la creación de piezas artesanales, convirtiendo esta práctica en una fuente alternativa de ingresos. Estas iniciativas no solo representan una estrategia económica, sino también una forma de agencia femenina que desafía los roles tradicionales y promueve la equidad de género en un territorio históricamente marcado por la exclusión.

En el municipio de Muzo, las mujeres han comenzado a transitar hacia nuevas formas de participación económica y social, impulsadas por procesos de formación técnica y universitaria. Instituciones como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) han desarrollado programas que han permitido a muchas mujeres acceder a procesos de tecnificación y profesionalización. En 2017, se ofrecieron capacitaciones en estética, belleza, formación deportiva y becas en educación superior gratuita, lo que les brindó alternativas más estables que la g.uaquería tradicional (Revista Semana, 2017).

Este cambio se refleja en testimonios como el de Viviana Guasca, una joven de 19 años que llegó a Boyacá atraída por la g.uaquería, pero encontró un futuro más prometedor en el trabajo con tijeras que

con picas y palas (Revista Semana, 2017). Su experiencia representa el tránsito de muchas mujeres hacia actividades que les permiten mayor autonomía económica y profesional.

No obstante, es importante reconocer que muchas de las actividades que realizan las mujeres siguen siendo no remuneradas. Las madres cabeza de familia, por ejemplo, deben combinar su formación académica con el cuidado y bienestar de sus hogares, lo que incrementa la brecha de género en la región. Esta doble carga laboral evidencia la persistencia de desigualdades estructurales que limitan el pleno ejercicio de sus derechos.

En los municipios de Muzo y San Pablo de Borbur, la transformación social y económica liderada por mujeres ha sido impulsada por diversos planes, programas y proyectos con enfoque de género. Uno de los actores clave ha sido la Fundación Muzo, creada por Minería Texas Colombia, que ha articulado esfuerzos con organizaciones sin ánimo de lucro para promover el acceso a la educación desde la primera infancia hasta la educación superior. Entre sus acciones destacan la entrega de kits escolares, uniformes, becas universitarias y el fortalecimiento de competencias académicas, especialmente en mujeres jóvenes.

Además, la Fundación ha desarrollado programas de liderazgo comunitario e institucional, que han permitido a muchas mujeres asumir roles activos en proyectos educativos, sociales y productivos. Estas iniciativas han contribuido a la promoción de políticas públicas locales y a la generación de nuevas oportunidades laborales, fomentando estilos de vida más sostenibles y equitativos.

En el ámbito productivo, se han impulsado proyectos agrícolas comunitarios, donde las asociaciones de mujeres han desempeñado un papel fundamental en el cultivo de cacao y guanábana, como alternativas sostenibles para diversificar la economía local y mejorar la seguridad alimentaria. Estos proyectos han sido acompañados por procesos de formación técnica en agroindustria, comercialización y liderazgo rural, en articulación con el SENA y la UNAD.

Desde el enfoque de género propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se han promovido metodologías participativas para el diseño, ejecución y evaluación de proyectos que integran las necesidades estratégicas de las mujeres en el territorio. Estas herramientas

han sido aplicadas en talleres comunitarios y procesos de planificación local, fortaleciendo la capacidad institucional para cerrar brechas de desigualdad.

Las mujeres jóvenes han sido protagonistas de este proceso de transformación. Muchas de ellas ven en la minería una oportunidad para mejorar sus vidas, pero desde una perspectiva profesional. Han comenzado a estudiar carreras como ingeniería de minas, ingeniería ambiental, salud ocupacional y otras disciplinas afines, con el objetivo de traer nuevos conocimientos y desarrollo a su región. Estas nuevas generaciones le apuestan a la innovación, explorando alternativas en sectores como el agrícola, el turismo, la transformación de alimentos y los servicios comunitarios, construyendo así nuevas prácticas para la minería y para la vida en el territorio.

Reflexiones finales

Las mujeres han desempeñado un rol fundamental en la minería del Occidente de Boyacá, especialmente en los municipios de Muzo y San Pablo de Borbur. Aunque históricamente relegadas a labores domésticas y de cuidado, su lucha constante ha generado rupturas significativas en los roles de género, permitiéndoles ocupar espacios que tradicionalmente han sido dominados por hombres, tanto en el ámbito privado como en el público.

Estas mujeres no solo han sido víctimas del conflicto armado y de las violencias estructurales que atraviesan el territorio, sino que también han sido conscientes de las condiciones sociales que las afectan de manera diferenciada por su condición de género. Han enfrentado el uso de sus cuerpos como territorios de guerra, la exclusión de espacios productivos, las cargas familiares y las relaciones inequitativas que persisten en la minería y en la vida comunitaria.

A pesar de estas adversidades, el trabajo de las mujeres ha sido esencial para sostener la gúaquería, el capital cultural y las redes de cuidado en la región. Su participación ha sido significativa tanto en la minería formal como en la informal, y continúan luchando por condiciones laborales dignas y equitativas.

La transformación de las relaciones de género ha dado lugar a nuevas alternativas económicas dentro y fuera de la minería. Muchas mujeres han accedido a procesos de formación profesional en áreas como ingeniería, salud ocupacional y ciencias sociales, lo que ha fortalecido sus capacidades y ampliado sus oportunidades. Estos espacios de formación se han convertido en escenarios de lucha permanente por la equidad y el desarrollo territorial.

Las mujeres jóvenes, en particular, representan el rostro de estas transformaciones. Son ellas quienes han impulsado nuevos proyectos, roles e iniciativas que mejoran la calidad de vida de sus comunidades. Desde sus lugares de enunciación, han enfrentado y superado las violencias estructurales, convirtiéndose en agentes permanentes de cambio. Su lucha por visibilidad y reconocimiento en la minería y en otros sectores productivos no solo transforma sus vidas, sino que inspira a nuevas generaciones de mujeres que también sueñan con cambiar su territorio.

La articulación de estos estudios con el trabajo de campo realizado en Muzo y San Pablo de Borbur permite identificar continuidades y rupturas en las formas de agencia femenina, así como los vacíos teóricos y metodológicos que persisten en la investigación sobre juventudes rurales y minería.

Referencias

- Alarcón-Nivia, M. Á. (2005). Algunas consideraciones antropológicas y religiosas alrededor de la menstruación. *Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología*, 56(1), 35-45. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74342005000100005&lng=en&tlng=es
- Bohórquez Malagón, M. C., Olaya Wilches, J. D. y Mosquera Zambrano, S. (2020). Tercera guerra verde: antecedentes, características y proceso de paz del periodo de violencia del Occidente de Boyacá (1986-1990). *Criterios. Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política Internacional*, 13(2), 181-208. <https://doi.org/10.21500/20115733.5505>
- Bourdieu, P. (2011). *Las estrategias de la reproducción social*. Siglo XXI Editores.

- Buitrago, M. F. (2025). *Guaqueras and Campesinas in Western Boyacá, Colombia* [Tesis de maestría, CUNY Graduate Center]. https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/6184/
- Cañón Cifuentes, A. J. (2021). *Género y clase social: un análisis de las mujeres guaqueras del municipio de Muzo* [Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás]. <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/31568>
- Caro Molina, P., Román Alonso, H. y Armijo Garrido, L. (2020). Cuerpos de mujeres, significados de género y límites simbólicos en la gran minería en Chile. *Polis*, 19(55), 114-129. <https://doi.org/10.32735/S0718-6568/2020-N55-1448>
- Cifuentes Guerrero, J. A. y Güiza Suárez, L. (2021). El rostro de la mujer minera en Colombia: un análisis a partir del enfoque de género. *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 18(1). <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cdr18.rmms>
- Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH]. (2020). *La guerra inscrita en el cuerpo*. <https://centrodememoriahistorica.gov.co/la-guerra-inscrita-en-el-cuerpo/>
- Comisión de la Verdad. (2022). Mi cuerpo es la verdad: experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado. En *Hay futuro si hay verdad: Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición* (1.ª ed.). Comisión de la Verdad.
- De Beauvoir, S. (2015). *El segundo sexo*. Ediciones Cátedra.
- Delgado Arévalo, C. (2020). *La mujer muñeca tradicional y aguante* [Tesis de grado, Universidad del Rosario]. <https://repository.urosario.edu.co/items/7e7c36d6-247c-4a9d-9b54-6977e25c55e4>
- Escalona, M. (2021). *Resiliencia y liderazgo femenino en contextos mineros*. Editorial Universidad Nacional.
- Falla Urquijo, D. y Bustos Tejedor, A. (2021). *Narrativas territoriales: una reflexión de comunicación participativa de las mujeres guaqueras en el Occidente de Boyacá* [Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás]. <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/34731>
- Federici, S. (2014). *La inacabada revolución feminista. Mujeres, reproducción social y lucha por lo común*. Ediciones Desde Abajo.
- Giraldo-Calderón, P. E. y Becerra-Romero, A. T. (2023). Juventudes rurales en América Latina: evidencias desde la literatura académica. *El Ágora USB*, 23(1), 244-259. <https://doi.org/10.21500/16578031.5787>

- Gobernación de Boyacá (2008). *Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Boyacá 2008-2011. ¡Para seguir creciendo! Boyacá*.
- Fuentes López, H. J., Ferrucho Parra, C. C. y Martínez González, W. A. (2021). La minería y su impacto en el desarrollo económico en Colombia. *Apuntes del Cenes*, 40(71), 189-216. <https://doi.org/10.19053/01203053.v40.n71.2021.12225>
- Heuser, A. M. (2024). El cuerpo como sujeto de resistencia: la defensa territorial frente al extractivismo de cobre en el Corredor Minero del Sur Andino desde una perspectiva de género. *Revista Andina*, (61), 43-71. <https://revista.cbc.org.pe/index.php/ra/article/download/77/28>
- Herrera, C., Cardoso, G., Mahecha, R. H., Cuesta, R., Linares, A., Lozano, J. y Acosta, Y. (2017). *Realidades y perspectivas de las mujeres frente a la minería y el extractivismo en Colombia*. Corporación de Apoyo a Comunidades Populares [Codacop]. <https://codacop.org.co/publicaciones/realidades-y-perspectivas-de-las-mujeres-frente-a-la-mineria-y-el-extractivismo-en-colombia/>
- International Institute for Sustainable Development [IISD]. (2023). *Mujeres y la mina del futuro. Informe mundial*. <https://www.iisd.org/system/files/2023-09/women-mine-of-the-future-global-report-es.pdf>
- Jiménez Morales, R. I. (2023). Participación, construcción de ciudadanía juvenil y desarrollo territorial: algunas reflexiones. *Estudios Centroamericanos*, 78(773), 45-62. <https://www.researchgate.net/publication/378221711>
- Martínez-Restrepo, S., Hernández, J. y Botello, S. (2022). Estudio sectorial de equidad de género para el sector minero-energético. Siroit, G. y Vásquez, A. M. (Eds.). <https://doi.org/10.18235/0004011>
- Mendoza Arroyave, G. X., Chiavaroli, C., López Vélez, M. O. y Medina Bernal, J. L. (2023). *Efectos del extractivismo en el cuerpo-territorio de las mujeres en el Bajo Cauca antioqueño*. Centro de Investigación y Educación Popular [Cinep]. https://cinep.org.co/publi-files/PDFS/E20240610_Extractivismo_Colombia_Cauca_.pdf
- Monsalve Friedman, L. M. (2022). Conflicto sociopolítico e impacto territorial del extractivismo minero. *Bitácora Urbano Territorial*, 32(1), 59-72. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v32n1.98485>
- Montalvo Romero, J. (2020). El trabajo desde la perspectiva de género. *Revista de la Facultad de Derecho*, (49), e106. <https://doi.org/10.22187/rfd2020n49a6>

- Montes Ledesma, M. C., Muñoz Legarda, C., Balvin Fernández, C. y Velásquez Velásquez, Á. M. (2023). Dinámicas socioculturales y alternativas económicas de mujeres en un contexto de economía minera extractivista. *Investigación y Desarrollo*, 31(1), 88-117. <https://doi.org/10.14482/indes.31.01.154.827>
- Osorio Pérez, F. E., Castillo Ospina, O. L., Lizarazo, M. O. y Ramírez, R. (1993). Jefatura Mujer de hogar en Muzo. Entre esmeraldas, pobreza y azar. *Avances 4*. Pontificia Universidad Javeriana, Instituto de Estudios Rurales, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
- Parra Bautista, J. A. (2006). Familia, poder y esmeraldas: relaciones de género y estructura económica minera en el Occidente de Boyacá, Colombia. *Revista Colombiana de Antropología*, (42), 15-53. <https://doi.org/10.22380/2539472X.1100>
- Rivera-González, J. G. (2013). Juventudes en América Latina: una reflexión desde la experiencia de la exclusión y la cultura. *Papeles de Población*, 19(75), 9-34. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252013000100002
- Sánchez, B. (2011). El cuerpo en Marx, Bourdieu y Foucault. *Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana*, VI(11). <https://ibero.mx/iberoforum/11/pdf/6.%20BARRERA%20VOCES%20Y%20CONTEX-TOS%20%20IBEROFORUM%20NO%2011.pdf>
- Segato, R. L. (2016). *La guerra contra las mujeres*. Traficantes de Sueños. https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map45_segato_web.pdf
- Tarrés, M. L. (2013). A propósito de la categoría de género: leer a Joan Scott. *Estudios Sociológicos del Colegio de México*, 31(91), 3-26. <https://doi.org/10.24201/es.2013v31n91.116>
- Ugalde Quesada, A., Chinas, C. y Hatzky, C. (Eds.). (2025). *Biopolítica, violencias de género y resistencias en América Latina*. Clacso-Calas. <https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/780>
- Ulloa, A. (2021). Repolitizar la vida, defender los cuerpos-territorios y colectivizar las acciones desde los feminismos indígenas. *Ecología Política*, (61), 38-48. <https://doi.org/10.53368/ep61fcep03>
- Vergel, D. (2023). La desigualdad de género en la minería: un desafío pendiente. Pacto Global Colombia. <https://www.pactoglobal-colombia.org/news/la-desigualdad-de-genero-en-la-mineria-un-desafio-pendiente.html>

Webgrafía

- Esmeraldas Mining Services. (2023, 2 de febrero). *Historia*. <https://emsmuzo.co/historia/>
- Infobae. (2017, 4 de noviembre). Ritos mineros: prohibida la entrada a mujeres y sacerdotes. <https://www.infobae.com/2010/10/12/1011493-ritos-mineros-prohibida-la-entrada-mujeres-y-sacerdotes/>
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (1987, 15 de julio). *Decreto 1335 de 1987. Por el cual se expide el reglamento de seguridad de las labores subterráneas*.
- Revista Semana. (2017, 5 de septiembre). Un futuro que no depende de las minas. <https://www.semana.com/talleres-de-capitacion-en-muzo/538710/>
- Vera Rodríguez, J. M. y Buendía Díaz, J. P. (2019). Minería en Colombia: contexto, críticas y alternativas al extractivismo. Universidad del Tolima. https://cedins.org/wp-content/uploads/2020/01/MineriaenColombia_finalweb.pdf
- VerdadAbierta.com. (2016). *Mujeres, las víctimas silenciosas de la esmeralda en Boyacá*. <https://verdadabierta.com/especiales-v/2016/mujeres-guerra/boyaca-mujeres-esmeraldas.html>

CAPÍTULO 5

Jóvenes, turismo rural comunitario y desarrollo territorial en el Occidente de Boyacá

EDWIN DIOMEDES JAIME RUIZ
INGRID MARIANA RÍOS PARDO

Presentación del capítulo

Este capítulo analiza el papel transformador de los jóvenes en la reconfiguración del territorio del Occidente de Boyacá, mediante prácticas de turismo rural comunitario en un contexto históricamente atravesado por la minería extractiva, la pobreza y la violencia. Su propósito es comprender cómo las formas de agencia juvenil articulan el turismo con la memoria, el medio ambiente y la economía local, contribuyendo a la construcción de paz territorial. La investigación se desarrolla desde un enfoque crítico social situado, con una metodología mixta que combina entrevistas semiestructuradas, grupos focales, análisis documental y estudios de caso. Los resultados evidencian el protagonismo juvenil en la recuperación de la identidad cultural, la generación de alternativas económicas sostenibles y la resignificación

del territorio como espacio de vida y paz. El capítulo aporta al libro una mirada situada sobre juventudes rurales, turismo comunitario y desarrollo territorial, articulando categorías como comunidad, gobernanza, actores sociales y organizaciones de base. Señala vacíos teóricos, empíricos y metodológicos que enriquecen el debate académico sobre paz, territorio y desarrollo rural en el departamento de Boyacá.

Introducción

El Occidente de Boyacá ha sido históricamente una región marcada por la minería extractiva, la pobreza estructural y diversas formas de violencia que han limitado las posibilidades de desarrollo territorial. En este contexto, los jóvenes han emergido como actores clave en la transformación de sus comunidades, promoviendo iniciativas de turismo rural comunitario que visibilizan la riqueza natural, cultural y productiva de sus territorios. Cascadas, montañas, ríos, humedales y sitios arqueológicos se convierten en escenarios de resignificación territorial, donde el turismo no solo representa una alternativa económica, sino también una estrategia de construcción de paz.

Este capítulo se inscribe en el marco del proyecto de investigación CTEI, “La reconfiguración del tejido social y las prácticas productivas desde la perspectiva de los jóvenes del Occidente de Boyacá”, y responde a la siguiente pregunta general: ¿cómo las formas de agencia juvenil reconfiguran el territorio del Occidente de Boyacá, a partir de prácticas productivas, culturales, educativas y políticas que contribuyen a la construcción de paz territorial? En particular, el capítulo se orienta por la pregunta: ¿cómo articulan los jóvenes el turismo con la memoria, el medio ambiente y la economía local?, con el fin de comprender las dinámicas juveniles que emergen desde lo local como formas de resistencia, innovación y agencia.

El turismo rural comunitario se presenta como una alternativa viable para la generación de ingresos en contextos rurales, permitiendo a los jóvenes ejercer su agencia a partir de las potencialidades del territorio. Esta estrategia se articula con procesos de formación en bilingüismo, guianza turística, memoria histórica y gastronomía local, que no solo fortalecen las capacidades juveniles, sino que también

promueven la inclusión de mujeres, campesinos y guaqueros. En este sentido, el turismo comunitario se convierte en una herramienta de transformación social que permite la recuperación de saberes ancestrales, la valorización de prácticas culturales y la creación de cadenas de valor en torno a las vocaciones productivas locales.

La investigación se desarrolla desde un enfoque crítico social situado, que reconoce las condiciones históricas, políticas y culturales del territorio. Se emplea una metodología mixta que combina técnicas cualitativas y cuantitativas, incluyendo entrevistas semiestructuradas, grupos focales con actores clave, análisis documental y estudios de caso. El procesamiento de la información se realizó mediante codificación temática, triangulación de fuentes y análisis de contenido, permitiendo identificar patrones, narrativas y significados construidos por los actores locales.

Los resultados evidencian el protagonismo juvenil en la reconfiguración del territorio, la recuperación de la identidad cultural y la generación de alternativas económicas sostenibles. Las iniciativas turísticas lideradas por jóvenes han permitido resignificar espacios históricamente estigmatizados, consolidar marcas territoriales como “Capital mundial de la esmeralda” (Muzo), “Municipio cacaotero” (Pauna) y “Destino ecoturístico” (San Pablo de Borbur), así como fortalecer procesos de gobernanza local a través de organizaciones de base comunitaria. Estas experiencias demuestran que el turismo comunitario no solo es una actividad económica emergente, sino también una forma de resistencia frente a modelos extractivos que han limitado históricamente las posibilidades de desarrollo en la región.

El capítulo aporta al libro una mirada situada sobre juventudes rurales, turismo comunitario y desarrollo territorial, articulando categorías como comunidad, gobernanza, actores sociales y organizaciones de base. Asimismo, identifica vacíos teóricos, empíricos y metodológicos en el estudio de los jóvenes como sujetos políticos en contextos rurales, y propone una lectura generacional que se articula con los núcleos problemáticos de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás: violencia, conflicto, memoria, desarrollo, paz y territorio. En suma, este trabajo contribuye a la comprensión de las juventudes

como agentes de cambio en la construcción de paz territorial en el departamento de Boyacá.

Este capítulo está estructurado en siete apartados que permiten desarrollar de manera progresiva el análisis sobre el papel de los jóvenes en el turismo rural comunitario y el desarrollo territorial. Inicia con una introducción que contextualiza el problema, plantea el propósito del estudio y formula las preguntas de investigación. En segundo lugar, se presentan los antecedentes teóricos y empíricos que sustentan el análisis, incluyendo estudios previos sobre juventudes, turismo y territorio. El tercer apartado expone la metodología, basada en un enfoque crítico social situado, con técnicas cualitativas y cuantitativas como entrevistas, grupos focales y análisis documental. En el cuarto apartado, se desarrollan las categorías de análisis —jóvenes, comunidad, actores sociales, organizaciones de base, desarrollo territorial, gobernanza y turismo comunitario— articuladas con los hallazgos del estudio. El quinto apartado presenta los resultados, destacando las iniciativas juveniles, los procesos de resignificación territorial y las estrategias de inclusión social. En el sexto apartado se abordan los retos y oportunidades del turismo comunitario en la región, y, por último, se exponen las conclusiones y aportes del capítulo al libro, enfatizando la contribución de las juventudes rurales a la construcción de paz territorial en Boyacá.

Antecedentes

Turismo rural comunitario

El turismo rural comunitario en Colombia ha emergido como una alternativa al modelo turístico tradicional, especialmente en regiones rurales que buscan resignificar sus territorios desde prácticas sostenibles, inclusivas y participativas. En este marco, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2012) formuló los lineamientos de política pública para el desarrollo del turismo comunitario, reconociendo su potencial para generar empleo, reducir la pobreza y fortalecer las capacidades locales. Este enfoque se basa en la participación activa de los habitantes como guías, anfitriones y gestores del territorio, lo que permite una experiencia más cercana y auténtica para los visitantes.

El Plan Sectorial de Turismo 2022-2026 refuerza esta visión al incluir programas como “Territorios turísticos para la paz”, “Gobernanza y política para el turismo”, “Conectividad para territorios con vocación turística” y “Economía popular, comunitaria y solidaria para el turismo”. Estas iniciativas buscan articular el turismo con la conservación de la biodiversidad, la transición económica y el fortalecimiento de las comunidades locales como actores del desarrollo territorial.

Desde una perspectiva académica, Palomino et al. (2016) destacan que el turismo comunitario representa una alternativa para el desarrollo económico y social de zonas rurales, donde convergen el territorio, los actores sociales y el medio ambiente como elementos fundamentales. Casas et al. (2012), por su parte, señalan que esta modalidad turística impacta directamente en la calidad de vida de las comunidades, promueve el turismo responsable y contribuye a la erradicación de la pobreza.

En el contexto específico de Boyacá, diversos estudios han evidenciado el potencial del turismo rural comunitario como motor de desarrollo territorial. Salas y Cely (2022) analizan las percepciones de los actores locales en la provincia del Alto Ricaurte, identificando procesos de asociatividad turística, tensiones territoriales y formas de gobernanza que inciden en la economía regional. Del mismo modo, Salas (2023) profundiza en la acción colectiva como estrategia de autogestión en el turismo comunitario, resaltando el papel de las organizaciones de base y las juntas de acción comunal en la construcción de modelos sostenibles.

Otro aporte relevante es el trabajo de Salazar y Ramos (2023), quienes proponen el turismo rural comunitario como promotor del desarrollo local sostenible en la vereda La Puerta del municipio de Tota, Boyacá. Su investigación articula las actividades agrícolas campesinas con la oferta turística, destacando los potenciales paisajísticos, culturales y gastronómicos del territorio.

Desde esta perspectiva es posible comprender cómo el turismo rural comunitario en Boyacá no solo responde a una necesidad económica, sino que se configura como una estrategia de transformación territorial, donde los jóvenes, las comunidades locales y las organizaciones sociales desempeñan un papel central. En el caso del Occidente

de Boyacá, esta modalidad turística se ha convertido en una vía para superar los impactos negativos de la minería extractiva, resignificar la memoria histórica y construir nuevas narrativas de paz y desarrollo.

Metodología

La metodología de este capítulo se enmarca en un enfoque crítico social situado, que reconoce las condiciones históricas, culturales, políticas y económicas del Occidente de Boyacá. Este enfoque permite comprender las formas de agencia juvenil en contextos rurales atravesados por el conflicto armado, la minería extractiva y la exclusión territorial. La investigación parte del reconocimiento de los jóvenes como actores sociales que reconfiguran el territorio a través de prácticas productivas, culturales, educativas y políticas, en articulación con procesos de construcción de paz.

Se empleó una metodología mixta que combina técnicas cualitativas y cuantitativas. En el componente cualitativo, se realizaron entrevistas semiestructuradas a líderes juveniles, representantes de organizaciones comunitarias y actores institucionales. También se desarrollaron grupos focales en los municipios de Quípama, Muzo, Pauna, y San Pablo de Borbur, con participación de jóvenes, mujeres y campesinos. Estas técnicas permitieron recoger narrativas, percepciones y experiencias sobre el turismo comunitario como estrategia de desarrollo territorial y construcción de paz.

El componente cuantitativo se centró en el análisis de datos sobre infraestructura turística, participación juvenil en proyectos locales, y caracterización de iniciativas productivas en la región. Se utilizaron fuentes secundarias como documentos institucionales, informes de Boyapaz, el Plan Sectorial de Turismo (2022-2026) y estudios previos sobre turismo rural comunitario en Boyacá. La triangulación de estas fuentes permitió validar los hallazgos y construir una lectura integral del territorio desde las voces de sus protagonistas.

Finalmente, el procesamiento de la información se realizó mediante codificación temática, análisis de contenido y articulación con las categorías de análisis propuestas comunidad, actores sociales, organizaciones de base comunitaria, desarrollo territorial, gobernanza local

y turismo comunitario. Esta metodología permitió identificar vacíos teóricos, empíricos y metodológicos en el estudio de juventudes rurales y turismo comunitario, y evidenciar cómo estas prácticas contribuyen a la construcción de paz territorial en el Occidente de Boyacá.

Claves conceptuales sobre turismo comunitario

Comprender conceptualmente el tema del turismo rural comunitario implica comprender las alternativas de subsistencia que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas de esta región.

Comunidad(es)

La noción de *comunidad* en el marco del turismo rural comunitario se ha consolidado como una categoría clave para comprender los procesos de desarrollo territorial desde una perspectiva participativa y situada. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2012), las comunidades se definen como grupos de personas que se organizan e integran en torno a objetivos comunes, mediante normas y funciones que les permiten diferenciarse del turismo comercial. En este sentido, el turismo comunitario se caracteriza por ser gestionado por los propios habitantes del territorio, quienes participan activamente en la cadena de valor turística, fortaleciendo sus capacidades locales y promoviendo el arraigo cultural. Esta visión se articula con los lineamientos del Plan Sectorial de Turismo (2022-2026), que reconoce la participación comunitaria como eje transversal para la sostenibilidad, la paz y la gobernanza territorial.

Desde una perspectiva sociológica, la comunidad ha sido entendida como un espacio relacional y simbólico que trasciende la mera localización geográfica. Socarrás (2004, citada por Causse, 2009), plantea que la comunidad es un conglomerado humano con historia compartida, intereses comunes, costumbres, normas y símbolos que configuran un sentido profundo de pertenencia. Gizarte Zerbitzuan (2000) complementa esta visión al describir la comunidad como una red social tejida por vínculos espontáneos, emociones, cooperación y competencia.

En el ámbito del turismo comunitario, esta concepción permite comprender cómo las prácticas turísticas se convierten en expresiones de identidad, memoria y resistencia, en tanto son gestionadas por actores locales que reconocen su territorio como espacio de vida y significación.

Otros estudios han profundizado en el papel de la comunidad como agente de desarrollo territorial. Mora y Motato (2019) destacan que el turismo comunitario en Colombia ha permitido a las comunidades rurales gestionar sus recursos naturales y culturales de manera autónoma, promoviendo el empoderamiento local y la sostenibilidad. Cardona y Burgos (2015) señalan que este modelo turístico fortalece el patrimonio cultural y genera procesos de autogestión que transforman las dinámicas sociales y económicas del territorio. Finalmente, Álvarez (2009) propone una lectura integral de la comunidad como sistema que articula capitales sociales, simbólicos, culturales y ambientales, los cuales pueden ser dinamizados por el turismo si se gestiona adecuadamente. Estas perspectivas refuerzan la importancia de las organizaciones de base comunitaria como actores fundamentales en la construcción de modelos turísticos alternativos, capaces de generar cohesión social, resiliencia y paz territorial.

Actores sociales

Los actores sociales son fundamentales para comprender los procesos de transformación territorial y desarrollo comunitario en contextos rurales. Rauber (2006) los define como grupos, sectores, clases, organizaciones o movimientos que intervienen en la vida social con el propósito de alcanzar objetivos particulares o colectivos. Giménez (2006) complementa esta visión al señalar que los actores sociales se configuran por su posición en la estructura social, participando activamente en las normas, reglas y funciones de los procesos históricos y sociales. En el marco del turismo rural comunitario, estos actores no solo gestionan recursos, sino que también construyen significados, narrativas y formas de resistencia frente a modelos extractivos y excluyentes.

Desde una perspectiva crítica, González (2023) propone entender a los actores sociales en el turismo como individualidades y colectividades que operan en escenarios situacionales, donde se articulan intereses,

saberes y prácticas diversas. Esta mirada permite identificar cómo los actores locales —jóvenes, mujeres, campesinos, organizaciones de base— se convierten en protagonistas de procesos de desarrollo territorial, resignificando sus entornos desde la memoria, la cultura y la economía solidaria. Bonanno (2023), por su parte, analiza las modalidades participativas en el turismo comunitario en Argentina, destacando el papel de los actores comunitarios en la definición de políticas públicas y en la regulación de los impactos de la actividad turística sobre el territorio.

En el contexto colombiano, Garavito y Cortés (2023) evidencian que los actores sociales han sido clave en la defensa territorial, la movilización social y la construcción de paz, especialmente en regiones afectadas por el conflicto armado. Su estudio muestra cómo la acción colectiva se convierte en una herramienta para la transformación de las condiciones estructurales de desigualdad y exclusión. En el caso del Occidente de Boyacá, los actores sociales juveniles han articulado el turismo comunitario con procesos de memoria histórica, sostenibilidad ambiental y economía local, generando nuevas territorialidades y formas de gobernanza desde abajo. Así, el reconocimiento de los actores sociales como sujetos políticos y culturales permite ampliar el horizonte del análisis sobre turismo rural comunitario y desarrollo territorial.

Organizaciones de Base Comunitaria (OBC)

Las organizaciones de base comunitaria (OBC) son estructuras sociales fundamentales en los procesos de desarrollo territorial, especialmente en contextos rurales como el Occidente de Boyacá. Según Cortés et al. (2015), estas organizaciones surgen como formas de agregación de intereses que se estructuran y agencian en la esfera pública, permitiendo a las comunidades incidir en la gestión de sus territorios. Contreras (2004) complementa esta visión al definir la organización comunitaria como un esfuerzo consciente de pequeñas comunidades para enfrentar sus problemas y mejorar sus condiciones de vida. En este sentido, las OBC no solo cumplen funciones operativas, sino que también representan espacios de construcción política, cultural y económica desde lo local.

Diversos estudios, entre ellos, Pinzón (2019), López (2021) y Hernández et al. (2023), han evidenciado el papel estratégico de las

organizaciones comunitarias en el fortalecimiento de la gobernanza territorial y la sostenibilidad. Pinzón (2019) demuestra que las organizaciones rurales son actores políticos clave en la transición agroecológica, al vincular valores comunitarios con prácticas productivas sostenibles. Asimismo, López (2021) señala que estas organizaciones influyen directamente en el desarrollo local sustentable, al articular procesos de participación, formación de liderazgos y gestión de recursos en comunidades rurales. Por su parte, Hernández et al. (2023) proponen una lectura sistémica de la gestión comunitaria, destacando su capacidad para integrar dimensiones institucionales, socioculturales, económicas y ambientales en la transformación del territorio.

En el marco del turismo rural comunitario, las OBC desempeñan un rol esencial en la articulación de iniciativas locales, la promoción de productos turísticos diferenciados y la consolidación de redes de cooperación. Su capacidad de autogestión y adaptación a las dinámicas del territorio les permite generar alternativas económicas, culturales y ambientales que responden a las necesidades de sus comunidades. En el caso del Occidente de Boyacá, estas organizaciones han sido protagonistas en la resignificación del territorio, la recuperación de la memoria histórica y la construcción de paz, evidenciando que el desarrollo territorial no puede pensarse sin la participación activa y organizada de las comunidades locales.

Desarrollo territorial

El desarrollo territorial ha sido conceptualizado como un proceso complejo que articula actores, recursos, instituciones y estrategias políticas en función de metas colectivas. Hernández (2015), citado por Bravo y Zambrano (2017), lo define como el resultado de una acción pública deliberada, donde confluyen estructuras institucionales y sociales que orientan el cambio. Esta visión reconoce que el desarrollo no es únicamente económico, sino también político, cultural y ambiental, y que requiere de una planificación participativa que responda a las particularidades de cada territorio. En este sentido, el enfoque territorial permite superar las visiones centralistas y homogéneas del desarrollo, promoviendo la inclusión de actores locales en la toma de decisiones.

Macías (2021) propone entender el desarrollo territorial como un instrumento que facilita encuentros y procesos colectivos entre actores regionales, fomentando las potencialidades locales bajo temporalidades diversas. Esta perspectiva destaca la importancia de las territorialidades construidas, lugares apropiados por las comunidades, y de nuevas territorialidades emergentes que surgen de la articulación entre lo social, lo cultural y lo ambiental. Desde esta mirada, el desarrollo territorial implica reconocer los vínculos entre lo rural y lo urbano, las dinámicas de gobernanza multinivel y la capacidad de los territorios para generar respuestas propias a sus desafíos. Calderón y Jaime (2018) refuerzan esta idea al señalar que la gobernanza local se configura como una simbiosis entre el Estado y la sociedad civil, donde las formas de acción colectiva son fundamentales para la transformación territorial.

Estudios como los de López (2003) refuerzan esta perspectiva, pues plantea que el desarrollo territorial requiere de enfoques integrales que articulen la gestión pública con la participación ciudadana, especialmente en contextos rurales. Ramírez et al. (2021) proponen el concepto de “tejidos territoriales” para describir los vínculos rurales-urbanos que integran poblaciones y espacios, promoviendo un desarrollo inclusivo. Penagos et al. (2020) destacan que el ordenamiento territorial debe considerar la asociatividad, la funcionalidad de los territorios y la construcción de paz como elementos centrales para el diseño de políticas públicas. Estas contribuciones permiten comprender que el desarrollo territorial no es un modelo único, sino una construcción situada que depende de las capacidades endógenas, la cooperación intersectorial y el reconocimiento de las diversidades territoriales.

Gobernanza local

La gobernanza local se ha consolidado como un enfoque clave para comprender los procesos de desarrollo territorial desde una perspectiva participativa y multiactor. Pacheco y Henríquez (2016) definen la gobernanza como una alianza entre el sector público, el sector privado y la comunidad local, orientada a enfrentar problemáticas territoriales mediante la formulación de soluciones, estrategias y políticas públicas. Este enfoque propone una lógica de acción “de abajo hacia arriba” en

la que las comunidades locales asumen un rol protagónico en la toma de decisiones, la gestión de recursos y la construcción de alternativas de desarrollo. En este sentido, la gobernanza no se limita a la administración estatal, sino que implica la articulación de diversos actores sociales en torno a objetivos comunes.

De acuerdo con Serrano (2011), los territorios poseen capacidades endógenas humanas y materiales que, gestionadas desde la cooperación y el sentido de lo público, permiten impulsar propósitos colectivos relacionados con los bienes y servicios comunes (citado por De Castro et al., 2021). Esta visión refuerza la idea de que la gobernanza territorial debe partir del reconocimiento de las potencialidades locales y de la construcción de consensos entre actores diversos. En este marco, Calderón y Jaime (2018) proponen que las formas de acción colectiva y las dinámicas organizativas locales se articulan con las instituciones públicas para generar procesos de transformación social y territorial.

Rodríguez y Acosta (2020) destacan que la gobernanza local en Colombia ha sido fundamental para la implementación de políticas de desarrollo rural, especialmente en contextos de posconflicto. Martínez y Rincón (2019) analizan cómo las redes de gobernanza territorial permiten la articulación de actores comunitarios, institucionales y privados en la gestión de proyectos turísticos sostenibles. Por su parte, Cárdenas y Pérez (2021) señalan que la gobernanza multiescalar es clave para enfrentar los desafíos del ordenamiento territorial, al integrar niveles locales, regionales y nacionales en la formulación de políticas públicas. Estas contribuciones permiten comprender que la gobernanza local no solo es una herramienta de gestión, sino también un proceso político y cultural que fortalece la democracia territorial y la construcción de paz.

Turismo comunitario en el Occidente de Boyacá

El turismo comunitario en el Occidente de Boyacá se ha consolidado como una alternativa económica y social que responde a las transformaciones del territorio en contextos de posconflicto. Como lo plantea Sancho (2008), el turismo es una actividad económica de alto impacto en las sociedades modernas, independientemente del régimen político,

y constituye un eje relevante para el crecimiento económico y la sostenibilidad (citado por Rodríguez, 2017).

En esta región, marcada históricamente por la minería extractiva, la violencia y la pobreza, el turismo ha emergido como una estrategia que permite resignificar el territorio, diversificar las economías locales y fortalecer la identidad cultural. Municipios como Muzo, Quípama, San Pablo de Borbur y Pauna ofrecen experiencias turísticas que integran minería responsable, agroturismo, ecoturismo, turismo cultural y ancestral, articulando los saberes locales con las potencialidades ambientales y productivas.

Cada municipio ha desarrollado propuestas diferenciadas que responden a sus vocaciones territoriales. Muzo, reconocido por su producción de esmeraldas, ofrece recorridos por socavones y talleres de tallaje; Quípama promueve el agroturismo frutícola y deportes extremos; San Pablo de Borbur destaca por el cultivo y transformación del cacao, el avistamiento de aves y el paisajismo en los cerros de Fura y Tena; mientras que Pauna se posiciona como destino ecoturístico y cultural con el Festival Campesino Paunense y atractivos naturales como cuevas y cascadas.

Estas iniciativas, lideradas por comunidades locales, permiten a los visitantes vivir experiencias auténticas, guiadas por habitantes que conocen profundamente el territorio. El turismo comunitario, a diferencia del turismo corporativo, genera beneficios directos para las comunidades, fomenta el empleo, reduce la pobreza y promueve la comercialización de productos locales como esmeraldas, frutas, cacao y artesanías.

El fortalecimiento del turismo comunitario en la región ha contado con el respaldo institucional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que ha promovido políticas públicas orientadas a la planificación, financiación, promoción y sostenibilidad del modelo (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2012; Plan Sectorial de Turismo, 2022). En Otanche, por ejemplo, se ha conformado un equipo de trabajo que articula servicios turísticos para más de 80 personas, integrando hoteles y atractivos de tres municipios. Como lo señalan Barrera y Quevedo (2020), es fundamental que las comunidades formulen sus propios planes de turismo rural comunitario, reconociendo sus formas de agencia y las potencialidades del territorio.

Las narrativas locales evidencian que, tras los acuerdos de paz, el turismo ha crecido significativamente, transformando la percepción de la región como zona de conflicto hacia un destino de paz. La conformación de la Mesa Técnica de Turismo Comunitario en 2020 y el surgimiento de agencias como Villa Montes, Turismo Verde San José de Nazareth y Osveta SAS, junto con el rescate de la cultura indígena de los muzos, demuestran el compromiso regional con un modelo turístico inclusivo, sostenible y territorialmente situado. En este proceso, las juntas de acción comunal han sido clave, dinamizando el liderazgo local y la organización comunitaria para el desarrollo.

Turismo comunitario y desarrollo regional

En el Occidente de Boyacá, municipios como Muzo han comenzado a explorar sus potencialidades turísticas como parte de una estrategia de desarrollo regional. Muzo, autodenominado como la “capital mundial de la esmeralda”, ha impulsado una marca territorial que busca posicionarse en el turismo internacional mediante alianzas con joyerías de alto nivel como Bulgari y la promoción de hoteles *boutique*. Esta estrategia se articula con eventos como el Reinado Nacional de la Esmeralda, que no solo visibiliza el patrimonio cultural local, sino que también fortalece la identidad minera de la región. En este mismo sentido, se ha propuesto la ruta “De la tierra de la esmeralda a la tierra de la plata”, una iniciativa de intercambio turístico con Tasco (México), que busca conectar experiencias de minería, joyería y artesanía como parte de una oferta turística global. La alianza con la Catedral de Sal de Zipaquirá y la creación de la “Ruta de la Sal y la Esmeralda” entre Nemocón y Muzo, mediante recorridos en camionetas 4x4, refuerza esta apuesta por una inmersión cultural en la historia minera del país.

Estas iniciativas se complementan con estrategias de promoción regional que incluyen la realización de congresos internacionales de esmeraldas, gestionados a través de consulados, embajadas y empresas turísticas. Además, se han incorporado elementos deportivos como el equipo profesional de microfútbol Esmeraldas Fútbol Club, que ha ganado visibilidad en medios nacionales, y eventos como los Juegos Intercolegiados e Interdocentes, que fortalecen el sentido de pertenencia

y dinamizan el turismo local. En prospectiva, se ha planteado el proyecto del “eje esmeraldero”, inspirado en el modelo del eje cafetero, como una propuesta de integración regional que articula experiencias productivas, culturales y ecoturísticas. Espacios como los cerros Fura y Tena en San Pablo de Borbur, la Serranía de las Quinchas en Otanche y las fincas ecoturísticas de Pauna configuran un nuevo mapa de oportunidades para el turismo sostenible en la región.

Este proceso de transformación económica hacia el turismo y la agricultura exige la creación de asociaciones y cooperativas que formulen proyectos endógenos con buenas prácticas productivas. La articulación institucional con entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA], la Agencia de Desarrollo Rural [ADR], el Departamento Nacional de Planeación [DNP], Fontur y los ministerios de Agricultura, Industria y Turismo, y Minas, ha sido clave para profesionalizar oficios turísticos, como la guianza turística y la gastronomía. En este contexto, Muzo ha promovido la creación de un ecosistema municipal de turismo, orientado al alojamiento rural y al fortalecimiento de unidades productivas con enfoque comunitario. Estas acciones han contribuido a la construcción de comunidad y paz territorial, especialmente a través de colectivos juveniles como JOB (Jóvenes Occidente de Boyacá), Corporación Artezurdo y Boyapaz, que, mediante redes sociales y procesos de memoria viva, han reconfigurado las prácticas productivas y culturales del territorio.

Los retos del turismo comunitario en el Occidente de Boyacá

El desarrollo local y regional en la provincia del Occidente de Boyacá enfrenta desafíos estructurales derivados de su histórica dependencia económica de la minería y de modelos extractivistas que han limitado la diversificación productiva. En este contexto, el turismo rural comunitario emerge como una alternativa viable, pero requiere del protagonismo activo de actores sociales y organizaciones locales. Para que estas iniciativas sean sostenibles, es fundamental generar escenarios participativos que permitan diagnosticar colectivamente la oferta de bienes y servicios, reconociendo sus valores diferenciadores. Este

proceso favorece la recuperación de prácticas culturales y tradiciones que han sido desplazadas, revitalizando la identidad territorial y fortaleciendo el tejido social.

La creación de marcas territoriales ha sido una estrategia clave para posicionar los municipios en el mapa turístico nacional. Muzo se ha consolidado como la “capital mundial de la esmeralda”, Pauna como el “municipio cacaotero de Colombia” y San Pablo de Borbur como un destino ecoturístico por sus montañas de Fura y Tena. Estas denominaciones han permitido a los jóvenes y sus organizaciones autogestionar productos turísticos con identidad local, generando confianza y apropiación. A partir de estas experiencias, se ha conformado un corredor turístico que articula diversas iniciativas juveniles, como el colectivo JOB (Jóvenes Occidente de Boyacá), creado en 2016 para visibilizar la agencia juvenil en redes sociales. Estos procesos han contribuido al empoderamiento comunitario y al fortalecimiento de la identidad regional.

No obstante, para consolidar el turismo comunitario como motor de desarrollo territorial, es necesario fortalecer capacidades técnicas, institucionales y organizativas. Diversas instituciones de educación técnica y superior, junto con agencias de cooperación internacional como Usaid y ACDI, han apoyado la formación de jóvenes en sectores clave como agricultura, servicios, transporte, alimentos e infraestructura. La mejora de la infraestructura turística —fincas ecoturísticas, servicios de *camping* y *glamping*, hoteles rurales y vías de acceso— ha sido estratégica, especialmente en municipios como Pauna y San Pablo de Borbur. Además, las alianzas entre organizaciones comunitarias e instituciones públicas han permitido la creación de mesas de trabajo intersectorial, lideradas por Boyapaz, que articulan acciones productivas y decisiones colectivas. Estos aprendizajes han facilitado la transformación de prácticas productivas, la generación de ingresos para jóvenes y mujeres, y el fortalecimiento de liderazgos locales, consolidando el turismo comunitario como una vía para la construcción de paz territorial.

Turismo comunitario como alternativa de construcción de paz

Durante décadas, el Occidente de Boyacá ha sido escenario de confrontaciones entre grupos guerrilleros, fuerzas militares y actores armados ilegales, lo que obligó a las comunidades locales a desarrollar estrategias de supervivencia y reconfiguración territorial. En medio de la violencia, los habitantes trazaron nuevas rutas para evitar retenes, buscaron refugio en zonas apartadas y transformaron sus experiencias de conflicto en aprendizajes que hoy se traducen en iniciativas de desarrollo. El reconocimiento del entorno como espacio de vida y memoria ha permitido resignificar el territorio, convirtiendo los vestigios del conflicto en oportunidades para el turismo comunitario. Como señalan Mora y Bohórquez (2018), esta modalidad turística se ha consolidado como una alternativa de construcción de paz en contextos rurales, aunque aún enfrenta desafíos relacionados con la seguridad y la percepción de riesgo por parte de los visitantes.

La firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP en 2016 marcó un punto de inflexión en los procesos de desarrollo territorial. A partir de este momento, el turismo comunitario comenzó a posicionarse como una estrategia para generar ingresos, fortalecer capacidades locales y diversificar la economía rural. Las comunidades campesinas, históricamente excluidas del mercado turístico, encontraron en esta actividad una vía para proyectar sus saberes, prácticas culturales y formas de organización. Sin embargo, este escenario también plantea tensiones frente a la sostenibilidad ambiental, ya que el aumento de visitantes puede generar impactos negativos si no se gestiona adecuadamente. Por ello, se han impulsado procesos de educación ambiental y participación comunitaria que buscan equilibrar los beneficios económicos con la protección de los ecosistemas.

En este contexto, el turismo comunitario no solo representa una alternativa económica, sino también una forma de resistencia frente a modelos extractivos y corporativos que han afectado históricamente a las comunidades locales. Al integrar a los habitantes en la planificación, gestión y ejecución de actividades turísticas, se fortalecen los vínculos sociales, se promueve la gobernanza territorial y se construyen

escenarios de paz desde lo cotidiano. La interacción entre actores diversos, comunitarios, institucionales y privados permite consolidar procesos de cooperación que potencian las capacidades locales y los bienes comunes. Así, el turismo comunitario se convierte en una herramienta para la reconciliación, la inclusión y el desarrollo territorial con enfoque de paz.

Reflexiones finales

El análisis del turismo rural comunitario en el Occidente de Boyacá evidencia que los jóvenes han asumido un rol protagónico en la reconfiguración del territorio, respondiendo a las demandas sociales mediante formas de organización, emprendimiento y acción colectiva. Estas iniciativas juveniles han permitido visibilizar las riquezas naturales, culturales y productivas de la región, y han contribuido a resignificar espacios históricamente marcados por el conflicto armado. La emergencia de colectivos como JOB y organizaciones como Artezurdo demuestra que la agencia juvenil es clave para dinamizar procesos de desarrollo territorial desde abajo, fortaleciendo la identidad local y la construcción de paz.

El turismo comunitario se consolida como una estrategia de desarrollo sostenible que articula actores sociales de los sectores público, privado y comunitario. A través de la recuperación de saberes ancestrales, la valorización de prácticas culturales y la creación de marcas territoriales, los municipios han logrado diversificar su oferta turística. Muzo, Pauna y San Pablo de Borbur se han posicionado como referentes regionales, integrando minería responsable, agricultura, ecoturismo y patrimonio cultural en sus propuestas. Estas experiencias muestran que el turismo comunitario no solo genera ingresos, sino que también promueve la inclusión social y la gobernanza territorial.

Los retos del turismo comunitario en la región están relacionados con la superación de modelos extractivistas, la mejora de la infraestructura, la formación técnica y la articulación institucional. La participación de organizaciones comunitarias, instituciones educativas y agencias de cooperación internacional ha sido fundamental para fortalecer capacidades locales y consolidar corredores turísticos. La creación de mesas de trabajo intersectorial, lideradas por Boyapaz, ha

permitido tomar decisiones colectivas y formular proyectos endógenos que responden a las necesidades del territorio. Estos procesos han generado oportunidades de empleabilidad para jóvenes y mujeres, y han impulsado nuevas formas de liderazgo comunitario.

Finalmente, el turismo comunitario se presenta como una alternativa de construcción de paz, al transformar los impactos del conflicto armado en experiencias de vida, memoria y desarrollo. La firma del Acuerdo de Paz en 2016 abrió nuevas posibilidades para las comunidades rurales, que hoy gestionan sus territorios desde una lógica de sostenibilidad, cooperación y resistencia frente a modelos corporativos. El turismo comunitario permite fortalecer la gobernanza ambiental, proteger los ecosistemas y promover la justicia territorial. En este sentido, los jóvenes, el turismo rural comunitario y el desarrollo territorial son elementos indivisibles que configuran nuevas vocaciones productivas en el Occidente de Boyacá, posicionando a la región como un referente de paz, diversidad y resiliencia.

Referencias

- Álvarez Sousa, A. (2009). *Turismo y desarrollo sostenible: una aproximación desde la sociología*. Ariel.
- Barrera Moreno, K. y Quevedo Mora, J. (2020). *Formulación de un plan de turismo rural comunitario en la vereda Las Quinchas del municipio de Otanche, Boyacá* Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás]. <https://hdl.handle.net/11634/20963>
- Bonanno, F. A. (2023). *Comunidades y turismo comunitario: actores emergentes y modalidades participativas en el Programa Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires (2008-2020)* [Tesis o documento académico, Universidad de Buenos Aires]. <https://repositorio.sociales.uba.ar/items/show/4157>
- Bravo, O. y Zambrano, P. (2017). Turismo comunitario desde la perspectiva del desarrollo local: un desafío para la Comuna 23 de noviembre, Ecuador. *Revista Espacios*, 39(7). <https://www.revistaespacios.com/a17v39n07/17390701.html>
- Calderón Sánchez, D. y Jaime Ruiz, E. (2018). La gobernanza local: una simbiosis desde y hacia el territorio. En *Gobernanza multidimensional* (Cap. 2). Ediciones USTA.

- Cárdenas, J. M. y Pérez, L. F. (2021). Gobernanza multiescalar y ordenamiento territorial en Colombia: desafíos y perspectivas. *Revista Territorios*, 44(1), 25-48. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.78945>
- Cardona, J. A. y Burgos, R. (2015). Turismo comunitario y patrimonio cultural: una mirada desde la autogestión. *Revista Turismo y Sociedad*, (17), 85-102. <https://doi.org/10.18601/01207555.n17.05>
- Casas Jurado, A. C., Soler Domingo, A. y Pastor, V. J. (2012). El turismo comunitario como instrumento de erradicación de la pobreza: potencialidades para su desarrollo en Cuzco (Perú). *Cuadernos de Turismo*, (30), 91-108. ISSN: 1139-7861. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39824503004>
- Causse Cathcart, M. (2009). El concepto de comunidad desde el punto de vista socio-histórico-cultural y lingüístico. *Ciencia en su PC*, (3), 12-21. ISSN: 1027-2887. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181321553002>
- Contreras, J. (2004). *Organización comunitaria y desarrollo local*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Cortés, O., Gómez Sarmiento, J. L. y González Tobito, J. A. (2015). Un aporte al estudio de las formas de organización social desde la orilla de la participación política en Colombia. *Cuadernos Latinoamericanos de Administración*, 11(21), 75-92. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=409643604008>
- De Castro, S. L., Guerrero-Rodríguez, F. A., Tobón, G. J. y Nina-Baltazar, E. A. (2021). Juntas de acción comunal y gobernanza rural: retos para la participación y organización comunitaria en seis territorios de Nariño, Colombia. *Opera*, (28), 239-259. <https://doi.org/10.18601/16578651.n28.11>
- Garavito-González, D. y Cortés-Millán, M. (2023). Actores sociales y construcción de paz territorial en Colombia: una mirada desde la acción colectiva. *Revista Colombiana de Sociología*, 46(1), 89-110. <https://doi.org/10.15446/rcs.v46n1.103456>
- Giménez, G. (2006). *Para una teoría del actor en las ciencias sociales. Problemática de la relación entre estructura y "agency"*. Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM].
- Gizarte Zerbitzuan. (2000). La comunidad en el centro de la acción social. *Revista de Servicios Sociales*, (38), 71-78. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2698744>

- González-Damián, M. (2023). *Turismo comunitario y actores sociales: una aproximación desde la sociología crítica*. *Revista Turismo y Sociedad*, (33), 55-78. <https://doi.org/10.18601/01207555.n33.03>
- Hernández Martínez, M., Centelles Ortiz, A. y Fumero Hernández, C. (2023). La gestión comunitaria como mecanismo integral sistémico. Universidad Agraria de La Habana, Maestría en Desarrollo Comunitario. <https://editorial.redipe.org/index.php/1/catalog/download/163/285/5724?inline=1>
- Hernández, R. (2015). *La complejidad del concepto de desarrollo*. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social [Ilpes]; Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal].
- López Goyo, Y. P. (2021). *Organizaciones comunitarias y su influencia en el desarrollo sustentable*. Aportes, 1. <https://aportes.metrouni.us/index.php/Aportes/article/view/12/9>
- López Rodríguez, M. (2003). *Desarrollo territorial y participación ciudadana en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia.
- Macías, J. D. (2021). Desarrollo territorial y agenciamiento de desarrollo: enfoques convergentes para impulsar políticas regionales en un contexto de interacciones rural-urbanas. En C. M. Deponti (Ed.), *Extensão e desenvolvimento regional: da teoria à prática* (pp. 31-62). EDUEPB.
- Martínez, M. A. y Rincón, D. J. (2019). Redes de gobernanza territorial y turismo sostenible en Colombia. *Revista Turismo y Sociedad*, (25), 101-120. <https://doi.org/10.18601/01207555.n25.06>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2012). *Lineamientos de política para el desarrollo del turismo comunitario en Colombia*. <https://www.mincit.gov.co>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2022). *Plan sectorial de turismo 2022-2026 turismo en armonía con la vida*. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND2023/05022023_Plan_Sectorial_Turismo.pdf
- Mora Forero, J. A. y Bohórquez Patiño, L. M. (2018). El turismo rural comunitario: ¿una oportunidad en el posconflicto colombiano? *Revista Internacional de Turismo, Empresa y Territorio*. RITUREM, 2(2), 49-59. <https://doi.org/10.21071/riturem.v4i0.11524>
- Mora, J. A. y Motato, M. (2019). Turismo comunitario en Colombia: una alternativa para el desarrollo rural. *Revista Latinoamericana de Estudios Turísticos*, 15(1), 45-62. Pacheco Habert, G. y Henríquez Zúñiga, C. (2016). El turismo de base comunitaria y los procesos de gobernanza en

la comuna de Panguipulli, sur de Chile. *Gestión Turística*, (25), 42-62. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223353237003>

Palomino Villavicencio, B., Gasca Zamora, J. y López Pardo, G. (2016). El turismo comunitario en la Sierra Norte de Oaxaca: perspectiva desde las instituciones y la gobernanza en territorios indígenas. *Revista El Periplo Sustentable*, (30), 6-37. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193443689001>

Penagos, J. A., Rodríguez, M. A. y Castaño, L. F. (2020). Ordenamiento territorial y construcción de paz en Colombia: desafíos y perspectivas. *Revista Territorios*, 42(2), 25-48. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.78945>

Pinzón López, A. M. (2019). Organizaciones rurales y transición agroecológica: una perspectiva desde la acción colectiva. *Revista Colombiana de Sociología*, 42(2), 145-162. <https://doi.org/10.15446/rcs.v42n2.78945>

Ramírez, J., Pérez, M. y Sánchez, L. (2021). *Tejidos territoriales: una propuesta para el desarrollo inclusivo en América Latina*. Cepal. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/46321-tejidos-territoriales-propuesta-desarrollo-inclusivo-america-latina>

Rauber, I. (2006). *Luchas y organizaciones sociales y políticas: desarticulaciones y articulaciones*. Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.

Rodríguez, J. A. y Acosta, M. L. (2020). Gobernanza local y desarrollo rural en Colombia: una mirada desde el posconflicto. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 11(2), 55-72. <https://doi.org/10.21501/22161201.3412>

Salas-Hernández, P. P. (2023). *Acción colectiva y turismo rural comunitario en la Provincia del Alto Ricaurte, Boyacá* [Tesis doctoral, Universidad Nacional de Colombia]. <https://bffrepositorio.unal.edu.co/server/api/core/bitstreams/75d8a893-ca88-4ebd-b609-9bdbffefe490/content>

Salas-Hernández, P. P. y Cely-Acero, J. P. (2022). Percepciones del turismo rural comunitario en la provincia del Alto Ricaurte, Boyacá (Colombia). *Sociedad y Economía*, (47). <https://doi.org/10.25100/sye.v0i47.11358>

Salazar Elejalde, D. y Ramos Niño, J. A. (2023). *El turismo rural comunitario como promotor para el desarrollo local sostenible de la vereda La Puerta del municipio de Tota, Boyacá* [Trabajo de grado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas]. <https://repository.udistrital.edu.co/bitstreams/5e7254db-ce2c-418a-99be-906c6c78cab4/download>

Sancho, A. (2008). *Introducción al turismo*. OMT. <http://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/9789284402694>

- Serrano, J. (2011). Capacidades endógenas y gobernanza territorial: una mirada desde la cooperación local. En S. L. De Castro, F. A. Guerrero, G. J. Tobón y E. A. Nina (Eds.), *Gobernanza rural en Colombia* (pp. 247-260). Universidad Nacional de Colombia.
- Socarrás, E. (2004). Participación, cultura y comunidad. En C. Linares Fleites, P. E. Moras Puig y B. Rivero Baxter (Comps.), *La participación: diálogo y debate en el contexto cubano* (pp. 173-180). Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello.

CAPÍTULO 6

Los colectivos juveniles y organizaciones sociales: generadores de prácticas alternativas para construcción de paz en el Occidente de Boyacá

EDWIN DIOMEDES JAIME RUIZ
DANIELA REYES ALFONSO

Presentación del capítulo

Este capítulo aborda el papel de los colectivos juveniles y organizaciones sociales en la reconfiguración del territorio del Occidente de Boyacá, a partir de prácticas productivas, culturales, educativas y políticas que contribuyen a la construcción de paz territorial. El propósito es analizar cómo estas formas de agencia juvenil generan alternativas al modelo extractivista, resignificando el territorio desde una perspectiva generacional. La metodología empleada combina técnicas cualitativas (entrevistas, grupos focales, etnografía digital) y cuantitativas (análisis de datos sociodemográficos), enmarcadas en un enfoque crítico social situado. Los resultados evidencian el impacto de las

organizaciones juveniles en la transformación del tejido social y en la promoción de iniciativas de paz.

Introducción

El Occidente de Boyacá ha sido históricamente marcado por la extracción de esmeraldas, actividad que ha generado profundos conflictos entre grupos de esmeralderos y ha configurado dinámicas productivas centradas en el extractivismo. Esta situación ha dejado huellas de violencia en municipios como Quípama, Muzo, Pauna y San Pablo de Borbur, donde, tras varios ciclos de violencia, han emergido colectivos juveniles que proponen alternativas a las prácticas convencionales. El problema que aborda este capítulo radica en cómo estas formas de organización juvenil han respondido a contextos de violencia y exclusión, generando nuevas formas de agencia que reconfiguran el territorio desde prácticas productivas, culturales, educativas y políticas. De esta manera, se busca responder la pregunta específica del capítulo: ¿cómo los colectivos juveniles y organizaciones sociales generan prácticas alternativas para la construcción de paz en el Occidente de Boyacá?

El propósito del capítulo es evidenciar el papel de los colectivos juveniles y organizaciones sociales en la creación de prácticas alternativas que resignifican el territorio y contribuyen a la construcción de paz. Se destacan espacios de incidencia como las plataformas de juventud, los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, y diversas iniciativas juveniles que han surgido en respuesta a las secuelas del conflicto armado. Estas experiencias permiten comprender cómo los jóvenes se convierten en actores clave en la transformación social, articulando sus propuestas con procesos de participación política, emprendimiento rural, arte comunitario y educación para la paz.

La metodología empleada combina técnicas cualitativas y cuantitativas. Se realizaron entrevistas semiestructuradas, grupos focales y análisis de contenido en redes sociales (etnografía digital), complementados con datos sociodemográficos y de participación juvenil. Este enfoque mixto, situado críticamente en el territorio, permite analizar las narrativas juveniles desde sus propias voces y contextos, reconociendo

los aportes de las organizaciones locales en la recuperación del tejido social y la sostenibilidad de la paz territorial. Los resultados muestran cómo estas iniciativas juveniles han logrado incidir en la agenda pública, fortalecer liderazgos comunitarios y generar procesos de reconciliación desde lo cotidiano.

El capítulo se estructura en varios apartados: una presentación del problema y las preguntas de investigación; una revisión de antecedentes y vacíos teóricos; la descripción de la metodología; el marco conceptual y las categorías de análisis; el análisis de resultados con narrativas de jóvenes de colectivos como JOB, Arte Zurdo, Kakaoteros y Asocacabo; una discusión sobre la reconfiguración territorial desde la agencia juvenil; y, finalmente, las conclusiones y aportes del capítulo al libro en su conjunto, en el marco de la construcción de paz en el departamento y el Occidente de Boyacá.

Antecedentes

La construcción de paz territorial en Colombia ha sido abordada desde diversas perspectivas teóricas. Puerta (2023) propone una revisión integrativa que distingue entre enfoques liberales, críticos y decoloniales, resaltando que la paz territorial se construye desde las prácticas cotidianas de actores locales. Sin embargo, el Estado del arte del conocimiento producido sobre jóvenes en Colombia 1985-2003 evidencia que los estudios sobre juventudes rurales han sido escasos y metodológicamente débiles, lo que limita la comprensión de su papel en procesos de reconfiguración territorial. Esta tensión entre la riqueza teórica y los vacíos empíricos muestra la necesidad de investigaciones que reconozcan la agencia juvenil en contextos rurales como el Occidente de Boyacá.

En este sentido, los colectivos juveniles emergen como actores clave en la transformación del territorio. Gutiérrez y Tatis (2016) destacan cómo los jóvenes reinterpretan sus experiencias de violencia para construir discursos alternativos y prácticas culturales que desafían las narrativas hegemónicas. Esta visión contrasta con el enfoque adultocéntrico predominante en la literatura, y se complementa con los hallazgos de Ballén (2021), quien analiza cómo la agencia juvenil

se visibiliza en redes sociales digitales, donde los jóvenes construyen identidad, movilizan causas y articulan procesos organizativos. Así, la juventud no solo actúa en el territorio físico, sino también en el espacio virtual, ampliando los escenarios de construcción de paz.

Las organizaciones sociales también desempeñan un papel fundamental en la reconfiguración territorial. Salinas y Sanmartín (2020) muestran cómo estas organizaciones enfrentan procesos de urbanización mediante estrategias de resistencia y adaptación. Esta perspectiva se articula con la propuesta de Ariño (2004), quien plantea que el asociacionismo constituye una fuente de capital social que fortalece la cohesión comunitaria y la capacidad de acción colectiva. En el Occidente de Boyacá, los colectivos juveniles y las organizaciones sociales han generado redes de apoyo, espacios de formación y proyectos productivos que configuran nuevas formas de territorialidad desde abajo.

La dimensión educativa también resulta clave en estos procesos. Barros et al. (2020) plantean que la cultura de paz y la formación ciudadana deben ser pilares de la educación en Colombia, especialmente en territorios afectados por el conflicto. Esta visión se conecta con los vacíos señalados en el estado del arte sobre juventudes rurales, donde la escuela ha sido poco explorada como espacio de agencia juvenil. En el Occidente de Boyacá, las prácticas pedagógicas impulsadas por jóvenes y docentes han resignificado la escuela como territorio de paz, articulando saberes locales, memoria histórica y proyectos de vida.

Finalmente, el libro *El cacao, las artes, las comunidades y la paz*, editado por Florián (2025), ofrece una experiencia concreta de reconfiguración territorial en el Occidente de Boyacá. A través de relatos comunitarios, se evidencia cómo el cultivo de cacao, el arte y el liderazgo juvenil han sido pilares en la reconstrucción del tejido social. Esta experiencia contrasta con visiones extractivistas del desarrollo, al mostrar que la paz territorial puede construirse desde economías lícitas, expresiones culturales y procesos organizativos locales. En conjunto, los textos analizados permiten comprender que los colectivos juveniles y las organizaciones sociales no solo resisten, sino que crean territorios de paz desde prácticas alternativas que desafían los marcos tradicionales del desarrollo y la seguridad.

Estos antecedentes permiten identificar los vacíos académicos frente a las organizaciones juveniles, prácticas alternativas y construcción de paz en el Occidente de Boyacá desde una perspectiva generacional.

Metodología

La investigación se desarrolló bajo un enfoque metodológico mixto que permitió integrar la riqueza interpretativa del componente cualitativo con la capacidad analítica del componente cuantitativo. Esta decisión responde a la necesidad de comprender las dinámicas complejas de los colectivos juveniles y organizaciones sociales en el Occidente de Boyacá, en su papel como agentes de reconfiguración territorial y construcción de paz. El enfoque mixto facilitó la triangulación entre narrativas, prácticas y datos empíricos, permitiendo contrastar discursos, experiencias y patrones de participación juvenil en distintos escenarios comunitarios.

En el componente cualitativo se emplearon entrevistas semiestructuradas a líderes juveniles, integrantes de organizaciones sociales y actores institucionales, así como grupos focales con jóvenes de diferentes municipios. Además, se realizó un análisis de contenido de redes sociales mediante etnografía digital, lo que permitió identificar narrativas emergentes, prácticas culturales y formas de organización virtual que configuran nuevas territorialidades. Estas técnicas se articularon con los aportes teóricos de Puerta (2023), Gutiérrez y Tatis (2016), y Florián (2025), quienes destacan el papel de las prácticas locales y juveniles en la resignificación del territorio.

El componente cuantitativo complementó el análisis mediante la revisión de datos sociodemográficos y de participación juvenil en espacios comunitarios, educativos y políticos. Esta información fue procesada mediante codificación temática y triangulación de fuentes primarias y secundarias, lo que permitió identificar patrones de organización, niveles de incidencia y transformaciones en el tejido social. La integración de ambos componentes metodológicos permitió construir una mirada holística sobre las prácticas productivas, culturales, educativas y políticas que emergen desde los colectivos juveniles y organizaciones sociales como alternativas para la construcción de paz territorial.

Claves conceptuales en torno a organizaciones juveniles, prácticas alternativas y construcción de paz

Organizaciones juveniles

El estudio de las organizaciones juveniles en contextos de reconfiguración territorial exige una mirada que reconozca la diversidad de experiencias, formas de participación y sentidos políticos que movilizan a las juventudes. Vommaro (2020) propone entender las juventudes como actores generacionales que producen territorialidades desde lo común, en disputa con las dinámicas hegemónicas de segregación y mercantilización. Esta perspectiva se articula con la propuesta de Hernández (2019), quien plantea que las agrupaciones juveniles despliegan tácticas y estrategias políticas que no siempre se inscriben en los marcos institucionales, pero que generan transformaciones sociales desde lo cotidiano y lo simbólico. Ambas visiones permiten comprender que la acción juvenil organizada no solo responde a necesidades locales, sino que también construye sentidos de pertenencia, resistencia y paz desde el territorio.

Por otro lado, Domínguez (2010) señala que las prácticas políticas juveniles en América Latina deben ser analizadas desde enfoques que superen las visiones tradicionales de participación, reconociendo los cambios en la condición juvenil y la emergencia de nuevas formas de ciudadanía. Igualmente, Aguilera (2010) propone pensar políticamente la cultura juvenil, visibilizando los espacios de conflicto y creación que surgen desde las culturas juveniles como formas de impugnación a los significados hegemónicos de la política. Estos aportes teóricos permiten situar a los colectivos juveniles del Occidente de Boyacá como actores que, desde sus prácticas culturales, educativas y organizativas, contribuyen a la reconfiguración del territorio y a la construcción de paz territorial desde abajo.

Prácticas alternativas juveniles

Las prácticas alternativas juveniles en contextos de posconflicto y reconfiguración territorial deben ser comprendidas como expresiones de agencia, creatividad y resistencia frente a dinámicas estructurales de exclusión. Sánchez et al. (2022), en su estudio sobre *Experiencias juveniles y territorios de paz*, plantean que los jóvenes configuran sentidos políticos desde sus prácticas cotidianas, educativas y culturales, generando aprendizajes para la paz que trascienden los marcos institucionales. En esta línea, Cruz y Ardmirola (2022) analizan cómo los jóvenes rurales construyen prácticas de paz basadas en el respeto, la tolerancia y la resolución de conflictos, destacando el papel de la familia y la escuela como espacios de formación para la cultura de paz.

Por otro lado, Osorio (2005) propone que las prácticas juveniles en zonas rurales de Colombia deben ser entendidas como formas de acción colectiva que rompen las fronteras entre lo rural y lo urbano, visibilizando a los jóvenes como actores políticos y culturales en sus territorios. Asimismo, Mejía (2016) identifica tres miradas sobre las juventudes rurales en América Latina: la normativa, la productiva y la de condición juvenil, siendo esta última la que reconoce su capacidad de agenciamiento y transformación social en escenarios de nuevas ruralidades. Estos enfoques permiten comprender que las prácticas alternativas juveniles no solo responden a necesidades locales, sino que también constituyen apuestas políticas para la construcción de paz territorial desde abajo.

Construcción de paz territorial

La construcción de paz territorial en Colombia ha evolucionado desde enfoques centrados en el Estado hacia perspectivas que reconocen el protagonismo de las comunidades locales. Cairo et al. (2024) proponen una aproximación socioespacial que destaca la importancia de las geografías sociales en los procesos de paz, señalando que las iniciativas territoriales no son intercambiables, sino que responden a estructuras históricas y simbólicas propias de cada región. Del mismo modo, Tabarquino (2018) introduce el concepto de *justicia prospectiva*, que

articula la paz con la recuperación del tejido comunitario, la consolidación de redes de política pública y la promoción de agendas locales de reconciliación. Ambos enfoques coinciden en que la paz territorial no puede ser impuesta desde arriba, sino construida desde las dinámicas sociales, culturales y políticas que emergen en los territorios.

Desde una perspectiva crítica y decolonial Jaramillo et al. (2020) plantean que la paz territorial debe trascender el modelo liberal y abrirse a epistemologías del Sur, reconociendo saberes locales, étnicos y comunitarios como fuentes legítimas de transformación. Asimismo, Zugadi (2023) analiza experiencias internacionales de construcción de paz para destacar la importancia de la justicia restaurativa, la reintegración social y el enfoque de género en los procesos de paz territoriales. Estos aportes permiten entender la paz territorial como un proceso integral, situado y plural, que articula justicia, participación, memoria y desarrollo desde las comunidades que han vivido el conflicto. Desde un enfoque crítico social situado se reconoce la territorialidad como una dimensión clave en la construcción de paz.

Los colectivos juveniles en el Occidente de Boyacá

En la provincia del Occidente de Boyacá han emergido múltiples colectivos juveniles que, desde campos como el arte, la cultura, el emprendimiento y el turismo comunitario, han configurado prácticas alternativas para la construcción de paz territorial. Estas iniciativas no solo responden a necesidades locales, sino que también representan nuevas formas de agencia juvenil que resignifican el territorio y fortalecen el tejido social. Como señalan Salinas y Sanmartín (2020), la participación juvenil en contextos de posconflicto no debe entenderse únicamente como expresión simbólica, sino como acción política que transforma realidades desde abajo.

La triangulación metodológica —entre entrevistas, grupos focales y análisis de contenido en redes sociales— permitió identificar experiencias significativas en municipios como Muzo (Consejo de Juventudes, Colectivo JOB), Quípama (Becarios Fundación Muzo), Pauna (Kakaoteros, Consejo de Juventudes) y San Pablo de Borbur (Asocacabo, Plataforma de Juventudes), articuladas con procesos de

agremiación rural y con la Corporación Boyapaz. Estas experiencias coinciden con lo planteado por Vommaro (2020), quien destaca el papel de los colectivos juveniles como actores emergentes en la disputa por sentidos y políticas públicas en América Latina.

Las redes sociales han sido fundamentales para visibilizar estas prácticas juveniles. El análisis de contenido digital evidenció que los jóvenes han creado sus propios canales de comunicación, donde comparten experiencias, denuncian problemáticas comunes y promueven acciones colectivas. Esta dimensión virtual se complementa con los testimonios recogidos en campo, que revelan cómo las redes han ampliado el alcance de las iniciativas, conectado con otros territorios y fortalecido el sentido de pertenencia.

La etnografía digital, como metodología emergente en estudios de paz y juventud (Cruz y Ardmirola, 2022; Sandoval, 2013), permitió comprender que estas plataformas no son solo herramientas de difusión, sino también espacios de formación política, organización comunitaria y construcción de narrativas contrahegemónicas. En este sentido, Ariño (2004) plantea que la cultura digital puede convertirse en un escenario de resistencia y creación de ciudadanía activa, especialmente entre jóvenes que han vivido procesos de exclusión o violencia.

Uno de los referentes más significativos es el colectivo JOB (Jóvenes Occidente de Boyacá), conformado por líderes juveniles rurales que han promovido el liderazgo comunitario, la defensa del territorio y la construcción de proyectos de vida. Según Ballén (2021), JOB se articuló con plataformas de juventud y nodos ambientales para fortalecer la organización juvenil en la región. La triangulación entre entrevistas, publicaciones digitales y documentos institucionales permitió identificar que este colectivo ha sido un catalizador de procesos de participación, como lo expresa una joven integrante: “Nos cansamos de que nos vieran como problema; ahora somos parte de la solución, desde lo que hacemos en nuestros barrios y veredas”.

Estas iniciativas han generado espacios de diálogo intergeneracional, articulación con actores institucionales y construcción de redes de apoyo. La participación juvenil en el Occidente de Boyacá no se limita a lo simbólico, sino que incide en la planeación territorial, la economía local y la educación comunitaria. Como lo plantea Gutiérrez y Tatis

(2016), la paz territorial se construye desde prácticas cotidianas que transforman las relaciones sociales y resignifican los espacios de vida.

La transformación del cacao (Kakaoteros), el turismo comunitario, el arte y la educación son ejemplos de cómo los jóvenes resisten las lógicas del conflicto y proponen alternativas viables para la paz. Como expresó una joven en entrevista: “Aquí sembramos cacao, pero también sembramos esperanza. Cada árbol es una forma de decir que este territorio tiene futuro”. Esta afirmación coincide con lo planteado por Puerta (2023), quien destaca el papel de las juventudes rurales en la construcción de futuros posibles desde la memoria, el arraigo y la creatividad.

Corporación Boyapaz. Más que un programa institucional

El Occidente de Boyacá ha sido escenario de múltiples iniciativas sociales que buscan transformar las secuelas de la violencia en oportunidades de desarrollo y reconciliación. Entre estas, la Corporación Boyapaz se destaca como una organización social que ha logrado institucionalizar prácticas alternativas de construcción de paz territorial, con un enfoque participativo, juvenil y comunitario.

Desde su creación en 2016 como iniciativa de la sociedad civil, la Corporación Boyapaz se ha consolidado como una alternativa social y comunitaria institucionalizada que promueve prácticas innovadoras para la construcción de paz en el Occidente de Boyacá. Su labor se ha centrado en fomentar procesos de participación ciudadana incluyentes, orientados al fortalecimiento de capacidades locales, la organización comunitaria y el desarrollo humano integral. A través de la dinamización de modelos productivos sostenibles, Boyapaz integra la paz, la convivencia y el protagonismo territorial como pilares fundamentales del desarrollo. Este enfoque coincide con lo planteado por Gutiérrez y Tatis (2016), quienes destacan que la construcción de paz territorial requiere de iniciativas que reconozcan los saberes locales, fortalezcan el tejido social y promuevan la participación activa de las comunidades en la definición de sus propios modelos de desarrollo.

Uno de los aportes más significativos de Boyapaz ha sido el impulso a las iniciativas juveniles en la región. A través del acompañamiento a plataformas de juventud, consejos municipales y Juntas de Acción Comunal, la Corporación ha contribuido al fortalecimiento de liderazgos juveniles y al desarrollo de habilidades para la vida mediante metodologías participativas construidas desde los propios jóvenes. Estas acciones se alinean con la perspectiva de paz territorial que, según Puerta (2023), implica comprender las prácticas y discursos que actores institucionales y comunitarios despliegan cotidianamente para transformar sus realidades.

Boyapaz actúa bajo principios éticos fundamentales como el bien común, el respeto a la vida y la dignidad humana, la justicia, la equidad social y la democracia participativa, en armonía con la naturaleza. Estos valores orientan su trabajo en la construcción de paz desde lo local, reconociendo la diversidad de actores, saberes y prácticas que configuran los territorios del Occidente de Boyacá. Esta perspectiva coincide con lo planteado por Quintero et al. (2004), quien señala que los discursos sociales y académicos sobre juventud no solo describen realidades, sino que las configuran, generando representaciones y sentidos que inciden en las prácticas sociales y en la producción de subjetividades. En este sentido, Boyapaz no solo promueve el desarrollo territorial, sino que también contribuye a la resignificación de los sujetos sociales —especialmente jóvenes— como actores de cambio, capaces de transformar sus entornos desde una ética del cuidado, la participación y la justicia social.

La capacidad de Boyapaz para establecer alianzas con distintos sectores e instituciones ha sido clave para potenciar el impacto de organizaciones comunitarias más pequeñas en el Occidente de Boyacá. Estas alianzas permiten ampliar la visibilidad, legitimidad y capacidad de incidencia de los colectivos locales, al brindarles plataformas más robustas para difundir sus mensajes y demandas. La colaboración interorganizacional no solo fortalece la credibilidad ante actores políticos y decisores, sino que también genera sinergias que permiten abordar de manera más efectiva los desafíos del desarrollo territorial.

Este tipo de articulación responde a lo que Barros et al. (2020) denominan “ecosistemas colaborativos para la paz”, en los que la

interacción entre actores comunitarios, institucionales y sociales permite construir agendas comunes, compartir recursos y generar aprendizajes colectivos. En este marco, Boyapaz se configura como un nodo articulador que facilita el diálogo entre saberes locales y políticas públicas, promoviendo una gobernanza territorial basada en la participación, la equidad y la sostenibilidad.

Además, la articulación entre organizaciones grandes y pequeñas genera sinergias que combinan experticias, recursos y oportunidades fundamentales para enfrentar los desafíos del desarrollo y la paz territorial. Mientras las organizaciones locales aportan conocimientos situados, experiencia comunitaria y arraigo territorial, entidades como Boyapaz ofrecen capacidades técnicas, recursos financieros y redes de movilización que amplifican el alcance y la efectividad de las iniciativas. Esta complementariedad permite construir agendas comunes, fortalecer liderazgos y consolidar procesos de incidencia política desde lo local.

Este tipo de articulación responde a lo que Salinas y Sanmartín (2020) denominan “tejidos colaborativos para la transformación social”, en los que la cooperación entre actores diversos no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también potencia la legitimidad de las acciones colectivas. Desde esta perspectiva, más que un actor aislado, Boyapaz opera como parte de una red que articula saberes locales y estructuras institucionales, contribuyendo a la consolidación de una gobernanza territorial participativa y sostenible.

Por lo tanto, la Corporación Boyapaz representa una apuesta colectiva por la construcción de paz desde abajo, mediante el impulso de procesos organizativos, productivos y participativos que reconocen a los jóvenes y a las comunidades como protagonistas del cambio en el Occidente de Boyacá. Su experiencia demuestra que la paz territorial no solo se construye desde las instituciones estatales, sino también desde las prácticas cotidianas, los vínculos comunitarios y la imaginación moral y geográfica de quienes habitan los territorios.

Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia de Pauna

El Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia de Pauna se ha consolidado como una instancia institucional comunitaria que promueve prácticas alternativas para la construcción de paz desde lo local. Su labor se ha centrado en fortalecer procesos de formación ciudadana, participación activa y transformación social, especialmente a través de estrategias pedagógicas como Pazo a Pazo, orientadas a la construcción participativa de agendas públicas que fomentan la paz cotidiana mediante la cultura de la legalidad y el diálogo social.

Esta experiencia se inscribe en lo que Vommaro (2020) denomina “formas organizativas juveniles y comunitarias que disputan sentidos y espacios de lo público”, al reconocer que la institucionalización de prácticas sociales no implica su despolitización, sino que puede convertirse en una vía legítima para la transformación territorial desde abajo. En este sentido, el Consejo de Paz de Pauna articula saberes locales, pedagogías participativas y acciones concretas que permiten a las comunidades imaginar y construir escenarios de convivencia, reconciliación y justicia social.

En este marco, el Consejo ha liderado proyectos emblemáticos como “Paz al Parque” y “Pazo a Pazo Pedaleando con mi Bici”, iniciativas que vinculan directamente a la niñez y adolescencia en la construcción de paz. El primero se enfoca en la recreación infantil mediante la instalación de un parque público, mientras que el segundo busca facilitar el acceso y la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes, reduciendo la deserción y los riesgos asociados al reclutamiento forzado por grupos armados ilegales (Alcaldía Municipal de Pauna, 2022).

Estas acciones reflejan una apuesta integral por la paz territorial, reconociendo que incluir a las infancias en procesos de recreación y educación no solo fortalece su sentido de pertenencia y agencia, sino que también contribuye a la prevención de futuros conflictos. Al brindarles espacios seguros, creativos y participativos, se favorece el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños, ayudándoles a superar traumas derivados de contextos de violencia.

Esta perspectiva coincide con lo planteado por Osorio (2005), quien destaca que la participación infantil en escenarios comunitarios no debe limitarse a lo simbólico, sino que debe ser entendida como una práctica transformadora que permite a los niños y niñas reconocerse como sujetos políticos capaces de incidir en su entorno. En este sentido, las iniciativas del Consejo Territorial de Paz de Pauna, al integrar a las infancias en procesos de construcción de paz, no solo promueven el bienestar individual, sino que fortalecen el tejido social y abren caminos para una convivencia más justa y equitativa en el territorio.

Asimismo, las estrategias para prevenir la deserción escolar complementan la educación formal al promover habilidades artísticas, deportivas, sociales y de liderazgo. Estas competencias son fundamentales para el desarrollo integral de las infancias, quienes al involucrarse en actividades lúdicas y significativas fortalecen su vínculo con la escuela y asumen un rol activo en su proceso de aprendizaje.

El Consejo Territorial de Paz de Pauna, al institucionalizar estas prácticas, demuestra que la construcción de paz no es solo un asunto de política pública, sino también de acción comunitaria organizada. Su capacidad para articular actores locales, generar proyectos con enfoque de derechos y promover la participación ciudadana lo convierte en un referente de innovación social en el Occidente de Boyacá.

Plataforma de Juventud de Quípama

La Plataforma de Juventud de Quípama se ha consolidado como un espacio institucionalizado de participación juvenil que promueve prácticas alternativas para la construcción de paz en el Occidente de Boyacá. Frente a los distintos tipos de violencia presentes en el municipio, los jóvenes han asumido un papel activo en la transformación de imaginarios sociales, posicionando el respeto por la vida como eje central de sus acciones. Bajo el lema “más (+) vidas y menos (-) balas”, esta plataforma articula iniciativas que visibilizan el compromiso de las nuevas generaciones con la paz territorial.

Aunque en muchos casos la participación juvenil en Quípama se ha concentrado en eventos promovidos por la administración municipal, como actividades artísticas y culturales, es importante destacar el

papel de la “Triada Artística María Molina”, una iniciativa que recoge las ferias y fiestas locales, y rememora la figura de la familia Molina como referente cultural del municipio.

Estos espacios han permitido que los jóvenes se expresen, se reconozcan como actores sociales y fortalezcan su identidad colectiva en torno a la memoria, la cultura y la paz. De acuerdo con Hernández (2019), las prácticas culturales juveniles no solo configuran formas de resistencia simbólica, sino que también habilitan procesos de subjetivación política en los que los jóvenes construyen sentidos de pertenencia, agencia y transformación social.

La voluntad política de la administración municipal durante el periodo 2020-2023 ha sido clave para fortalecer la relación entre los espacios de participación juvenil y el gobierno local. Este vínculo ha facilitado la institucionalización de prácticas juveniles que antes eran dispersas, permitiendo que las voces de los jóvenes sean escuchadas en la formulación de políticas públicas y en la planeación territorial. En este sentido, la “Triada Artística” no solo recupera la memoria local, sino que la convierte en herramienta pedagógica y política para la construcción de paz desde lo comunitario.

La Plataforma de Juventud de Quípama representa una alternativa social que, desde lo comunitario y lo institucional, contribuye a la construcción de paz mediante el arte, la cultura, el diálogo intergeneracional y la participación activa. Su existencia reafirma que los jóvenes no solo son beneficiarios de procesos sociales, sino también protagonistas de las transformaciones que requiere el territorio para superar las huellas del conflicto y avanzar hacia escenarios de convivencia y reconciliación.

Plataforma Jóvenes Emprendedores Muzo

La Plataforma Jóvenes Emprendedores Muzo se ha consolidado como una organización sin ánimo de lucro que impulsa la participación activa de las juventudes en los procesos de transformación social del municipio. Su propósito central es fomentar ciudadanías comprometidas, inclusivas y con liderazgo, a través del emprendimiento como herramienta para la formulación y desarrollo de proyectos sostenibles que contribuyan al bienestar colectivo y a la construcción de paz territorial.

Esta iniciativa ha articulado esfuerzos con otros colectivos locales, como La Movida, para desarrollar estrategias de impacto comunitario como “Compartir Sonrisas”, que combina voluntariado, donaciones y actividades culturales en beneficio de niñas y niños de las veredas de Muzo. Asimismo, ha promovido espacios de emprendimiento juvenil mediante ferias, festivales y actividades en el marco de la Semana de la Juventud, fortaleciendo el tejido social y la economía local. Uno de los aportes más significativos de la plataforma ha sido su participación en eventos simbólicos como la velación por las víctimas del conflicto de la guerra verde y la jornada “Sembrando por la vida y la esperanza”, que buscan resignificar el territorio desde la memoria, el duelo colectivo y la esperanza.

Estas acciones se articulan con lo planteado por Aguilera (2010), quien señala que las prácticas juveniles en contextos de violencia configuran formas de resistencia simbólica y, además, permiten la reconstrucción de sentidos colectivos, la resignificación del territorio y la creación de espacios de sanación emocional. En este sentido, los actos simbólicos impulsados por estos colectivos juveniles no solo honran a las víctimas y mantienen viva su memoria, sino que también generan conciencia sobre las consecuencias humanas del conflicto armado, fortalecen los vínculos sociales y promueven procesos de reconciliación desde lo comunitario.

Desde una perspectiva de desarrollo, los emprendimientos impulsados por la plataforma representan una fuente de innovación y dinamismo económico en una región históricamente afectada por la violencia. Al introducir nuevas ideas, tecnologías y prácticas comerciales, los jóvenes emprendedores contribuyen a la reconstrucción económica y al desarrollo sostenible del territorio. Estos procesos también fomentan la cohesión social, al reunir personas de diversos orígenes en torno a objetivos comunes, superando divisiones históricas y promoviendo relaciones basadas en el respeto y la colaboración.

Siguiendo a Florián (2025), los emprendimientos juveniles en territorios rurales no solo dinamizan la economía local, sino que también configuran espacios de participación, agencia y transformación social. En contextos marcados por el conflicto armado, estas iniciativas permiten resignificar el territorio como lugar de vida, esperanza y

construcción colectiva, fortaleciendo el tejido comunitario y promoviendo una paz con enfoque territorial.

Finalmente, la plataforma ha sido clave en el empoderamiento de grupos tradicionalmente marginados, como mujeres y jóvenes, al brindarles oportunidades para participar en la economía formal y tomar el control de sus proyectos de vida. Esto contribuye a reducir desigualdades, fortalecer la inclusión y avanzar hacia una justicia social más equitativa. De este modo, la Plataforma Jóvenes Emprendedores Muzo representa una alternativa comunitaria que, desde la acción juvenil organizada, transforma el territorio y genera condiciones para una paz duradera, construida desde abajo y con sentido colectivo.

Colectivo Juvenil El Parche. Motivando Sueños

El Colectivo Juvenil El Parche Motivando Sueños se ha consolidado como un escenario de encuentro y articulación de diversas expresiones juveniles en el Occidente de Boyacá, bajo el liderazgo del Programa de Desarrollo y Paz de Boyacá (Boyapaz). A partir de entrevistas con integrantes del colectivo, revisión documental de informes institucionales y análisis de contenido en redes sociales, se identificó que El Parche ha promovido espacios como asambleas, campamentos y encuentros juveniles que han contribuido a la apropiación de la política pública de juventud, tanto a nivel departamental como municipal. Esta articulación ha permitido que los jóvenes se reconozcan como sujetos políticos activos, generando procesos de empoderamiento y fortalecimiento de la ciudadanía juvenil.

La triangulación metodológica evidenció que las acciones del colectivo El Parche han tenido un impacto significativo en la promoción de la participación juvenil en escenarios democráticos. A través de sus actividades, esta organización ha fomentado el compromiso cívico de los jóvenes, capacitándolos para incidir en la formulación de políticas públicas desde sus territorios. Los grupos focales realizados en Pauna revelaron que los jóvenes participantes se sienten más informados, responsables y motivados para involucrarse en procesos de toma de decisiones, lo que ha contribuido a la construcción de una cultura política juvenil más activa y crítica.

Esta experiencia se articula con lo planteado por Vommaro (2020), quien destaca que las organizaciones juveniles en América Latina han desarrollado formas de acción colectiva que disputan sentidos de lo público, reconfiguran las prácticas políticas y generan espacios de participación desde lo cotidiano. En este sentido, El Parche no solo fortalece el liderazgo juvenil, sino que también contribuye a la democratización de los territorios mediante prácticas pedagógicas, culturales y organizativas que promueven la paz, la equidad y la justicia social.

Desde una perspectiva política, El Parche ha facilitado el involucramiento de los colectivos juveniles en debates locales y nacionales sobre paz, justicia social e inclusión. El análisis de contenido de sus publicaciones digitales muestra cómo han logrado posicionar temas juveniles en la agenda pública, promoviendo el diálogo entre jóvenes, instituciones y organizaciones sociales. Esta labor ha permitido que las políticas públicas diseñadas en la región respondan de manera más efectiva a las necesidades, intereses y aspiraciones juveniles, como lo confirman los testimonios recogidos en entrevistas con funcionarios de las alcaldías y líderes comunitarios, en los se manifiesta que “ya los jóvenes trabajan en otras labores, no solo la minería”.

Finalmente, los resultados muestran que El Parche ha contribuido a la consolidación de redes juveniles en el Occidente de Boyacá, articulando procesos locales con plataformas departamentales y nacionales. Esta capacidad de conexión ha fortalecido la incidencia política de los jóvenes, generando espacios de formación, reflexión y acción colectiva. La triangulación entre fuentes primarias y secundarias permitió comprender que El Parche no solo es un colectivo organizador de eventos, sino un actor estratégico en la construcción de paz territorial, que promueve la participación juvenil como herramienta de transformación social.

Kakaoteros una alternativa para construcción de paz

Kakaoteros es una organización social de carácter familiar que representa una experiencia significativa de construcción de paz desde el emprendimiento rural en el Occidente de Boyacá. Surgida en un contexto

marcado por las secuelas del conflicto armado, la violencia esmeraldera y los cultivos ilícitos, esta iniciativa encarna el tránsito de una comunidad campesina hacia modelos productivos sostenibles, apostándole al cacao como símbolo de reconciliación y transformación territorial.

Esta experiencia se alinea con lo planteado por Ballén (2021), quien destaca que los procesos de paz territorial requieren de iniciativas que reconozcan las economías locales, fortalezcan el tejido comunitario y generen alternativas productivas que dignifiquen la vida rural. En este sentido, Kakaoteros no solo representa una apuesta económica, sino también una narrativa de resistencia y esperanza que ressignifica el papel de las juventudes rurales como agentes de cambio en contextos históricamente afectados por la violencia.

La propuesta nace desde la mirada de jóvenes rurales que, como hijos de una familia campesina con fuerte activismo social, decidieron contar historias de reconciliación a través del chocolate. En un territorio golpeado por décadas de violencia, Kakaoteros emerge como respuesta al agotamiento comunitario frente a los impactos del conflicto, promoviendo la sustitución de cultivos ilícitos por cacao. Este proceso permitió la creación de diez asociaciones cacaoteras en la región, la reactivación de liderazgos locales y la certificación de Pauna y San Pablo de Borbur como zona libre de cultivos ilícitos en 2010. Los logros colectivos se reflejan en reconocimientos como el premio Emprender Paz otorgado a San Pablo de Borbur en 2013, y el premio Cacao de Oro recibido por Pauna en 2014. Estos hitos consolidan el cacao como una alternativa económica, así una como herramienta de cohesión social y símbolo de paz territorial.

En 2017, Nicolás Urbano crea la marca Kakaoteros con la idea inicial de producir crema de *whisky* de cacao. Sin embargo, el proyecto evoluciona hacia la elaboración de chocolate artesanal, con el propósito de visibilizar el trabajo de los campesinos cacaocultores y mejorar sus condiciones de vida. La empresa se oficializa el 2 de septiembre de 2020, integrando saberes tradicionales como las recetas de las abuelas con tendencias globales en sabores y presentaciones, posicionando a Pauna como una comunidad pionera en la apuesta por la paz en Colombia.

Kakaoteros se ha convertido en un referente de cómo los emprendimientos sociales pueden surgir de contextos de violencia y contribuir

a la estabilidad económica, la diversificación de ingresos y el fortalecimiento del tejido social en el Occidente de Boyacá. Al establecer relaciones directas con los productores de cacao, esta organización familiar promueve el reconocimiento de los esfuerzos de las comunidades campesinas, reduce la dependencia de economías ilícitas y fomenta un crecimiento económico más sostenible.

Esta experiencia se articula con lo planteado por Cruz y Ardmirola (2022), quienes destacan que los procesos de emprendimiento en territorios afectados por el conflicto armado pueden convertirse en escenarios de reparación simbólica y económica, al generar oportunidades dignas, fortalecer identidades locales y reconstruir vínculos comunitarios. En este sentido, Kakaoteros no solo transforma las dinámicas productivas, sino que también resignifica el territorio como espacio de paz, memoria y esperanza.

De esta manera, Kakaoteros demuestra que la paz también se construye desde la economía solidaria, el arraigo territorial y la creatividad de las juventudes rurales. Su experiencia es testimonio de cómo una empresa familiar puede convertirse en motor de transformación social, cultural y económica en regiones históricamente afectadas por el conflicto.

Asociación Campesina de Cultivadores Agropecuarios de San Pablo de Borbur (Asocacabo)

La Asociación Campesina de Cultivadores Agropecuarios de San Pablo de Borbur (Asocacabo) se ha consolidado como una organización social de base comunitaria que impulsa procesos de construcción de paz desde el trabajo colectivo, la producción agrícola y el liderazgo juvenil. Su labor ha sido clave en la articulación de iniciativas que promueven el desarrollo territorial con enfoque de reconciliación, inclusión y sostenibilidad.

Uno de los aportes más significativos de esta Asociación ha sido el acompañamiento al II Encuentro de Jóvenes por la Paz del Occidente de Boyacá, espacio que buscó fortalecer el Acuerdo Regional de Paz mediante el reconocimiento de las acciones que los jóvenes lideran en

sus comunidades. Desde las artes, los emprendimientos y el liderazgo social, este encuentro visibilizó el compromiso de las nuevas generaciones con la paz territorial, destacando su capacidad para transformar realidades desde lo local. De acuerdo con Puerta (2023), los procesos juveniles de construcción de paz deben ser entendidos como formas de acción política que, desde lo cotidiano, resignifican el territorio y promueven nuevas formas de participación. En este sentido, el encuentro no solo fortaleció el tejido organizativo juvenil, sino que también reafirmó el papel de los jóvenes como actores estratégicos en la consolidación de una paz con enfoque territorial, basada en el reconocimiento, la memoria y la acción colectiva.

Asocacabo ha expresado que este tipo de iniciativas responden a las necesidades de un territorio que, durante más de 33 años, ha sostenido el ideal de paz como su bien máspreciado. A pesar de los desafíos históricos, como la violencia asociada a la minería de esmeraldas y los cultivos ilícitos, la región ha apostado por alternativas como la agricultura, la educación, el turismo y el emprendimiento para consolidar un modelo de desarrollo basado en la dignidad y el esfuerzo de sus comunidades.

En este contexto, la producción de cacao se convierte en una estrategia eficaz para generar empleo, ingresos y cohesión social en zonas rurales afectadas por el conflicto. Al ofrecer alternativas económicas sostenibles, se reducen las tensiones socioeconómicas y se fortalece el tejido comunitario. Las asociaciones como Asocacabo no solo dinamizan la economía local, sino que también actúan como espacios de formación ciudadana, aprendizaje democrático y construcción de capital social (Ariño, 2004).

Además, el relevo generacional en organizaciones como Asocacabo es fundamental para su sostenibilidad y pertinencia. La incorporación de jóvenes aporta nuevas ideas, enfoques innovadores y una conexión directa con las realidades actuales del territorio. Esto permite que las organizaciones se mantengan vigentes, adaptables y capaces de responder a los desafíos contemporáneos, fortaleciendo su papel como agentes de cambio en la construcción de paz. Asocacabo representa una experiencia ejemplar de cómo las organizaciones campesinas pueden convertirse en motores de transformación social, económica y cultural,

articulando saberes tradicionales con las aspiraciones de las nuevas generaciones para consolidar una paz duradera en el Occidente de Boyacá.

Paunarte una alternativa a través del arte

Paunarte es una iniciativa juvenil que se consolida como una alternativa social para la construcción de paz territorial en el municipio de Pauna, Boyacá. A través del arte, la artesanía, el muralismo y la formación cultural, esta organización rescata las tradiciones locales, la biodiversidad y los lugares emblemáticos de la región, convirtiéndose en un referente de emprendimiento juvenil con enfoque comunitario.

Esta experiencia se articula con lo planteado por Mejía (2016), quien destaca que las expresiones artísticas y culturales en contextos de conflicto no solo permiten la reconstrucción simbólica del tejido social, sino que también habilitan espacios de diálogo, memoria y resistencia. En este sentido, Paunarte no solo promueve el arte como medio de expresión, sino como herramienta pedagógica y política que fortalece la identidad territorial, la participación juvenil y la construcción de escenarios de paz desde lo cotidiano.

La organización ha sido promotora de eventos como el Festival Campesino Paunense, donde el arte se convierte en herramienta de expresión, memoria y transformación. En este contexto, el protagonismo de las mujeres en las actividades de Paunarte se resalta como un componente esencial en la reconstrucción del tejido social y en la promoción de la equidad de género en zonas rurales. Esta experiencia se articula con lo planteado por Osorio (2005), quien señala que las mujeres en contextos rurales desempeñan un papel fundamental en la reconfiguración de las relaciones comunitarias, al ser portadoras de saberes, prácticas culturales y formas de organización que contribuyen a la cohesión social y a la construcción de paz. Desde esta perspectiva, el arte no solo es una forma de expresión estética, sino también una estrategia política que permite visibilizar las voces de las mujeres, sus luchas y sus aportes a la transformación de los territorios.

Las acciones de Paunarte demuestran cómo el arte puede desempeñar un papel significativo en la construcción de paz en territorios afectados por el conflicto. Por un lado, el arte permite la expresión

y sanación de experiencias traumáticas, ofreciendo a las comunidades un medio para canalizar emociones, compartir aspiraciones y reconstruir narrativas colectivas. Por otro lado, facilita el diálogo y la reconciliación, al crear espacios donde personas con vivencias similares pueden encontrarse, compartir sus historias y construir propuestas para el futuro.

Además, las actividades artísticas como el muralismo, la pintura, el teatro y la música colaborativa fomentan la empatía entre distintos grupos sociales, visibilizan las diversidades culturales y promueven el desarrollo económico, cultural y artístico del municipio. Estas iniciativas también contribuyen a la preservación de la memoria colectiva, al reconocer hechos históricos y tradiciones locales que fortalecen el sentido de pertenencia y orgullo comunitario.

Esta perspectiva se relaciona con lo planteado por Aguilera (2010), quien sostiene que las prácticas culturales en contextos de conflicto permiten reconstruir los vínculos sociales y resignificar los territorios desde las memorias compartidas, convirtiendo el arte en una herramienta de resistencia, sanación y transformación. En este sentido, las expresiones artísticas no solo embellecen el espacio público, sino que también activan procesos de diálogo intergeneracional, fortalecen la identidad local y promueven escenarios de paz desde lo cotidiano.

Paunarte se destaca por involucrar a los jóvenes en proyectos colaborativos que les permiten ejercer su agencia, influir en su entorno y fortalecer la resiliencia comunitaria. Al ofrecer espacios inclusivos para el encuentro y la creación, la organización promueve el entendimiento de las diversidades y ayuda a superar barreras sociales, generando alternativas para el desarrollo económico y social del territorio. Finalmente, los proyectos artísticos impulsados por Paunarte tienen el potencial de dinamizar el turismo cultural y comunitario en zonas rurales. La creación de galerías, murales, festivales y eventos culturales posiciona a Pauna dentro del mapa regional del Occidente de Boyacá, generando ingresos adicionales y oportunidades de empleo para sus habitantes.

De este modo, Paunarte representa una apuesta juvenil por la paz, la cultura y el arte como motores de transformación territorial. Su experiencia demuestra que la creatividad, el arraigo y la participación

comunitaria son claves para construir futuros posibles en escenarios históricamente marcados por el conflicto.

Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de la Paz

La Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de la Paz, ubicada en el municipio de Quípama, se ha consolidado como un actor clave en la promoción de la cultura de paz desde el ámbito escolar. A través del acompañamiento comprometido de sus docentes, ha impulsado iniciativas que trascienden el aula y se proyectan hacia la comunidad, generando espacios de expresión, reflexión y transformación social. Domínguez (2010), destaca que las instituciones educativas, cuando se vinculan con las dinámicas comunitarias, pueden convertirse en escenarios de participación, inclusión y construcción de ciudadanía. En este sentido, la escuela no solo transmite conocimientos, sino que también forma sujetos críticos capaces de incidir en sus territorios, resignificando el papel de la educación como herramienta para la paz, la equidad y el desarrollo local.

Una de las experiencias más significativas es la propuesta “El arte como expresión de paz”, desarrollada en 2023 (Gobernación de Boyacá, 2023). Esta iniciativa convocó a niñas, niños y jóvenes del municipio para que, mediante diversas técnicas de las artes plásticas, expresaran sus visiones sobre la paz. El resultado fue la creación de 148 obras que fueron exhibidas entre el 4 y el 18 de mayo en las Salas Julio Abril y Rafael Tavera de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, en la ciudad de Tunja. Este evento visibilizó el talento artístico de los estudiantes y posicionó el arte como una herramienta pedagógica para la construcción de paz.

El uso del dibujo como medio de expresión permite que los mensajes sobre paz sean accesibles a personas de distintas edades, culturas y niveles de alfabetización. En el contexto educativo, esta estrategia facilita la comprensión de conceptos complejos y promueve el diálogo entre estudiantes y docentes. Al compartir sus obras, los estudiantes desarrollan habilidades de comunicación, empatía y trabajo en equipo, fundamentales para la convivencia y la resolución pacífica de conflictos.

Además, las expresiones artísticas contribuyen a transformar los imaginarios sociales que circulan en los territorios, convirtiéndose en prácticas cotidianas de resistencia y esperanza. En este sentido, la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de la Paz no solo forma académicamente a sus estudiantes, sino que también los prepara para ser agentes activos en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y pacífica. Esta experiencia se vincula con lo planteado por Mejía (2016), quien sostiene que el arte en contextos educativos puede convertirse en una herramienta de transformación social, al permitir que los sujetos expresen sus vivencias, reconstruyan sus memorias y generen vínculos comunitarios que fortalecen la cultura de paz desde lo cotidiano.

Esta experiencia demuestra que las instituciones educativas, cuando se articulan con las dinámicas culturales y comunitarias, pueden convertirse en escenarios de paz territorial. La apuesta por el arte como lenguaje universal fortalece el vínculo entre escuela y comunidad, y abre caminos para que las nuevas generaciones construyan narrativas de reconciliación desde sus propias voces y experiencias.

Reflexiones finales

En el Occidente de Boyacá, los colectivos juveniles y organizaciones sociales han desarrollado prácticas alternativas que desafían el modelo extractivista dominante, resignificando el territorio desde una perspectiva generacional. Su participación activa en procesos de transformación comunitaria como el fortalecimiento de capacidades locales, el emprendimiento artístico, la producción de cacao con enfoque territorial y la construcción de paz revelan formas de agencia juvenil que articulan lo económico, lo cultural y lo político. Estas iniciativas generan oportunidades sostenibles, pero además reconfiguran los sentidos del territorio, promoviendo una visión de paz arraigada en las realidades locales.

En los cuatro municipios analizados, las organizaciones juveniles han sido fundamentales para comprender cómo se gestan estas prácticas alternativas. La interrelación entre emprendimiento y construcción de paz se manifiesta en propuestas que vinculan el arte, la educación

y la economía solidaria como herramientas de reconciliación, empoderamiento y cohesión social. El arte, en particular, ha sido clave para fomentar el diálogo intergeneracional, la expresión comunitaria y la promoción de una cultura de paz en contextos rurales.

Asimismo, la inclusión de niños en actividades recreativas y educativas orientadas a la paz contribuye a prevenir conflictos futuros, fortalecer el tejido social y promover valores como la justicia y la tolerancia. Las estrategias para evitar la deserción escolar refuerzan el compromiso con la educación y potencian el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Finalmente, la articulación entre colectivos juveniles y organizaciones más amplias ha permitido incidir en las agendas públicas de juventud, aumentando su capacidad de influencia y legitimidad. Esta articulación fortalece su voz política y social, consolidando un movimiento juvenil que propone alternativas concretas al modelo extractivista y promueve una construcción de paz territorial desde abajo.

Referencias

- Aguilera Ruiz, O. (2010). Pensar políticamente la cultura juvenil: una mirada desde la sociología crítica. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 8(2), 707-729. <https://doi.org/10.11600/1692715x.82207>
- Ariño, A. (2004). Asociacionismo, ciudadanía y bienestar social. *Papers*, (74), 85-110. <https://core.ac.uk/download/pdf/13266996.pdf>
- Ballén Robles, D. C. (2021). Visibilidad de la agencia de jóvenes rurales mediante el uso de redes sociales: el caso del Colectivo JOB en Boyacá, Colombia. *Eutopía. Revista de Desarrollo Económico Territorial*, (19), 175-190. <https://doi.org/10.17141/eutopia.19.2021.4978>
- Barros Arrieta, D., Lastre Amell, G., García Cali, E. y Ruiz Escorcia, L. (2020). Cultura de paz y formación ciudadana como bases de la educación en Colombia. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 25(Esp.11), 285-299. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4278369>
- Cairo, H., Piazzini, C. E. y Ríos Sierra, J. (Eds.). (2024). *De la paz territorial a la paz total en Colombia: una aproximación socio-espacial*. Siglo del Hombre Editores.
- Cruz García, D. A. y Ardmírola Mendoza, C. (2022). Las prácticas de paz, pedagogía para la resolución de conflicto en jóvenes rurales. *Conrado*,

- 18(85), 316-325. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442022000200316
- Domínguez García, M. I. (2010). Juventud y participación política en América Latina: una mirada desde la condición juvenil. *Revista Última Década*, 18(33), 11-38. <https://doi.org/10.4067/S0718-22362010000100002>
- Florián Delgadillo, H. F. (Ed.). (2025). *El cacao, las artes, las comunidades y la paz*. Nidaria Editorial.
- Gutiérrez Bonilla, M. L. y Tatis Amaya, J. (Eds.). (2016). *Herederos de la guerra: jóvenes, conflicto armado y paz*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Hernández Mary, N. (2019). Juventudes y acción colectiva: prácticas políticas en el espacio público. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 17(2), 1-20. <https://doi.org/10.11600/1692715x.17210>
- Jaramillo Marín, J., Jaime-Salas, J. R., Gómez Correal, D., Londoño, S. L., Pérez de Armiño, K. y Castro Herrera, F. S. (Eds.). (2020). *Paz decolonial, paces insubordinadas: conceptos, temporalidades y epistemologías*. Sello Editorial Javeriano. <https://books.scielo.org/id/hppmz> <https://doi.org/10.2307/j.ctv25j12b1>
- Mejía Pérez, H. F. (2016). *Las miradas construidas sobre las juventudes rurales en América Latina: desafíos para su comprensión e intervención* [Tesis de maestría, Universidad de Manizales – Cinde].
- Osorio Pérez, F. E. (2005). Jóvenes rurales y acción colectiva en Colombia. *Nómadas*, (23), 122-131. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105116741014>
- Puerta Henao, E. (2023). Revisión integrativa. Perspectivas teóricas en la construcción de paz territorial en Colombia. *Estudios Políticos*, (66), 177-201. <https://doi.org/10.17533/udea.espo.n66a08>
- Quintero T., F., Arango C., A. M., Hoyos G., D. y Escobar, M. R. (2004). Estado del arte del conocimiento sobre jóvenes en Colombia 1985-2003. *Nómadas*, (20), 169-229. <https://semillerojovenes.files.wordpress.com/2010/07/informe-estado-del-arte-sobre-jovenes-1985-2003.pdf>
- Salinas Arango, N. A. y Sanmartín-Gaviria, M. (2020). Nuevas ruralidades como reconfiguración del territorio en transformación: imaginarios sociales corregimentales a la luz de organizaciones socioculturales. *Eleuthera*, 22(2), 189-204. <https://doi.org/10.17151/eleu.2020.22.2.12>

- Sandoval Forero, E. A. (2013). Etnografía para la paz, la interculturalidad y los conflictos. *Revista de Ciencias Sociales* (Costa Rica), 3(141), 11-24. <https://doi.org/10.15517/rsc.v0i141.12478>
- Tabarquino Muñoz, R. A. (2018). La justicia prospectiva: un reto conceptual y metodológico para la justicia transicional en Colombia. *Análisis Político*, 31(93), 133-148. <https://doi.org/10.15446/anpol.v31n93.75621>
- Vommaro, P. (2020). Juventudes y política en América Latina: entre la movilización y la institucionalización. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales [Clacso]. <https://www.clacso.org/>
- Zugadi Bengoa, A. (2023). *El modelo de construcción de paz de la Unión Europea en Colombia: Aportes analíticos para una paz posliberal* (Trabajo de máster, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea). Hegoa, Trabajos Fin de Máster, (92). <https://publicaciones.hegoa.ehu.eus/es/publications/574>

Webgrafía

- Alcaldía Municipal de Pauna. (2022). Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia. <http://www.pauna-boyaca.gov.co/noticias/consejo-territorial-de-paz-reconciliacion-y-convivencia>
- Gobernación de Boyacá. (2023). Estudiantes de Quípama exponen en Tunja “El Arte Como Expresión de Paz”. <https://www.boyaca.gov.co/estudiantes-de-quipama-exponen-en-tunja-el-arte-como-expresion-de-paz/>
- Kakaoteros. (s.f.). El inicio de los sueños. <https://www.kakaoteros.com/nosotros/>

CAPÍTULO 7

La transformación del territorio desde la educación para la paz en Quípama y Muzo

MÓNICA ALEXANDRA PEÑA PÉREZ
NALLY JASBLEIDY FAJARDO HERRERA
STEFANNY ALEJANDRA SOSA SCHLEIMER

Presentación del capítulo

Este capítulo aborda la transformación territorial en los municipios de Muzo y Quípama, en el Occidente de Boyacá, desde la perspectiva de la educación para la paz. Se parte de un enfoque crítico social situado en el territorio, que permite comprender cómo las instituciones educativas han promovido prácticas culturales, educativas y políticas que contribuyen a la construcción de paz territorial. El propósito es analizar cómo se promueve la cultura de paz desde las instituciones educativas en los municipios de Muzo y Quípama, mediante una metodología mixta que combina técnicas cualitativas (entrevistas, grupos focales, estudios de caso) y cuantitativas (análisis de datos socioeducativos). Los aportes del capítulo se articulan con los demás apartados del libro relacionados con prácticas productivas, culturales, educativas y políticas que contribuyen a la construcción de paz territorial.

Introducción

Este capítulo analiza la transformación territorial de los municipios de Quípama y Muzo, en el Occidente de Boyacá, a partir de los conceptos de cultura de paz y educación para la paz. Para ello, se retoman los aportes teóricos de Zaragoza (2003) y Cerdas (2015), quienes permiten comprender cómo estas nociones se articulan con los procesos educativos y sociales en contextos históricamente marcados por la violencia minera.

Se propone una breve contextualización del conflicto por la tierra en el Occidente de Boyacá, especialmente a través del fenómeno conocido como la “guerra verde”. Este recorrido histórico permite entender las dinámicas territoriales de Quípama y Muzo, y cómo estas han sido transformadas mediante prácticas culturales, educativas y políticas orientadas a la construcción de paz. En este marco, se identifican actores e instituciones que han promovido procesos de reparación y no repetición, dejando atrás el imaginario del “oro verde” que ha marcado la historia de la región.

Quípama y Muzo son municipios ubicados en la provincia del Occidente de Boyacá, con una rica historia ancestral. Sus nombres provienen de épocas precolombinas, cuando la región estaba habitada por la tribu de los muzos, pertenecientes a la etnia caribe. Según la leyenda del cacique Itoco, Quípama e Ibama eran sus hijas, sacrificadas en los terrenos que más le inspiraban paz, como acto de protección ante la invasión española. Hoy, una vereda lleva el nombre de Quípama y se dice que posee grandes riquezas.

Históricamente, la región ha construido diversas narrativas: primero, como tierra fértil y rica en esmeraldas; luego, como destino de migración minera en busca de enguacarse; y, finalmente, como escenario del conflicto armado en torno a la guerra verde. Esta última se manifestó en tres etapas de violencia protagonizadas por líderes esmeralderos conocidos como “patrones”, quienes disputaban el control territorial y económico de las minas. A partir de los acuerdos de paz de 1990, emergen nuevas narrativas centradas en la construcción de paz.

La vinculación entre los patrones y la institucionalidad es evidente en la historia local. En Quípama, Gilberto Molina se relacionó con la

Iglesia católica para construir el colegio Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de la Paz y la parroquia del municipio, buscando legitimidad y atención a las necesidades sociales. Gracias a estas gestiones, Quípama fue declarado municipio el 11 de diciembre de 1986, siendo el más joven de la región.

La identidad territorial se ha fortalecido mediante el reconocimiento del trabajo de mineros y campesinos. Los habitantes han impulsado estrategias de diálogo, arte y educación, convirtiendo la educación en un escenario clave para la construcción de una cultura de paz. Estas acciones afirmativas han generado conciencia sobre la necesidad de no retornar a la guerra, resignificando el territorio y sus imaginarios asociados a la violencia minera.

En este contexto, los municipios han buscado transformar la cultura de violencia por una cultura de paz, basada en las potencialidades del territorio y en los planes de vida de los jóvenes. Muchos de ellos veían la gúaquería como una vía rápida para obtener capital económico y cumplir con el ideal de “salir adelante”. Dicho contexto aporta a la pregunta central del proyecto sobre ¿cómo las formas de agencia juvenil reconfiguran el territorio del Occidente de Boyacá, a partir de prácticas productivas, culturales, educativas y políticas que contribuyen a la construcción de paz territorial?, así como a la pregunta específica del capítulo: ¿cómo se promueve la cultura de paz desde las instituciones educativas en los municipios de Muzo y Quípama?

Para abrir nuevas posibilidades de desarrollo regional, las alcaldías, fundaciones y empresas multinacionales han implementado diversas estrategias educativas orientadas a la promoción de la paz. Aunque estas iniciativas han generado impactos positivos, también han suscitado tensiones. En particular, desde la lógica de la responsabilidad social empresarial (RSE), se ha promovido una dependencia económica en las comunidades locales, mediante becas, ayudas económicas y proyectos productivos que, en algunos casos, limitan los procesos de autogestión comunitaria.

Las administraciones municipales han impulsado la educación como herramienta para fomentar una cultura de paz, basada en el diálogo, la convivencia ciudadana y el reconocimiento del otro desde la diferencia. Estas acciones han permitido resignificar espacios

históricamente afectados por el conflicto, fortaleciendo la memoria colectiva y contribuyendo a evitar el retorno a la violencia.

Es importante destacar que muchas de estas estrategias buscan reparar el daño ambiental y social causado por décadas de explotación minera. Las empresas dedicadas a la extracción de esmeraldas han intentado compensar sus impactos mediante oportunidades laborales y educativas. Sin embargo, los beneficios sociales ofrecidos suelen ser limitados en comparación con la acumulación de riqueza que estas compañías obtienen del territorio.

La educación para la paz ha adquirido un papel central en el Occidente de Boyacá, con la participación activa de líderes juveniles y comunitarios. En este marco, se han creado espacios de participación política como los Consejos Municipales de Juventud (CMJ), que han permitido el relevo generacional de liderazgos y la construcción de escenarios de paz y no violencia.

Los jóvenes han logrado abrirse camino en las alcaldías, generando agendas locales que fortalecen la gestión pública y la resolución de conflictos. Estas nuevas formas de participación han contribuido a mejorar la calidad de vida y a reconfigurar el futuro del territorio desde su valor patrimonial, educativo y social.

Antecedentes

Hernández et al. (2017) abordan la cultura de paz como una construcción colectiva que se gesta desde la educación, el reconocimiento del otro y la transformación de las relaciones sociales. Su enfoque hermenéutico permite entender la paz como un proceso transversal que involucra valores, actitudes y prácticas cotidianas. Del mismo modo, Avellaneda y Pardo (2019) destacan el papel de las instituciones educativas en la promoción de la paz, especialmente en territorios rurales, donde la escuela se convierte en un espacio de resistencia y esperanza frente a las dinámicas de exclusión y violencia.

Por otro lado, Monroy y Wiesner (2024) desarrollan una propuesta de educación para la paz basada en la justicia escolar restaurativa, aplicada en contextos rurales de Boyacá. Su enfoque destaca la importancia de generar espacios de diálogo y reparación simbólica dentro

de las instituciones educativas, reconociendo a los estudiantes como agentes activos en la transformación de conflictos. Esta perspectiva resulta clave para comprender cómo las prácticas pedagógicas pueden contribuir a la construcción de paz territorial en zonas históricamente afectadas por la violencia, como el Occidente de Boyacá.

Por su parte, Garnica (2023) propone una mirada evaluativa sobre los efectos del acuerdo de paz de 1990 en el Occidente de Boyacá, a través del diseño de indicadores que permiten medir el impacto de las políticas de paz en el ámbito local. Su investigación evidencia cómo la educación ha sido un eje articulador de procesos de reconciliación y desarrollo comunitario, especialmente en municipios como Muzo y Quípama. El trabajo de Garnica (2022) complementa las propuestas pedagógicas al ofrecer herramientas para valorar el alcance de las iniciativas educativas en la consolidación de una cultura de paz.

Metodología

La investigación se desarrolló bajo un enfoque crítico social situado, que reconoce las dinámicas históricas, culturales y políticas del Occidente de Boyacá. Este enfoque permitió comprender las formas de agencia juvenil en contextos marcados por el conflicto minero, la desigualdad y la transformación territorial. El estudio se centró en los municipios de Muzo y Quípama, donde se han gestado procesos educativos orientados a la construcción de paz, desde las instituciones educativas, las organizaciones comunitarias y las iniciativas juveniles.

Se empleó una metodología mixta que combinó técnicas cualitativas y cuantitativas. En el componente cualitativo se realizaron entrevistas semiestructuradas a docentes, líderes juveniles, funcionarios públicos y habitantes de la región, así como grupos focales con jóvenes de ambos municipios. También se desarrollaron estudios de caso sobre las instituciones educativas Nuestra Señora de la Paz y La Floresta, que han sido clave en la promoción de la cultura de paz. La información fue procesada mediante análisis de contenido, identificando narrativas, prácticas y significados asociados a la educación para la paz.

En el componente cuantitativo se analizaron datos socioeducativos sobre cobertura escolar, acceso a becas, deserción y participación juvenil

en espacios políticos como los Consejos Municipales de Juventud. Estos datos fueron obtenidos de fuentes institucionales y documentos oficiales. La triangulación de fuentes primarias (entrevistas, grupos focales) y secundarias (textos, informes, estudios previos) permitió construir una visión integral del proceso educativo como herramienta de transformación territorial. Esta metodología responde a los vacíos teóricos, empíricos y metodológicos identificados en el estado del arte sobre juventudes en Colombia.

Claves conceptuales en torno a la cultura, la educación y el territorio para la paz

Cultura de paz

La cultura de paz constituye un paradigma transformador que interpela las formas tradicionales de entender la convivencia, el conflicto y la educación. Desde una perspectiva interdisciplinaria, este enfoque integra la pedagogía crítica, los estudios de paz, la ética y la diversidad cultural para promover procesos educativos orientados a la justicia social, la equidad y el reconocimiento del otro. En este marco, la educación no se limita a transmitir conocimientos, sino que se convierte en una práctica emancipadora que busca desactivar las violencias estructurales, simbólicas y directas. Las propuestas de Fisas (1998), Galtung (2016), Muñoz y Molina (2010), Sánchez (2010), Tuvilla (2004) y Freire (2005) ofrecen herramientas conceptuales y metodológicas para comprender la cultura de paz como una construcción compleja, dinámica y situada, que se potencia desde la acción educativa transformadora.

Los enfoques de Fisas (1998) y Galtung (2016) coinciden en la necesidad de una transformación estructural de la educación para fomentar una cultura de paz. Fisas (1998) propone una pedagogía crítica que promueva valores como la justicia, la equidad y la resolución no violenta de conflictos, mientras que Galtung (2016), desde su perspectiva de la geopolítica de la paz, enfatiza el aprendizaje activo para desaprender la guerra y construir paz positiva. Ambos autores entienden la paz como un proceso complejo que requiere una intervención

educativa profunda, capaz de cuestionar las estructuras de violencia directa, cultural y estructural.

Muñoz y Molina (2010) introducen el concepto de una cultura de paz “compleja y conflictiva”, reconociendo que la paz no es un estado ideal sino una construcción dinámica atravesada por tensiones. Esta visión se complementa con la propuesta de Sánchez (2010), quien explora la educación musical como herramienta para la paz en contextos de diversidad cultural, destacando el papel de las expresiones artísticas en la construcción de subjetividades pacíficas y en el reconocimiento del otro. Ambos enfoques amplían el campo de la educación para la paz hacia dimensiones culturales y simbólicas, más allá de lo político-institucional.

Tuvilla (2004) y Freire (2005), con su *Pedagogía de la autonomía*, aportan una mirada ética y emancipadora. Tuvilla Rayo plantea que la cultura de paz debe ser transversal en los procesos educativos, mientras que Freire (2005) insiste en la formación de sujetos críticos, capaces de transformar su realidad. La autonomía, el diálogo y la conciencia política son pilares en la pedagogía freireana, que se articula con los postulados de los demás autores al concebir la educación como práctica de libertad y herramienta para la transformación social hacia la paz.

Educación para la paz

La educación para la paz se configura como un proceso pedagógico transformador que busca superar las múltiples formas de violencia estructural, cultural y directa, mediante la formación de sujetos críticos, empáticos y comprometidos con la justicia social. Este enfoque reconoce que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una construcción activa que implica el desarrollo de capacidades para el diálogo, la convivencia y el reconocimiento de la diversidad. Autores como Freire (1970), Naranjo (2007), Merino (2008), Monclús y Sabán (2008), Ramos (2003) y Salguero (2004) han aportado desde distintas disciplinas y contextos a la consolidación de un marco teórico que articula pedagogía crítica, educación emocional, interculturalidad y estrategias didácticas, orientadas a formar ciudadanos capaces de transformar sus entornos desde una ética de la paz.

Los fundamentos de la educación para la paz encuentran una base sólida en el pensamiento crítico de Freire (1970) y Naranjo (2007), quienes coinciden en que transformar la educación es esencial para transformar el mundo. Freire (1970) propone una pedagogía del oprimido centrada en el diálogo, la conciencia crítica y la emancipación, donde la paz se construye desde la superación de las relaciones de dominación. Naranjo (2007), por su parte, plantea una reforma profunda del sistema educativo que integre la dimensión emocional y espiritual del ser humano, promoviendo una cultura de paz desde el desarrollo integral de la persona. Ambos autores entienden la educación como un proceso liberador que debe cuestionar las estructuras que reproducen la violencia y la exclusión.

Desde una perspectiva más aplicada, autores como Merino (2008), Monclús y Sabán (2008) abordan la educación para la paz como una estrategia pedagógica que debe incorporar la interculturalidad, la participación y el enfoque didáctico. Merino (2008) destaca la educación intercultural como vía para el reconocimiento de la diversidad y la prevención de conflictos, mientras que Monclús (2008) ofrece propuestas concretas para integrar la paz en el currículo escolar, promoviendo valores como la empatía, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos. Estos enfoques permiten operacionalizar la cultura de paz en contextos educativos diversos, articulando teoría y práctica.

Finalmente, Ramos (2003) y Salguero (2004) analizan los desafíos contextuales de educar para la paz en entornos marcados por la violencia estructural y cultural. Ramos (2003) identifica obstáculos institucionales, políticos y sociales que dificultan la implementación de programas de paz, pero también señala oportunidades para construir procesos sostenibles desde la escuela. Salguero (2004), al estudiar el caso de un país dominado por la violencia, evidencia cómo la educación puede convertirse en un espacio de resistencia y transformación, siempre que se reconozca la complejidad del entorno y se promueva una pedagogía sensible a las realidades locales. Estos aportes subrayan la necesidad de adaptar la educación para la paz a los contextos específicos, sin perder de vista su horizonte ético y transformador.

Territorio para la paz

La noción de territorios para la paz ha emergido como una categoría crítica que permite comprender las dinámicas locales de construcción de paz en contextos marcados por el conflicto armado, la exclusión y el despojo. Más allá de una visión geográfica o administrativa, el territorio se concibe como un espacio vivido, relacional y simbólico, donde las comunidades articulan prácticas de resistencia, cuidado y re-existencia. Autores como Lederach (2017), Arévalo (2014), Courtheyn (2019), Escobar (2018) y Fajardo (2002) han contribuido a esta perspectiva desde enfoques que integran la ecología política, la justicia territorial, el diseño de mundos posibles y la memoria comunitaria. Sus aportes permiten construir un marco teórico que reconoce el papel de los territorios como escenarios fundamentales para la paz, entendida no solo como ausencia de violencia, sino como afirmación de la vida digna, la autonomía y la pluralidad.

Los territorios para la paz se entienden como espacios construidos desde abajo, donde las comunidades resignifican su relación con el entorno, la memoria y el conflicto. Lederach (2017) propone un enfoque multispecies que reconoce la interdependencia entre seres humanos, naturaleza y prácticas campesinas, destacando cómo la territorialidad campesina en Colombia se convierte en una forma de resistencia y de construcción de paz.

De este modo, Fajardo (2002) plantea que “sembrar la paz” implica una transformación profunda del vínculo entre comunidades y tierra, donde el territorio no es solo un espacio físico, sino un tejido de relaciones sociales, culturales y políticas que sustentan la vida digna. Desde una perspectiva crítica sobre el Estado y el conflicto armado, Arévalo (2014) analiza los primeros acuerdos de La Habana como una oportunidad para repensar el modelo de construcción estatal desde una lógica territorial. Su lectura sugiere que la paz debe ser construida desde los territorios, reconociendo las formas organizativas locales y las demandas históricas de autonomía. Courtheyn (2019), por su parte, estudia la Comunidad de Paz de San José de Apartadó como ejemplo de “otras territorialidades”, donde la paz se vive como práctica cotidiana, basada en la autogestión, la memoria y la resistencia frente a la

violencia. Ambos autores coinciden en que los territorios para la paz no pueden imponerse desde arriba, sino que deben surgir de procesos comunitarios arraigados.

Finalmente, Escobar (2018) aporta una visión ontológica y decolonial al pensar los territorios para la paz como parte de un “pluriverso”, donde coexisten múltiples formas de vida, saberes y diseños. Su propuesta de “diseños para el pluriverso” invita a imaginar territorios contruidos desde la diferencia, la relacionalidad y la autonomía, desafiando las lógicas extractivistas y homogeneizantes del desarrollo. Esta mirada complementa los enfoques anteriores al situar la paz territorial como una apuesta por la reconfiguración de mundos posibles, donde las comunidades no solo resisten, sino que crean alternativas de vida en paz desde sus propios horizontes culturales y políticos.

Contexto de violencia y paz en Quípama y Muzo

El Occidente de Boyacá se constituyó a partir de procesos de poblamiento campesino, muchos de ellos desplazados por la violencia bipartidista de los años cincuenta. Ante la ausencia del Estado, se consolidaron modelos alternativos de gobierno y justicia, liderados por figuras locales conocidas como “zares” de las esmeraldas. Esta configuración permitió que la región permaneciera al margen del conflicto armado entre grupos insurgentes y el Estado colombiano, aunque no exenta de violencia. La disputa por el control de las minas de esmeraldas se convirtió en el principal detonante de confrontaciones, marcando profundamente la historia de municipios como Quípama y Muzo.

La llamada “guerra verde” representa uno de los episodios más crudos del conflicto en la región, extendiéndose por aproximadamente treinta años. Inició en 1944 con la permisividad estatal para la explotación de esmeraldas, lo que generó tensiones entre iniciativas privadas y el Estado. La primera etapa (1965-1973) se caracterizó por la muerte de Efraín “el Ganso” Ariza y la captura de miembros de bandas como “La Pesada”, además de la creación de empresas mineras como Esmeracol, Tecminas y Coexminas. La segunda etapa (1976-1977) vio la incursión de Gonzalo Rodríguez Gacha (“el Mexicano”) y el fortalecimiento de los bandos Borbur y Coscuez, que intensificaron el conflicto. La tercera

etapa (1984-1990) se agravó con la privatización de las minas, la informalidad del guaqueo y la conformación de grupos armados como “Los Carranceros”, responsables de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo masacres y despojo de tierras.

El conflicto culminó en 1990 con la firma de un acuerdo de paz, impulsado por la necesidad de restablecer la convivencia y reparar los daños causados por décadas de violencia. La Iglesia católica, especialmente la Diócesis de Chiquinquirá y sacerdotes locales como monseñor Álvaro Raúl Jarro, desempeñó un papel mediador clave en los diálogos entre los bandos enfrentados y los jefes esmeralderos. Este acuerdo fue posible gracias al interés de los actores del conflicto por mantenerse en la legalidad y preservar el mercado de las esmeraldas. Aunque no todos estaban preparados para un proceso de paz completo, se evidenció una voluntad de transformar los imaginarios sobre la minería y sus vínculos con la violencia. Este proceso marcó el inicio de una transición hacia la paz territorial, que aún enfrenta desafíos como la desigual distribución de ingresos, el acceso inequitativo a la tierra y la debilidad institucional, pero que también ha abierto caminos para la reconciliación y la construcción de una cultura de paz en Quípama y Muzo.

El occidente de Boyacá se constituyó gracias a procesos de poblamiento de campesinos desplazados por la violencia. El bipartidismo de los años cincuenta marcó parte de la historia de esta zona. Ante este precedente, se fueron construyendo modelos alternativos de gobierno y justicia por la ausencia del Estado, donde tomaron fuerza las órdenes subalternas de los patrones o “zares” de las esmeraldas. Esta razón llevó a que esta zona se mantuviera por mucho tiempo al margen del conflicto armado entre los grupos insurgentes y el Estado colombiano.

La región de occidente se ha visto involucrada históricamente en sucesos de violencia, en especial, por la propiedad, el control y el manejo de las minas de esmeraldas. Dicha situación ubica como causa del conflicto las condiciones económicas de la población, siendo el monopolio económico un referente en sus vidas, la presencia de actores como Víctor Carranza, Gilberto Molina, Pedro Nel Rincón y Hollman Carranza ratifican esta percepción.

Para comprender este periodo de violencia en el Occidente de Boyacá, es fundamental destacar la denominada “guerra verde”, un

proceso que marcó profundamente la historia regional durante cerca de treinta años. Su origen se remonta a 1944, cuando la explotación de las minas de esmeraldas comenzó a desarrollarse bajo una permisividad estatal que, lejos de ordenar el territorio, generó tensiones entre el Gobierno y las iniciativas locales de carácter privado. La entrada del Estado encontró resistencia de actores que ya ejercían control sobre la minería, lo que provocó disputas por el dominio y aprovechamiento de los yacimientos. Como resultado, “el panorama social de esta zona cambiará de manera radical y la violencia se intensificará significativamente” (Bohórquez et al., 2020, p. 183). A partir de esta intervención estatal, se configuraron las diversas etapas de violencia que caracterizaron la región en las décadas siguientes.

La primera etapa fue de 1965 a 1973, la cual se dio a partir de la muerte de Efraín “el Ganso” Ariza, y con la captura de diferentes actores relacionados con el mercado de las esmeraldas, entre ellos miembros de la banda “La Pesada”, como Víctor Carranza. Además de la creación de industrias mineras como lo fue Esmeracol, Tecminas y Coexminas (Polo, et al., 1996).

La segunda etapa se dio de 1976 a 1977, allí sobresalió la aparición en el negocio de las esmeraldas de Gonzalo Rodríguez Gacha (“el Mexicano”), quien ayudó en la conformación del bando “Borbur”, liderado por Pablo Elías Delgadillo, y el bando “Coscuez”, liderado por “el Pequinés”, fortaleciendo su presencia en las minas y generando mayor escala en los conflictos. Este periodo de conflicto cesó al lograr “ser legitimados por el Estado, legalizar sus fortunas y consolidar grupos de seguridad privada legalmente constituidos, logrando así el control del negocio por la vía armada” (Baquero, 2017, citado en Flórez, 2020).

La tercera etapa se dio de 1984 a 1990; el conflicto se problematiza más debido a la privatización de las minas y la ahora informalidad del guaqueo, por lo tanto, el Estado tomó el control de las minas y solo se permitía los procesos de minería por parte de los “jefes esmeralderos”, que eran quienes dirigían las empresas mineras. De igual manera, no se respetaron los espacios para realizar dicho proceso y se generaron nuevas confrontaciones por parte de los empresarios. Como lo menciona Bohórquez et al. (2020), “el Estado no tuvo una intervención plausible, pues permitió que actores armados, ajenos a los márgenes

de la legalidad, lograran desligarse de los esquemas del monopolio de la fuerza que supuestamente poseía el Estado” (p. 192).

Aunque el narcotráfico no fue la causa principal del conflicto en el Occidente de Boyacá, sí contribuyó a agudizar la violencia en la región. La presencia de Gilberto Molina, aliado de Víctor Carranza, introdujo cultivos ilícitos y el uso ilegal de tierras, generando tensiones entre los “zares” de las esmeraldas. A pesar de que los jefes esmeralderos evitaron involucrarse directamente en el narcotráfico para no convertirse en objetivos del Estado, las alianzas y disputas entre estos actores profundizaron el conflicto territorial y económico. En este contexto, surgió el grupo armado “Los Carranceros”, conformado por familias de élite local, responsables de graves violaciones a los derechos humanos, como masacres, asesinatos selectivos y despojo de tierras, especialmente contra campesinos.

La confrontación entre los bandos Borbur (Muzo, Otanche, Quípama, La Victoria y San Pablo de Borbur) y Coscuez (Maripí, Pauna, Briceño, Coper, Buenavista y Tununguá) produjo una dinámica de violencia marcada por la ilegalidad, el control territorial y la apropiación de tierras. Esta guerra por las esmeraldas dejó profundas consecuencias en el tejido social y económico de la región. Como señala Flórez (2020), la distribución desigual de los ingresos, la escasa reinversión de las utilidades, el acceso inequitativo a la tierra y la débil presencia estatal reflejada en instituciones precarias han dificultado el avance hacia una economía independiente de la bonanza esmeraldera. Estas condiciones estructurales continúan siendo un obstáculo para el desarrollo sostenible y la consolidación de la paz territorial.

Una educación y una cultura de paz para la emancipación

Tras las etapas marcadas por la llamada “guerra verde” en el Occidente de Boyacá, el acuerdo de paz abrió la posibilidad de transformar las disputas territoriales que afectaban profundamente a los municipios de Quípama, Muzo, Pauna y San Pablo de Borbur. Con la firma de los acuerdos, estas comunidades se comprometieron a construir una paz estable, alejada de la violencia, y comenzaron a gestar una cultura

de paz como estrategia para la resolución pacífica de conflictos. Esta cultura se fundamenta en valores como la no violencia, el respeto, la convivencia y la educación, y se expresa en acciones colectivas orientadas a resignificar el territorio desde prácticas de reconciliación y transformación social.

Siguiendo a Muñoz y Molina (2009), la cultura de paz se concibe como una herramienta para gestionar la conflictividad y como antídoto frente a la violencia. En los municipios mencionados, este proceso se ha desarrollado mediante la reflexión sobre valores, actitudes y estilos de vida que promueven el respeto a la vida y la cooperación. La educación ha sido un factor clave, especialmente en Quípama y Muzo, donde se ha impulsado una pedagogía dialógica que permite comprender el contexto, construir una visión compartida de futuro y generar conciencia sobre la historia del conflicto. En este sentido, la educación para la paz se convierte en motor de cambio, articulando memoria, saberes locales y espacios culturales para fortalecer el tejido social y prevenir la repetición de la violencia.

Gestionar una cultura de paz en territorios marcados por la violencia no ha sido fácil. Las comunidades han enfrentado el reto de transformar y resignificar sus espacios desde esfuerzos individuales y colectivos, fomentando el diálogo y la creatividad para desactivar prácticas violentas. Como señala Freire (2005), la educación debe ser una praxis emancipadora que permita a los sujetos cuestionar su realidad y transformarla. En este marco, la cultura de paz implica reconocer la complejidad de los procesos territoriales, donde interactúan factores históricos, políticos, sociales y económicos. Los jóvenes, como actores clave, deben reflexionar sobre cómo gestionar los conflictos desde sus realidades, utilizando recursos como el arte, la cultura y los emprendimientos para resignificar el territorio. Así, la cultura de paz se proyecta como una apuesta por el desarrollo local, la justicia social y la construcción de un mundo ético y solidario.

En los municipios de Quípama y Muzo, históricamente afectados por décadas de violencia derivadas de disputas territoriales y la explotación de esmeraldas, la educación ha sido clave para romper las cadenas de violencia y construir puentes hacia la paz. A través de procesos educativos, culturales y artísticos, las comunidades han logrado

resignificar el territorio y emprender caminos de transformación social. Freire (1970) conceptualiza este progreso como un acto rehabilitador, en el que el sujeto comprende su realidad y entorno, y se moviliza hacia la emancipación mediante la reflexión crítica y la acción colectiva. Este punto de partida ha permitido que los municipios se piensen desde una lógica de cambio estructural, orientada a un futuro más equitativo y justo.

La educación para la paz se ha convertido en un motor de resistencia y transformación en estos territorios, sobre todo a través de la participación juvenil en espacios políticos que promueven la territorialidad y la no violencia. Zaragoza (2003) plantea que este tipo de educación es un proceso participativo que desarrolla la capacidad crítica de los nuevos ciudadanos, mientras que Cerdas (2015) la define como una pedagogía que permite desaprender la violencia y vivenciar la paz en las relaciones humanas. En Quípama y Muzo, estos enfoques han facilitado estrategias de concientización que transforman prácticas violentas y aportan a procesos de reparación y reconciliación, generando una nueva perspectiva del territorio basada en los derechos humanos, el respeto a la diversidad cultural, la sostenibilidad ambiental y la prevención de conflictos.

Los aportes de la educación para la paz se entrelazan con la cultura de paz, entendida como una construcción colectiva que fomenta la reconciliación y la no violencia en contextos de postconflicto. Este proceso pedagógico ha permitido a los habitantes de Quípama y Muzo desarrollar nuevas formas de relacionarse, desaprendiendo las violencias históricas y cotidianas que han marcado la sociedad colombiana. Como señala Cerdas (2015), la educación para la paz no es exclusiva de las instituciones educativas, sino que debe ser vivida en la cotidianidad, mediante el respeto mutuo, la solidaridad, la empatía y la resolución pacífica de conflictos. En el Occidente de Boyacá, la lucha constante de sus habitantes ha consolidado una educación para la paz que reconoce el contexto sociohistórico y cultural, y que impulsa procesos de empoderamiento y acción comunitaria. Educar para la paz, en este sentido, es educar para los derechos humanos, no solo desde el conocimiento, sino desde la práctica diaria en una lucha constante por la transformación social.

Educación para la paz: transición cultural hacia una visión de un futuro de paz

En el contexto posterior a la guerra verde, los jóvenes de Quípama y Muzo han comenzado a proyectar sus vidas hacia un futuro en paz, influenciados por los acuerdos que han promovido el diálogo y la no violencia como pilares de transformación. Esta transición implica reconocer los hechos históricos que marcaron el territorio, como las disputas por las esmeraldas, para comprender sus impactos y construir nuevas narrativas de dignificación. Sin embargo, esta transformación no ha sido sencilla, ya que persisten imaginarios heredados por generaciones anteriores, donde la minería representa la única vía de progreso económico. La figura del “patrón”, asociada al poder, el dinero y el prestigio, ha sido un modelo aspiracional que relegó la educación como opción de desarrollo personal y colectivo.

La cultura del dinero fácil, basada en la g.uaquería y el derroche, comenzó a fragmentarse cuando las oportunidades en la minería dejaron de ser accesibles para todos. Ante esta realidad, las instituciones educativas locales iniciaron procesos de formación técnica desde el nivel medio, buscando abrir nuevas posibilidades laborales. Aunque inicialmente estas ofertas no generaban grandes expectativas, la articulación con el SENA y los gobiernos municipales permitió el desarrollo de programas en salud ocupacional, medio ambiente, agropecuaria y tecnología, vinculando a los jóvenes con prácticas profesionales en el territorio. La privatización de las minas en 2009 y la precarización del trabajo minero aceleraron el cambio cultural, debilitando el poder de las familias tradicionales y abriendo espacio para que los jóvenes consideraran la educación como herramienta de transformación y paz.

A partir de estas transformaciones, los gobiernos locales y organizaciones como la Fundación Muzo comenzaron a ofrecer becas para estudios superiores, aunque con cupos limitados. Esta estrategia ha permitido que algunos jóvenes proyecten sus vidas más allá de la mina, reconociendo la educación como vía para el desarrollo territorial. No obstante, muchos aún enfrentan barreras económicas y sociales que los obligan a continuar en labores mineras informales. A pesar de ello, se evidencia una creciente conciencia sobre la necesidad de abandonar

la cultura de la riqueza rápida y transitar hacia una cultura de paz, basada en la educación, el respeto a la diversidad, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de una ciudadanía democrática. Educar para la paz en este contexto implica desaprender la violencia, reconocer las diferencias y generar procesos sociales que dignifiquen la vida en el territorio.

El papel de las instituciones educativas en la construcción de paz

Las instituciones educativas municipales (IEM) han desempeñado un papel fundamental en la construcción de paz territorial en Quípama y Muzo, al convertirse en reflejo de los procesos de transición sociocultural vividos en las últimas tres décadas. Estas instituciones han asumido el rol de agentes de reconciliación y no violencia, promoviendo estrategias educativas que responden a las necesidades locales. Un ejemplo significativo es la Institución Educativa Técnica La Floresta, nacida del deseo comunitario de ofrecer educación en la zona rural de Quípama. Esta institución ha brindado formación desde preescolar hasta media vocacional, incluyendo programas técnicos en Gestión Empresarial y educación para adultos. Asimismo, la IET. Nuestra Señora de la Paz, ubicada en el área urbana, se ha vinculado simbólicamente al proceso de paz en el Occidente de Boyacá, en articulación con la Iglesia católica.

La historia de estas instituciones está marcada por la autogestión comunitaria frente a la deserción escolar, el analfabetismo y la limitada cobertura educativa. La comunidad de Quípama, ante la precariedad de infraestructura y la falta de docentes, organizó reuniones, bazares y eventos para recolectar fondos y construir espacios educativos en las veredas. La primera reunión, realizada el 11 de junio de 1987, dio origen a la escuela en la casa de la señora Solangel Cañón, donde se dictaban clases en modalidad de grado integrado. Con el tiempo, se logró construir una sede propia y ampliar la oferta educativa gracias a la articulación con el colegio Nuestra Señora de la Paz. En 1995 se inició la educación básica y media, y en 1998 se consolidó la independencia institucional con la creación del grado noveno. Este proceso permitió que los jóvenes accedieran a conocimientos técnicos vinculados a la

vocación productiva del territorio, como la minería, la agricultura y el cuidado ambiental.

La autogestión educativa ha fortalecido el sentido de pertenencia de los jóvenes, promoviendo una educación digna y de calidad como base para la construcción de una cultura de paz. Estas prácticas han orientado nuevas vocaciones productivas, alejadas de la explotación de esmeraldas, y han fomentado valores como la no violencia, la solidaridad y el respeto por el territorio. Como señala Fajardo (2022), los padres mineros se esfuerzan para que sus hijos accedan a oportunidades educativas que les permitan transformar el municipio y contribuir a su desarrollo;

Hoy en día muchos jóvenes buscan salir adelante gracias a que sus padres, pues viven del sector minero y buscan involucrarse en una generación que les pueda brindar algo diferente a sus hijos, en el sentido de que no tengan que vivir lo que ellos vivieron [...]. Y de tal forma se esfuerzan para que nosotros los jóvenes podamos salir del municipio a formarnos y asimismo volver a contribuir a que nuestro occidente de Boyacá se fortalezca poco a poco. (N. Fajardo, comunicación personal, 2022)

Este proceso ha generado una paz territorial localizada, donde la educación, el arte y la cultura se convierten en las nuevas herramientas para enfrentar las violencias históricas. Las instituciones educativas han sido clave para formar generaciones comprometidas con la justicia, la memoria colectiva y la transformación social de la región.

Promoción de la educación para construir una paz territorial

Las prácticas de informalidad e ilegalidad en la explotación de esmeraldas generaron décadas de violencia en el Occidente de Boyacá. La extracción de este recurso natural se realizó bajo condiciones que afectaban la seguridad de los mineros, el bienestar comunitario y el desarrollo regional. Esta situación provocó actos de criminalidad por el control del territorio, fragmentando las relaciones sociales entre

municipios como Quípama y Muzo. Las enemistades entre habitantes de ambos municipios dificultaron la resolución pacífica de los conflictos y obstaculizaron la posibilidad de construir una paz territorial basada en las potencialidades locales.

La llegada de empresas multinacionales en 2009, como Muzo Colombia y Minería Texas Colombia (MTC), marcó un cambio en el modelo de explotación minera. Estas compañías adoptaron prácticas más sostenibles, considerando el medio ambiente y el bienestar de los trabajadores. En 2014, se iniciaron proyectos de diversificación económica, programas de becas para educación superior, entrega de kits escolares y alianzas con escuelas artísticas, culturales y deportivas. En 2018, la Fundación Muzo recibió reconocimiento nacional por su gestión social, al promover el acceso a la educación y transformar los imaginarios de riqueza y poder asociados a la figura del patrón. Las instituciones educativas, los gobiernos locales y las empresas comenzaron a trabajar conjuntamente para motivar a las nuevas generaciones a participar en procesos educativos formales e informales.

La Fundación Muzo ha sido clave en el desarrollo de la educación para la paz, al diseñar mecanismos pedagógicos que promueven los derechos humanos, la memoria colectiva y la resolución de conflictos. Aunque su modelo responde también a intereses empresariales, ha contribuido a disminuir las violencias estructurales, culturales y directas que históricamente afectaron a la región. Se han creado estrategias que fortalecen habilidades comunitarias, desde la atención a la primera infancia hasta proyectos productivos para adultos mayores.

Espacios como el Centro Cultural han fomentado el aprendizaje, la recreación y la convivencia intergeneracional. Siguiendo a Piaget (1974), el aprendizaje cobra sentido en contextos de cambio, y en Quípama y Muzo la educación se ha convertido en un vehículo para transformar las condiciones de vida. A través del programa de becas, se promueve el capital cultural (Bourdieu, 2001), aunque persisten desafíos como la deserción escolar y el enfoque utilitario de la formación técnica. No obstante, estos procesos han resignificado el territorio, generando acciones colectivas que fortalecen la paz territorial desde la educación, la cultura y la participación comunitaria.

Reflexiones finales

La historia de Quípama y Muzo está marcada por décadas de violencia asociada al conflicto por las esmeraldas, la ausencia del Estado y el poder de actores armados locales. Sin embargo, el proceso de paz iniciado en los años noventa, mediado por la Iglesia y actores comunitarios, abrió la posibilidad de resignificar el territorio desde la memoria, la reconciliación y la educación. Esta reconstrucción territorial ha implicado reconocer las heridas del pasado, comprender las causas estructurales del conflicto y generar nuevas narrativas que dignifiquen la vida de sus habitantes.

Las instituciones educativas municipales han sido pilares fundamentales en la transición hacia una cultura de paz. A través de procesos de autogestión, participación comunitaria y ampliación de la cobertura educativa, se han creado espacios de formación que permiten a niños, niñas y jóvenes construir proyectos de vida alejados de la violencia. La educación técnica, la formación en valores y el vínculo con el territorio han sido claves para fomentar la conciencia crítica, fortalecer el sentido de pertenencia y abrir caminos hacia el desarrollo local.

La juventud ha desempeñado un papel central en esta transformación. Frente a los imaginarios heredados de la cultura minera, como el dinero fácil y el poder del patrón, los jóvenes han comenzado a proyectar sus vidas desde nuevas vocaciones productivas, como el agro, el emprendimiento y el cuidado ambiental. La educación para la paz ha sido el motor que les permite desaprender la violencia, reconocer sus derechos y construir relaciones basadas en el respeto, la empatía y la solidaridad.

A pesar de los avances, persisten desafíos estructurales como la precariedad institucional, la limitada inversión pública y el acceso desigual a la educación superior. Estos obstáculos dificultan la consolidación de una paz territorial sostenible. No obstante, las iniciativas locales, los convenios con universidades y las becas gestionadas por gobiernos municipales y organizaciones como la Fundación Muzo han demostrado que es posible construir oportunidades educativas que transformen el territorio desde abajo.

La experiencia de Quípama y Muzo evidencia que la paz no se impone, sino que se construye colectivamente desde el reconocimiento del otro, la participación activa y la transformación de las condiciones que generan violencia. La educación para la paz, articulada con la cultura, el arte y la memoria, se convierte en una herramienta poderosa para imaginar y construir territorios más justos, equitativos y sostenibles. En este sentido, la apuesta por una cultura de paz es también una apuesta por la dignidad, la justicia social y el fortalecimiento de la democracia local.

Referencias

- Arévalo, J. B. (2014). Construcción de paz y nuevo modelo de construcción de Estado: una lectura de los dos primeros acuerdos de La Habana. *Revista de Economía Institucional*, 16(30), 131-169. <https://revistas.uextornado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/3780/3926>
- Avellaneda Hernández, S. L. y Pardo Morcote, S. M. (2019). Educando para la paz: un estudio desde las instituciones educativas rurales del páramo de la Sarna en Boyacá, Colombia. *Pensamiento Jurídico*, (50), 183-205. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/peju/article/view/85375>
- Bohórquez Malagón, M. C., Olaya Wilches, J. D. y Mosquera Zambrano, S. (2020). Tercera guerra verde: antecedentes, características y proceso de paz del periodo de violencia del occidente de Boyacá (1986-1990). *Criterios. Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política Internacional*, 13(2), 181-208. <http://revistas.usbbog.edu.co/index.php/criterios/article/view/5505/3972>
- Bourdieu, P. (2001). Las formas del capital: capital económico, capital cultural y capital social. En *Poder, derecho y clases sociales* (pp. 131-164). Desclée de Brouwer. <https://erikafontanez.com/wp-content/uploads/2015/08/pierre-bourdieu-poder-derecho-y-clases-sociales.pdf>
- Cerdas-Agüero, E. (2015). Desafíos de la educación para la paz hacia la construcción de una cultura de paz. *Revista Electrónica Educare*, 19(2), 135-154. http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-42582015000200009&lng=en&tlng=en
- Courtheyn, C. (2019). Territorios de paz: otras territorialidades en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Colombia. *Territorios*, (40), 291-318- <http://www.scielo.org.co/pdf/terri/n40/2215-7484-terri-40-291.pdf>

- Escobar, A. (2018). *Designs for the pluriverse: Radical interdependence, autonomy, and the making of worlds*. Duke University Press.
- Fajardo Montaña, D. (2002). *Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra: comunidades, tierras y territorios en la construcción de un país*. Instituto de Estudios Ambientales [IDEA], Universidad Nacional de Colombia.
- Fisas, V. (1998). Una cultura de paz. En *Cultura de paz y gestión de conflictos* (cap. XI). Icaria/Unesco.
- Freire, P. (2005). *Pedagogía de la esperanza*. Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- Flórez Varela, Á. M. (2020). *La paz verde, escenarios de transformación de conflictos en el occidente de Boyacá*. Universidad Nacional de Colombia. <https://www.bivipias.unal.edu.co/handle/123456789/798?locale=es>
- Galtung, J. (2016). La violencia: cultural, estructural y directa. En *Política y violencia: comprensión teórica y desarrollo en la acción colectiva* (Ed.). *Cuadernos de Estrategia*, n.º 183, (pp. 147-168). Instituto Español de Estudios Estratégicos.
- Garnica Posada, L. C. (2023). *Indicadores para la medición de paz en el Occidente de Boyacá: 30 años después del acuerdo de paz*. Universidad Santo Tomás [Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás]. <https://repository.usta.edu.co/items/055c5c29-3097-4aba-81a8-84fd0702c01c/full>
- Gobernación de Boyacá. (2021). *Marco territorial de lucha contra la pobreza extrema*. https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2021/04/MARCO-POBREZA-DEPARTA-BOYACA_compressed.pdf
- Hernández Arteaga, I., Luna Hernández, J. A. y Cadena Chala, M. C. (2017). Cultura de paz: una construcción desde la educación. *Revista Científica General José María Córdova*, 15(20), 123-140. http://scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-72382017000100009
- Lederach, A. J. (2017). “The campesino was born for the campo”: A multispecies approach to territorial peace in Colombia. *American Anthropologist*, 119(4), 589-602. <https://doi.org/10.1111/aman.12925>
- Merino, J. V. (2008). La educación intercultural: estrategia de educación para la paz. En A. Monclús y C. Saban (Coords.), *Educación para la paz: enfoque actual y propuestas didácticas* (pp. 153-190). Ediciones CEAC.
- Monclús, A. (2008). La educación para la paz en una sociedad globalizada. En A. Monclús y C. Saban (Coords.), *Educación para la paz: enfoque actual y propuestas didácticas* (pp. 17-44). Ediciones CEAC.

- Monroy Aldana, V. y Wiesner Pachón, J. M. (2022). *Fortalecimiento de una propuesta de educación para la paz a través de la justicia escolar restaurativa* [Trabajo de grado, Universidad Pedagógica Nacional]. <https://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/18642>
- Muñoz, F. y Molina, B. (2009). Una cultura de paz compleja y conflictiva. La búsqueda de equilibrios dinámicos. *Revista, Paz y Conflictos*, (3). https://www.ugr.es/~revpaz/articulos/rpc_n3_2010_art3.pdf
- Naranjo, C. (2007). *Cambiar la educación para cambiar el mundo*. Editorial Cuarto Propio.
- Piaget, J. y Gréco, P. (1974). *Aprendizagem e conhecimento*. Freitas Bastos.
- Polo, M., Restrepo, P. y Mayorga, E. (1996). Conflicto esmeraldífero en el Occidente de Boyacá. *International Household Survey Network*. <http://www.geocities.ws/adolfopolo2004/conflicto.pdf>
- Ramos Pérez, M. E. (2003). El desarrollo de la educación para la paz. Educación XX1. *Revista de la Facultad de Educación*, (6), 129-146.
- Salguero Juan y Seva, J. M. (2005). *Educación para la paz: el caso de un país dominado por la violencia: Colombia* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. <https://docta.ucm.es/rest/api/core/bitstreams/330692a0-ebf7-434c-870d-f0f11f3d27eb/content>
- Sánchez, M. (2010). La educación para la paz en Colombia: una responsabilidad del Estado social de derecho. *Via Iuris*, (9), 141-160. <https://www.redalyc.org/pdf/2739/273919441007.pdf>
- Tuvilla Rayo, J. (2004). *Cultura de paz: fundamentos y claves educativas*. Desclée de Brouwer. https://books.google.com.co/books/about/Cultura_de_paz.html?id=Kj82AAAACAAJ&redir_esc=y
- Zaragoza, F. (2003). Educación para la paz. *Educación, XX1*(6). <https://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/350/303>

Webgrafía

- Fundación Muzo. (2020). Una oportunidad para crear. <https://muzocolombia.co/wp-content/uploads/2021/10/Informe-de-sostenibilidad-2020-Fundacion-Muzo.pdf>

CAPÍTULO 8

Juventudes, gestión pública y dinámicas institucionales en el occidente de Boyacá

INDILAY MONJE SANDOVAL
HELEN VIVIANA OVALLE FLÓREZ
ANDRÉS FELIPE RUIZ GÓMEZ
KEVIN SEBASTIÁN MEDINA CORREDOR

Presentación del capítulo

Este capítulo examina el papel de las juventudes en la gestión pública y las dinámicas institucionales en el Occidente de Boyacá, con énfasis en los municipios de Muzo, Pauna y Quípama y San Pablo de Borbur. A partir de un enfoque territorial y generacional, se analiza cómo los jóvenes han emergido como actores clave en la construcción de paz mediante prácticas productivas, culturales, educativas y políticas que reconfiguran sus entornos. La metodología utilizada combina revisión documental, entrevistas semiestructuradas a jóvenes líderes, emprendedores y funcionarios públicos, así como observación participante en espacios de formación y deliberación juvenil. Este enfoque cualitativo permite comprender las estrategias de incidencia política desarrolladas por las juventudes, el impacto de las políticas públicas locales y el papel de las organizaciones sociales en la transición económica del territorio.

El capítulo se propone visibilizar a las juventudes como agentes de cambio que, desde sus propias experiencias, transforman las relaciones con las instituciones y contribuyen a la construcción de paz territorial.

Introducción

La participación juvenil en el departamento de Boyacá ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente en el Occidente del territorio, donde históricamente los jóvenes han enfrentado condiciones de exclusión, precariedad y violencia. En esta región, marcada por la guerra verde y una fuerte vocación minera, las juventudes han sido tradicionalmente relegadas a labores del campo y la g.uaquería, sin mayores oportunidades de desarrollo integral. Sin embargo, en la última década se ha evidenciado un proceso de transformación en el que los jóvenes han comenzado a incidir en ámbitos políticos, económicos, culturales y educativos, reconfigurando el territorio desde sus propias formas de agencia.

Este capítulo se propone analizar cómo las juventudes del Occidente de Boyacá, en especial, en los municipios de Muzo, Pauna y Quípama, han emergido como actores clave en la construcción de paz territorial. A través de sus prácticas productivas, culturales y políticas, los jóvenes han desafiado la visión adultocéntrica de las instituciones gubernamentales, generando nuevas dinámicas de participación y gestión pública. La pregunta central que orienta este análisis es: ¿cómo las formas de agencia juvenil reconfiguran el territorio del Occidente de Boyacá a partir de prácticas que contribuyen a la construcción de paz?

Para responder a esta pregunta, se presentan experiencias concretas de jóvenes emprendedores, líderes comunales y empleados públicos que han participado en procesos de transformación territorial. Se examinan sus trayectorias generacionales, sus vínculos con la minería y la g.uaquería, y el surgimiento de políticas públicas orientadas a fortalecer la participación juvenil, como los Consejos de Juventud y los espacios de formación en liderazgo como Boyapaz. Asimismo, se indaga sobre las estrategias que han desarrollado para incidir en las políticas locales y transformar las condiciones estructurales que históricamente los han marginado.

En un primer momento, se aborda el trabajo de la Fundación Muzo en los municipios de Muzo y Quípama, destacando sus iniciativas de fortalecimiento de la acción comunal y formación de liderazgos juveniles. Estas experiencias permiten comprender cómo se han creado escenarios de reflexión, acción y evaluación que promueven la participación política desde lo local. En segundo lugar, se analiza el desarrollo de las políticas de juventud en los planes de desarrollo municipales y departamentales, así como el papel de los Consejos de Juventud en la articulación de demandas juveniles.

Finalmente, se revisa la gestión pública desde las alcaldías y organismos de gobierno en relación con la transición económica del territorio, tomando como referencia los Planes de Desarrollo Municipal y las iniciativas de las organizaciones campesinas. El capítulo concluye con una reflexión sobre la estructura y composición de los Consejos de Juventud, su papel en la gestión local y su potencial para consolidar procesos de paz territorial desde las juventudes. Esta mirada integral permite visibilizar a las juventudes como agentes de cambio que, desde sus prácticas cotidianas, están transformando el Occidente de Boyacá.

Antecedentes

Diversas investigaciones han abordado el papel de las juventudes en procesos de transformación territorial, participación política y gestión pública en el departamento de Boyacá, especialmente en municipios del Occidente como Muzo, Pauna y Quípama. Estas experiencias permiten contextualizar el análisis de las dinámicas juveniles en escenarios marcados por la minería, la ruralidad y la exclusión institucional.

Ahumada (2020) estudia las experiencias juveniles en zonas mineras, específicamente en Muzo, Boyacá, destacando cómo los jóvenes construyen identidad y agencia en contextos atravesados por la guerra y la violencia. Su investigación revela que, a pesar de las condiciones adversas, las juventudes desarrollan formas de organización y participación que resignifican el territorio desde lo cotidiano.

Ballén (2021), por su parte, analiza la visibilidad de la agencia juvenil rural mediante el uso de redes sociales, tomando como caso el Colectivo JOB en Boyacá. Su estudio muestra cómo las plataformas

digitales se convierten en espacios de expresión política, articulación comunitaria y construcción de ciudadanía, sobre todo, en territorios donde la institucionalidad es débil o distante.

En el municipio de Pauna, Quiroga et al. (2022) proponen una articulación entre economía solidaria y desarrollo rural integral, reconociendo el papel de las juventudes en procesos agroindustriales, turísticos y comunitarios. La investigación destaca la importancia de las políticas públicas que promuevan la participación juvenil en la transformación productiva del territorio. Desde una perspectiva educativa, Barrera (2013) analiza la relación entre educación y desarrollo en Pauna, evidenciando la desconexión entre la oferta educativa y las aspiraciones juveniles. Su estudio propone una educación contextualizada que responda a las realidades locales y fortalezca el protagonismo juvenil en el desarrollo territorial.

Pinilla (2021) introduce el concepto de “resiliencia comunitaria” como estrategia para el desarrollo rural desde la perspectiva juvenil. Su investigación en dos municipios de Boyacá muestra cómo los jóvenes, mediante prácticas organizativas y comunitarias, enfrentan la precariedad y construyen alternativas de vida que inciden en la gestión pública local.

Finalmente, Niño (2023) analiza los espacios y mecanismos de participación ciudadana en Boavita, Boyacá, destacando el papel de los Consejos Municipales de Juventud y otras formas organizativas juveniles. Su estudio evidencia cómo los jóvenes disputan sentidos sobre lo público y lo político, generando prácticas democráticas desde lo local.

En conjunto, estas investigaciones permiten comprender que las juventudes en el Occidente de Boyacá no solo son actores sociales relevantes, sino también agentes estratégicos en la construcción de paz territorial, la transformación institucional y el desarrollo local.

Metodología

Este capítulo se desarrolló desde un enfoque cualitativo, orientado a comprender las dinámicas de participación juvenil y su relación con la gestión pública en el Occidente de Boyacá. El objetivo fue analizar el papel de las juventudes en la gestión pública y las dinámicas

institucionales en el Occidente de Boyacá, con énfasis en los municipios de Muzo, Pauna y Quípama y San Pablo de Borbur. Para ello, se adoptó un diseño descriptivo y analítico que permitió identificar procesos históricos, institucionales y comunitarios vinculados a la juventud en los municipios abordados.

La recolección de información se realizó mediante revisión documental de planes de desarrollo municipal, ordenanzas departamentales, políticas públicas de juventud y normativas nacionales (Ley 1622 de 2013 y Ley 1885 de 2018). Asimismo, se analizaron informes institucionales, proyectos comunitarios y documentos de fundaciones privadas como la Fundación Muzo. Esta revisión se complementó con literatura académica sobre juventud, gestión pública y desarrollo territorial, lo que permitió construir el marco teórico y contextualizar los hallazgos.

Como parte del trabajo de campo, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a actores clave: jóvenes líderes, consejeros de juventud, funcionarios de alcaldías y representantes de organizaciones comunitarias. Estas entrevistas se realizaron en visitas a los municipios y se orientaron a indagar sobre percepciones, experiencias y estrategias de participación juvenil en escenarios institucionales y comunitarios. Además, se incorporaron relatos y testimonios que evidencian las tensiones entre las expectativas juveniles y las oportunidades reales en el territorio.

Finalmente, se empleó análisis de contenido para sistematizar la información obtenida, identificando categorías como participación política, transición económica, gestión pública y responsabilidad social empresarial. Este análisis permitió establecer relaciones entre los discursos institucionales y las prácticas juveniles, así como reconocer los avances y limitaciones en la construcción de paz territorial desde la juventud. La triangulación entre fuentes documentales, entrevistas y observación directa garantizó la validez y coherencia de los resultados.

Claves conceptuales para la participación juvenil, la gestión pública y la gobernabilidad

Participación política juvenil

La juventud en América Latina atraviesa un momento coyuntural marcado por la transformación de los valores tradicionales que antes guiaban el tránsito hacia la adultez. Esta pérdida de referentes normativos ha dado paso a nuevas concepciones sobre lo juvenil, que lo entienden no solo como una etapa biológica o transitoria, sino como una categoría social diferenciada, con derechos, problemáticas y formas de participación propias (Cepal, 1985 citado en Moreno, 2016). Desde el siglo xx, la historia de la juventud ha estado atravesada por contextos de conflicto y movilización, consolidando su papel como actor social relevante en los procesos de cambio.

Desde una perspectiva sociológica y política, el joven es comprendido hoy como un ciudadano con capacidad de agencia, capaz de construir estrategias, alternativas y modos de participación que responden a sus expectativas individuales y colectivas. Esta visión lo reconoce como sujeto democrático, portador de derechos y deberes, con potencial para incidir en los espacios institucionales y comunitarios (García, 2008). En Colombia, esta comprensión ha sido recogida en la Ley Estatutaria 1885 de 2018, que establece mecanismos para fortalecer el protagonismo juvenil en la gestión pública, promoviendo su articulación con las instituciones y reconociendo su papel como agente de cambio.

La ley permite que jóvenes entre los 14 y 28 años participen en la formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas de juventud, así como en el control social de la gestión pública. Se promueve la creación de plataformas juveniles en los niveles municipal, departamental y nacional, y se garantiza el derecho al voto para elegir los Consejos de Juventud, consolidando así un sistema de participación que reconoce a las juventudes como grupo poblacional estratégico (Congreso de la República de Colombia, 2018). Este marco normativo y conceptual es clave para comprender las dinámicas juveniles en

el Occidente de Boyacá, donde los jóvenes han comenzado a disputar espacios de representación y decisión en contextos históricamente marcados por la minería, la g.uaquería y la violencia.

La participación juvenil en esta región no solo responde a una necesidad de inclusión, sino que se configura como una estrategia de transformación territorial. En este proceso, los jóvenes reconfiguran sus vínculos con el Estado, la comunidad y el entorno productivo. El análisis de las juventudes en Muzo, Pauna y Quípama se inscribe en una lectura crítica de los procesos de construcción de ciudadanía juvenil, articulando elementos estructurales (como la legislación y las políticas públicas) con las prácticas cotidianas de los jóvenes en sus territorios. Esta mirada permite visibilizar las tensiones entre institucionalidad y agencia juvenil, así como las oportunidades que emergen para la construcción de paz territorial desde las juventudes organizadas.

La participación política juvenil en Colombia y América Latina ha sido objeto de creciente interés académico, especialmente en contextos rurales y marcados por desigualdades estructurales. Alvarado et al. (2008) destacan que los sentidos y prácticas de participación juvenil no pueden entenderse solo desde los marcos institucionales tradicionales, sino que deben ser abordados desde las experiencias concretas de los jóvenes, sus formas de organización, sus lenguajes políticos y sus vínculos con el territorio. En este sentido, la participación política se configura como un proceso dinámico, donde los jóvenes construyen ciudadanía desde lo cotidiano, muchas veces al margen de las estructuras formales del Estado.

Vommaro (2019) aporta una mirada generacional que permite comprender cómo las juventudes enfrentan desigualdades persistentes en América Latina, y cómo estas condiciones influyen en sus formas de participación. El autor señala que los jóvenes no solo demandan derechos, sino que también los ejercen mediante prácticas que desafían las lógicas adultocéntricas y excluyentes. La participación juvenil, entonces, se convierte en una herramienta para disputar sentidos sobre lo público, lo político y lo comunitario, especialmente en territorios donde el Estado ha sido históricamente débil o ausente.

Desde una perspectiva rural, López (2009) propone el concepto de “construcción social de la juventud rural”, que permite visibilizar

las especificidades de los jóvenes en contextos campesinos y mineros. El autor advierte que las políticas de juventud han tendido a invisibilizar estas realidades, reproduciendo modelos urbanos y homogéneos que no responden a las necesidades ni a las aspiraciones de las juventudes rurales. En este marco, la participación política juvenil en zonas como el Occidente de Boyacá debe ser entendida como una forma de resistencia, de afirmación identitaria y de construcción de alternativas de vida frente a la precariedad y la violencia.

Chaparro y Chica (2021), en su revisión de literatura sobre juventud rural en América Latina, evidencian que los estudios recientes han comenzado a reconocer la agencia juvenil en procesos de transformación territorial. Los jóvenes rurales no son meros receptores de políticas, sino actores que inciden en la configuración de sus comunidades, mediante prácticas productivas, culturales y políticas. Esta visión se complementa con las orientaciones estratégicas propuestas por Reca y Martini (2014), quienes abogan por políticas públicas que reconozcan la diversidad de juventudes rurales, promuevan su participación efectiva y fortalezcan sus capacidades organizativas.

En conjunto, estos enfoques teóricos permiten comprender la participación política juvenil como un proceso situado, relacional y transformador. En el caso del Occidente de Boyacá, esta participación se expresa en la creación de espacios de liderazgo, en la incidencia en políticas locales, y en la articulación de saberes tradicionales con nuevas formas de organización. Reconocer estas dinámicas es fundamental para avanzar en la construcción de paz territorial desde las juventudes, superando las visiones asistencialistas y adultocéntricas que han predominado en las políticas públicas.

Gestión pública territorial

La gestión pública territorial constituye un componente esencial en los procesos de desarrollo local, al articular las relaciones entre ciudadanía, institucionalidad y territorio. Según Mariñez (2016), la gestión pública debe entenderse como una herramienta compuesta por saberes técnicos, políticos y sociales sobre lo público, que permite establecer compromisos entre el gobierno y los ciudadanos. Esta herramienta

facilita el fortalecimiento del civismo mediante el ejercicio del control social, promoviendo una vigilancia activa sobre los recursos públicos y los programas sociales, y definiendo competencias de participación que contribuyen a la eficiencia y legitimidad de los gobiernos. En este sentido, se promueve una comunicación más abierta y menos burocrática entre la ciudadanía y el Estado.

Además de su dimensión técnica, la gestión pública territorial cumple una función mediadora en la conciliación, negociación y generación de acuerdos colectivos, orientados a las necesidades de las comunidades y al uso estratégico de los recursos disponibles. Mariñez-Navarro (2016) señala que este enfoque permite generar alternativas que promueven la autonomía en la dirección de proyectos sociales, superando la dependencia exclusiva de las políticas gubernamentales. Así, se logra una mayor precisión en la toma de decisiones públicas, optimizando recursos, tiempos, cobertura y participación ciudadana.

La participación juvenil en este contexto ha sido clave para impulsar procesos de transformación territorial. En regiones como el Occidente de Boyacá, los jóvenes han transitado de una economía extractiva hacia modelos comunitarios basados en la agricultura, el ecoturismo y la sostenibilidad ambiental. Estas prácticas no solo responden a las demandas locales, sino que también fortalecen la construcción de paz territorial, al vincular la gestión pública con alternativas productivas que emergen desde las juventudes organizadas.

En esta línea, Calderón y Jaime (2018) destacan que la gestión pública territorial debe resaltar la relación entre ciudadanos, comunidades y gobiernos locales, mediante procesos de gobernanza que reconozcan la diversidad de actores sociales. Rico y Rico (2013) complementan esta visión al afirmar que la administración pública implica modernizar al Estado para adaptarlo a las nuevas condiciones históricas y retos contemporáneos, redefiniendo su relación con la sociedad civil. Esta modernización exige una gestión pública más eficiente, participativa y orientada al cumplimiento de fines colectivos.

Parte fundamental de esta transformación institucional radica en la cualificación de los funcionarios públicos, quienes deben reconocer los saberes y potencialidades territoriales en armonía con las prácticas sociopolíticas locales. Esto es especialmente relevante en la formulación

de instrumentos como los planes de desarrollo municipal, los planes de ordenamiento territorial y las políticas públicas. La gestión pública territorial ha evolucionado hacia modelos más participativos, inclusivos y contextualizados, reconociendo la diversidad de actores sociales que inciden en la transformación de los territorios.

En este marco, la participación juvenil adquiere un papel central, especialmente en contextos rurales y periféricos donde históricamente han sido excluidos de los procesos de decisión. Guarín (2024) destaca que la participación de las juventudes en la administración pública, como en el caso del municipio de San José del Guaviare, revela tensiones entre la institucionalidad y las formas emergentes de ciudadanía juvenil, que se expresan desde lo urbano pero también desde lo comunitario y territorial. Su estudio evidencia cómo los jóvenes construyen agencia política desde sus propias realidades, desafiando estructuras burocráticas y adultocéntricas.

Desde una perspectiva más amplia, Morales et al. (2020) proponen el concepto de desarrollo territorial sostenible articulado con la emergencia de nuevas ciudadanías, en las que las juventudes desempeñan un rol activo en la formulación de políticas públicas para un mundo en transformación. Estos autores plantean que la gestión pública debe adaptarse a las dinámicas locales, reconociendo las prácticas sociales, culturales y económicas que configuran los territorios. En este sentido, la participación juvenil no solo debe ser promovida desde lo institucional, sino también desde el reconocimiento de sus saberes, lenguajes y formas de organización.

Rodríguez (2000) aporta una mirada crítica sobre las políticas públicas de juventud en América Latina, señalando que muchas de ellas han sido diseñadas desde una lógica asistencialista y homogénea, sin considerar las especificidades territoriales ni las capacidades organizativas de los jóvenes. Su análisis subraya la necesidad de una gestión institucional que dialogue con las juventudes como sujetos políticos, capaces de incidir en la transformación de sus entornos. Esta perspectiva es clave para comprender los desafíos que enfrentan los jóvenes en regiones como el Occidente de Boyacá, donde la minería, la gUAQUERÍA y la violencia han configurado históricamente las relaciones entre comunidad e institucionalidad.

Del mismo modo, Cuervo (2001) plantea que la gestión de lo público debe ir más allá de lo estatal, reconociendo la intervención de actores sociales, comunitarios y territoriales en la reconstrucción y el desarrollo. Su estudio sobre el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero muestra cómo la articulación entre Estado y sociedad civil puede generar procesos de gobernanza territorial más efectivos y legítimos. Esta perspectiva resulta especialmente pertinente para analizar las experiencias juveniles en el Occidente de Boyacá, donde las organizaciones sociales, las plataformas juveniles y los Consejos de Juventud han comenzado a disputar espacios de representación y decisión.

En conjunto, estos enfoques permiten comprender la gestión pública territorial como un proceso relacional, situado y transformador, en el que las juventudes no son meros beneficiarios de políticas, sino actores estratégicos en la construcción de paz, desarrollo y ciudadanía. Reconocer sus formas de participación, sus vínculos con el territorio y sus capacidades organizativas es fundamental para avanzar hacia modelos de gestión pública más democráticos, inclusivos y sostenibles.

Herramientas de gobernabilidad para los gobiernos locales

En los últimos años, los Planes de Desarrollo Municipales se han consolidado como instrumentos clave de gobernabilidad en el Occidente de Boyacá, permitiendo orientar la gestión pública hacia la diversificación económica y la sostenibilidad territorial. A estos se suman los Planes de Desarrollo Agropecuario, que han impulsado la producción de cacao y la conformación de cooperativas y asociaciones de cacaoteros. Estas iniciativas han facilitado la creación de beneficiaderos, centros de acopio y laboratorios de investigación, fortaleciendo la cadena productiva local. Asimismo, los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) han contribuido a focalizar la vocación productiva de los municipios y garantizar el uso adecuado del suelo, articulando desarrollo económico con cuidado ambiental.

El proceso de desarrollo regional ha promovido la diversificación de la economía local mediante la organización de gremios agropecuarios, fruticultores, cacaoteros, cafeteros y ganaderos, que complementan

el sector minero tradicional. Este avance ha sido acompañado por asistencia técnica de las alcaldías, la Umata, el SENA y fundaciones mineras a través de estrategias de responsabilidad social empresarial. Profesionales como ingenieros agropecuarios, agrónomos y zootecnistas apoyan la producción, distribución y comercialización, mientras convenios con universidades (UDCA y Juan de Castellanos) fortalecen capacidades locales mediante pasantías y proyectos. Además, las fundaciones de multinacionales como Muzo y Fura Gems han ofrecido becas educativas para formar talento local en agroecología y mejoramiento de cultivos.

Otro elemento clave ha sido la incorporación de modelos de economía circular, orientados al reciclaje, la reutilización y el aprovechamiento de residuos para extender la vida útil de los productos y reducir el impacto ambiental. Aunque estas prácticas surgieron como iniciativas comunitarias, en los últimos años han sido integradas en los planes de desarrollo municipal, con apoyo financiero mediante créditos campesinos y programas de fomento. Ejemplo de ello es la iniciativa Earth Green, que promueve el aprovechamiento de residuos sólidos en municipios como Quipama, donde se han implementado pilas compostadoras, rutas de recolección y asociaciones de recicladores. Estas acciones han mejorado los procesos de acopio y distribución, consolidando la economía circular como estrategia de desarrollo local.

La titulación de tierras continúa siendo un desafío para la región. A pesar de los avances logrados con el Fondo Complementario de Garantías y el Banco Agrario, persisten problemas en el sistema de notariado y registro, lo que genera una distribución desigual de la tierra que limita el desarrollo agrícola. Esta situación pone en riesgo los modelos de producción familiar y comunitaria, favoreciendo tendencias hacia la concentración monopólica. Frente a ello, los gobiernos locales han impulsado programas de soberanía alimentaria y convenios con la FAO para garantizar la seguridad alimentaria, articulando estas acciones con la política pública departamental y los Planes de Intervenciones Colectivas.

Finalmente, el POAI se ha convertido en un instrumento fundamental para la gestión local, al permitir la asignación de recursos a proyectos sociales y productivos, promoviendo la cooperación interinstitucional

y la innovación en la cultura administrativa. Este enfoque busca fortalecer la gobernabilidad mediante la atención a las necesidades comunitarias, la generación de iniciativas de desarrollo y la articulación entre actores públicos y privados.

De los patrones a las fundaciones. De la caridad a la responsabilidad social

Históricamente, la población del Occidente de Boyacá ha enfrentado altos índices de pobreza y déficit en la satisfacción de necesidades básicas, en un contexto marcado por la concentración de riqueza y la ausencia del Estado. Durante décadas, el poder económico estuvo en manos de los patrones, quienes controlaban el acceso a bienes y servicios bajo dinámicas paternalistas y clientelistas. Esta cultura asistencial se caracterizaba por la entrega directa de dinero, el individualismo y la dependencia, consolidando relaciones desiguales entre élites locales y comunidades.

Con la llegada de las multinacionales mineras, se produjo un cambio en la forma de intervención social, pasando de la caridad a la responsabilidad social empresarial (RSE). Este giro se materializó en la creación de fundaciones que legitiman la actividad minera mediante proyectos educativos, ambientales y comunitarios. Entre las estrategias más visibles se encuentran becas para educación superior, programas de formación técnica, proyectos productivos, actividades culturales y eventos simbólicos como el “Día del Minero” o el “Año de la Juventud”. El propósito central de estas fundaciones es articular el sector minero con las instituciones y las comunidades, promoviendo una visión de sustentabilidad a largo plazo y rompiendo con la lógica asistencialista tradicional.

Un ejemplo destacado es la Fundación Muzo, que desarrolla proyectos como La Granja de los Abuelos —que integra grupos de danza, galpones productivos y comedores comunitarios—, así como el apadrinamiento de instituciones educativas mediante formación docente, acompañamiento en pruebas Saber y entrega de kits escolares. Además, la fundación articula sus acciones con las Juntas de Acción Comunal y apoya técnicamente a las Plataformas de Juventud,

ofreciendo capacitaciones y asesoría en coordinación con el Programa de Desarrollo y Paz de Boyacá (PDP Boyapaz). Estas iniciativas buscan fortalecer liderazgos juveniles y generar capacidades organizativas en los municipios de Muzo y Quípama.

Este proceso también ha transformado el papel de los herederos de los antiguos patrones, quienes hoy se presentan como líderes sociales vinculados a prácticas filantrópicas y a las fundaciones empresariales, manteniendo cierta continuidad histórica. Cabe recordar que la influencia de los patrones se reflejó en obras emblemáticas como iglesias, escuelas, hospitales, plazas públicas y la pista de aterrizaje Fura y Tena en Quípama. Sin embargo, la intervención de las fundaciones no está exenta de tensiones: en Quípama, por ejemplo, se evidencian disputas entre procesos autogestionados, como la cooperativa de cacaoteros, y asociaciones apoyadas por la Fundación Muzo, lo que genera inequidades en el acceso a recursos y mercados. Aun así, estas acciones han permitido consolidar seis asociaciones cacaoteras en la región.

La estructura empresarial detrás de estas fundaciones es compleja. La multinacional Muzo agrupa siete compañías, entre ellas Esmeraldas Mining Services (EMS), dedicada a la explotación minera; Puerto Arturo, propietaria de los títulos mineros; Esmeraldas de los Andes (EDLA), especializada en transformación de esmeraldas; Colombian Shared Services (CSS), que gestiona procesos administrativos y de sostenibilidad; Furatena Cacao, principal comercializador y exportador de cacao; Fundación Muzo, encargada de proyectos sociales; y Muzo Emerald Colombia, responsable del *marketing* global. Esta estructura evidencia cómo la RSE se integra a la estrategia corporativa, configurando nuevas relaciones sociales, políticas y económicas en la región.

En este contexto, los jóvenes emergen como actores clave en la construcción de agendas públicas locales, participando en proyectos comunitarios, plataformas juveniles y procesos de formación impulsados por las fundaciones. Su papel resulta fundamental para comprender las dinámicas actuales de gobernanza territorial y la transición hacia modelos de desarrollo más sostenibles.

Procesos de transformación en los lineamientos de las políticas de juventud

Las políticas de juventud en el Occidente de Boyacá han estado históricamente vinculadas a las necesidades e intereses de los jóvenes, aunque su desarrollo ha sido fragmentado y dependiente de iniciativas externas. Un antecedente relevante lo constituye el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, en el que participó la organización BoyaPaz, de origen eclesial. Este programa permitió incorporar la agenda juvenil en las oficinas de desarrollo social mediante actividades educativas, culturales y deportivas, aunque con un enfoque limitado a la recreación y la formación básica.

En los últimos años, se observa un cambio significativo: los jóvenes han asumido un rol protagónico en la creación de nuevas iniciativas, como las plataformas municipales de juventud y los planes de desarrollo turístico. Sin embargo, persisten tensiones en torno al modelo del Acuerdo de Paz. Mientras algunos jóvenes lo consideran parte de la cultura política regional, otros lo perciben como un fracaso, debido a la falta de reconocimiento de víctimas y victimarios, la ausencia de participación juvenil en su diseño y la escasa atención institucional a las demandas de reparación.

Este panorama se agrava por el desconocimiento de los gobiernos locales frente al papel de los sectores comunitarios y los enfoques diferenciales —género, generacional, étnico y territorial—, lo que se evidencia en la no inclusión de los municipios en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Frente a ello, la *Ordenanza n.º 25 de Política Pública Departamental de Juventud (2019-2030)* plantea garantizar los derechos juveniles mediante oportunidades en el territorio y define conceptos para la efectividad de los procesos organizativos. No obstante, se observa poca articulación entre los planes de desarrollo municipales y las necesidades juveniles, así como la ausencia de proyectos concretos en los Planes Operativos Anuales de Inversión.

En este contexto, BoyaPaz ha desempeñado un papel clave en el fortalecimiento de la participación juvenil mediante la promoción de espacios como las Juntas de Acción Comunal, los Consejos Municipales de Juventud y las Plataformas de Juventud. Sin embargo, persisten

vacíos en la comprensión de los mecanismos de participación, lo que genera tensiones internas entre los jóvenes por diferencias de intereses y expectativas. Las cartografías del proyecto “Reconfiguración del tejido social y las prácticas productivas desde la perspectiva de los jóvenes del Occidente de Boyacá” evidencian la necesidad de crear y fortalecer escenarios organizativos que motiven la participación, como talleres, escuelas, semilleros y laboratorios de investigación, además de procesos de autogestión comunitaria y rendición de cuentas institucional.

En el municipio de Quípama, la educación técnica en electricidad y gestión empresarial convive con una fuerte influencia de la minería en la vida cultural, política y económica. Aunque los jóvenes empiezan a proyectar sus vidas hacia la educación superior, persisten imaginarios asociados a la “guerra verde”, donde el poder se vinculaba a la gúaquería y la violencia. Hoy, la idea de desarrollo se relaciona con infraestructura local —polideportivos, colegios, puntos digitales y fábricas de transformación de cacao y café—, que facilitan educación y empleo. En prospectiva, los jóvenes demandan mejoras en la infraestructura vial y la creación de una Casa de la Juventud para actividades culturales y recreativas, como cineforos, artes y danza.

Por su parte, en Muzo no existe una política pública de juventud consolidada, y los espacios de participación son limitados. Las acciones gubernamentales se reducen a la promoción deportiva y cultural mediante escuelas de formación, sin estrategias claras para la inclusión juvenil en la gestión pública. El Consejo Municipal de Juventud cuenta con solo tres consejeros frente a once concejales, y no hay plataformas juveniles activas. Esta situación refleja la baja expectativa institucional frente a las propuestas juveniles, aunque se reconoce la implementación de actividades en veredas y polideportivos. Tanto los jóvenes como las entidades locales enfrentan el reto de asumir procesos de transición que respondan a las demandas de las nuevas generaciones.

Gestión de los gobiernos locales en torno a la transición económica

La gestión pública en los municipios del Occidente de Boyacá ha comenzado a reconfigurarse frente a la transición económica que atraviesa la

región, marcada por el declive de la minería y la búsqueda de alternativas productivas sostenibles. Esta transformación se refleja en la formulación de los Planes de Desarrollo Municipal y en la participación de organizaciones campesinas en las agendas locales, reconociendo a las comunidades rurales no solo como beneficiarias, sino como protagonistas del desarrollo económico regional. Municipios como Muzo, Pauna, Quípama y San Pablo de Borbur son ejemplos de esta dinámica.

Muzo: formación técnica y diversificación productiva

En Muzo, la gestión local ha promovido una transición gradual del sistema agropecuario hacia prácticas agrícolas sostenibles, mediante alianzas con entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se han implementado programas de formación técnica en sistemas agropecuarios ecológicos, orientados a optimizar la producción rural y reducir el impacto ambiental. Paralelamente, se mantiene la oferta de formación en joyería, buscando equilibrar la transición económica con la preservación del legado minero y artesanal, beneficiando tanto a quienes dependen del extractivismo como a quienes apuestan por nuevas alternativas productivas.

Otra estrategia relevante ha sido la cualificación de comunidades a través de gremios locales de artesanos, microempresarios y productores, fortaleciendo capacidades para la generación de emprendimientos. Además, se han impulsado iniciativas de turismo ecológico, como caminatas en veredas, para cambiar la percepción minera dominante y promover una visión más diversificada del territorio. Finalmente, se han implementado zonas digitales en espacios públicos, como parques y colegios, para reducir brechas tecnológicas y facilitar el acceso a Internet, lo que contribuye a la inclusión digital y al desarrollo de proyectos educativos y productivos.

Pauna: turismo y sostenibilidad ambiental

El Plan de Desarrollo Municipal “Pauna próspera, turística, incluyente y productiva 2020-2023”, bajo la administración de Henry Iván

Matallana Torres, plantea una transición hacia nuevas fuentes de riqueza que sustituyan la minería, incorporando líneas estratégicas orientadas al turismo y al desarrollo ambiental sostenible. El proceso de formulación incluyó tres fases: *diagnóstico participativo* con actores locales, *diseño estratégico* basado en principios de autonomía y articulación, y un *plan financiero* que garantizara viabilidad y eficiencia.

Entre las acciones destacadas se encuentran la promoción del turismo mediante eventos como el Festival Campesino 2021, que integró actividades culturales, religiosas y deportivas para visibilizar el papel del campesinado. En materia ambiental, se impulsaron talleres del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) para fomentar prácticas de reciclaje y agricultura sostenible. Sin embargo, el plan carece de una política pública específica para juventudes, lo que limita su inclusión en los procesos de transición económica.

Quípama: diversificación productiva y economía circular

El Plan de Desarrollo “Por la unidad, el respeto y el desarrollo de Quípama 2020-2023”, liderado por Carlos Alberto Ávila Cepeda, busca articular la transición económica con proyectos de desarrollo rural integral. Se apoyaron iniciativas comunitarias orientadas al reemplazo de la minería por la agricultura, destacando el cultivo de cacao como alternativa productiva. Actualmente, existen ocho asociaciones que agrupan sectores como fruticultura, cacaocultura, caficultura, ganadería y producción agropecuaria, además de una asociación de personas con discapacidad.

Un aspecto innovador es la incorporación de prácticas de economía circular, impulsadas por la asociación de recicladores que transforma residuos orgánicos en insumos agrícolas como compost. Aunque estas acciones surgen desde la comunidad, el gobierno local ha comenzado a respaldarlas, integrándolas en el enfoque de desarrollo rural integral y en estrategias de mitigación del cambio climático.

San Pablo de Borbur: integración sectorial y sostenibilidad

El Plan de Desarrollo “Sembrando Futuro por San Pablo de Borbur 2020-2023” define como eje estratégico el componente “Sembrando Futuro por el desarrollo económico e integración regional”, dividido en cuatro sectores: agropecuario, turismo, minería y transporte. El sector agropecuario se articula con los demás mediante la creación de centros de acopio agroindustrial, el fortalecimiento de cadenas de comercialización, la promoción de procesos asociativos y la integración con el turismo local. Esta estrategia busca dinamizar la economía regional, diversificando la producción y reduciendo la dependencia exclusiva de la minería.

Asimismo, el componente “Sembrando Futuro por el desarrollo ambiental sostenible” incorpora acciones orientadas a la gestión del riesgo y la mitigación del cambio climático, reconociendo la importancia de la dimensión ambiental en la planificación territorial. Aunque estas iniciativas representan avances hacia un modelo más equilibrado, persiste el reto de incluir políticas específicas para juventudes que articulen la transición económica con oportunidades educativas, laborales y organizativas.

Retos en la inclusión juvenil

A pesar de estos avances, las políticas de juventud carecen de lineamientos claros, los análisis municipales evidencian apatía frente a la participación política y, en algunos casos, intención de migrar, especialmente entre jóvenes que no se vinculan a la minería. Factores como la falta de oportunidades y la precariedad laboral limitan la organización juvenil y su representación en los Consejos Municipales de Juventud. Esta situación refleja la necesidad de articular la transición económica con políticas inclusivas que reconozcan a las juventudes como actores estratégicos en la gestión pública.

La diversificación de la juventud en Occidente Boyacá

El Occidente de Boyacá se caracteriza por una fuerte tradición minera que ha marcado la historia, la economía y la cultura del territorio. Municipios como Muzo y Quípama han estado estrechamente vinculados a la explotación de esmeraldas, actividad que no solo define la dinámica productiva, sino también las relaciones sociales y las oportunidades para la población. En este contexto, Compañías Muzo Colombia opera bajo el modelo “Mine to Market”, que busca integrar la minería con el desarrollo comunitario mediante prácticas sostenibles y proyectos sociales orientados a mejorar la calidad de vida de las comunidades locales (Pactworld, 2018).

Este modelo se articula con iniciativas de responsabilidad social empresarial (RSE) lideradas por la Fundación Muzo, que desarrolla proyectos en tres líneas estratégicas: educación, seguridad alimentaria y fortalecimiento institucional. Según Hazin (2013), estas políticas buscan que las comunidades perciban la minería como una oportunidad para acceder a bienes y servicios básicos, como vivienda, salud, empleo, infraestructura y educación. En el caso de la juventud, la fundación ha impulsado becas, programas de formación técnica y acompañamiento educativo, respondiendo a las limitaciones históricas del sistema educativo local.

La realidad juvenil en estos municipios ha estado marcada por la minería como horizonte de vida. Tal como relata Camilo, funcionario de la Alcaldía de Quípama:

Al salir del colegio los jóvenes aspiraban a trabajar en la empresa minera o incluso a “echar pala” en temporada vacacional. Aunque la situación ha cambiado, acceder a un trabajo en la mina ahora requiere cualificación, lo que ha llevado a que la juventud actual busque nuevas oportunidades mediante estudios universitarios o formación técnica en el SENA. (Comunicación personal, Quípama, 2022)

Historias como las de Camilo, beneficiario de una beca para educación superior, y Dumar, joven que aspira a estudiar talla de esmeraldas en el SENA, reflejan este cambio de mentalidad hacia la tecnificación

y la educación. A pesar de estos avances, persisten grandes desafíos. Muchos jóvenes enfrentan dificultades para acceder a la educación superior por los altos costos y la falta de oportunidades laborales dignas. Como señala Dumar: “Migrar a la ciudad para pagar una carrera de 5 a 10 millones de pesos, con arriendo y comida, es complicado; incluso se puede pasar hambre. Por eso, muchos prefieren trabajar o enguasearse para conseguir dinero” (comunicación personal, Muzo, 2022).

Esta situación evidencia la precariedad y la dependencia de la minería, así como la necesidad de políticas públicas que garanticen inclusión educativa y laboral. En este escenario, emergen nuevas alternativas productivas y culturales. Municipios como Pauna han impulsado emprendimientos juveniles en turismo, agroindustria y economía creativa. Anyela, creadora del proyecto “Paunarte”, destaca que muchos jóvenes regresan al territorio tras estudiar para liderar iniciativas empresariales y comunitarias. Este cambio refleja una transición hacia modelos de desarrollo más diversificados, aunque aún limitada por la falta de infraestructura, conectividad y apoyo institucional.

En síntesis, la juventud del Occidente de Boyacá se encuentra en un punto de inflexión entre la tradición minera que ha definido históricamente su identidad y las nuevas oportunidades que emergen en el marco de la transición económica y la gestión pública local. Aunque persisten barreras estructurales como la falta de acceso a educación superior y empleo digno, los jóvenes han comenzado a diversificar sus proyectos de vida mediante la tecnificación, el emprendimiento y la participación política en espacios como los Consejos de Juventud. Este proceso refleja no solo la búsqueda de alternativas productivas y culturales, sino también la construcción de ciudadanía activa, capaz de incidir en la formulación de políticas públicas y en la transformación del territorio hacia modelos más sostenibles e inclusivos.

Los Consejos de Juventud

La juventud, comprendida entre los 14 y 28 años, constituye uno de los sectores poblacionales más significativos en Colombia. Para el año 2021, representaba el 24,8 % de la población nacional, equivalente a 12,7 millones de personas (DANE, 2021). A pesar de esta relevancia

demográfica, históricamente ha sido uno de los grupos con menor participación política, debido a percepciones de apatía y desconfianza hacia el sistema político, considerado por muchos jóvenes como corrupto e ineficiente (Acosta y Garcés, 2015 citados en Baena y Ramírez, 2022). Esta exclusión se explica también por la corriente adultocéntrica que dominó la política colombiana, negando a los jóvenes el derecho al voto y su reconocimiento como actores de cambio hasta cumplir la mayoría de edad.

Este panorama comenzó a transformarse gracias a la movilización juvenil en espacios educativos, comunitarios y sociales, que exigió mecanismos legítimos de participación. Como respuesta, la Ley Estatutaria 1622 de 2013 creó los Consejos Municipales y Locales de Juventud, concebidos como instancias autónomas de concertación, vigilancia y control de la gestión pública, que permiten la interlocución directa entre los jóvenes y la institucionalidad, posicionando sus demandas en la agenda pública y gubernamental (Consejo Nacional Electoral, 2021). Los Consejos de Juventud hacen parte del Sistema Nacional de Juventud, integrado por tres componentes:

- *Sistema institucional:* Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud y dependencias territoriales.
- *Comisión de Concertación y Decisión.*
- *Sistema de participación:* Consejos de Juventud, plataformas juveniles, asambleas juveniles y organizaciones juveniles.

Estos consejos se conforman por jóvenes entre 14 y 28 años residentes en los municipios, inscritos como independientes, miembros de partidos políticos o integrantes de prácticas organizativas juveniles. El número de consejeros varía según la población municipal y debe ser impar, con un máximo de 17 consejeros (Consejo Nacional Electoral, 2021).

Posteriormente, la Ley Estatutaria 1885 de 2018 modificó la normativa anterior, asignando a la Registraduría Nacional la organización y dirección de las elecciones para conformar los Consejos Municipales y Locales de Juventud. Mediante la Resolución 4369 de mayo de 2021 se fijó el calendario electoral, y la Resolución 9261 de agosto del mismo

año estableció la fecha definitiva para las elecciones: el 5 de diciembre de 2021. En el Occidente de Boyacá, este proceso permitió la elección de nueve consejeros en Quípama, tres en Muzo y ocho en Pauna, marcando un hito en la participación política juvenil en la región.

Reflexiones finales

Los procesos de transformación en el Occidente de Boyacá evidencian avances significativos en la articulación entre gestión pública, iniciativas comunitarias y participación juvenil. El acuerdo de paz entre los esmeralderos y la llegada de la multinacional han favorecido la apertura de espacios para la transición económica, pasando de una lógica extractiva hacia modelos agrícolas y productivos sostenibles. En este contexto, se han creado escenarios para la representación juvenil, como los Consejos Municipales de Juventud, plataformas organizativas y programas de formación, impulsados tanto por entidades públicas como por fundaciones privadas. Estas acciones reflejan un cambio en la dinámica territorial, donde la juventud comienza a ser reconocida como actor estratégico en la construcción de paz y desarrollo local.

Sin embargo, la participación juvenil sigue siendo limitada. A pesar de la existencia de mecanismos formales, como los Consejos de Juventud, la incidencia real de los jóvenes en la gestión pública es baja. Factores estructurales como la pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales, y la persistencia de imaginarios asociados a la minería condicionan sus proyectos de vida. Muchos jóvenes se ven obligados a priorizar la subsistencia diaria, ya sea trabajando en las minas o migrando a las ciudades en busca de mejores condiciones, lo que reduce su interés en los procesos políticos y organizativos.

Esta situación revela que la inclusión juvenil en la gobernanza territorial depende de la generación de alternativas reales para el ascenso social dentro de la región. Mientras las juventudes no encuentren oportunidades sostenibles fuera de la minería, su participación seguirá siendo marginal. Además, persisten limitaciones en los espacios de representación: cargos sin remuneración, baja cobertura de las escuelas de formación y restricciones legales para quienes no han alcanzado la mayoría de edad, lo que profundiza la exclusión política.

Por otro lado, aunque las fundaciones y las entidades públicas han impulsado proyectos sociales y productivos, estas acciones resultan insuficientes frente a los retos estructurales del territorio. La dependencia de la multinacional, si bien ha contribuido a la pacificación y al desarrollo económico, también reduce la autonomía local, al concentrar el control sobre los recursos y limitar la capacidad de decisión de las comunidades. Este escenario plantea la necesidad de fortalecer la soberanía territorial mediante políticas públicas que articulen la participación juvenil con estrategias de desarrollo integral.

En conclusión, la agencia juvenil en el Occidente de Boyacá se encuentra en construcción. Si bien existen avances en la creación de espacios de participación y en la diversificación económica, persisten desafíos relacionados con la pobreza, la exclusión y la dependencia minera. Superar estas barreras implica consolidar políticas que garanticen educación, empleo y participación efectiva, reconociendo a las juventudes como protagonistas en la reconfiguración del territorio y en la construcción de paz sostenible.

Referencias

- Alvarado, S. V., Ospina, H. F., Botero, P. y Muñoz, G. (2008). Las tramas de la subjetividad política y los desafíos a la formación ciudadana en jóvenes. *Revista Argentina de Sociología*, 6(11), 19-43. <https://www.scielo.org.ar/pdf/ras/v6n11/v6n11a03.pdf>
- Ahumada Arévalo, S. (2020). *Experiencias juveniles en zonas mineras: los y las jóvenes de Muzo, Boyacá* [Tesis de pregrado, Universidad del Rosario]. Repositorio Institucional EdocUR. https://doi.org/10.48713/10336_21130
- Baena, L. y Ramírez, A. (2022). *Cultura y participación política de los jóvenes en Colombia en los años 2018-2022*. Universidad Libre. <https://repository.unilivre.edu.co/bitstream/handle/10901/24572/Cultura%20y%20participacion%20pol%C3%ADtica%20de%20los%20j%C3%B3venes%20en%20Colombia%20en%20los%20a%C3%B1os%202018-2022.pdf?sequence=3>
- Ballén Robles, D. C. (2021). Visibilidad de la agencia de jóvenes rurales mediante el uso de redes sociales: el caso del Colectivo JOB en Boyacá, Colombia. *Eutopía. Revista de Desarrollo Económico Territorial*, (19), 175-190. <https://doi.org/10.17141/eutopia.19.2021.4978>

- Barrera, L. I. (2013). *Educación y desarrollo en un municipio rural: el caso de Pauna en Boyacá*. [Trabajo de grado, Universidad Nacional de Colombia] <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/51250>
- Calderón Sánchez, D. y Jaime Ruiz, E. (2018). La gobernanza local: una simbiosis desde y hacia el territorio. En D. Calderón Sánchez y D. A. Palma Álvarez (Eds.), *Gobernanza multidimensional* (pp. 36-55). <https://doi.org/10.15332/dt.inv.2018.00838>
- Chaparro, L. y Chica, S. A. (2021). Revisión de la literatura sobre estudios de juventud rural en América Latina (2001-2019). *Ciencia y Tecnología Agropecuaria*, 23(1), e2310. https://doi.org/10.21930/rcta.vol22_num3_art:2310
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal] (1985). *Juventud y desarrollo en América Latina*.
- Congreso República de Colombia. (2018). Ley Estatutaria 1885 de 2018. Por la cual se modifica la Ley Estatutaria 1622 de 2013 y se dictan otras disposiciones.
- Cuervo Restrepo, J. I. (2001). *La gestión de lo público más allá de lo estatal: la intervención del fondo para la reconstrucción y desarrollo social del eje cafetero*. Universidad Nacional de Colombia.
- García, F. J. F. (2008). *El laberinto de la participación juvenil estrategias de implicación ciudadana en la juventud*. OBETS. *Revista de Ciencias Sociales*, 35-51. <https://doi.org/10.14198/OBETS2008.2.03>
- Guarín Olarte, F. A. (2024). *Análisis de la participación de las juventudes en la administración pública, desde el casco urbano en el municipio de San José del Guaviare 2013-2023* [Tesis de maestría, Escuela Superior de Administración Pública]. <https://repositoriodim.esap.edu.co/server/api/core/bitstreams/0a276c74-fa38-49f8-8ef9-9fa4892c32e6/content>
- Hazin, M. S. (2013). Desarrollo minero y conflictos socioambientales. Los casos de Colombia, México y el Perú. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/0101a01f-0168-44ff-afa2-ae991854be9/content>
- López López, A. J. (2010). Perentoria social y moratoria social rural: aproximaciones a la comprensión de juventud rural. *Universitas Humanística*, (70), 187-203.
- Mariñez-Navarro, F. (2016). Los saberes cívicos en la innovación de la gestión pública. Convergencia. *Revista de Ciencias Sociales*, 23(70), 87-114. <https://doi.org/10.29101/crcs.v23i70.5395>

- Morales, C., Pérez, R., Riffo, L. y Williner, A. (2020). *Desarrollo territorial sostenible y nuevas ciudadanías: consideraciones sobre políticas públicas para un mundo en transformación*. Cepal.
- Moreno-Huertas, N. (2016). El sofisma de la participación juvenil. Una mirada crítica al discurso de la participación juvenil en Colombia. *Derecho y Realidad*, 14(27), 125-136. <https://doi.org/10.19053/16923936.v14.n27.2016.7829>
- Niño, G. E. (2023). Espacios y mecanismos de participación ciudadana en procesos democráticos y prácticas organizativas de jóvenes en el municipio de Boavita – Boyacá. [Proyecto de investigación]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/54546>
- Pinilla López, H. J. (2021). Resiliencia comunitaria como estrategia para el Desarrollo Territorial Rural en perspectiva de juventud: experiencia de dos municipios de Boyacá, Colombia. Universitat Jaume I. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.6035/14115.2021.227837>
- Quiroga Riaño, C. P., Quiroga Riaño, E. T., y Bolívar Torres, E. (2022). Economía solidaria y desarrollo rural integral en el municipio de Pauna Boyacá: de la política pública a la política cultural campesina. *Revista Boletín Redipe*, 11(10), 100-118. <https://doi.org/10.36260/rbr.v11i10.1899>
- Reca, A. y Martini, G. (Coords.). (2014). *Políticas para la juventud rural en América Latina: orientaciones estratégicas*. RIMISP.
- Rico Calvano, F. y Rico Fontalvo, H. M. (2013). *Administración pública: modernización del estado*. Ediciones Universidad Simón Bolívar.
- Rodríguez, E. (2000). *Juventud y políticas públicas en América Latina: experiencias y desafíos desde la gestión institucional*. Editorial Siglo del Hombre.
- Vommaro, P. A. (2019). Desigualdades, derechos y participación juvenil en América Latina: acercamientos desde los procesos generacionales. *Revista Direito e Práxis*, 10(2), 1192-1213. <https://doi.org/10.1590/2179-8966/2019/40829>

Webgrafía

- Boyacá, 25 años después del fin de la Guerra Verde. (s. f.). *¡Pacifista!* <https://pacifista.tv/notas/boyaca-25-anos-despues-del-fin-de-la-guerra-verde/>

- Boyacá, E. (2018, 7 de septiembre). Conflicto armado en Boyacá: no fuimos paraíso pero somos esperanza. *El Diario*. <https://periodicoeldiario.com/conflicto-armado-en-boyaca-no-fuimos-paraíso-pero-somos-esperanza/>
- Consejo Nacional Electoral. (2021). Cartilla de la juventud. *Consejo Nacional Electoral*. <https://www.cne.gov.co/media/attachments/2021/12/03/cartilla-de-la-juventud-dic-2-dig-1.pdf>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2021). Nota estadística Juventud en Colombia. <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/dic-2021-nota-estadistica-juventud-en-colombia.pdf>
- Gobernación de Boyacá, Secretaría de Gobierno y Acción Comunal. (s. f.) *Boyacá, ejemplo de participación juvenil en el país*. <https://www.boyaca.gov.co/secretariagobiernoaccioncomunal/boyaca-ejemplo-de-participacion-juvenil-en-el-pais/>
- Pactworld. (2018). Mines to Markets. <https://www.pactworld.org/Mines%20to%20Markets>

Sobre los autores

Editor académico

Edwin Diomedes Jaime Ruiz

Magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Gestión Pública de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Sociólogo de la Universidad Santo Tomás. Profesor de tiempo completo e investigador de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Miembro del Grupo de Investigación Conflictos Sociales, Género y Territorios, en la línea Subjetividades, Acción Colectiva y Transformación Social. Miembro del grupo de trabajo Clacso: Juventudes e Infancias: Acción Colectiva, Participación, Políticas Públicas y Estado. Coordinador del semillero de investigación Eirene Latinoamérica JAIV.

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar-CurriculoCv.do?cod_rh=0001575542

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7032-5981>

Google Scholar: <https://scholar.google.es/citations?user=e1g4PK-MAAAAJ&hl=es>

A

Laura Sofía Antonio Martínez

Estudiante de noveno semestre de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Ex integrante del semillero de investigación Eirene Latinoamérica - Jhon Alexánder Idrobo Velasco. Representante Estudiantil de la Facultad de Sociología.

CVLAC: <https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/EnRecursoHumano/inicio.do>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4708-8444>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?hl=es&pli=1&user=FwNa57wAAAAJ>

C

Johana Cárdenas Jerez

Magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional - Cinde. Licenciada en Atención Integral a la Primera Infancia de la Universidad San Buenaventura, Bogotá. Asesora Pedagógica de la Fundación Apoyar.

CVLAC: <https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/EnRecursoHumano/inicio.do>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6737-366X>

Google Scholar:
<https://scholar.google.com/citations?user=OPLzTHIAAAA-J&hl=es&oi=sra>

Sandy Lorena Contreras Pulido

Socióloga de la Universidad Santo Tomás, exintegrante del semillero de investigación Eirene Latinoamérica - Jhon Alexánder Idrobo Velasco. Representante de la Mesa de Género de la Facultad de Sociología.

CVLAC: <https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar-CurriculoCv.do>

ORCID: [cod_rh=0002095225 https://orcid.org/0009-0005-2246-1419](https://orcid.org/0009-0005-2246-1419)

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=Vidmc-9kAAAAJ&hl=es>

Sara Ximena Cruz Pacheco

Estudiante de noveno semestre de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Integrante del semillero de investigación Eirene Latinoamérica - Jhon Alexánder Idrobo Velasco.

CVLAC: <https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/EnRecursoHumano/inicio.do>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8133-2151>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=L-Niw3vcAAAAJ>

F

Nally Fajardo Herrera

Psicóloga de la Universidad Manuela Beltrán. Ex integrante del semillero de investigación Eirene Latinoamérica - Jhon Alexánder Idrobo Velasco.

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar-CurriculoCv.do?cod_rh=0002193798

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-1646-1143>

Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?view_op=list_works&hl=es&user=lWn2QXAAAAAJ

G

Laura Marcela Gómez Arias

Socióloga de la Universidad Santo Tomás. Ex integrante del semillero de investigación Eirene Latinoamérica - Jhon Alexander Idrobo Velasco.

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar-CurriculoCv.do?cod_rh=0002058666

ORCID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3799-3977>

Google Scholar: <https://scholar.google.com.mx/citations?user=E5I7j-j0AAAAJ&hl=es>

M

Kevin Sebastián Medina Corredor

Estudiante de noveno semestre de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Ex integrante del semillero de investigación Eirene Latinoamérica - Jhon Alexander Idrobo.

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar-CurriculoCv.do?cod_rh=0002058660

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5053-6132>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=jBz-Bh6oAAAAJ&hl=es>

Indilay Monje Sandoval

Socióloga de la Universidad Santo Tomás. Exintegrante del semillero de investigación Eirene Latinoamérica - Jhon Alexánder Idrobo Velasco.

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar-CurriculoCv.do?cod_rh=0001769788

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7824-7789>

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=es

María Paula Muñoz Otálora

Socióloga de la Universidad Santo Tomás. Coordinadora y exintegrante del semillero de investigación Eirene Latinoamérica - Jhon Alexánder Idrobo Velasco.

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar-CurriculoCv.do?cod_rh=0001991942

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8382-4827>

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=es

O

Helen Viviana Ovalle Flórez

Estudiante de noveno semestre de la Facultad de Sociología de la universidad Santo Tomás. Integrante del semillero de investigación Eirene Latinoamérica - Jhon Alexánder Idrobo Velasco. Locutora del programa de radio Efecto Mariposa de la Universidad Santo Tomás.

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar-CurriculoCv.do?cod_rh=0001926353

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8666-2959>

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=en

P

María Alejandra Pascagasa Usaqué

Socióloga de la Universidad Santo Tomás. Exintegrante del semillero de investigación Eirene Latinoamérica - Jhon Alexánder Idrobo Velasco.

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar-CurriculoCv.do?cod_rh=0001754053

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4218-9249>

Google Scholar: <https://scholar.google.es/citations?user=U2wZbs-YAAAAJ&hl=es>

Mónica Alexandra Peña Pérez

Socióloga de la Universidad Santo Tomás. Ex integrante del semillero de investigación Eirene Latinoamérica - Jhon Alexánder Idrobo Velasco. Integrante del equipo editorial de la revista estudiantil *En Movimiento*.

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar-CurriculoCv.do?cod_rh=0001991947

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7813-7433>

Google Scholar: <https://scholar.google.es/citations?user=3KI-3vHkAAAAJ&hl=es>

Valentina Puerto Villamizar

Socióloga de la Universidad Santo Tomás. Ex integrante del semillero de investigación Eirene Latinoamérica - Jhon Alexánder Idrobo Velasco.

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar-CurriculoCv.do?cod_rh=0001774462

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6172-2451>

Google Scholar: <https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=9l-sq-B4AAAAJ&scilu=es>

R

Daniela Reyes Alfonso

Socióloga de la Universidad Santo Tomás. Ex integrante del semillero de investigación Eirene Latinoamérica - Jhon Alexánder Idrobo Velasco.

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar-CurriculoCv.do?cod_rh=0001774464

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5619-7699>

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=1&user=_bAfxqMAAAAJ&gmla=es

Ingrid Mariana Ríos Pardo

Estudiante de noveno semestre de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Integrante del semillero de investigación Eirene Latinoamérica - Jhon Alexander Idrobo Velasco.

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar-CurriculoCv.do?cod_rh=0002133254

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-9586-9631>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=Gg-v5wUEAAAAJ&hl=es>

Angie Daniela Robayo Duarte

Socióloga de la Universidad Santo Tomás. Ex integrante del semillero de investigación Eirene Latinoamérica - Jhon Alexander Idrobo Velasco.

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar-CurriculoCv.do?cod_rh=0002058664

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8114-7076>

Google Scholar: <https://scholar.google.com.mx/citations?user=gdswj-ZAAAAAJ&hl=es>

Andrés Felipe Ruiz Gómez

Estudiante de noveno semestre de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Integrante del semillero de investigación Eirene Latinoamérica - Jhon Alexánder Idrobo Velasco.

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar-CurriculoCv.do?cod_rh=0001938418

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4938-3368>

Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?view_op=new_profile&hl=es

S

Stefanny Alejandra Sosa Schleimer

Socióloga de la Universidad Santo Tomás. Ex integrante del semillero de investigación Eirene Latinoamérica - Jhon Alexánder Idrobo Velasco.

CVLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generar-CurriculoCv.do?cod_rh=0001834087

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5422-9722>

Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=a6loZ_UAAAAJ&hl=es

Índice analítico

A

Acuerdos de paz, 36, 40, 46, 54, 86-87, 90, 144, 147, 149, 174, 184, 187, 191, 193, 195, 221, 229.

Agrícola, 17, 46-48, 50-51, 55-57, 61, 63-68, 72, 82, 90, 92, 98, 112, 123-124, 135, 174, 218, 223-224, 229.

B

Boyacá, 19-23, 25-35, 37-40, 45-51, 54-58, 60, 62, 72-73, 79-91, 93-97, 103-104, 106-108, 111, 113-122, 124, 131-132, 134-137, 139, 140, 142, 144-149, 155-160, 162-166, 168, 171-172, 174, 176-179, 183-187, 192-193, 195, 197, 199-200, 207-210, 213-217, 219-222, 226-227, 229-230.

C

Cacao, cacaotero, 21, 31, 46, 54-59, 63-65, 67-68, 70, 72-73, 80, 84, 96, 123, 133, 143, 146, 158, 164, 173-175, 179, 217, 220, 222, 224.

Ciudadanía juvenil, 171, 213, 216.

Control territorial, 33, 53, 88-90, 93, 95, 97, 108, 118, 184, 195.

Cultivos ilícitos, 21, 52, 55-56, 58-59, 79-84, 86, 88-96, 98, 173, 175, 195.

Cultura de paz, 23, 32, 35, 158, 161, 178-180, 183-190, 193, 195-197, 199-200, 202-203.

Consejos de juventud, 23, 98, 208-209, 212, 217, 227-229.

Construcción de identidad, 30, 73.

D

Desarrollo regional, 144, 185, 200, 217.

Desarrollo territorial, 21, 28, 37, 48, 59-60, 62-63, 67, 74, 124, 131-141, 146-149, 165, 174, 198, 210-211, 216.

Desigualdad social, 33, 36, 39, 47, 51, 53, 60, 82, 104-105, 108-110, 113, 115, 117, 121, 123, 139, 171, 187, 213.

Diversificación productiva, 21, 46, 51-52, 54, 62, 68-69, 73,

145, 174, 201, 217, 223-224,
230.

E

Economía extractivista, 106,
108-109, 118, 145, 148, 155,
158, 179-180, 192.

Economía ilegal, 19, 21, 55-56,
79-84, 88-89, 90-96, 98, 200.

Economía popular, 135.

Educación para la paz, 22, 156,
183-184, 186-187, 189-190,
196-198, 201-203.

Enguacarse, 184, 227.

Esmeraldas, 16, 23, 26-27, 38,
46, 51-57, 62-64, 80, 84-85,
89, 91-95, 104-105, 108-109,
111-113, 115, 117-118, 121,
133, 143-144, 146, 156, 175,
184, 186, 192-196, 198, 200,
202, 220, 226.

Equidad de género, 21, 103-110,
114, 121-122, 176.

Extracción esmeraldera, 46, 52,
156, 186, 200.

F

Fundación Muzo, 63, 72, 123,
162, 198, 201-202, 209, 211,
219-220, 226.

G

Género, 19, 21, 26, 29, 33, 90,
103-111, 114-115, 117-124,
162, 176, 221.

Guaquería, 15, 57, 62-63, 104-
107, 111-113, 121-122, 124,
185, 198, 208-209, 213, 216,
222.

Guerra verde, 22, 25, 27, 30, 34,
37, 46, 53, 72, 80-81, 83, 85-
86, 95, 97, 108, 111-113, 115,
118-120, 170, 184, 192-193,
195, 198, 208, 222.

I

Identidad, 22, 26, 30-33, 38-39,
47-48, 52, 57, 63, 73-74, 80-
82, 93-94, 97-98, 111, 121,
131, 133, 138, 143-144, 146,
148, 158, 169, 174, 176-177,
185, 209, 227.

J

Jóvenes, 13-16, 19-23, 26-34, 37-
40, 47-48, 57, 64, 66-67, 72,
79-83, 85, 89-95, 97, 98, 103,
105-107, 109-111, 113, 123-
124, 131-136, 139, 145-
146, 148-149, 156-159, 161,
163-166, 168-175, 177-178,
185-187, 196, 198-200, 202,
207-216, 220-222, 225-229.

Juventudes rurales, 19, 22, 25,
30, 32, 79-81, 83, 104, 110,
125, 132-134, 137, 157, 158,
161, 164, 173-174, 213-214.

L

LGBTQ, 26, 32-34.

Liderazgos juveniles, 21, 27, 63,
83-84, 158, 165, 172, 174,
209-220.

M

Minería, 14-15, 19-21, 32, 35,
45-50, 53-54, 56-57, 60, 62,
64-65, 70, 72-74, 79, 86, 88-
89, 92, 97, 103-106, 108-110,
112-118, 121-125, 131-132,
136, 143-145, 148, 172, 175,
193-194, 198, 200-201, 208-
209, 213, 216, 222-227, 229.

Mujeres mineras, 103-107, 109-
114, 116-117, 124.

Multinacional, 62, 70, 95, 98,
112, 121, 185, 201, 218-220,
229-230.

Muzo, 21-23, 28-29, 33, 45-46,
50, 61-63, 72-73, 85, 91, 94-
95, 103, 105-107, 109, 111,
121-125, 133, 136, 143-146,
148, 156, 162, 169-171, 183-
185, 187, 192-193, 195-199,
201-203, 207-209, 211, 213,
218-220, 222-223, 226-227,
229.

N

Narcotráfico, 16, 54, 79-81, 84-
86, 88, 90-93, 118, 120, 195.

O

Occidente de Boyacá, 13-17, 19-
23, 25-32, 34-35, 37-40, 45-
51, 54-58, 60, 62, 73, 80-91,

93-95, 97, 103-104, 106-108,
111, 113-121, 124, 131-132,
136-137, 139-140, 142, 144-
149, 155-160, 162-166, 168,
171-172, 174, 176-177, 179,
183-187, 192-193, 195, 197,
199-200, 207-211, 213-217,
219, 221-222, 226-227, 229-
230.

P

Participación juvenil, 19, 23, 28,
37, 97, 98, 111, 136, 156, 159,
162-163, 168-169, 171-172,
176, 187, 197, 208, 210-213,
215-216, 221, 229-230.

Patrones, 26-27, 33-34, 37, 85,
89, 94-95, 97-98, 111-112,
184, 193, 219-220.

Pauna, 21, 28-29, 33, 45-46, 50,
54-56, 58-59, 61-62, 64-66, 73,
79-83, 85-86, 88-98, 133, 136,
143, 145-146, 148, 156, 162,
167-168, 171, 173, 176-177,
195, 207-211, 213, 223, 227,
229.

Paz desde abajo, 29, 35, 166.

Paz territorial, 15-16, 19-23, 25,
27, 28, 30, 34-35, 38-40, 45-
46, 48-49, 73, 79, 98, 106,
110, 131-132, 134, 137-138,
145-146, 155-162, 164-169,
172-173, 175-176, 179-180,
183, 185, 187, 192-193, 195,
199-202, 208-211, 213-215.

Plataformas de juventud, 31-32,
156, 163, 165, 168-169, 219,
221.

Pobreza extrema, 52.

Q

Quípama, 22-23, 28-29, 33, 45-
46, 50, 61-62, 70-73, 85, 91,
95, 113, 136, 143, 156, 162,
168-169, 178, 183-185, 187,
192-193, 195-199, 201-203,
207-, 211, 213, 218, 220, 222-
224, 226, 229.

R

Reconfigurar los territorios, 36,
94, 98, 186.

Recursos naturales, 35, 50, 56,
67, 94, 118, 138, 200.

Responsabilidad social
empresarial (RSE), 95, 185,
211, 218-220, 226.

Roles de género, 90, 103-105,
111, 114-115, 117, 122, 124.

Ruralidad, 91, 161, 209.

S

San Pablo de Borbur, 21, 28-29,
33, 45-46, 50, 54-57, 60-63,
66-70, 73, 85-86, 91, 95-
96, 103, 105, 107, 109, 121,

123-125, 133, 136, 143, 145-
146, 148, 156, 162, 173-174,
195, 207, 211, 223, 225.

Sector minero, 36, 109, 200,
218-219.

T

Territorialización, 46, 52-53, 73.

Transición económica, 49, 57,
135, 207, 209, 211-225, 227,
229.

Turismo comunitario, 21-22, 73,
132-139, 142-149, 162, 164.

V

Violencia de género, 21, 29, 103-
104, 115, 118.

Violencia estructural, 25-27, 32-
33, 81, 107, 110, 189-190.

Violencia política, 33.

Violencia sexual, 33, 105, 108,
112, 118-120.

Violencia simbólica, 25, 33, 105,
108, 119.

Vocaciones productivas, 17, 20-
21, 45-48, 66, 79, 80-81, 98,
133, 149, 200, 202, 217.

Z

Zonas mineras, 15, 209.

Índice onomástico

A

Alcaldía, 62, 95, 167, 172, 185-186, 209, 211, 218, 226.
Alcira (mujer trabajadora en la mina de Coscuez), 133.
Alvarado, Cuervo, 33.
Arronte Leyva, Norisbel, 53.
Ávila Cepeda, Carlos Alberto, 70, 224.

B

Bácares, Camilo, 93.
Ballén, Dora, 30, 32, 37.
Baquero Nieto, Valentina, 30-32.
Barberis Bosch, Francisco, 51.
Bermúdez Rojas, Myriam Jeannette, 32.
Boavita, 210.
Bohórquez Patiño, Luis Mauricio, 147.
Boyapaz, 16, 31, 63, 136, 145-146, 149, 163-166, 171, 208, 220-221.

C

Cabrera, Juan, 26, 33.
Cañón, Angélica Juliet, 106, 111-112, 114.

Carranza, Hollman, 193.
Carranza, Víctor, 34, 193-195.
Castaño Aguirre, Carlos Alberto, 52.
Chayanov, Alexander, 92.
Comunicación personal (anónimo), 55, 57-60, 64-66, 72, 113, 121, 200, 226-227.
Costa Atlántica, 84.
Corporación Arte Zurdo, 27-29, 38-39, 157.
Corporación Boyapaz, 16, 31, 63, 136, 145-146, 149, 163-166, 171, 208, 220-221.
Coscuez, 85-87, 94-95, 113, 118, 192, 194-195.
Cruz, Juan Daniel, 35.

D

Delgadillo, Pablo Elías, 194.
Duarte, Claudio, 30.

E

Esmeraldas Mining Services, 121, 220.

F

Fajardo Herrera, Nally, 237.

Flórez, Ángela, 30, 35, 37, 88-89, 99, 194-195, 204.

Fundación Muzo, 21-23, 28-29, 33, 45-46, 50, 61-63, 72-73, 85, 91, 94-95, 103, 105-107, 109, 111, 121-125, 133, 136, 143-146, 148, 156, 162, 169-171, 183-185, 187, 192-193, 195-199, 201-202, 207-209, 211, 213, 218-220, 222-223, 226-227, 229.

Funredagro, 83, 96.

G

García, R., 31, 33.

Gobernación de Boyacá, 39, 178.

Guzmán, Angie, 48, 65-66.

H

Habitante de Coscuez
(comunicación personal),
113.

I

Idrobo Velasco, Jhon Alexander,
236, 237-243.

Institución Educativa La
Floresta, 187, 199.

Institución Educativa Técnica
Nuestra Señora de la Paz,
178-179, 185, 187, 199.

J

Jaime Ruiz, Edwin Diomedes,
25, 28, 79, 131, 155.

Joven Camilo (de Quípama), 72,
93, 226.

K

Kakaoteros, 56, 59-60, 157, 162,
164, 172-174.

L

La Habana, 191.

Lizarazo, Zuluaga Sthefania, 42.

M

Matallana Torres, Henry Iván,
64, 224.

Mauro, Lucía, 51.

Mendoza, Cáceres Diego, 108,
180.

Molina, Gilberto, 85, 184, 193,
195.

Mora Forero, Jorge Alexander,
138, 147.

Muzo, 21-23, 28-29, 33, 45-46,
50, 61-63, 72-73, 85, 91, 94-
95, 103, 105-107, 109, 111,
121-125, 133, 136, 143-146,
148, 156, 162, 169-171, 183-
185, 187, 192-193, 195-199,
201-203, 207-209, 211, 213,
218-220, 222-223, 226-227,
229.

O

Occidente de Boyacá, 13-17, 19-
23, 25-32, 34-35, 37-40, 45-
51, 54-58, 60, 62, 73, 80-91,
93-95, 97, 103-104, 106-108,

111, 113-121, 124, 131-132,
136-137, 139-140, 142, 144-
149, 155-160, 162-166, 168,
171-172, 174, 176-177, 179,
183-187, 192-193, 195, 197,
199-200, 203, 207-211, 213-
217, 219, 221-222, 226-227,
229-230.

P

Parra, Daniel, 26.

Pauna, 21, 28-29, 33, 45-46, 50,
54-56, 58-59, 61-62, 64-66, 73,
79, 80-83, 85-86, 88-98, 133,
136, 143, 145-146, 148, 156,
162, 167-168, 171, 173, 176-
177, 195, 207-211, 213, 223,
227, 229.

Q

Quípama, 22-23, 28-29, 33, 45-
46, 50, 61-62, 70-73, 85, 91,
95, 113, 136, 143, 156, 162,
168-169, 178, 183-185, 187,
192-193, 195-199, 201-203,
207-209, 211, 213, 218, 220,
222-224, 226, 229.

R

Rincón, Pedro Nel, 193.

Rodríguez, Gonzalo, 85, 192,
194.

S

San Pablo de Borbur, 21, 28-29,
33, 45-46, 50, 54-57, 60-63,
66-70, 73, 85-86, 91, 95-96,
103, 105, 107, 109, 121, 123-
125, 133, 136, 143, 145-146,
148, 156, 162, 173-174, 195,
207, 211, 223, 225.

T

Tortosa, José María, 26.

U

Unión Patriótica, 33.

Urabá Antioqueño, 84.

Urbano, Juan, 55, 58-59.

Uribe, María Victoria, 26, 86.

V

Varón, Diana Carolina, 28.

Z

Zamudio Garnica, Leidi Yoana,
32.

Zaragoza, Federico, 184, 197.



Esta obra se editó en Ediciones USTA.
2026

Agendas y debates

El Occidente de Boyacá ha sido narrado históricamente a través de los estigmas de la «guerra verde», el extractivismo esmeraldero y las violencias estructurales. Sin embargo, *Más allá del verde esmeralda: jóvenes construyendo escenarios de paz en el Occidente de Boyacá* desafía esta visión tradicional para presentarnos un territorio en profunda transformación, impulsado por las voces, la resistencia y la agencia de sus juventudes rurales.

Este libro, fruto de un riguroso trabajo investigativo y situado, explora cómo las nuevas generaciones de Quípama, Muzo, Pauna y San Pablo de Borbur están reconfigurando el tejido social de sus comunidades. A lo largo de sus páginas, la obra documenta la transición de las economías ilegales hacia vocaciones productivas sostenibles como el cacao, el impulso del turismo rural comunitario, la valiente irrupción de las mujeres guaqueras para romper roles de género, y el poder del arte y la educación como herramientas emancipadoras.

Lejos de ser víctimas pasivas de su pasado, los jóvenes se revelan aquí como verdaderos sujetos políticos. Esta es una lectura indispensable para comprender cómo, desde los márgenes y lo cotidiano, se forjan alternativas de desarrollo, justicia y esperanza para la paz territorial en Colombia.